



*Francisco
Martorell*

*Operación Cóndor
El vuelo de la muerte*



Colección Septiembre

FRANCISCO MARTORELL

**OPERACIÓN CÓNDROR
EL VUELO DE LA MUERTE**

La Coordinación Represiva
en el Cono Sur

COLECCIÓN SEPTIEMBRE



Este libro fue adaptado con fondos otorgados por el
UBACHT (Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico) a través del
SVO1, el cual es un programa de apoyo y desarrollo científico y tecnológico
que opera en el ámbito de la investigación científica y tecnológica.
y es financiado por el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de
Educación y Recreación.

Precio: \$

Operación Cóndor

El vuelo de la muerte

© LOM Ediciones

Primera Edición, noviembre, 1999

Registro de Propiedad Intelectual N° 111.269

I.S.B.N: 956-282-231-1

Motivo de la cubierta: Composición Angela Aguilera

Diseño, Composición y Diagramación:

Editorial LOM

Concha y Toro 23, Santiago

Fono: 6885273 Fax: 6723038

Impreso en los talleres de LOM

Maturana 9, Santiago

Fono: 672 2236 - 672 5612 Fax: 673 09 15

Impreso en Santiago de Chile.

A mi padre, en sus 70 años

Agradecimientos

A Laura Pintos, Juan Luis Iglesias, Ximena Orchard, Francisca Celedón y María Elena Pantoja, todos periodistas de la nueva generación que sacudirán de la modorra a los "viejos" que creen que todo está perdido; a Patricio Polanco por su incalculable apoyo en mi trabajo profesional; a Carlos Suárez, quien ha sido un sabio consejero y un amigo más allá de las fronteras; al periodista Rodrigo de Castro, agudo, valiente e inteligente como pocos; a Rogelio García Lupo, un maestro y a mi esposa e hijas que han prestado parte del tiempo, que les corresponde para que lo dedique a estos menesteres.

A todos ellos mi gratitud y el deseo ferviente de que estas páginas no los defrauden.

“Lunes, 22 de julio de 1985”

“He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio, había delatado a sus camaradas; éstos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas “sesiones” cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros, enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. Doscientas personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De éste o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital; ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios, el mártir con el que ha encendido la pira. La cárcel es, de hecho, infinita.

De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares (repito las palabras del huésped). Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignora-

ban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal.

¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío. Descreo de castigos y premios. Descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió:

Somos los anunciados, los previstos
Si hay un Dios, si hay un punto Omnisapiente
¡y antes de ser, ya son, en esa Mente,
los Judas, los Pilatos y los Cristos!

Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de algún modo, en su cómplice.

Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la Ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer".

Jorge Luis Borges

I

El reencuentro

“En este sentido, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre los años 1976/1983, impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los Servicios Secretos y dentro del precitado Plan Cóndor”.

Punto primero del auto de detención contra Augusto Pinochet dictado por Baltasar Garzón el 18 de octubre de 1998.

No había espacio para los abrazos.

Los dos militares conocieron épocas mejores, cuando la sola mención de sus apellidos producía un silencio aterrador en el entorno, escalofríos o simplemente odio.

El visitante, gris y opaco, algo delgado y de mediana estatura, había llegado algunas horas antes al aeropuerto de Pudahuel donde otros hombres, grises como él, lo estaban esperando con ansiedad.

Porque el extranjero, si bien estaba disminuido físicamente, también era una leyenda entre sus pares.

Del terminal aéreo, junto a su esposa, fue trasladado a un Hotel, ubicado a un costado del Cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago. Allí debía esperar un llamado telefónico.

“¿Habitación 318?”, dijo la voz de un capitán de gendarmería.

“¿Es la hora?”, preguntó el ex uniformado. “¿Tiene la autorización?”

“Sí, Mi General, lo espero abajo para trasladarlo a Punta Peuco. Su señora esposa tiene un auto a su disposición para llevarla donde ella guste”.

Infermo de cáncer y, tal vez cansado de vivir, Carlos Otto Paladino, jefe de Inteligencia argentino durante el gobierno del general Jorge Rafael Videla, viajó hasta Santiago de Chile en octubre de 1996 para visitar a su amigo, Manuel Contreras Sepúlveda, quien estaba recluido desde hacía un año en el penal de Punta Peuco, una cárcel especial, pero sin duda una prisión.

No era ni la sombra del uniformado que, en pleno mando de la 10ª Brigada de Infantería en la década del 70, dijo que “el estigma” de aquel tiempo era “la violencia” porque no se moría “de cara al sol y frente al enemigo” ya que éste, según él, se ocultaba “en la oscuridad”.

Ahora era otro.

No tenía la prepotencia que lo caracterizaba en el centro de detención clandestino, denominado Automotores Orletti, donde personalmente supervisó la tortura de cientos de seres humanos bajo un retrato de Adolfo Hitler.

Ciertamente y mucho más que en aquella época, sentía en la oscuridad la presencia del enemigo interno y este lo estaba consumiendo en vida.

Paladino, director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 1975, fue el encargado de coordinar la represión en su país e integrar a su organismo a todos los elementos parapoliciales que hasta el golpe de Videla realizaron actividades terroristas.

En ese año, precisamente, pocos meses después que en las narices de la Inteligencia argentina se asesinara al ex comandante en Jefe del Ejército de Chile, Carlos Prats González, el general Paladino fue condecorado por Augusto Pinochet. ¿No había nada que reprocharle?

Antes que llegara a Santiago en octubre del 96, Carlos Figueroa, en ese entonces ministro del Interior del segundo gobierno de la Concertación, recibió un llamado desde Buenos Aires en el que le solicitaron sus buenos oficios para lograr que el general argentino pudiera ingresar sin inconvenientes a la cárcel donde se encontraba su amigo Contreras.

Figueroa, ex embajador de Chile en Buenos Aires entre 1990 y 1993, se lo hizo saber a José Antonio Gómez, subsecretario de Justicia y éste dio la orden a Gendarmería

para que arreglara los detalles. Consultado sobre este tema, en agosto de 1999, el subsecretario negó cualquier vinculación al hecho y señaló, a través de su encargada de prensa, que nada sabía sobre ese encuentro.

La misión habría recaído en el coronel Edmundo Letelier, director de Seguridad de la institución y, por ende, máximo responsable en Punta Peuco. El ahora mayor Cisternas, en ese entonces capitán, fue el encargado de buscar a Paladino en su hotel y otro gendarme llevó a la esposa del general a comprar a un mall de la zona oriente de Santiago.

Todo se desarrolló normalmente y ambos generales de Inteligencia pudieron compartir por un espacio de tres horas sin que persona alguna los molestara. El ingreso del general argentino no quedó registrado en los libros del penal.

¿Por qué el gobierno chileno se prestó para este juego clandestino?

Según el fiscal Julio César Strassera, el accionar represivo en su país fue "feroz, clandestino y cobarde". El visitante era el hombre que en la Argentina de Videla sintetizaba, tal vez mejor que nadie, aquellos tres adjetivos.

En Chile, sin duda, era Manuel Contreras Sepúlveda.

Ahora el otrora poderoso general de la DINA tiene sus movimientos limitados y debe deambular por un módulo especial, con bastantes comodidades, pero protegido y -quizá- también vigilado por casi 15 hombres del Ejército de Chile, encargados del perímetro externo de una cárcel que, en su interior y administrativamente, depende de Gendarmería.

Es un preso.

Su enemigo interno, el que tiene en el colon y que lo dejó con un año contranatura de por vida, no lo salvó de la reclusión. Todas las mañanas, como aseguró su hijo en revista *Cosas*, debe conectarse a una máquina "que le limpia el estómago".

No han inventado una que limpie el alma.

En Punta Peuco tiene de todo: computador, fax, equipo de música, televisor y una pequeña oficina, con un elegante escritorio de madera, sobre el que se posa una tablilla que reza: "brigadier general Manuel Contreras Sepúlveda".

En un principio lo iban a ver sus amigos y camaradas. Actualmente sólo unos cuantos familiares, su actual pareja, Nélida Gutiérrez, su abogado Humberto Neumann y una mujer, la esteticista Carolina Varela, quien tuvo que

disminuir sus visitas para evitarle al general (r) malentendidos con su esposa. En los últimos meses se ha sumado a sus visitas la mayor (r) Ingrid Olderock, ex agente de la DJNA.

Su hijo, el controvertido y polémico "Mamito", apenas ha pisado Punta Peuco en ocho oportunidades en los cuatro años que su padre lleva recluido y en los últimos días de abril de 1999, a raíz de las declaraciones que hizo a la revista *Cosas*, el general le prohibió terminantemente el ingreso al penal.

Atrás quedaron los años en que Contreras, el predilecto de Pinochet, egresó como oficial del arma de ingenieros o cuando, a partir de 1966, se desempeñó como profesor de Inteligencia en la Academia de Guerra y un año después, en Virginia, en los Estados Unidos, se graduó en el curso de "lucha antigüerrillera" en la escuela de Fort Benning.

Mucho más postergada fue su infancia.

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, nacido el 4 de mayo de 1929, quedó huérfano de madre cuando apenas se empinaba por sobre los seis años de edad. Era el mayor de tres hermanos. Su padre era oficial de Ejército. Lo criaron unas tías y su abuela. A los 14 años ingresó a la Escuela Militar y antes de los 23 estaba casado. Tuvo cuatro hijos.

En el informe presentencial que Gendarmería de Chile le realiza a los reos procesados a petición de la Justicia y que elaboran, conjuntamente, dos psicólogos, un asistente social y dos abogados de la institución carcelaria, se informa que el ciudadano Contreras Sepúlveda, cédula de identidad 2.334.882-9, es un "sujeto de inteligencia normal, pensamiento de tipo funcional abstracto. Con tendencia a la extraversión, muy autoafirmativo, con capacidad de liderazgo, dominante. Posee una alta motivación de logro con un alto sentido del deber y marcada capacidad de perseverancia para enfrentar nuevos desafíos o proyectos, llegando a la rigidez en pos de la consecución de sus objetivos. Precisa del reconocimiento y refuerzo social como una forma de renovar el alto concepto que tiene de sí mismo. En lo social se aprecia un reconocimiento intelectual de normas y pautas de conducta, siendo capaz de lograr una adaptación instrumental a ellas, procurando desenvolverse en ambientes sociales en los cuales haya una mayor concordancia con sus motivaciones e intereses y donde pueda ejercer su dominancia. De esta forma, logra un

control de las situaciones y aumenta sus probabilidades de obtener reconocimiento social. En lo emocional, se aprecia una tendencia a la frialdad afectiva. La afectividad impresionada coartada por un sobre control racional de los impulsos, emociones y sentimientos, apareciendo su capacidad empática disminuida y una tendencia al egocentrismo; de esta forma pone sus propios intereses por sobre los de los demás. Concordante con el sobrecontrol de las emociones, se percibe represión de ansiedad y sentimientos de culpa, los que no son asumidos conscientemente, traspasando su responsabilidad a otros. Estas proyecciones podrían constituir un mecanismo psicológico de defensa a fin de que su autoimagen no se vea menoscabada. En este contexto no se aprecia conciencia de delito, y por ende, no se observa motivación por el cambio”.

Este informe lo realizó el equipo de Gendarmería en abril de 1995, cuando Contreras estaba en libertad, vivía en su fundo en Fresia y era procesado en la causa 30.174 por homicidio y uso de pasaportes falsos. Para efectuarlo, el grupo multidisciplinario visitó una vez al general en su casa y otra vez lo recibió en la Escuela de Gendarmería, aplicándole en la oportunidad varias pruebas psicométricas. A partir de entonces sería una foja más del expediente que lo llevaría a la cárcel.

El 16 de octubre de 1996, cuando se produjo el encuentro con Paladino, Contreras ya estaba recluso físicamente y el argentino preso de su conciencia y también de su enfermedad, tanto que moriría al año siguiente.

Ambos con sus pasos seguros y miradas profundas fueron generales feroces que, curiosamente, en la clandestinidad de sus actuaciones, realizaron las acciones más cobardes que recuerden las historias militares de ambos países.

El uniformado argentino, considerado un fundador de la tristemente célebre Triple A, se había acostumbrado a ver a sus ex colegas de los 70 entre las rejas. Seguramente, antes que al jefe de la DINA, visitó al propio Videla, al general argentino Ramón Camps, al paraguayo Benito Guanes Serrano y a muchos otros que sucumbieron tras el arribo de gobiernos democráticos.

A Santiago, quizá, llegó con una misión específica. De lo contrario no se explicaría por qué el gobierno democrático se preocupó de poner a disposición del ex uniformado un auto para que lo utilizara en sus desplazamientos por Santiago y le otorgó una autorización es-

ORIGINATED IN: 11011
2, 11/05/77 08:30:40, 11/05/77

001 - 001 (1) 11/05/77, 11/05/77

002 - 002 (1) 11/05/77, 11/05/77

003 - 003 (1) 11/05/77, 11/05/77

004 - 004 (1) 11/05/77, 11/05/77

DE: JEFF. GENTILE, DIRECTOR, INFORMATION SYSTEMS
A: MR. PRESIDENT, EXECUTIVE SECRETARIAT

The copy of the letter from Mr. Gentile, dated 11/05/77, is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information. The letter is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information. The letter is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information.

The copy of the letter from Mr. Gentile, dated 11/05/77, is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information. The letter is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information. The letter is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information.

The copy of the letter from Mr. Gentile, dated 11/05/77, is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information. The letter is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information. The letter is being furnished to the President's Executive Secretariat for their information.

cc: Mr. Gentile, Information Systems
cc: Mr. President's Executive Secretariat
cc: Mr. President's Executive Secretariat

INDIVIDUALS:

MR. GENTILE: JEFF. GENTILE, DIRECTOR, INFORMATION SYSTEMS
MR. PRESIDENT: MR. PRESIDENT, EXECUTIVE SECRETARIAT
MR. GENTILE: JEFF. GENTILE, DIRECTOR, INFORMATION SYSTEMS
MR. PRESIDENT: MR. PRESIDENT, EXECUTIVE SECRETARIAT

pecial para que pudiera ingresar a la cárcel de Contreras sin que nadie se percatara de ello.

Tanto el Ejército como Gendarmería, que vigilan conjuntamente el penal, aseguran que persona alguna, con el apellido de Paladino y el nombre de Otto, ingresó a la cárcel de Punta Peuco entre el 20 de octubre de 1995, día en que Contreras llegó a la misma, y diciembre de 1996.

Pero, sin duda, estuvo allí. ¿A qué vino? Todo un misterio.

Recién la reunión se conoció oficialmente un año después, cuando el propio Contreras, tras la muerte de Paladino, la utilizó en una presentación ante la Justicia a través de su abogado. En la oportunidad, la defensa del general chileno argumentó que el ex jefe de la DINA nada tenía que ver en el atentado contra el general Carlos Prats en Buenos Aires y que el artefacto explosivo con que le quitaron la vida fue detonado por la entonces esposa de Michael Vernon Townley, la escritora chilena Inés Mariana Callejas.

La información, aseguró el abogado de Contreras, Humberto Neumann, fue proporcionada por el ex jefe de la Inteligencia argentina en su visita a Punta Peuco.

La ex mujer de Townley se apresuró en contestar que el día en que ocurrió el atentado ella se encontraba en Chile y desmintió categóricamente al general Contreras.

“¿En qué condición vino el general Paladino?”

“Como amigo. Ellos eran amigos. Conocidos...”, aseguró el abogado Neumann.

“¿En ese momento le dio el dato sobre el caso Prats?”

“Exacto”.

“¿Vino especialmente a decirle eso?”

“No vino a eso sino que, dentro de las cosas que se conversaron, se manifestó eso”, puntualizó el representante de Contreras.

El gobierno de Eduardo Frei, el Ejército y Gendarmería de Chile, miraron para otro lado. Carlos Figueroa y José Antonio Gómez, subsecretario de Justicia, hicieron lo propio. Para el Chile oficial, una vez más, la realidad no había existido.

Tal vez, sólo el destinatario del mensaje comprendió por qué los dos viejos estandartes de la Inteligencia se reunieron en una cárcel de Chile. Tal vez...

Ello ocurrió en 1996, durante el mes de octubre, aun-

que todo había comenzado hacía muchos años, como en los cuentos, con un *había una vez*...

Había una vez dos militares, intrínsecamente autoritarios, que construyeron sus propios infiernos a mediados de la década del 70, cuando los uniformados gobernaban el continente y la ideología de la Seguridad Nacional daba sustento a dictaduras que habían interrumpido administraciones democráticas, quizá algunas deficientes, pero inspiradas en un profundo sentimiento popular.

Ambos generales, en esos años, llegaron a acuerdos y compartieron experiencias. Pensaban que, con cinco mil kilómetros de fronteras en común y ante una amenaza similar, el marxismo, debían aunar esfuerzos para protegerse.

"Lógicamente, como todo servicio que nace, tuvimos contactos con servicios de inteligencia amigos, los cuales nos ayudaron en forma permanente y a los que, con el tiempo, ayudamos nosotros también. No olvide que la lucha contra el marxismo es internacional y, como lo hacen todas las policías del mundo a través de la Interpol, es necesario el intercambio de información", aseguró en 1979, el general Contreras, a la periodista Blanca Arthur de la revista *Luzilla*.

Era obvio, entonces, que durante esos "intercambios", las relaciones entre los jefes se fueron estrechando y que, además, los límites quedaron en un segundo plano.

"Ya en el período previo a la creación de la DINA, en junio de 1974, las Fuerzas Armadas habían combatido con éxito y batido las fuerzas subversivas que abiertamente se les enfrentaron. Entonces debía entrar en acción otro tipo de organismo para combatir en las mismas condiciones y terreno en que lo hacían los subversivos, es decir "debajo de la mesa". Nada se sacaba con tener a todas las fuerzas de la Defensa Nacional patrullando las calles, armados hasta los dientes, si entre los mismos que aplaudían su paso se encontraban los extremistas que, al amparo de la clandestinidad, podían asestar golpes cuándo y cómo lo desearan. El marxismo había cumplido en aquella época ya dos fases de la guerra clandestina: la infiltración y la organización, y estaba tratando de iniciar una tercera: la violencia sistemática. Se trató, entonces, de detener la guerra clandestina frente a un enemigo que pretendía evitar el resurgimiento de nuestro país...", argumentó Contreras ante Blanca Arthur.

Asustados, paranoicos al extremo y conscientes de la necesidad de borrar todo vestigio de las luchas anterior-

res, los jefes de Inteligencia de la región no dudaron en ampliar sus movimientos más allá de sus fronteras, olvidándose de los límites impuestos, de sus permanentes carreras armamentistas y peleas absurdas, para lograr un grado de integración con la muerte que llegaría a niveles insospechados y que, hasta nuestros días, desconocemos la magnitud que realmente alcanzó.

Para unos, esto simplemente no existió; para otros, fue el comienzo de lo que posteriormente se conocería con el nombre de un ave de rapiña y de la que Contreras sería el gestor...

Peter Kornbluh, investigador del National Security Archive, afirmó que respecto de la Operación Cóndor "no hay muchos documentos esclarecedores", ya que la CIA aún mantiene bajo confidencialidad muchos papeles sobre la planificación y los métodos con que trabajaron las agencias de inteligencia y el alcance de las operaciones.

El primer paso de la investigación periodística, entonces, tras obtener la documentación, era precisamente confirmar la génesis de la coordinación en su principal fuente...

"Abogado Neumann, lo llamo por dos cosas, a ver si usted me puede ayudar. Sé que la primera es muy difícil y creo que para lograrlo, además, requiero una autorización de Gendarmería... ¿qué posibilidades hay de entrevistar al general Contreras?, le señalé telefónicamente a Humberto Neumann el 26 de abril de 1999.

"Sé que usted tiene buenas relaciones con Gendarmería. Si usted pasa esa valla, yo con esa valla pasada, puedo conversar con el general y si usted quiere hacerle una entrevista... ¿personal?..."

"Me gustaría personalmente... en el último de los casos a través de su correo electrónico".

"No, por esa vía no ha querido nunca. Salte esa primera valla, usted me dice y yo creo que no habría problemas para que el general, como se llama, le dé la entrevista por cuanto ese siempre ha sido el obstáculo para que no se lo entreviste. Porque no ha sido porque él no ha querido sino que, lisa y llanamente, Gendarmería no ha dado el permiso para que un periodista ingrese al penal o le haga la entrevista de otra forma. Porque, aunque sea a través de Email o de cuestionario, él no quiere hacerlo por cuanto ya en una oportunidad lo hizo también el brigadier Espinoza y, como fue

sin autorización, sufrió castigos de parte del penal, del alcaide, le bajaron la nota de conducta, se le suspendieron algunos beneficios y, entonces, él no quiere hacerlo si no es con autorización del penal...".

"Si me consigo la autorización ¿usted cree que es posible?"

"Si usted la consigue y salta esa valla, hasta el momento yo le digo me han llamado de la CNN, me han llamado de la BBC, de Antena Tres de España y todos los de acá de Chile... y nunca nadie ha podido pasar ese primer obstáculo...".

Hacia dos semanas que el director nacional de Gendarmería, Hugo Espinoza Grimalt, tenía sobre su escritorio una petición oficial mía para entrevistar al reo interno en Punta Peuco.

La sola idea de enfrentarlo era todo un desafío.

Manuel Contreras Sepúlveda era un hombre que, según uno de los ideólogos del régimen militar, el ex senador de la UDI y asesor de Pinochet, Jaime Guzmán Errázuriz, había "perdido todo sentido moral". "El régimen era como un caballo chúcaro al que nosotros, los civiles que estábamos con el gobierno, tratábamos de controlar", señaló Guzmán el 15 de abril de 1989 ante la mirada atónita e incrédula de un grupo de universitarios del pensionado Cardenal Caro de Santiago.

Y luego, cuando fue citado a declarar ante el cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, por sus dichos ante los estudiantes, agregó: "(los métodos de Contreras) ...creo que eran los que le resultarían más eficaces para sus objetivos, con un rango de limitaciones morales muy inferior al que yo estimo exigible...".

"¿Dio a conocer estos atropellos al Presidente Pinochet, al general Leigh o a la Junta de Gobierno?", le preguntó el juez a Guzmán en un largo interrogatorio que duró cinco horas y que se realizó el 24 de octubre, precisamente un día después que el asesinado senador de la UDI almorzara con el general Pinochet.

"Debo responder, dijo meticulosamente el soltero de 43 años que, en ese momento, postulaba al Senado por Santiago, que del tenor de mis declaraciones se desprende mi conocimiento y convicción de un cuadro anómalo en cuanto a la seguridad de las personas, propio de una situación de guerra civil y de sus secuelas, cuyas res-

Santiago, abril 12 de 1999

Hugo Espinoza Grimalt
Director Nacional
Gendarmería de Chile
Presente

Me dirijo a usted, a través de la presente, para que tenga a bien concederme la autorización respectiva para entrevistar en el penal de Punta Peuco al reo condenado en la causa 30.174, interno Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, cédula de identidad 2.443.882-9.

El objetivo de la misma, es conocer de fuente del reo Contreras la vinculación que tuvo el uniformado en la llamada Operación Cóndor, sistema de coordinación que unió a las distintas policías del Cono Sur durante varias décadas, tema que desarrollaré ampliamente en un libro de investigación periodística.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable a esta petición, lo saluda atentamente



Francisco Martorell
Periodista

ponsabilidades corresponden fundamentalmente a quienes generaron ese cuadro desde el gobierno anterior. También queda claro mi apreciación de que en la difícil tarea de conjurar las secuelas de esa guerra civil larvada, era menester desplegar una activa labor para evitar que los organismos de seguridad se excedieran en esa lucha antisubversiva hasta límites que ética y jurídicamente no fuesen admisibles, como desgraciada pero habitualmente ocurre en situaciones sociales de esta naturaleza. Sobre ese tema conversé en diversas oportunidades con el Presidente Pinochet y el general Leigh y a tal objetivo se dirigieron todos mis esfuerzos para ir dictando progresivamente normas jurídicas que encauzaran el proceso dentro de marcos que hicieran más difíciles los abusos o desbordes de los organismos de seguridad”.

Guzmán, de acuerdo a informes de Inteligencia, se hacía escuchar a través del general Sergio Covarrubias y a éste, en su pelea contra la DINA y su “gerente general”, como llamaban a Contreras en la agencia, se le sumaban sus colegas Enrique Morel, Garay y Humberto Gordon Cañas. El coronel se apoyaba en Pinochet.

“El respeto por la vida humana, señaló en 1979 Manuel Contreras a la periodista Blanca Arthur, se ve truncado en tiempos de guerra, donde el hombre pasa a tomar el poder de Dios y en muchas oportunidades, ante la disyuntiva de matar o morir, opta por lo que más le conviene, y simplemente mata por la necesidad de sobrevivir...”.

“¿Hasta dónde considera usted que se puede llegar a través de un organismo como la DINA, en el cumplimiento del deber?”, le preguntó Blanca Arthur.

“... como usted ve, hasta dónde llega el cumplimiento del deber es impuesto por los vencedores y ¡ay de los vencidos!”, sentenció Contreras.

En abril de 1990 él era el vencido y un militante socialista, a cargo de Gendarmería, representaba el interés de los supuestos vencedores. Sólo había que aguardar la respuesta...

II

La invitación

“La DINA también buscó y logró establecer formas de coordinación con otros organismos y grupos en el exterior, tanto con servicios con similares funciones de seguridad interior en sus respectivos países, como con grupos políticos que podían prestarle utilidad en términos generales o para operaciones específicas”.

Extracto del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Chile).

“Los países que están siendo agredidos Política, Económica y Militarmente (desde adentro y fuera de sus fronteras) están combatiendo solos o cuando más con entendimientos bilaterales o simples acuerdos de caballeros”, rezaban los fundamentos del programa de la “Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional” que acompañaba la invitación que, en octubre de 1975, el entonces coronel del Ejército de Chile, Manuel Contreras Sepúlveda, en su calidad de director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cursó a sus pares de la región para que no faltaran al encuentro que se realizaría en Santiago.

Los objetivos del mismo, según la circular, eran concebir entre los días 25 de noviembre y primero de diciembre de ese año “una coordinación eficaz” para un “intercambio oportuno de informaciones y experiencias” y lograr “cierto grado de conocimiento personal entre los jefes responsables de la Seguridad”.

América Latina, en esos años, finales de 1975, vivía un retroceso en el camino democrático. A los golpes de Estado en Guatemala y Paraguay en 1954 y Brasil y República Dominicana, 10 años después, se le sumaron en la década del 70, los de Bolivia (1971) y Chile (1973). Uruguay, por su parte, sopor-



Manuel Contreras Sepúlveda, Coronel
Director de Inteligencia Nacional. En suma atenta-
tamente al Sr. General de División DON. FRAH-
CISCO BRITES, Jefe de la Policía de la Repu-
blica del Paraguay, y tiene el alto honor
de invitarle a una Reunión de Trabajo de In-
teligencia Nacional que se realizará en San-
tiago de Chile, entre los días 25 de Noviem-
bre y 01 de Diciembre de 1976.

La Reunión tiene carácter de Estrictamen-
te Secreto, y se adjunta Tenario propuesto
y programa tentativo.

El Coronel CONTRERAS, ruega al Sr.
General BRITES, honrarle con su presencia
y si lo estima hacerse acompañar por algun-
as personas, ya que espera que esta Reunión
pueda ser la base de una excelente coordina-
ción y un mejor accionar en beneficio de la Se-
guridad Nacional de nuestros respectivos Paí-
ses.

SANTIAGO, OCTUBRE DE 1976.

taba un régimen cívico militar desde marzo de 1973 y la Argentina, tras la muerte del general Perón, no encontraba otra salida que la de la violencia para zanjar sus dificultades. En Perú, por su parte, el general Francisco Morales Bermúdez terminó abruptamente ese mismo año con el progresismo de su colega uniformado Juan Velasco Alvarado.

En ese marco, lo que Contreras llamaba "simples acuerdos de caballeros", era una realidad. En algunos países la colaboración era de Estado a Estado y, en otros casos, como el que se daba entre Chile y la Argentina, el entendimiento se producía entre servicios de Inteligencia o simplemente con bandas de extrema derecha dispuestas a realizar cualquier colaboración para "extirpar" el marxismo.

Chile era una suerte de santuario para terroristas de extrema derecha de todo el mundo, que veían en este país un modelo a seguir y no dudaban en conectar la suerte de sus organizaciones a los emprendimientos del gobierno militar que encabezaba Augusto Pinochet.

Neofascistas italianos, anticastristas cubanos, ultraderechistas franceses o terroristas croatas, se paseaban por Santiago, realizaban operaciones de inteligencia, colaboraban con la policía secreta o, simplemente, se tomaban un respiro antes de volver a la lucha en su respectivo frente de batalla.

Era, asimismo, una necesidad chilena contar con estos personajes para la guerra que debía realizar la DINA fuera del país y que comenzó apenas la situación interna estuvo relativamente controlada.

En la acción represiva que se desencadenó tras el golpe de septiembre, la mira también se centró en los extranjeros, pero de organizaciones de izquierda, que habían encontrado en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, un lugar seguro donde refugiarse por la situación política que se vivía en sus respectivos países.

Una decena de uruguayos, de los cuales 9 se encuentran desaparecidos y uno de ellos lo estuvo hasta 1995, año en que su cuerpo apareció en el patio 29 del cementerio general, fueron secuestrados en Santiago entre septiembre y diciembre de 1973. Otros tantos argentinos y bolivianos sufrieron la misma suerte.

Eran jóvenes militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia o de los Tupamaros del Uruguay, llenos de ilusiones

y utopías, que habían arribado a Chile confiados en aquello de "o el asilo contra la opresión", pero que rápidamente se encontraron atrapados dentro de una nación cuyo lema, a fines del 73, era "por la fuerza"... porque se había perdido la razón.

El golpe en Chile frenó en seco los cambios que intentaba el gobierno de la Unidad Popular e inició una ofensiva contra todo aquello que representara algún vestigio de la administración democrática. Tras el primer período, después del arribo de Pinochet, que fue una verdadera ocupación militar en la que dominaron la muerte, la ejecución y las masacres, surgió a mediados de 1974, coincidentemente con la fundación oficial de la DINA y la legalización de Pinochet como Jefe de Estado, una segunda etapa en la que destacó el método de la desaparición forzada de personas.

En Chile, entonces, de un sistema represivo que se basaba en fusilamientos de opositores, ordenados por tribunales militares, se pasó a una etapa más selectiva y también clandestina donde el organismo de Contreras jugó un rol fundamental.

La DINA, según su director, fue un "organismo militar de carácter técnico profesional", creado por la Junta de Gobierno y el propio Pinochet, que diariamente informaba al jefe de Estado chileno de las novedades nacionales y cuya colaboración había neutralizado "toda clase de agresión y tentativas de personas contrarias al gobierno". Así lo consignan, por lo demás y con la firma del propio Augusto Pinochet, las anotaciones realizadas en la hoja de vida de Contreras por sus actuaciones entre agosto de 1975 y el 31 de julio de 1976.

El juez español Baltasar Garzón, que le adjudica al organismo cuatro mil muertes o desapariciones, asegura que la DINA era "una organización fuera de la estructura orgánica institucional de las Fuerzas Armadas, dependiente directamente de Augusto Pinochet, que tuvo por finalidad llevar a cabo una serie de actividades criminales, tales como secuestros, torturas y asesinatos o desapariciones".

La misma opinión tiene Ernest Lawrence Barcella, fiscal de los Estados Unidos que dirigió la investigación por el atentado contra Orlando Letelier, quien aseguró que "la DINA, como organización, conspiró para cometer atentados terroristas en España, Francia, Italia, Portugal, EE.UU, México, Costa Rica, Argentina, Chile y otros países, activi-

dades de las que Augusto Pinochet Ugarte tenía conocimiento y participaba en las mismas”.

El general Contreras aseguró que él, como delegado personal de Pinochet, lo informaba permanentemente de “cualquier actividad o hecho que se produjera” y que siempre cumplió “conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República” le dictaba. “Solamente él, como autoridad superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de delegado del Presidente y director ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente con lo que se me ordenó... tenía la orden de que se le informara diariamente sobre lo importante que sucedía y al mismo tiempo como doctrina normal, se le informaba permanentemente sobre el cumplimiento a las órdenes impartidas...”.

Contreras, que asegura que fue nombrado el 13 de noviembre de 1973 delegado del Presidente de la Junta de Gobierno y que ello lo facultaba para actuar en nombre de Pinochet, dice también que trabajaba subordinado directamente, sin mando intermedio, al general. Este último, según Contreras, “sabía exactamente lo que hacía y no hacía la DINA”.

Era un hecho que Pinochet había optado por un coronel en un cargo tan importante porque era una dirección que pretendía controlar personalmente. El comandante en Jefe, simplemente, no confiaba en sus generales y basaba su apoyo en la popularidad que ganaba día a día entre la oficialidad más joven. Tampoco los generales le tenían mucho respeto a un uniformado que siempre estuvo al filo de la lealtad.

Un coronel en la DINA, como delegado personal, significaba en la práctica que siempre, ante cualquier situación, debía consultarlo. Por ello, en una oportunidad y ante diversos testigos que lo cuestionaban por las actitudes de la DINA, Pinochet golpeó la mesa y vociferó: “¡señores, la DINA soy yo!”.

Todo esto lo confirmó el historiador chileno Gonzalo Vial, ex ministro de Educación del gobierno militar y uno de los redactores del “Libro Blanco” de la Junta, cuando aseguró en el diario *La Segunda* que ambos uniformados “se veían diariamente, viajando juntos, a las 7:30 horas desde la casa del comandante en Jefe hasta el edificio Diego Portales. Durante el trayecto, Pinochet recibía un completo

“briefing” de Inteligencia. No iniciaba el presidente su jornada diaria sin ese contacto”.

Un informe del Departamento de Estado, fechado el 10 de abril de 1975, por otra parte, apunta en la misma dirección en cuanto a las estrechas relaciones entre Contreras y el general Pinochet. “Las relaciones de la Junta con la DINA han cambiado desde los días en que se establecieron las organizaciones de Inteligencia. Cuando el coronel Contreras estaba formando la DINA, se apresuró a declarar que la relación entre él y la Junta se mantendría a un alto nivel... Fue durante los primeros días cuando el coronel Contreras empezó a pedir un apoyo considerable de diversos servicios respecto a personal. Pero desde la promulgación del decreto ley 521, que consagró oficialmente a la DINA como el órgano nacional de Inteligencia del gobierno, el coronel Contreras ha informado exclusivamente al Presidente Pinochet y ha recibido órdenes solamente de él. Se mantiene una fachada de cortesía con los otros tres miembros de la Junta, pero sus opiniones y/o consejos no los busca ni los desea el director de la DINA. Esta situación ha impulsado a varios oficiales del Ejército a tratar de convencer al Presidente de que la DINA debería estar sujeta a la dirección y el control de una autoridad tipo Consejo Nacional de Seguridad más que a la presidencia. Hasta ahora, el Presidente no ha recibido estas sugerencias con entusiasmo...”.

Este hecho se ve ratificado en el libro “Un grito desde el silencio”, de la periodista Nancy Guzmán, en el que se hace referencia a una conversación en el edificio Diego Portales, en febrero de 1974, entre el general Pinochet y su camarada Ernesto Baeza, a la sazón director de la Policía de Investigaciones de Chile.

A raíz de la desaparición de un sobrino nieto del general Baeza, Patricio Munita Castillo, secretario y amigo del segundo jefe del MIR en la época, Bautista van Schouwen, el jefe de la policía ordenó una investigación extraoficial que dio luces a su familia sobre el paradero del cuerpo de Munita enterrado ilegalmente por agentes de la DINA en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Ante ello Pinochet llamó en forma “urgente” a Baeza a su despacho y le dijo: “así que andái buscando muertos, ah”.

“Mira, asegura la periodista Guzmán que le contestó Baeza a Pinochet, dile al que te informa (refiriéndose a Contreras) que venga y que te lo diga delante de mí, yo no ando buscando ningún muerto”.

“Ándate con cuidaíto y déjate de seguir revolviendo la tierra para sacar muertos”, le respondió un Pinochet encolerizado que tal vez sabía que junto al cuerpo de Munita, en el mismo Patio 29, se encontraban los restos de Bautista van Schouwen, asesinado pocas horas después de ser detenido junto a su secretario en el convento de los padres Capuchinos y sobre cuyo paradero el régimen había argumentado absoluta ignorancia.

Eran los comienzos de la DINA y el inicio del reinado de Manuel Contreras Sepúlveda a nivel nacional. “La persecución, en esta fase, se hará más selectiva, tomará una forma más clandestina y centralizada, autotorgándose una impunidad por sobre cualquier tipo de control, incluso el mando regular”, asegura Andrés Domínguez y agrega que la DINA, en este período, “extiende su ámbito de acción a todo el país y va al exterior para atacar a los dirigentes que deben ser eliminados”.

La primera mirada de la Inteligencia chilena se posó en la Argentina. “El trabajo en ese país, señala el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de Chile, creada por el presidente Patricio Aylwin para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, constituyó desde un comienzo un desafío especial para la inteligencia chilena, no sólo porque este país tiene una extensa frontera con Chile, con múltiples pasos cordilleranos, sino que además reunía el mayor número de exiliados chilenos en un país extranjero”.

A partir de 1974 la DINA encontró otro gran aliado en el presidente argentino Juan Domingo Perón y, especialmente, en su colaborador más estrecho, el ex cabo de policía José López Rega, quien trabajó para él como secretario privado durante su exilio europeo y que luego, una vez en la Casa Rosada en Buenos Aires, se desempeñó como su ministro de Bienestar Social.

Según un cable enviado al Departamento de Estado norteamericano, que seguía muy de cerca la situación en el hemisferio sur, Juan Domingo Perón autorizó a la policía y servicios de inteligencia de su país a cooperar con sus similares chilenos en la detención de “extremistas” exiliados en la Argentina.

De acuerdo al mismo cable, desclasificado años después, “arreglos similares” fueron dispuestos con los servicios de seguridad de Bolivia, Uruguay y Brasil.

“Esta cooperación entre las fuerzas de seguridad aparentemente incluye la autorización para que funcionarios extranjeros operen dentro de la Argentina contra sus nacionales exiliados que utilizan ese país como base para operaciones de insurrección. Esta autoridad supuestamente incluye el arresto de tales exiliados y su traslado al país de origen sin recurrir a procedimientos legales”.

El todopoderoso general Vernon Walters, a la sazón subdirector de la CIA, no habría estado ajeno a estas determinaciones. En abril del 74 el uniformado norteamericano, que después sería embajador, estuvo secretamente en Santiago y Buenos Aires analizando la seguridad del patio trasero de su país. Al gobierno de los Estados Unidos le preocupaba la situación chilena postgolpe y el poderío político y militar que estaban alcanzando los Montoneros en la Argentina. “El Movimiento Peronista Montoneros, decía un manual de la Escuela de las Américas, es una organización terrorista orientada urbanamente, antigobierno argentino y oligarquía, cuya ideología es una mezcla de peronismo y marxismo leninismo...”. Por ello Walters se reunió secretamente en Buenos Aires con Juan Domingo Perón y luego viajó a Chile donde lo esperaba Augusto Pinochet.

Por esos días una docena de activistas brasileños fueron arrestados en la capital argentina por agentes de seguridad de San Pablo con la ayuda de la Policía Federal Argentina. Las informaciones daban cuenta de una casa de seguridad - en plena capital- donde convivían al menos dos agentes por país con la finalidad de realizar actividades de Inteligencia, secuestros o traslados clandestinos de exiliados a sus naciones respectivas.

Desde fines del 73 operaba en Buenos Aires un nutrido contingente de agentes y colaboradores de la DINA que tenían su centro de operaciones en la embajada chilena, las oficinas de la entonces línea aérea nacional, Lan Chile y del Banco del Estado, o los cafés de la capital argentina. Ellos se relacionaban con el SIDE, la Triple A o la Policía Federal.

Carlos Hernán Labarca Sanhueza, uno de los hombres del organismo de seguridad chileno, contó posteriormente que llegó a dicha ciudad en 1974 para desempeñarse como agente dentro de la embajada chilena y que trabajó en dependencia directa con el coronel Víctor Barría Barría, alias Vicente, quien para todos los efectos era el jefe de la

DINA en la Argentina, aunque su verdadero cargo fuera el de agregado civil en la representación chilena.

"Este oficial, decía una comunicación entre los agentes en noviembre de 1974, se encargará de los contactos oficiales con la embajada y servicios de Inteligencia. Particularmente el intercambio de funcionarios en ese sentido ya que aquí se encuentra trabajando un miembro del SIDE en la embajada argentina en contacto con nosotros".

Paladino y Contreras estaban debidamente representados en ambas misiones diplomáticas.

Labarca, dentro de los trabajos que desempeñó a su llegada, se encargó de llevar periódicamente un sobre y cierta cantidad de dinero, entre 150 y 200 dólares, al domicilio de Enrique Lautaro Arancibia Clavel, jefe de información clandestino de la DINA en Buenos Aires, que también se hacía llamar Luis Felipe Arizmendi o Luis Felipe Alemparte Díaz.

Este último, incluso, recibió instrucciones de no encontrarse en público con el coronel Barriá. "Tus relaciones con él, señalaba el memo número 3 proveniente de Santiago, deben ser totalmente encubiertas. No te debes quemar. Debes seguir trabajando en la misma forma en que lo has hecho hasta ahora...".

Otro memo de la DINA aseguraba que se le había indicado a "Vicente" que no tomara contacto con Osvaldo (coronel José Osvaldo Riveiro) para que compartimentara el trabajo con Arancibia. "Debe quedar claro, decía el documento, que ambos trabajan en redes diferentes y deben formarse redes distintas de informantes. Vicente debe quedarse con los contactos oficiales con los servicios amigos, con las autoridades, con los jefes de organismos públicos, con los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y con los miembros del cuerpo diplomático. El debe ser la cara pública".

Por esos días, Arancibia Clavel prestaba servicios "a honorarios y sin sujeción de dependencia alguna y en calidad de asesor" en la sucursal de Buenos Aires del Banco del Estado de Chile. No había institución estatal que no estuviera al servicio de la DINA.

Más allá de la recolección de información, los grupos en Buenos Aires tenían un carácter operativo y prestaban la colaboración necesaria cuando un agente de Chile debía realizar una misión en ese país. La DINA no sólo vigilaba. También actuaba y ello lo demostró con creces en sus atentados. El pri-

mero de ellos fue dirigido contra el ex comandante en jefe del Ejército chileno quien, por su colaboración con el gobierno de Allende y el conocimiento acabado de quién era realmente el general Pinochet, ocupó el primer lugar en la lista.

El general Carlos Prats González, de 59 años, tras el golpe militar y visiblemente quebrantado, había tomado la decisión de escribirle a Pinochet, quien lo sucediera en su cargo de comandante en jefe del Ejército para manifestarle que "el futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae bienestar general al país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe...".

Hasta el 23 de agosto el que sería jefe de la Junta había sido un subordinado ejemplar y, por eso, Prats no dudó en recomendárselo a Allende para que ocupara su lugar. Se sentía, por ello, íntimamente traicionado.

Según un informe de la Inteligencia soviética, publicado en el libro "El oro de Moscú" del periodista Isidoro Gilbert, el general Prats en una entrevista privada dijo que Pinochet "era un hombre mediocre y militar poco capaz", que se le conocía entre los uniformados "solamente por ser el autor de un pequeño manual de geografía".

El 15 de septiembre de 1973, cuatro días después del golpe y luego de anunciar en la TV chilena que no dirigía movimiento alguno de resistencia contra la Junta Militar, el general Carlos Prats González inició su exilio en la Argentina. Al cabo de un mes tenía su vida relativamente organizada en Buenos Aires: sus colegas uniformados argentinos lo acogieron como huésped, gozaba de la protección del Servicio de Inteligencia del Ejército y comenzó a trabajar como auditor en la fábrica de neumáticos Gomatex.

Alrededor de él, sin embargo, se gestaban extraños movimientos comandados desde Santiago que, poco a poco, lo llevaron a pensar que lo mejor era salir de la Argentina. "Me vine a Buenos Aires, escribió el militar a la viuda de Allende, Hortensia Bussi, en azarosas condiciones. Me he mantenido marginado de contactos políticos y periodísticos; pese a ello, mis actos son vigilados por una curiosa y entremezclada red de informantes y muchos esfuerzos se han desplegado en Chile para encontrar un indicio que pueda afectar mi honra o que les permita exhibirme como el general al servicio del marxismo".

En mayo de 1974 concibió la idea de radicarse en un país europeo. Su pasaporte diplomático, sin embargo, estaba caducado y, para conseguir una nueva documentación, solicitó una audiencia al cónsul chileno en Buenos Aires, Alvaro Droguett, con el objeto de iniciar los trámites que le permitieran contar a él y a su esposa con las respectivas tarjetas de identificación. Estas, simplemente, fueron demoradas en Santiago.

El 4 de septiembre, a través de un llamado telefónico, le advirtieron a Prats que un militar chileno se encontraba en Montevideo haciendo los arreglos necesarios para que un grupo croata lo asesinara en Buenos Aires. El gobierno argentino, de inmediato, le ofreció documentos para salir del país y le aseguró "una estricta" vigilancia. No fue efectiva.

La Dina cayó sobre él y su esposa, Sofía Cuthbert Chiarleoni, cuando el día 30 de septiembre de 1974 había comenzado hacía escasos minutos.

Los Prats, la jornada anterior, compartieron durante la mañana con unos amigos en una quinta en las afueras de Buenos Aires, por la tarde fueron al cine y en la noche comieron en la casa del ex embajador de Salvador Allende en Buenos Aires. Cerca de la medianoche, el general y su esposa, se dirigieron a su departamento -ubicado en el exclusivo barrio de Palermo- en un Fiat 1600 de color gris, patente C-949958, de su propiedad. En la puerta del estacionamiento, cuando el uniformado se bajaba del vehículo para abrir el portón, un kilo y medio de trotyl, que fue colocado debajo del piso del Fiat, entre los dos asientos delanteros y sobre la caja de cambios, hizo una violenta explosión.

El informe de la Policía Argentina sobre la tragedia es elocuente: "Alrededor del lugar del hecho y esparcido en un diámetro de aproximadamente 50 metros se observan restos calcinados del rodado y carne chamuscada (...) las puertas delanteras destrazadas, techo arrancado, capot arrancado, piso roto con un orificio de aproximadamente 90 centímetros en su parte delantera, rotura total de vidrios, quemada la carrocería por acción del fuego (...) el techo fue a caer a la terraza de un edificio situado frente al lugar del hecho, a unos veinte metros del nivel del piso. La puerta del lado derecho fue totalmente arrancada, por lo cual se supone que estaba cerrada (...) junto al rodado, lado derecho, se halla extendido en forma paralela al mismo un ca-

dáver al parecer de sexo femenino, en posición boca arriba orientada al sur, semivestido, al que le faltan ambas piernas desde la rodilla para abajo y también el brazo izquierdo, diversas heridas, cabeza totalmente quemada, sin pelo. Unos metros más hacia el este y superando el rodado descrito, sobre la mitad de la acera, y en forma paralela al cordón, se encontraba, ya sin vida, un cuerpo masculino orientado al este, con quemaduras en distintas partes (...) De acuerdo a las heridas el general Prats se encontraba fuera del coche, junto a la puerta del lado del conductor, posiblemente parado o semiagachado, mientras que su esposa se hallaba sentada en el lugar del acompañante”.

Ese día, lunes 30, quedaron registrados en el aeropuerto internacional de Ezeiza los viajes de Kenneth Linyart, seudónimo de Michael Townley, a Montevideo y el de Enrique Arancibia Clavel a Santiago. Otro chileno, Juan Luis Bulnes Ossa, vinculado al comando que mató a René Schneider y que se encontraba hospedado en el lujoso Hotel Plaza, canceló su habitación y se trasladó a la casa del coronel Joaquín Ramírez Pineda, agregado militar de Santiago en Buenos Aires. Mariana Callejas dice que estaba en Chile y Contreras, por lo que le contó Paladino, asegura que ella fue la que accionó el control remoto.

Otras versiones dan cuenta que en la operación habría participado un oficial argentino, llamado Ernesto “el Nabo” Barreiro, quien posteriormente sería conocido como el detonante de un alzamiento contra el gobierno de Raúl Alfonsín en la Semana Santa de 1987.

El atentado contra Prats fue el primer indicio de la coordinación, tal vez más enmarcado en el “entendimiento bilateral o los simples acuerdos de caballeros” que en el Operativo Cóndor, que formalmente comenzó a funcionar un año después.

Según consta en la declaración que prestó en Roma ante la jueza argentina María Servini de Cubría el italiano de la “Avanguardia Nazionale” y lugarteniente del terrorista Stefano Delle Chiaie, Vincenzo Vinciguerra, el asesinato de Carlos Prats se habría “realizado en el ámbito de la Operación Cóndor”.

El fascista europeo, condenado por varios homicidios en Italia, le dijo a la jueza, que investiga el atentado en Palermo, que el Cóndor era “un pacto que reunía a varios servicios secretos de América Latina en función anticomunista, para

vencer al único peligro que amenazaba al mundo occidental". En la versión que se reproduce en la prisión preventiva dictada por Servini contra uno de los implicados en el atentado contra el general Carlos Prats, el italiano aseguró que cuando estuvo en Santiago de Chile tomó conocimiento de que "era voluntad de la Junta militar eliminar a los opositores políticos" y que el ahora general Contreras "fue un ejecutor" que, a su vez, "designó a un personaje como Townley" para atentar contra Prats y Letelier. Agregó, también, refiriéndose al asesinato del ex comandante en Jefe, que no dudaba que Pinochet fuera "quien impartió la orden".

El fiscal Propper, por su parte, que investigó el caso Letelier en los Estados Unidos, declaró en España ante el juez Baltasar Garzón, que oficiales chilenos le dijeron que Pinochet, por instigación del jefe de la DINA, aprobó el asesinato del general Prats.

Augusto Pinochet, actualmente senador vitalicio y detenido en Londres, ha negado categóricamente estos cargos.

En declaraciones realizadas en julio del 98 a un grupo de periodistas en Valparaíso aseguró que nunca dio instrucciones de matar a persona alguna y que, de alguna manera, estaba cansado que le achacaran todo lo que hizo Manuel Contreras.

Su amigo y ex jefe de Inteligencia, desde el penal especial de Punta Peuco, esta vez respondió con el silencio...

Contreras ya había hablado, a través de su abogado, en la voluminosa presentación que hizo ante la Corte Suprema apenas unos meses antes que Pinochet obligadamente se despojara en marzo del 98 de los derechos que detentaba desde hacía 25 años como comandante en jefe del Ejército de Chile. "Yo no me mandaba solo y cualquier misión a cumplir tendría que haber venido, como siempre vino, del Presidente de la República", aseguró el jefe de Inteligencia ante el máximo tribunal.

Para él estaba todo dicho y la Justicia, desde ese momento, contaba con un elemento de prueba extremadamente contundente.

III

La Coordinación

"Debe ser destacado que las actividades de persecución se verificaron sin limitación de fronteras geográficas, contando para ello con la colaboración de los organismos de seguridad de Estados limítrofes, los que con características de reciprocidad, procedían a la detención de personas sin respetar orden legal alguna, en franca violación de tratados y convenciones internacionales".

Extracto del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Argentina).

El cóndor es una especie de buitre, que habita en casi toda América del Sur, vuela a gran altura y con sus alas desplegadas puede llegar a medir más de tres metros. Tiene una vista privilegiada y es muy difícil que una presa que se cruza en su horizonte logre escapar de sus fuertes garras.

Cuando Manuel Contreras diseñó la "Oficina de Coordinación de Seguridad" pensó, sin duda alguna, que con ella desarrollaría una efectiva persecución, detenciones y entregas clandestinas de los opositores políticos cualquiera fuera el lugar donde se los encontrara.

Los grupos represivos, coordinados, actuarían como los cóndores y serían infalibles. En su vuelo podrían violar la legislación internacional sobre asilo y refugio político, secuestrar gente, interrogarla, torturarla, trasladarla clandestinamente a su país de origen y una vez en él, con las garantías de que esas personas figuraban en el extranjero, hacer con ellas lo que quisiesen.

La idea era aún más amplia y con ese motivo el entonces coronel chileno viajó a Caracas para entrevistarse con Rafael Rivas Vásquez, director delegado de la Dirección de

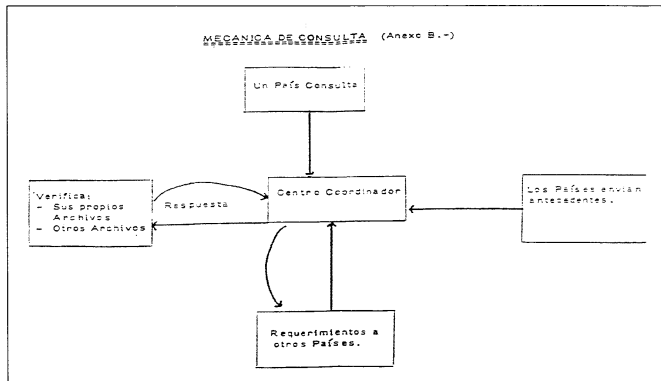
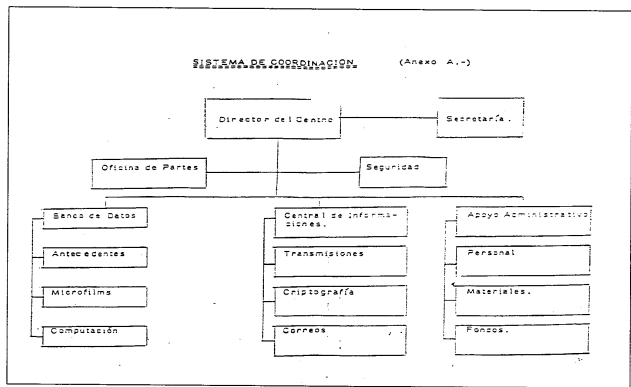
Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, la policía política venezolana, para obtener el concurso de su organismo en ella.

El jefe de la DINA, antes de conversar en Caracas con su par venezolano, estaba seguro que Rivas, un cubano anticastrista que había participado en el intento de invasión de Bahía Cochinos, aceptaría un acuerdo informal. Especialmente porque, de acuerdo a la errada información que manejaba el chileno, la Junta Coordinadora Revolucionaria pensaba instalar su centro de operaciones en la capital venezolana. En Caracas, quizá por los tiempos que se vivían y la reciente llegada de Carlos Andrés Pérez al gobierno, el coronel chileno no encontró el eco esperado a su propuesta.

Rivas Vásquez, años después, dijo a los norteamericanos John Dinges y Saul Landau, que el coronel Contreras le contó que estaba realizando algunos viajes de buena voluntad para obtener el apoyo de los distintos servicios de inteligencia latinoamericanos. Según el jefe de la DISIP, como estos contactos funcionan sobre la base de acuerdos verbales, el chileno "había estado viajando mucho" porque pretendía implementar "un enorme esquema de servicio, gigantesco y poderoso, que podría tener información de todo el mundo".

Era agosto de 1975 y el militar chileno venía de una reunión en los Estados Unidos con el general Vernon Walters, director adjunto de la CIA, con quien seguramente había delineado aspectos fundamentales de la iniciativa. El 24 de ese mes, según los documentos desclasificados por los Estados Unidos el 30 de junio de 1999, el jefe de la Inteligencia chilena cenó con el general Enrique Morel, agregado militar de Santiago en Washington, y un agente norteamericano no identificado. Este último, cuyo nombre fue tachado, describió el encuentro de la siguiente forma: "Me reuní con Contreras, a través del general Morel en julio y concertamos una cena juntos. Contreras estaba en Washington para reunirse con el embajador Ismael Huerta y con el general (Vernon) Walters (...)".

También sostuvo un intercambio de cartas con el entonces coronel (después presidente de su país) Joao Batista Figueiredo, jefe del Servicio Nacional de Información de Brasil, en el que éste le mencionó que Orlando Letelier, ex canciller de Allende, y Juscelino de Oliveira Kubitschek, ex mandatario brasileño, debían ser "neutralizados" porque apoyaban



la candidatura del demócrata James Carter a la presidencia de los Estados Unidos. En la oportunidad el director de la DINA le expresó a su par brasileño, justamente el 28 de agosto de 1975, que ello podría significar una desestabilización en el Cono Sur y adhirió a la idea de coordinar esfuerzos para impedirlo. Ambos dirigentes morirían en un año.

Contreras, en los 70, tenía sueños de grandeza y creía que debía contribuir al accionar represivo en todo el mundo. "Se consideraba un jefe de los movimientos antimarxistas y de los grupos dispersos en Europa, América y los Estados Unidos. Tanto le importaba el cuadro internacional a Contreras, que ya no sólo era responsable de Leighton y otros opositores chilenos sino también buscaba a Carlos, el venezolano, con la misma intensidad. Buscaba también qué cosas estaban haciendo las Brigadas Rojas (Italia), qué hacía la banda Baaden-Meinhoff (Alemania), el IRA (Irlanda) y la Eta de España", aseguró Michael Townley al fiscal italiano Oscar Salvi en 1996.

La reunión en Santiago, convocada por Contreras para fines de noviembre del 75, pretendía simplemente oficializar la colaboración que desde hacía algunos años se venía dando. Para los argentinos, en ese entonces, no representaba problema alguno que los agentes chilenos, en su propio territorio, detuvieran opositores y los trasladaran ilegalmente a Santiago.

Los memos que recibía la estación de la DINA en Buenos Aires eran elocuentes. "Daniel, el correo del MIR detenido ¿corresponde a Fernando Alarcón Ovando? Si esto es efectivo estaríamos interesados en su traslado a Chile", decía un oficio de Luis Gutiérrez, la chapa del encargado del Departamento Exterior de la DINA a ALFA, nombre supuesto del italiano Stefano Delle Chiaie quien, en sus incursiones en el Cono Sur, también se hacía llamar Alfredo Distéfano.

Ya en noviembre de 1974, el día de todos los santos, habían puesto en práctica el funcionamiento del sistema cuando agentes de seguridad argentinos, presumiblemente de la policía federal, secuestraron en el aeropuerto de Ezeiza al chileno-británico Guillermo Roberto Beausire Alonso, hermano de la compañera de Andrés Pascal Allende, uno de los más altos dirigentes del MIR. El joven, estudiante de economía y sin militancia política, fue trasladado a Santiago y fue

visto, por muchas personas, incluida su madre, en distintos centros clandestinos de detención chilenos.

Para la Comisión Verdad y Reconciliación, Beausi-
re “desapareció por obra de la DINA” y su caso “ilustra”
el grado de colaboración existente entre los servicios de
seguridad de Chile y de la Argentina.

La coordinación era un hecho. Había que profundi-
zarla.

Con carácter de “Estrictamente Secreta”, la cita en la
capital chilena era sólo la materialización de los sueños de
varios uniformados del Cono Sur que querían “un mejor
accionar en beneficio de la Seguridad Nacional” que, se-
gún ellos, se veía enfrentada a “una guerra psicopolítica”.

La idea no era descabellada, por ejemplo, para los
uniformados paraguayos quienes, hacía un tiempo, soste-
nían que “elementos guerrilleros” estaban coordinados
para accionar en países del área y que sus Estados care-
cían de “un sistema integrado, unificado y programado al
más alto nivel gubernamental” que permitiera contar con
“las armas suficientes para combatir en profundidad a las
organizaciones extremistas”.

Los paraguayos desconfiaban del interés que pudie-
ran mostrar los brasileños y los peruanos en el tema y te-
mían que los argentinos quisieran, en el corto plazo, liderar
a los demás servicios. Estaban acostumbrados a sentir la
hegemonía de Buenos Aires. Precisamente por ello es que,
si bien con ciertas reticencias, no fallaron a la cita.

El SIDE de Argentina, a través del agente Jorge Cayo,
confirmó de inmediato la presencia de esa agencia en lo
que llamó el “cocktail del 26”. También los uruguayos y
observadores brasileños...

Lo importante para las agencias, por esos días, era
evitar la coordinación de los grupos armados, detener los
correos y golpear las retaguardias de los partidos que, tan-
to en Chile como en Argentina, intentaban organizarse para
continuar oponiéndose a sus respectivos gobiernos. “La
subversión, decía el programa elaborado por la DINA, ha
desarrollado mandos intercontinentales, continentales, re-
gionales y subregionales, centralizados para coordinar las
acciones disociadoras”. Y agregaba: “desde hace algunos
años, se encuentra presente en nuestro continente, ampara-
da por concepciones político económicas que son funda-
mentalmente contrarias a la historia, a la filosofía, a la reli-

gión y a las costumbres propias de los países de nuestro hemisferio".

La idea de Contreras y sus agentes de la DINA era conseguir en esa reunión que los jefes de Inteligencia de otros países estuvieran de acuerdo con los planes diseñados y se pusiera en marcha una "Oficina de Coordinación de Seguridad". La misma, según el programa, tendría "un archivo centralizado de Antecedentes de Personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión" y "un sistema de comunicaciones moderno y ágil", que permitiera cumplir con los principios de rapidez y oportunidad en la entrega de información. Todo esto, pensaban los impulsores de la carta, obligaría a sus miembros a reuniones de trabajo periódicas para "realizar contactos de coordinación o de conocimiento personal".

En la ocasión, los gastos de hotel, traslados y comidas para tres delegados por país invitado correrían por cuenta de la DINA y la forma para contactarse con los agentes de Santiago, y ratificar la asistencia, era por medio de télex a Luis Gutiérrez.

"Pueden ingresar todos los países que quieran, siempre y cuando no representen a gobiernos marxistas", decía el punto tres de los diez que contenía el programa de trabajo. En este se señalaba, día a día, cuáles serían las actividades que desarrollarían los agentes, el sistema de coordinación y el código, llamado "alfabeto de sustitución simple", que los espías internacionales pondrían en práctica para enviarse información codificada.

En un corto plazo, los distintos jefes de Inteligencia -a los cuales Contreras les había despachado la invitación-, debían responder si asistirían al encuentro en Santiago, cuándo llegarían a la capital chilena y por quién o quiénes serían acompañados.

Para las comunicaciones debían utilizar el alfabeto de sustitución simple que, detalladamente, explicaban en una hoja aparte y que llevaba el rótulo de anexo C. En este se decía, por ejemplo que la letra "a", en minúscula, sería reemplazada por la "D" mayúscula y que la "zeta", también minúscula, sería la "O" mayúscula. Así, una a una, las letras chicas eran reemplazadas desordenadamente por otras grandes.

Las instrucciones para cifrar un mensaje, por su parte, explicaban que "cada letra del alfabeto normal (claro, es-

crito con minúscula) está sustituida por una letra distinta (En Mayúscula). Para cifrar un mensaje, tomamos la primera letra del texto que deseamos cifrar, la buscamos en el alfabeto Claro y la reemplazamos por la que aparece debajo de esta (Alfabeto cifrador). Lo mismo se hace con la segunda letra y con el resto de estas hasta terminar el mensaje. Una vez cifrado todo el texto, se toman las letras y se agrupan de cinco en cinco. Se escriben en el formulario definitivo para transmitir o enviar. La letra Ñ no se ha considerado por lo cual deberá reemplazarse por la N”.

Para descifrarlo, en tanto, los agentes aseguraban que “al recibir un criptograma (mensaje cifrado), tomamos una por una sus letras, las ubicamos en el Alfabeto Cifrador (Con Mayúscula), y la reemplazamos por la letra que está sobre ella en el Alfabeto Claro (con minúscula). Una vez que se hayan reemplazado todas las letras, se lee cuidadosamente el texto que salió y se separan las palabras, luego se escribe en el formulario en que se entregará a su destino”.

Para que no quedaran dudas a los hombres de la comunidad de Inteligencia de otros países, al finalizar el anexo C, se agregaba un ejemplo. Con el mensaje a cifrar “VIAJAREMANANA”, que codificado quedaba “NXDBDTCADJJD” y que se enviaba “NXDBD TCADJ JD”, la explicación era a prueba de tontos.

Este sistema, entonces, debían utilizar los invitados de Manuel Contreras para comunicar en breve al télex INSRE 40619-CL los grados, cargos y nombres de los participantes y la línea aérea, número de vuelo y día en que arribarían a Chile.

Al igual que en las películas cómicas, la invitación daba una segunda oportunidad, quizá para los que no entendieron el sistema de claves y contraclaves, entregando como alternativa de comunicación el número 394133 de Santiago de Chile. En ese teléfono, al igual que en los télex, la comunicación debía establecerse con Luis Gutiérrez pero, sin duda, el alfabeto de sustitución simple no podría ser utilizado.

Ese número, que corresponde a la dirección Merced 322 y al cual ahora hay que anteponer un 6, convirtiéndolo en el 6394133, está registrado en la guía telefónica a nombre de Mac Limitada Ingenieros Consultores pero lo utiliza una empresa de asesorías.

Uno de los primeros problemas que se le presentó a

ALFABETO DE SUSTITUCION SIMPLE (Anexo C.-)

CLARO a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
CLAVE D Q Z Y C R U I X E P M A J V G K T F W L N E S H O

INSTRUCCIONES PARA CIFRAR Y DESCIFRAR.

Para Cifrar.

Cada letra del Alfabeto Normal (Claro, escrito con minúsculas) está su-
stituida por una letra distinta, (En Mayúsculas). Para cifrar un mensaje tomamos la primera le-
tra del texto que deseamos cifrar, la buscamos en el Alfabeto Claro y la reemplazamos por la que
parece debajo de esta, (Alfabeto Cifrador). Lo mismo se hace con la segunda letra y con el res-
to de estas hasta terminar el mensaje.

Una vez cifrado todo el texto, se toman las letras y se agrupan de cinco en cinco. Se
escriben en el formulario definitivo para transmitirlo o enviarlo. La letra "N" no se ha considerado
por lo cual deberá reemplazarse por la letra "W".

Para Descifrar.

Al recibir un Criptograma (mensaje cifrado), tomamos una por una sus
letras, las ubicamos en el Alfabeto Cifrador (Con Mayúsculas), y la reemplazamos por la letra que
está sobre ella en el Alfabeto Claro (Con Minúsculas). Una vez que se hayan reemplazado todas
las letras, se lee cuidadosamente el texto que salió y se separan las palabras, luego se escribe
el formulario en que se entregará a su destino.

EJEMPLO: MENSAJE A CIFRAR: "viala remezana".

La letra "v" en el Claro se reemplaza por la letra "N" que la clave. La letra "l" por la letra "Q".

viala remezana mensaje en claro. MENSAJE A ENVIAR: NXQBD TCADU D
NXQBDTCADU D mensaje cifrado

Contreras fue la selección de sus invitados. En Paraguay, por ejemplo, el jefe de la policía de Stroessner, general de División Francisco Brites, manifestó su extrañeza en el memo 696 del 6 de noviembre de 1975 porque el agregado militar de Chile en Asunción, acompañado por el coronel Mario Jahn Barrera, adscrito a la DINA y con una permanencia de dos meses en la escuela de las Américas de los Estados Unidos en 1960, le había entregado el 3 de noviembre una carta personal de Contreras en la que se lo invitaba a la reunión de trabajo. En su informe, el general Brites decía estar sorprendido porque la misma se había hecho "sin consulta previa" y a un organismo, como el que dirigía, que "no actúa a nivel internacional".

Sin embargo, el jefe de la policía sugirió, en la oportunidad, "la designación como observador a dicha reunión de trabajo de Inteligencia al agregado militar a la embajada de Paraguay". A la sazón desempeñaba ese cargo, en Santiago de Chile, el coronel Ricardo Borgado Silva, quien estaba en ese puesto desde 1974.

Una vez en Chile, los que asistieran tendrían arduas jornadas que, comenzando el miércoles 26 de noviembre con una "sesión de trabajo" que se prolongaría entre las 11:30 y las 13:30, finalizaría tres días más tarde con la lectura, aprobación del acta final y la clausura del encuentro.

Durante esas cuatro jornadas, los participantes escucharían largas charlas sobre los objetivos de la reunión, la forma en que estaban organizadas las reparticiones de Inteligencia de cada país, la situación política que debían enfrentar, el estado de la subversión en los distintos frentes y las diversas formas de combatirla.

A partir del jueves 27, los invitados tratarían, exclusivamente, la "necesidad de contar con un sistema de coordinación de Seguridad". Los temas, entonces, derivarían hacia la "estructuración", "organización", "funcionamiento", "dotación de medios", "personal" y "costos" del mismo. La mecánica de trabajo que proponían los anfitriones era, una vez que el sistema estuviera activado, "algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión".

Para ello, el organigrama establecido contemplaba la existencia de un "director del centro", el que tendría que coordinar tres grandes áreas: un "Banco de Datos", una "Central de Informaciones" y un "Apoyo Administrativo". En la primera, ingresarían los antecedentes, los microfilmes y la

computación; en la segunda, estarían las transmisiones de télex, los medios de criptografía, los teléfonos con inversores de voz y los correos y, en la tercera, el personal, los materiales y los fondos que, según señalaba el programa de trabajo, debían provenir de los países interesados.

No era de extrañar esta preocupación de Contreras por los recursos económicos. Sólo un mes antes de cursar las invitaciones a sus pares del cono sur, el entonces coronel chileno, a través de un memo interno con el número DINA 1975/107, fechado el 16 de septiembre de 1975, solicitó secretamente al Presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte, una partida adicional de 600 mil dólares en el presupuesto de su dirección para lo que quedaba del año en curso. Las razones esgrimidas por el jefe de la Inteligencia para solicitar un incremento en sus recursos, convenidas con Pinochet de acuerdo al tenor de la carta, eran el "aumento del personal de la DINA adscrito a las misiones diplomáticas de Chile", los "gastos adicionales para la neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior, especialmente en México, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia e Italia", las "asignaciones para los oficiales de esta dirección que siguen cursos de preparación de grupos antiguerrilleros en el Centro de Adiestramiento de la ciudad de Manaus en Brasil" y "los gastos relacionados con las operaciones en el Perú: ayuda a nuestros partidarios en la Armada peruana y en la prensa, particularmente contribuciones a Equis X y Opinión Libre".

Contreras, en el memo secreto, desnudó la cantidad de gente que, a partir del aumento, engrosaría el trabajo del Departamento Exterior de la DINA: dos en Perú, Brasil y Argentina y uno para Venezuela, Costa Rica, Bélgica e Italia.

Esta sección del organismo represivo habría sido creada entre abril y mayo de 1974 para neutralizar o contraatacar las acciones que se desarrollaban fuera del país en contra del gobierno chileno y dependía directamente de Contreras. Si bien el Departamento Exterior se encargaba de las tareas de inteligencia y contrainteligencia estratégicas, también controlaba las misiones diplomáticas de Chile en el extranjero.

"La DINA tempranamente, señala el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, colocó a personal suyo en reparticiones del servicio exterior para asegurarse un flujo de información directa, y control de la burocracia estatal, que estaba en gran parte integrada por personal civil".

Otro aspecto, que trataba el programa propuesto para la Primera Reunión de Inteligencia, era el funcionamiento que debía tener la Oficina de Coordinación de Seguridad ante los eventuales requerimientos que se produjeran una vez que el sistema estuviera actuando. Cuando un país consultara el Banco de Datos del Centro Coordinador, los agentes de la Oficina deberían verificar sus propios archivos y solicitar información a los otros miembros para entregar todos los antecedentes que la comunidad de Inteligencia del Cono Sur tuviera sobre el sujeto u organismo investigado. "El Banco de Datos, decía el proyecto, debe ser manejado, financiado y alimentado por los servicios de seguridad de los países interesados, de acuerdo a un Reglamento Orgánico y de Funcionamiento aprobado por los delegados". Asimismo, se adelantaba que, "para obtener un rendimiento eficaz", era necesario "contar con un Sistema de Comunicaciones moderno y ágil, que permita cumplir con los principios de rapidez y oportunidad en la entrega de la información".

La Inteligencia chilena ofrecía a Santiago como sede del Centro porque, según ella, esta ciudad reunía las condiciones necesarias para serlo, aunque adelantaba que se sometería "a cualquier tipo de acuerdo que exista entre los países participantes".

Tal vez para evitar problemas futuros, si es que Santiago era aceptado como centro del sistema, los chilenos proponían, además, que todos los países concurrieran "en forma igualitaria y proporcional al mantenimiento" del mismo y contribuyeran con el personal técnico correspondiente, con inmunidad diplomática y agregados a sus respectivas representaciones. "La Dirección del Sistema, agregaba el proyecto de trabajo, debe ser ejercida en la forma en que los países lo acuerden, ya sea en forma rotativa, por elección y conforme a un período determinado".

Respecto al personal no técnico, la propuesta apuntaba que podría ser "contratado localmente" pero "previa investigación de confiabilidad". Una vez en marcha, para evaluar los servicios prestados por la Oficina, el punto C de la invitación de la DINA instaba a la realización de reuniones de trabajo periódicas, tanto bilaterales como multilaterales o extraordinarias, para "tratar problemas específicos y realizar contactos de coordinación o conocimiento personal".

Las delegaciones que llegaron a Santiago no sólo trabajaron. Ubicados en excelentes hoteles, con medios de

transporte, seguridad y hasta un oficial acompañante, todo proporcionado por la DINA, los agentes extranjeros tenían incluido en su programa de actividades, además, una comida ofrecida por Manuel Contreras, un viaje a Viña del Mar y una cena en el Casino de esa ciudad, una visita a la Escuela de Caballería de Quillota e, incluso, un recorrido por "algún centro nocturno".

El inicio de las reuniones ese miércoles 26 de noviembre de 1975 fue con un minuto de silencio. A pesar de que el general Pinochet cumplió 60 años el día anterior, para los hombres de armas no había espacio para las celebraciones. Una semana antes, el miércoles 19, el dictador español Francisco Franco dejó de existir a los 82 años y el poder de su país quedó simbólicamente en manos del entonces príncipe Juan Carlos I.

"Españoles: al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno en su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir", escribió en su testamento quien gobernara España durante 36 años y que pocos meses antes de su deceso dijo: "¡Dios mío, cuánto cuesta morir!"

Dos días después de su fallecimiento, un entristecido Augusto Pinochet Ugarte partió a España para participar del entierro y, según él, "rendir homenaje a un guerrero que sorteó las más fuertes adversidades". "He venido aquí, dijo el general, a cumplir con una obligación. De chileno, de amigo de España y, sobre todo, de admirador del Caudillo".

Lo acompañó, entre otros, su secretario de prensa y conspicuo colaborador Federico Willoughby, a quien le correspondió el honor de leer la declaración de Pinochet que decía: "España, durante mucho tiempo, ha sufrido como nosotros sufrimos hoy, el intento perverso del marxismo, que siembra el odio y pretende cambiar los valores espirituales por un mundo materialista y ateo. El coraje y la fe que ha engrandecido a España inspiran, también, nuestra lucha actual. Por esto, el Jefe de Estado concurre en representación del gobierno y del pueblo chileno a rendir homenaje a este guerrero que sorteó las más fuertes adversidades y también entregar nuestros mejores augurios y deseos para la España de hoy, de mañana y de siempre".

El dictador, por primera vez en mucho tiempo, pudo pasearse por una ciudad que no era chilena y estar en un país que no era el suyo. Fue, por lo demás, el único Jefe de Estado, que acudió a despedir los restos del autoritario español. *El Mercurio*, en coloridas notas firmadas por el ahora director del diario *La Segunda*, Cristián Zegers, no escatimó detalles para referirse a las actividades de Pinochet y publicitar las "demostraciones de afecto" que recibía el aislado general en la capital europea. Otro tanto hizo el diario *Las Últimas Noticias* que no dudó en informar que el militar chileno "recibió la más grande ovación entre todos los dignatarios extranjeros".

El 28 de noviembre de 1975, en medio del encuentro de Inteligencia, junto con anunciarse que en Chile se iniciaría un concurso de pronósticos deportivos con el curioso nombre de "Polla Gol", los teletipos informaron que, en Bolivia, el comandante en Jefe del Ejército, Carlos Alcoreza, denunció un plan extremista para derrocar a Hugo Bánzer y que, según él, estaba orquestado "por los enemigos eternos de Bolivia" que se encontraban "en las fronteras con Chile, Perú y Argentina".

IV

Los operadores

"Los objetivos específicos de ayuda militar son conseguir fuerzas latinoamericanas capaces de mantener la seguridad interna ante las amenazas de la violencia y la subversión, sean de inspiración comunista o casera".

Almirante Heinz de la Armada de los Estados Unidos.

Desde 1973, año del golpe militar en Chile, hasta la reunión que convocó Contreras en Santiago, la colaboración que la DINA obtuvo en Buenos Aires se debió a los contactos con la ultraderecha local y los grupos paramilitares. Luego se fueron acentuando los contactos institucionales.

El "Jefe de Información Clandestina" de ese organismo en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, estrechó sus relaciones con uniformados y civiles. Dentro de los primeros destacó el coronel de Inteligencia José Osvaldo Riveiro, alias "Balita" o "el viejo", y entre los segundos, Juan Martín Ciga Correa Anzorena, encargado de seguridad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante el rectorado del autorreconocido fascista Alberto Ottalagano.

El jefe de seguridad de la UBA, que comenzó a entregar la información que disponía de los chilenos en la universidad, era miembro de la Milicia Nacional Justicialista y, como buen fascista, estuvo enrolado en el movimiento nacionalista Tacuara. Ambas organizaciones habían iniciado sus actividades durante la década del 60 y sus militantes, con un marcado antisemitismo, provenían de las "mejores familias" de la Argentina.

La mayoría de ellos, tras el regreso de Perón en 1973, confluyeron en la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, que nació bajo el paraguas del ministerio de Bienestar

Social y de la mano de un oscuro personaje, José López Rega, hombre de confianza del líder militar argentino y de su esposa María Estela Martínez.

La Triple A, con un nutrido grupo de tareas, organizó la represión y dedicó su tiempo, asimismo, para administrar negocios tan lucrativos como la droga, el juego clandestino o la venta de armas, con el objeto de financiar sus operaciones. "López Rega y los matones que trabajaban para él en el ministerio de Bienestar Social llevaban a cabo muchas extorsiones y operaciones con drogas. Cuando el blanco de la extorsión o el traficante de drogas se negaba a pagar, era eliminado por la gente del ministerio y el asesinato se atribuía a los Montoneros", aseguró al norteamericano Martin Andersen un diplomático de los Estados Unidos que solicitó reserva de su nombre y que sólo el profesional identifica como Sam en su libro "Dossier Secreto: el mito de la guerra sucia".

De acuerdo a la información disponible, López Rega encabezaba una red de narcotraficantes que disponía de laboratorios para procesar cocaína en la frontera de su país con Bolivia, usaba oficiales de policía para su transporte en territorio argentino y miembros del cuerpo diplomático para la exportación.

Tras la caída en desgracia de López Rega y su huida de la Argentina, los uniformados tomaron el control de la represión y, como ya estaban imbuidos de la necesidad de la coordinación represiva, de inmediato iniciaron las acciones para hacer realidad un esquema que permitiera cortar las retaguardias de los grupos guerrilleros y asegurar la "paz interna".

A diferencia de la dictadura chilena, que optó por el fusilamiento en sus primeros meses y que trajo como consecuencia, justamente, que fuera rechazada fuertemente por el mundo, la Junta Militar argentina optó desde un primer momento por la técnica de la desaparición forzada. Esta la practicaba en sus tierras pero, cuando era necesario, también fuera de las fronteras. Para ello, especialmente para el Ejército, era fundamental la coordinación.

En su estrecho trabajo con los agentes instalados por la DINA en Buenos Aires, el coronel José Osvaldo Riveiro, que desempeñaba tareas como segundo jefe en el batallón de Inteligencia del Ejército argentino, comunicó esta inquietud e, incluso, en el memo que Arancibia Clavel envió a

Chile el 27 de agosto de ese año, antes que el militar argentino viajara a Santiago, el chileno dejó constancia que el coronel "tenía la idea de formar una central de inteligencia coordinada".

Riveiro, desde su puesto de la Inteligencia argentina, en el temido Batallón 601, era uno de los uniformados que más se había preocupado del surgimiento de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) y estaba convencido, aunque muchos de sus integrantes habían sido destruidos o aniquilados, que se necesitaba aunar esfuerzos entre militares para continuar el combate contra las organizaciones guerrilleras.

Con esa idea, el militar argentino, más bien bajo de estatura, calvo en la frente y con sus dientes amarillos por la nicotina, llegó el 3 de septiembre de 1975 a la capital chilena, invitado por el Departamento de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE). Ante ellos debe haber expuesto su deseo de la coordinación. De ahí que la convocatoria a una reunión para formalizar el Cóndor, sólo un mes después de su visita es, por decir lo menos, sintomática.

Por eso, cuando el coronel argentino se enteró que -sin consultarlo previamente- su colega chileno, Manuel Contreras, había cursado invitaciones para la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, se enojó en demasía. El Jefe de la DINA, como era obvio, había optado por invitar a la SIDE del general Otto Paladino y dejaba fuera al poderoso Batallón 601.

Riveiro le hizo saber su malestar al entonces jefe clandestino de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel y este lo comunicó de inmediato a sus superiores en el memo número 69 del 31 de octubre de 1975. "Le retomado contacto con Osvaldo Rawson (Riveiro), apuntó Arancibia, quien me planteó su malestar al informarse que para una reunión a celebrarse en Santiago de elementos de Inteligencia no fue consultado. Habría sido invitado un hombre del SIDE".

El segundo jefe del batallón 601 no era cualquier uniformado. Arancibia Clavel decía, en noviembre de 1975, que con la nueva ley de defensa, el coronel "manejará casi toda la antisubversión en Argentina" y aseguraba que su contacto tenía una amistad "íntima" con Julio González, el hombre de confianza de Isabel Perón y mantenía excelentes relaciones con Lorenzo Miguel, el poderoso dirigente

sindical de los metalúrgicos. El coronel, entonces, tenía bases sólidas para plantear la coordinación represiva.

A pesar de la diferencia y, tal vez, del enojo, las relaciones entre Riveiro y los hombres de la DINA no se cortaron. El organismo de Contreras comenzó a "regalonearlo" por intermedio de Arancibia Clavel, quien solicitó a sus contactos en Santiago que le pidieran al comandante en Jefe que hiciera una mención a Jorge Rafael Videla "del valor de la colaboración que se está prestando DINA con SIE a través de Rawson". "Sería muy conveniente, para seguir contando con la buena voluntad y amistad del equipo de Rawson, que se le mandara algún obsequio típicamente de nuestra agencia. También él me solicitó un corvo de paracaidistas", escribió el agente chileno en un memo de 1975.

Riveiro, en un acto que demuestra la reciprocidad de los favores, le solicitó a Arancibia Clavel que le pidiera autorización a sus superiores, según informó el agente de Inteligencia chileno en el memo 78 del 11 de diciembre de 1975, para guardar un equipo de cinco personas en territorio chileno. "El transporte sería en un Hércules. Argentina pagaría los gastos de mantenimiento. Yo le adelanté que nosotros no tendríamos ningún inconveniente en ofrecerles estas comodidades. De todas maneras confírmeme esta solicitud. El Ejército (argentino) está atacando a la subversión por derecha y por izquierda, es decir algunos pescados pasan al Poder Ejecutivo y el resto son RIP. En esta semana SIE eliminó a 25 elementos subversivos, todos por izquierda", informó Arancibia a su superior en Santiago de Chile.

Al encuentro convocado por Contreras, los uniformados llegaron excitados. Se desprende de los archivos del Terror, posteriormente encontrados en Asunción, que al mismo concurren además del dueño de casa, los representantes de los servicios de Inteligencia de la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y, probablemente, Nicaragua y Guatemala. En algunos casos solamente fue el agregado militar respectivo.

En Santiago de Chile, la cartelera de espectáculos anunciaba los estrenos de "Tiburón", "Salomón y la Reina de Saba" y "Crimen en el Expreso de Oriente". La película del año, sin duda para los hombres de Inteligencia, tiene que haber sido "Vive y Deja Morir", una nueva versión del agente 007, esta vez protagonizada por Roger Moore, quien reemplazó en el

rol de James Bond al inigualable Sean Connery. En la pantalla chica, por su parte, el animador Jaime Celedón del programa televisivo "Opus tres", que se transmitía por canal 4, anunciaba que la Yamilet, una niña de 10 años que hacía milagros al estilo de Jesús de Nazareth, era "un caso que debe tratarse con seriedad". ¿A qué se refería?

La DINA había informado el 31 de octubre la existencia de un "plan extremista" que, según los agentes, se encontraba en sus fases finales y cuyo objetivo era "asesinar al presidente Pinochet, derrocar al gobierno por las armas e implantar un régimen marxista leninista". *El Mercurio* decía dos días más tarde: "La batalla contra el comunismo habrá que darla en todos aquellos reductos donde está sumergido. Pero esa batalla se da en acciones, no con palabras".

La prensa chilena en actividad no estaba silenciada sino que, por el contrario, era la quinta columna de un régimen que no dudaba en utilizar la violencia para acallar todo vestigio opositor. Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, los medios de comunicación, entre 1974 y 1977, adhirieron "en forma relativamente incondicional" al gobierno militar, "mantuvieron una actitud tolerante" con las violaciones de los derechos humanos y fueron portavoces de las versiones oficiales.

El 11 de noviembre, nuevamente y en la portada de los principales diarios, se informaba que habían sido desbaratados los planes "Boomerang Rojo I" y "Boomerang Rojo II" con los que "mil 200 terroristas adiestrados en Cuba iban a ingresar a Chile". *El Mercurio*, que citaba a la Dirección de Informaciones del Gobierno (DIG), decía que "la implementación de los planes estuvo a cargo de la Junta Coordinadora Revolucionaria" y fue desbaratada con "la ayuda de la Inteligencia argentina". "El hilo inicial se tomó cuando el 21 de agosto de 1975 llegaron a Panamá procedentes de La Habana 40 individuos con antecedentes de extremistas. El grupo se embarcó al día siguiente en el vuelo número 977 de Braniff rumbo a Lima. La infiltración comenzó a prepararse en la zona de Bariloche, el 14 de octubre. Participaron en ella alrededor de 1200 hombres que disponían, esencialmente, de ganado caballar para cruzar la cordillera", informaba *El Mercurio*. Según el matutino, la "invasión" a Chile se haría, de acuerdo a la información entregada por los agentes, desde la provincia de San Juan a La Serena y Coquimbo; desde Mendoza hacia Santiago,

Rancagua y Talca; desde la Provincia de Neuquén hacia Osorno y Puerto Montt.

De acuerdo a la información entregada por la DIG chilena, la Junta Coordinadora Revolucionaria disponía de los "proyectil-cohete JCR I y II, las pistolas ametralladoras JCR II y III y las granadas de mano JCR I".

De más está decir que, en esos meses, sólo una mente afebrada podía imaginar que los debilitados grupos guerrilleros tenían esa capacidad de movilización y poseían la voluntad de iniciar una operación de tal envergadura.

Eso era en Chile. En la República Popular China, mientras tanto, se sucedían los incidentes fronterizos con la India; en Beirut, los guerrilleros peleaban en las calles y Pier Paolo Passolini era víctima de un muchacho de 17 años que se había cobrado su venganza en golpes. Francisco Morales Bermúdez gobernaba el Perú y anunciaba que su gobierno duraría otros 5 años, quizá influenciado por la frase de Pinochet dicha 7 meses antes y en la que aseguraba que "voy a morir, y la persona que me suceda también morirá. Pero no habrá elecciones". Gabriel García Márquez, a su forma, respondió que no volvería a escribir "ni una letra" mientras no cayera la Junta de Gobierno de Chile. Varios libros desmintieron la promesa del Premio Nobel de Literatura.

El que sería mandatario estadounidense en 1988, George Bush, por su parte, reemplazó a William Colby en la dirección de la CIA y el presidente Gerald Ford oficializó el alejamiento de Henry Kissinger del Departamento de Estado norteamericano. Meses antes, todos los estadounidenses que se encontraban en Phnom-Penh fueron evacuados de la convulsionada Camboya y Estados Unidos se retiró de Vietnam, según el *New York Times*, "con la misma confusión y falta de dirección con que entró allí".

La revista *Times*, en tanto, nominó "hombre del año" a la mujer. "Han llegado, escribía el semanario, como una ola de nuevos inmigrantes a una Norteamérica de hombres".

En Santiago, los asistentes a la primera reunión de Inteligencia coordinada traían los avales de sus respectivos gobiernos para acordar la forma de combatir a una guerrilla que ellos veían cada vez más unida y alentada desde Cuba.

El 19 de noviembre los representantes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay acusaron en la OEA al gobierno de Fidel

Castro de fomentar la insurrección en sus países. Un día después, el Poder Legislativo argentino aprobó un proyecto de Defensa Nacional que otorgó mayor participación al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en la lucha contra la subversión.

Cinco días más tarde y uno antes de la reunión, cuando las delegaciones comenzaban a llegar a Santiago, el almirante Emilio Eduardo Massera, ahora ex almirante, condenado por su responsabilidad en asesinatos, secuestros, desapariciones y torturas durante la dictadura argentina, dijo que "la acción subversiva es la más grave encrucijada de nuestro acontecer". Pinochet era aún más claro: "No se construye un país con buena predisposición o con atenciones versallescas. Se construye con sudor, con sangre y con lágrimas. Se construye con trabajo y con tesón". Las cartas estaban echadas.

¿La idea del Cóndor era de Riveiro o de Contreras?
¿O sólo eran operadores?

Diversos investigadores norteamericanos dicen que los primeros esbozos de una coordinación entre los agentes del Cono Sur surgieron de una iniciativa del Pentágono. Sin embargo, como todos los nacimientos en el mundo de la Inteligencia, es imposible otorgarle una fecha de cumpleaños a lo que hoy se conoce como operativo Cóndor.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la maquinaria bélica estadounidense quedó libre de sus compromisos en Europa y en el lejano oriente, la influencia militar norteamericana se impuso en América Latina para formar una barrera contra el avance del comunismo que, de aliado contra los nazis, se convirtió rápidamente en el principal enemigo. Junto con los equipos militares llegaron las influencias técnicas e ideológicas.

En 1947, como muestra de esto, distintos países del continente firmaron en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que, entre otras cosas, significó la instrucción en los Estados Unidos, más precisamente en centros docentes dependientes del Pentágono, de decenas de oficiales de los ejércitos de la región.

En pocos años se acrecentaron los pactos bilaterales, las operaciones conjuntas, como la *Unitas*, la ayuda militar y los cursos de entrenamientos en escuelas norteamericanas.

Desde el Pentágono, de una oficina que dependía

directamente del presidente de los Estados Unidos, se decidía el volumen y carácter definitivo de los suministros que serían enviados a cada país. En las resoluciones de la Casa Blanca, más que los intereses de las ramas de las Fuerzas Armadas locales, se tomaban en cuenta los conceptos estratégicos del gran país del Norte.

Durante la década del 50 los programas de ayuda estadounidense a la región estaban concentrados, fundamentalmente, en la prevención de una eventual intervención extracontinental. La revolución cubana modificó el cuadro y creó entre los norteamericanos una inquietud que sería llevada al plano político, con la Alianza para el Progreso, y también al militar.

Dice Carlos Bañales, en su ensayo "Función política de las Fuerzas Armadas uruguayas", que "el artículo de fe circulante desde entonces consignó que el marxismo, instalado en el área, no ataca frontalmente sino que procura crear en cada país las condiciones propias para la revolución mediante tácticas subversivas de tipo disolvente a las que debe oponerse un férreo esquema de contención y custodia de la seguridad nacional".

Ya el 9 de abril de 1962, en una reunión en Buenos Aires, convocada por el Ejército argentino y a la que fueron invitados casi la totalidad de los agregados militares a las misiones diplomáticas establecidas en la capital de ese país, el comandante en Jefe de la época dio a conocer un informe titulado "La Actual Crisis de la Argentina: La Misión del Ejército y la Guerra Revolucionaria". En este, los militares argentinos, daban a conocer su pensamiento acerca del que, a partir de entonces, comenzaría a llamarse el enemigo interno: "los estudios llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de la Argentina, en especial por el Ejército, sobre la contienda revolucionaria y sobre el desarrollo de la actividad marxista en el mundo, son bien conocidos. (...) Por su parte los ejércitos de los países libres de América han participado en estudios de esta naturaleza en el curso Interamericano sobre la Guerra Antirrevolucionaria, fortaleciendo así los estrechos vínculos de amistad de los que son responsables de la Defensa Continental conjunta. Estos estudios ponen en claro que el enemigo principal de nuestra civilización y modo de vida se encuentra en el corazón mismo de nuestras comunidades nacionales. Esta es la razón por la que el enemigo es tremendamente peligroso. No somos atacados desde fuera,

no importa cuál sea la fuerza del enemigo, sino sutilmente minados a través de todos los canales de la organización social. Envenena las mentes, debilita el espíritu, fabrica fariseos y falsos profetas y lo distorsiona todo con el paso imperceptible del tiempo. Su acción es similar a la de una termita. La estructura se muestra mientras mina los cimientos. Un día todo se desmoronará sobre nuestras cabezas (...) las Fuerzas Armadas de la Argentina son plenamente conscientes de su deber, que va desde la tarea de esclarecimiento en el campo del pensamiento frente a la actual guerra ideológica-religiosa que está sacudiendo al mundo, al campo de los hechos concretos, señalando en el momento oportuno a los portadores del virus marxista, y especialmente a los responsables (...) Hay mucha gente en el país y en el extranjero que, interpretando erróneamente el sentido de la guerra contrarrevolucionaria, han creído que esta medida ha sido dirigida contra el pueblo o contra importantes sectores de la población (...) Nada está más lejos de la verdad (...) La guerra contrarrevolucionaria tiene por fin principal evitar la contaminación en masa del pueblo e impedir la captura de las organizaciones básicas del país por ideólogos marxistas y sus agentes. El propósito de esta guerra antirrevolucionaria es preservar la soberanía ideológica nacional. Esto debe lograrse preferentemente por las leyes de defensa de la democracia y por la salud de las instituciones que deben ser capaces de generar los anticuerpos necesarios para combatir el mal. Sin embargo, a veces la combinación de ciertos factores puede exigir la intervención oportuna de un cirujano que erradique el mal antes de que el cuerpo se debilite demasiado y esté totalmente enfermo”.

La manifestación de los militares argentinos, que ya habían intervenido abiertamente en la política de su país con cruentos golpes de Estado en 1930, 1943, 1955 y 1962, se enmarcaba, claramente, en lo que J. Horowitz escribió en 1968 sobre la relación de las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos. “La tendencia al golpismo es un efecto de la coincidencia funcional (de intereses) entre las necesidades de los sistemas socio-políticos latinoamericanos y las necesidades estratégicas (económicas, políticas y militares) de los Estados Unidos, coincidencia que se ha visto fortalecida por el diseño de una política regional de seguridad que privilegia la ayuda a las Fuerzas Armadas latinoamericanas por parte de los Estados Unidos”.

Desde hacía algunos años, según el historiador militar, Alan Rouquié, los oficiales argentinos recibían instrucción de uniformados franceses que, en Argelia o Indochina, se habían especializado en la guerra sucia. Los argentinos comenzaron a percibir como obsoletas algunas funciones tradicionales del Ejército como era la protección de las fronteras.

Según el periodista Martin Andersen, "una de las más poderosas influencias sobre el pensamiento de los militares de la Argentina, fue la del general francés André Beaufre quien sostuvo en "Introducción a la Estrategia", que el hombre del siglo XX está obsesionado por la insensata destrucción de dos guerras mundiales". Lo fútil de un conflicto global, argumentaba, se agrava por el advenimiento de las armas atómicas. Pero así como la verdadera guerra parecía estar en eclipse, también lo estaba la verdadera paz. El futuro estaría señalado por las guerras de baja intensidad. Se había desatado una guerra permanente entre el Este y el Oeste, en la que la victoria se definía como el sagaz empleo de la fuerza que llegaría hasta, pero no incluiría, la guerra nuclear. Beaufre insistía en que la Unión Soviética estaba ganando ese conflicto porque el debate político en los Estados Unidos estaba ingenuamente enmarcado entre los anticuados términos de guerra y paz.

El coronel argentino, Mario Orsolini, sentenció en 1962 que las teorías francesas "llenaban el vacío producido por la casi completa desaparición de la posibilidad de guerra entre nuestro país y sus vecinos".

El propio James Theberge, que luego sería embajador de los Estados Unidos en Chile durante el gobierno de Pinochet, sostuvo en su calidad de consultor de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en Buenos Aires, una suerte de paraguas para el trabajo de la CIA en el exterior, que la nueva doctrina que sostenía el Ejército argentino debía ser cultivada porque, al igual que el gobierno norteamericano, los uniformados creían que la amenaza comunista era el problema más importante que debían enfrentar.

Era un hecho que los militares en el área comenzaban a compartir una idea y que sólo se necesitaba un proyecto para que ella se tradujera en acciones concretas.

Fue la propia CIA, a fines de los 60 y de acuerdo a un estudio denominado *Hidden Terrors*, la que coordinó las acciones para estrechar los vínculos entre los aparatos re-

presivos de los distintos países. Esa labor no se limitó a organizar encuentros entre policías sino que, además, significó también ayuda práctica. "Cuando los oficiales de Inteligencia del régimen del Brasil, respaldado por los Estados Unidos, empezaron a utilizar teléfonos de campaña para la tortura eléctrica, los asesores les dijeron, por ejemplo, cuánta descarga podía resistir un cuerpo. La policía uruguaya, por su parte, recibió de la oficina de la División de Servicios Técnicos de la CIA equipos de tortura previamente mejorados en Buenos Aires.

"Brasileños, argentinos y uruguayos fueron agrupados por la agencia norteamericana para recibir entrenamiento de inteligencia, como la interferencia de líneas telefónicas y el suministro de explosivos y armas de fuego limpias, es decir, cuyo origen era imposible detectar", asegura Martin Andersen en *Dossier Secreto*.

En Los Fresnos, Texas, de acuerdo a *Hidden Terrors*, la CIA, con el patrocinio de la Oficina de Seguridad Pública (OPS) del Departamento de Estado, dictó un curso para policías y militares latinoamericanos en el que se les enseñó a fabricar bombas caseras. Según A. J. Langguth, un ex corresponsal del *New York Times* en Saigón, la OPS podría haber explicado el envío de estudiantes a Los Fresnos si a los invitados se les hubiera enseñado a desactivar las bombas y no a fabricarlas.

Muchos de los que acudieron a Los Fresnos, en sus respectivos países, engrosarían las listas de las organizaciones paramilitares que se especializarían en atentados contra dirigentes y locales opositores.

Algo similar ocurriría con los alumnos de la tristemente célebre Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá desde 1946 y que se caracterizó por infundir a los militares, que pasaron por sus cursos, un marcado sentimiento anticomunista y de la cual egresaron una serie de dictadores como el panameño Manuel Noriega, el boliviano Hugo Bánzer, el ecuatoriano Guillermo Rodríguez y los argentinos Leopoldo Galtieri y Roberto Viola.

Los documentos del Pentágono revelaron en 1996 que la misma fue un instrumento para la promoción de la represión y las dictaduras militares en el Continente y que sus manuales de entrenamiento, utilizados por los instructores norteamericanos, favorecían las ejecuciones de los opositores, la tortura y la extorsión, así como la forma de

reclutar e intimidar a los informantes y el uso del suero de la verdad. Cerca de 60 mil uniformados latinoamericanos pasaron por sus aulas, entre 1946 y 1994, para perfeccionarse en alguna de las áreas de la escuela. Entre otros, destacan por la Argentina, además de Viola y Galtieri, los oficiales Mario Davico, Carlos María Aleman, Rodolfo Aníbal Campos y Joaquín Urruty; por Chile, aparecen en una larga lista, Eduardo Iturriaga Neuman, Germán Jorge Barriga Muñoz, Pablo Belmar Labbé, Armando Fernández Larios, Carlos Herrera Jiménez, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Eduardo Laureani Maturana, Jaime Enrique Leppe Orellana, Odlanier Mena Salinas, Carlos Parera Silva y José Zara; entre los uruguayos, destacan, Gregorio Álvarez, Daniel Castella, Eduardo Ferro, Armando Méndez, Eduardo Ramos y Glauco Yannone.

Todos ellos debieron leer, sin duda, la introducción del cuarto capítulo del manual de "Terrorismo y Guerrilla Urbana" de la Escuela, titulado "Nuevo terror Internacional", en el que se destaca que "las amenazas más impredecibles" dentro de los programas de contraterrorismo son las organizaciones que "operan transnacionalmente".

Notorious Chilean School of the Americas Graduates

Augusto Pinochet is not a graduate of the School of the Americas; yet his influence is held in high esteem. In 1991, visitors could view a role from Pinochet, and a ceremonial sword donated by him, on display in the office of the Commandant (Charles Gal, M1, 11/9/90).

Graduates of the School of the Americas have comprised one out of every seven members of the command staff of DINA, the notorious Chilean intelligence agency responsible for many of the worst human rights atrocities during the Pinochet years. SOA grads who were members of the DINA command staff include: Luis Alberto Medina Aleda, Jorge Aro Paigneguy, Eugenio Videla, Hene Riveros, and Guillermo Salinas, as well as other officials mentioned below.

*Hugo Acevedo	1970, Combat Arms Orientation	DINA: According to testimony by Luz Arce, Acevedo was a key official in the repressive forces of the DINA. (PTDI)
*LTC German Barriga	1986, Instructor	Repression of socialist party: According to testimony by Luz Arce, Barriga was in charge of repression of the socialist party by the DINA. (PTDI)
COL Pablo Belmar	1967, Guest Instructor 1968, Basic Arms Orientation Course	Torture, murder of U.N. official, 1976: Directly implicated in the 1976 torture and murder of United Nations official Carmelo Soris, whose neck was broken after he was arrested and tortured by Chilean DINA personnel. (DINA - Dirección de Inteligencia Nacional - was Pinochet's personal secret police force that operated from 1974-1977.) Soris's car and body were dumped in a Santiago canal in order to make his death appear accidental. (AW:UB)
*Alejandro Burgos	1975, Basic Officer Orientation	Manipulation of Political Prisoners: According to testimony by Luz Arce, Burgos was involved in a plan to get left-wing political prisoners who had been tortured into collaborating with the DINA to meet with the U.S. Ambassador to show that they had changed their political convictions. (PTDI)
COL Alfredo Canales	1974, Basic Officer Orientation Course	Barred exhumation of body, July 14, 1994: In an event related to the disappearance of four soldiers in 1974, Canales personally barred the exhumation of a body believed to have been illegally buried on Army premises. Canales had earlier given his approval to the exhumation. (NSN 7/30/94)
*LTC Alfonso Fernandez Norambuena	1968, Chilean Officer Orientation	Concentration Camp: Founder was active in the Villa Grimaldi concentration camp in which nearly 4,500 prisoners were held. (PPC)
ILT Armando Fernandez Larrea	1970, Combat Arms Orientation	"Caravan of death," 1973: Fernandez Larrea was second in command to General Sergio Aupiais Stark, whose tour of northern cities in 1973 resulted in dozens of summary executions. (AW:CIT) Assassination of former defense minister Prats and his wife, 1974: Fernandez Larrea was one of two DINA agents charged with assassinating General Carlos Prats Gonzalez, who was defense minister under the regime Augusto Pinochet overthrew. Prats and his wife were killed by a car bomb in Buenos Aires, Argentina. (AW:UB) Assassination of former foreign minister Orlando Letelier, 1976: Indicted in 1979 by U.S. grand jury for involvement in the Letelier assassination in Washington, D.C., three years earlier. (Letelier, Allende's foreign minister, was also murdered by a car bomb.) (AW:CIT)

Notable Chilean School of the Americas Graduates

MAJ Carlos Herrera Jiménez	1971, Combat Arms Orientation	Torture, murder, 1984; murder, 1982: Sentenced in December 1991 for the torture and murder of a transport worker in La Serena. Also implicated in the abduction and murder of Irudo unionist Tucapel Jiménez in 1982. (AW:UB) Attended the 1971 course with Lauriani, below. (LL)
*Eduardo Sturriaga Neumann	1965, Basic Airborne Course	Exploitation of political prisoners: According to testimony by Luz Arce, Sturriaga and other officers of the DINA used political prisoners that had been tortured into collaboration as secretaries and analysts in their offices. (PTDI)
1LT Miguel Krassnoff	1974, Urban Counterinsurgency Course	Failure to testify, 1994: Recently failed to show up at a hearing regarding the 1974 kidnapping and disappearance of four opposition soldiers. Krassnoff is a former member of the DINA, Chile's now-defunct secret police. (NSN 7/30/94)
LTC Fernando Lauriani	1971, Combat Arms Orientation Course	Kidnapping, disappearance, 1974: Implicated in the 1974 kidnapping and disappearance of brothers Juan Carlos and Jorge Elias Andrónico Anriquez. Lauriani was one of the few cases of military crimes to be tried after Pinochet's brutal dictatorship. Unfortunately, Pinochet brought all of his influence to bear and the case was finally handed to a military court, which, of course, absolved Lauriani and closed the case. (AW:UB) Attended the same 1971 course as Herrera, above. (LL)
COL Jaime Lape Orellana	1966, Basic Arms Orientation Course	Torture, murder of U.N. official, 1976: Directly implicated in the 1976 torture and murder of United Nations official Carmelo Sofia, whose neck was broken after he was arrested by Chilean DINA personnel. Sofia's car and body were dumped in a Santiago canal in order to make his death appear accidental. At the time the case was reopened in 1991, Lape was General Pinochet's personal secretary. (AW:UB) On Nov. 4, 1997, Lape was rejected for promotion from Brigadier to General, the first time that such a rejection was made public. Chilean President Eduardo Frei reportedly rejected the promotion because of Lape's bad image and concern that such a promotion would damage "harmonious relations" between Chilean citizens and the armed forces. (EFE, 11/4 and 11/5, 1997)
*GEN Augusto LUIZ	1968, Comando y Estado Mayor	Coup: Luiz was one of the military officials who participated with Pinochet in the coup against the Allende government. (JPE)
*Odianier Mesa	1970, Comando y Estado Mayor	Exploitation of prisoners: Luz Arce, a political prisoner who was tortured by DINA officials, testified that Mesa offered her freedom in exchange for working three years as a spy for the DINA. (PCDI)
*LTC Manuel Rolando Mosquera Jorpe	1970, Combat Arms Orientation	Concentration camp: Mosquera was active in the Villa Grimaldi concentration camp in which more than 4500 people were held. (PPC)
*COL Manuel Provia Carrasco	1970, Combat Arms Orientation	Concentration camp: Provia was active in the Villa Grimaldi concentration camp in which more than 4500 people were held. (PPC)
*COL Marco Antonio Saez Saavedra	1970, Combat Arms Orientation	Concentration camp: Saez was active in the Villa Grimaldi concentration camp in which more than 4500 people were held. (PPC)
*MAJ Guillermo Humberto Salinas Torres	1974, Curso de Armas Compañías para Cadetes	Assassination, 1976: Salinas was linked to the assassination of Spanish citizen Carmelo Sofia. However, because of Pinochet's amnesty laws, the case was stayed. (CCS)
*Carlos Parera Silva	1969, Irregular Warfare Operations	DINA: According to testimony by Luz Arce, Silva was one of the key actors within the repressive forces of the DINA. (PTDI)

V

Los enemigos

"Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy les puedo decir que pronto cumpla siete años de tortura".

Miguel D'Agostino, ex preso político argentino.

La preocupación, en los 70, por los intentos de los distintos grupos guerrilleros de coordinar sus acciones en el Cono Sur, como lo sostenía el coronel Osvaldo Riveiro, iba en aumento en las fuerzas represivas.

En la Argentina, los ojos estaban puestos en Montoneros pero, principalmente, en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Este último apareció públicamente el 18 de septiembre de 1969 en un asalto a una comisaría de la ciudad de Rosario y se presentó en sociedad como "el brazo armado" del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

La metodología utilizada por el grupo se caracterizó por los asaltos y los secuestros. Su base teórica simple y muy parecida a la que sustentaban otras organizaciones revolucionarias de la región: ruptura con los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, expropiación de empresas extranjeras y algunas nacionales, reforma agraria y establecimiento de un gobierno dirigido por la clase obrera.

En mayo de 1971, el ERP realizó su primer secuestro y la víctima fue el cónsul británico en Buenos Aires, Stanley Silvester. Dos meses después, en La Habana, el líder del movimiento argentino, Mario Roberto Santucho, tomó contacto con Tupamaros, el MIR de Chile y con restos del ELN Boliviano que había fundado Ernesto Guevara. El objetivo era analizar la creación de una mini-internacional revolucionaria.

No hubo grandes avances.

Tupamaros, la organización uruguaya que recogió su nombre de Tupac Amaru, emperador Inca que vivió hacia el siglo XVI, surgió en medio de la efervescencia que se produjo en el continente tras la caída del dictador cubano Fulgencio Batista. Sus militantes, en su mayoría jóvenes provenientes del Partido Socialista, se hicieron famosos en 1963 con un impactante robo de armas. De ahí en adelante, asaltaron bancos, grandes empresas y supermercados. Su popularidad fue creciendo porque sus botines los repartían en los sectores más pobres del Uruguay. Luego el grupo se especializó en secuestros de empresarios proclives al gobierno, atentados e, incluso, mataron a aquellos uniformados que estaban acusados de torturas.

A mediados de los 70, realizaron una de sus acciones más difundidas en el mundo: el asesinato del agente de la CIA e instructor de técnicas de torturas del ejército uruguayo, Dan Anthony Mitrione, quien enseñaba bajo la premisa de que el apremio ilegítimo "era un arte, más que una técnica. El dolor preciso, en el lugar necesario y en la medida precisa".

En 1971, en medio de la crisis política y económica que golpeaba al país, los tupamaros declararon la guerra al gobierno de José María Bordaberry y resucitaron el lema de José Artigas "habrá patria para todos o no habrá patria para nadie".

Un año después, el 14 de abril de 1972, el grupo que lideraba Raúl Sendic ejecutó a cuatro miembros de un grupo parapolicial que desarrollaba sus acciones contra dirigentes izquierdistas. La reacción no se hizo esperar: antes de que finalizara el año el contraataque del Ejército le significó a los Tupamaros casi tres mil militantes detenidos, un millar perseguido y más de cien muertos. El estado de guerra se hacía presente en Uruguay.

No pasaría un año para que Bordaberry diera un autogolpe de Estado, con el concurso de las Fuerzas Armadas, para disolver el Congreso, imponer la censura y suspender todas las garantías constitucionales. Era el 27 de junio de 1973 y la suiza de América del Sur desandaba raudamente el camino de libertad y respeto a los derechos humanos que la había caracterizado.

"La represión en Uruguay se caracterizó por una sofisticación sin par. Fue una represión callada, progresiva

en su gradación, dosificada, selectiva hasta llegar a un control perfecto y total de la población. Logró clasificar a los tres millones de habitantes en tres categorías: A, B, C, según el grado de peligrosidad que les asignaban las fuerzas conjuntas. Nuestro país estaba ocupado por su propio ejército. Todos estábamos fichados, clasificados y vigilados", sentenció un documento de derechos humanos del Uruguay.

El "paisito", como llaman algunos uruguayos a este terruño con pocos habitantes, se convirtió en un gran presidio. La tónica de las violaciones de los derechos humanos en Uruguay, a diferencia de sus vecinos del cono sur, fue el encierro prolongado de los opositores, en condiciones infrahumanas, y la tortura sistemática.

Según el informe Nunca Más, del Servicio de Paz y Justicia de ese país, más de 50 mil uruguayos fueron encarcelados y, en el caso de los hombres, el 14 por ciento permaneció detenido por más de doce años y sólo el 7 por ciento, estuvo menos de 24 meses.

Si bien, entre 1972 y 1974, la acción represiva fue dirigida casi exclusivamente contra Tupamaros, luego comenzó otra fase, entre el 75 y el 77, en que los uniformados uruguayos persiguieron a todos aquellos que no comulgaban con sus intereses.

En la primera etapa, más precisamente en agosto de 1972, fue detenido Raúl Sendic, quien señalaría luego en el informe Nunca Más que, cuando estaba herido, vio a un miembro de un escuadrón de la muerte, Hugo Campos Hermida, que dijo "este es Sendic, ¡tengo que matarlo!" y que otro oficial, también llamado Campos, le respondió que él no tenía esa orden y que llamaría a una ambulancia. "Yo sangraba mucho. Cuando estaba en la ambulancia, Campos Hermida me dijo "bebé, estás frito". Todos los heridos tuvieron tanta asistencia como yo, eso debe ser señalado. Sin embargo, eso no estaba exento de un cálculo político porque el jefe de la marina me había dicho "nosotros te salvamos porque no estamos dispuestos a crear un segundo Che Guevara"", relató Sendic en el Nunca Más.

En realidad, más que eso, el régimen uruguayo buscaba rehenes. Determinados presos políticos, los principales dirigentes tupamaros, fueron retirados de los penales donde se encontraban recluidos en 1973 y trasladados a otros recintos sin brindar información a persona alguna del lugar donde se encontraban. Tras un tiempo, en el que ni

siquiera los jueces militares sabían de su paradero, sus abogados y familiares recibieron la comunicación de que, a partir de ese momento, si la organización a la que pertenecían realizaba alguna acción serían inmediatamente eliminados. Los rehenes estuvieron casi 10 años en esa condición.

En Argentina, por su parte, la situación también se había polarizado y agudizado la violencia. En marzo de 1972, el ERP secuestró al director general de la FIAT en la Argentina, Oberdan Sallustro, quien murió durante el tiroteo entre guerrilleros y policías en abril de ese año cuando se negociaba su liberación. Santucho y otros fueron detenidos y llevados a la cárcel de Rawson desde donde pudieron, en agosto de ese año, escapar hacia Chile.

El mejor relato de la relación que existió a partir de ese momento entre el MIR y el ERP lo dio el dirigente chileno Andrés Pascal Allende a la periodista argentina María Seoane. "Todo comenzó cuando Santucho y otros compañeros revolucionarios argentinos llegaron a Chile luego de la fuga de Rawson".

El arribo del contingente guerrillero creó una situación difícil para el gobierno chileno. De inmediato, según Pascal Allende, el MIR se movilizó para exigir que se les diera asilo político. Días más tarde, en un encuentro con Allende se lo pidieron expresamente. "Pero para él era francamente difícil porque buscaba una relación estable con la Argentina. No quería abrir otro frente de conflicto: ya tenía bastante con los norteamericanos y con la derecha. El no los iba a devolver, pero no podía dejarlos en Chile. Finalmente la salida que dio Allende fue la mejor. Salvador tenía aprecio por Santucho. Si bien él tenía su visión socialista, e impulsaba el cambio revolucionario, concebía un camino para Chile propio: una revolución con empanadas y vino tinto. No estaba de acuerdo con la lucha armada, pero aceptaba que en otros países ése pudiera ser un camino".

En esa oportunidad los dirigentes del MIR no vieron a Santucho pero sí en noviembre de 1972 cuando volvió a la Argentina, vía Chile. "Nos reunimos en la sala de la comisión política del MIR, cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa. Estábamos Santucho, Gorriarán Merlo y nosotros. Fueron dos reuniones en las que el MIR y el PRT intercambiaron sus informes políticos, y en las que hablaron fundamentalmente

Santucho y Enríquez. Ambos tenían una personalidad fuerte, notable. Lo primero que me llamó la atención de Santucho era su actitud llana, serena, aunque defendía con firmeza sus ideas; Miguel era muy diferente, extrovertido, pasional. Luego de hablar de la situación revolucionaria en la Argentina y Chile, se habló mucho de América Latina, y particularmente del Cono Sur. A partir de esa reunión se incubó la idea de una coordinación de las organizaciones revolucionarias, fue el germen de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), aunque no nació con ese nombre", relató Pascal Allende a María Seoane.

El dirigente asegura que, durante ese segundo encuentro, conversaron con Santucho más del golpe que se avecinaba en Chile que de la JCR porque, entre otras cosas, los dirigentes cubanos con quienes habían hablado del asunto no estaban de acuerdo en la coordinación. "Ellos preferían alentar los vínculos con los partidos comunistas o las relaciones bilaterales. Era, además, un momento en el que los cubanos tenían puestas las esperanzas sobre los movimientos nacionalistas, por lo que existían divergencias políticas con nuestras ideas", asegura el dirigente chileno.

A pesar de ello, Miguel Enríquez planteó en el seno de su movimiento la necesidad de crear esta suerte de organización multinacional, análoga a la que fundó la socialdemocracia europea durante la primera guerra mundial, con el objeto de aunar fuerzas.

La impresión que les dejó Santucho a los miristas, según Pascal Allende, fue la de un dirigente que estaba entusiasmado por la coordinación revolucionaria, que pensaba que debía ser el estado mayor de la revolución en el Sur y que parecía extremadamente preocupado por mantener las relaciones con ellas. Parecía convencido, además, de que para lograr una estrategia revolucionaria efectiva esta debía tener un carácter regional.

La idea fue rápidamente acogida en el MIR y a fines de 1972 un grueso contingente de militantes del ERP fue recibido en Chile, en casas de seguridad de la organización chilena, para recibir instrucción y prepararse para el ingreso clandestino a la Argentina. Posteriormente se invitó a los Tupamaros y al ELN boliviano a formar parte de la misma.

En el verano del 73 se realiza una primera reunión en Santiago, conjuntamente con una escuela de cuadros en

el Cajón del Maipo, en la que participan Miguel y Edgardo Enríquez. En este encuentro se toma la decisión de formar la JCR con la idea de que esta tuviera una coordinación política, en términos de apoyo y de iniciativas conjuntas en el campo de la política internacional, pero también de logística en el campo de los recursos y de la formación.

"Habían tres premisas, no siempre explicitadas suficientemente, detrás de la idea de la JCR. La primera era que estaba claro que en Chile se produciría un vuelco espectacular de la situación y no se sabía el sentido y la orientación que este tomaría y por ello era necesario tener una política internacional muy activa con las organizaciones más próximas; la segunda, correspondía a una visión más geopolítica, en el sentido que no se sabía qué posición tomarían la URSS y Cuba, en el caso de un vuelco en Chile y un proceso de conflicto armado en el Cono Sur, por lo que era recomendable tener recursos y una retaguardia internacional propia; la tercera, era resolver cierto, problemas logísticos específicos", recuerda un dirigente del MIR.

La JCR avanzó en las tres áreas y comenzaron a producirse las escuelas de cuadros en Chile donde, por las condiciones que vivía el país, funcionó sin grandes problemas un centro de operaciones permanente. El MIR, en la JCR, quedó representado por Edgardo Enríquez y Bautista van Schouwen; Domingo Menna, conocido como el gringo, lo hacía por el ERP y el mayor Sánchez era quien, por el ELN, manifestaba la posición de los bolivianos.

Los contactos se agudizan con el correr de los meses. El ELN de Bolivia recibe aportes económicos para su lucha y varios militantes de esa organización se instalaron en Chile cuando fueron perseguidos en su país. Igual cosa ocurre con la dirigencia de los Tupamaros tras el golpe de marzo de 1973 y con la ayuda, especialmente en documentación, a la gente del ERP que ya estaba en una lucha abierta en su país. Otra labor que emprendió la incipiente coordinadora, una iniciativa de los argentinos, fue ayudar a la reorganización de la izquierda paraguaya.

Junto a estas acciones, que podrían enmarcarse dentro de la solidaridad revolucionaria internacional, la JCR se impone como desafío la fabricación de una subametralladora, que pasa de la fase del prototipo, así como la construcción de granadas de mano en fibra de plástico.

Los cubanos, que tenían una buena disposición hacia

el proceso que se vivía en Chile, recelaban de la coordinación porque con ella aparecía un centro que no estaba en La Habana y que era independiente del apoyo que ellos pudieran dar y se podía distanciar de la política internacional que tuviera el régimen de Fidel. Uno de los ejemplos más claros, sin duda, fueron las diferencias que existieron entre los dirigentes del MIR y los de Cuba respecto al gobierno de Velasco Alvarado en Perú. A pesar de ello, hasta septiembre de 1973, se desarrollaron un sinnúmero de acciones conjuntas entre miristas, hombres del ERP, Tupamaros y bolivianos, con el objeto de fortalecer el intercambio.

Por eso, cuando sobrevino el golpe en Chile y el MIR pensaba que podía "desarrollar la resistencia popular contra la dictadura" porque se "mantenía básicamente intacto y en proceso de reorganización", los dirigentes revolucionarios chilenos miraron inmediatamente hacia la Argentina donde, aseguraban, "se vivía una coyuntura de ascenso muy fuerte del movimiento de masas". El MIR, confiado en la capacidad y las generosas muestras de solidaridad del ERP, veía al país vecino como "la retaguardia de la lucha por derrocar a la dictadura militar".

Asimismo, en ese marco y con la idea de establecer un gobierno provisional y una asamblea constituyente, los chilenos planteaban como "imprescindible" impulsar un amplio movimiento de solidaridad internacional y para ello le otorgó una importancia mayor a la constitución de la JCR.

Era, en definitiva, al MIR y al ERP a quienes más les interesaba desarrollar un trabajo conjunto porque sus aparatos estaban activos, a diferencia del ELN y los Tupamaros, que se encontraban debilitados y dispersos.

De inmediato, el centro coordinador se trasladó a Buenos Aires.

Edgardo Enríquez salió de Chile en marzo de 1974 a cumplir esa misión, primero pasó por París y luego se instaló en la Argentina. Allí trabajó estrechamente con Jorge Fuentes Alarcón, el Trosko, Jean Yves Claudet Fernández y otros militantes del MIR, entre ellos dos argentinas.

Todos, años después, también serían víctimas del Cóndor.

VI

La urgencia

“Tomé mi helicóptero con mi ayudante y me trasladé a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Le dije a su comandante, el coronel Manuel Contreras, que quería visitar los calabozos. Titubeó, pero tuvo que llevarme. En mi recorrido me encontré con hombres que estaban tendidos boca abajo en el suelo, otros desnudos y amarrados, algunos colgados de los brazos y con su cuerpo en el aire. Se podía percibir que habían sido golpeados o torturados. Cuando comprobé que la realidad era más horrible que lo que me habían dicho, llamé al subcomandante y le comuniqué que él asumía el mando y que el coronel Contreras quedaba arrestado para someterlo a proceso”.

Confidencia del general Oscar Bonilla a Eugenio Velasco.

Pinochet es el símbolo, en casi todo el mundo, de los golpes de Estado, con su secuela de muertes y torturas. Su imagen, con lentes oscuros y en una posición rígida, casi diabólica, quedó marcada para siempre en las retinas de la humanidad y especialmente de los europeos que, en esos años, escucharon espantados las voces del exilio que contaban el horror que se vivía en Chile.

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, hijo de un “viajante” que no estaba casi nunca en casa, fue educado con la mano dura de su madre, Abelina Ugarte, y desde temprano practicó el mando con sus cinco hermanos menores. “Mire usted, le dijo en una oportunidad el general

a un periodista, un oficial desde muy joven se prepara para la soledad del mando. Desde niño me educaron para enfrentarme a tal soledad y estoy preparado para eso”.

Educado en un colegio de clase alta, aunque su familia no lo fuera, Pinochet decidió ingresar a la infantería y desde allí inició una carrera en la que se destacó por su adaptación a las órdenes y por sus conocimientos de geopolítica. Su característica principal fue la obediencia. “En la vida la persona más inútil es aquella que no sabe ni mandar ni obedecer y, para ejecutar bien el mando, es imprescindible haber aprendido a obedecer”, escribió en un libro que tituló “Política, politiquería y demagogia”, cuando detentaba la suma del poder.

Hasta el 10 de septiembre de 1973, el general que convirtió su apellido en sinónimo de dictadura, era un soldado leal a la Constitución que, simplemente, sabía obedecer. De Pinochet, dijo en una oportunidad Orlando Letelier, cuando era ministro de Defensa de Allende, que le daba en los nervios porque era “el tipo más servil” que había visto. “Me saca el abrigo, me pone el abrigo y me lleva el portadocumentos”, le contó el ex canciller a su esposa.

Como uniformado obediente, Pinochet fue escalando posiciones en su arma. En 1948, aunque él lo niega y manifiesta lo contrario, se asegura que fue relevado del mando de un campo de concentración en el norte de Chile por tratar débilmente a los prisioneros y compartir los almuerzos con algunos jefes del PC que se encontraban detenidos. Era, en ese entonces, definido como una persona bonachona, obediente de los mandos superiores, amigo de gente de todas las tendencias, eminentemente militar, de fácil risa y trato afectuoso, muy de abrazos y saludos cordiales y, además, altamente confiable.

En 1971 fue transferido a Santiago como general de división y un año después, el general Prats lo promovió a Jefe del Estado Mayor Conjunto y en esa calidad le tocó suplir al comandante en Jefe cuando el titular se desempeñaba como ministro del interior y vicepresidente de la República.

Hasta el golpe militar Pinochet vivió en una casa tipo para generales, dentro de una población militar en el barrio de Las Condes, que no superaba los 120 metros cuadrados y que se destacaba por la gran cantidad de souvenirs de viajes que exhibía y por el tono rojo que predominaba en sus decorados.

"El nunca hizo el golpe, es el golpe el que lo hizo a él", confió una fuente cercana a Pinochet a la publicación francesa "Le Nouvel Observateur" hace más de una década.

Para otros, que también lo conocieron antes y después del golpe, "Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso. Dejó de existir el 10 de septiembre de 1973. Al día siguiente, el martes 11, otra persona nació, con el mismo nombre y señas físicas. De ahí en adelante sería conocido principalmente como Pinochet".

El misterio es cuándo se produjo el cambio en el uniformado. El general Gustavo Leigh Guzmán, jefe de la Fuerza Aérea y uno de los promotores del golpe del 73, asegura que el general Pinochet no estaba en la conspiración y que sólo se sumó a ella dos o tres días antes que se produjera. El ex dictador señala, en cambio, que "el pronunciamiento comenzó a prepararse el 20 de marzo de 1973, se mantuvo en secreto y, a Dios gracias -dice Pinochet-, fue muy bien guardado, porque de otra forma hace rato que ya no estaríamos mirando la luz del sol". Lo más concreto es que el 11 en la mañana Pinochet tenía, efectivamente, una influencia destacada en las decisiones que tomaban los militares. Su voz chillona, con las órdenes que dio aquel día a los hombres que atacaban la casa de gobierno, quedó grabada: "se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país (a Allende)... y el avión se cae, viejo, cuando vaya volando", expresó antes de que el presidente chileno se suicidara. Y cuando este murió, dijo: "que lo metan en un cajón y lo embarquen en un avión, viejo, junto con la familia. Que el entierro lo hagan en otra parte, en Cuba. Si no, va a haber más pelota para el entierro. ¡Si este hasta para morir tuvo problemas!".

Una vez depuesto Allende, fue conformada la Junta de Gobierno, que eligió a Pinochet como Jefe, "por ser el más viejo", pero que sería rotativa como en Brasil, Argentina o Uruguay. Al año siguiente el decreto 806 lo convirtió en "Jefe Supremo de la Nación" y la junta quedó relegada al Poder Legislativo.

La historia algún día contará cómo en esa fecha se produjo un golpe dentro del golpe y terminó con las aspiraciones de varios uniformados que querían despersonalizar el gobierno, darle plazo a la dictadura y devolver el poder a los civiles.

En mayo de 1976, el embajador norteamericano en Santiago, David Popper, envió a Washington un perfil de Pinochet. En el mismo, donde describe la personalidad del militar chileno, lo califica como un sujeto de trato difícil. "Pinochet, como la vasta mayoría de los oficiales, proviene de un ambiente de clase media y es un producto de las barracas y cuarteles. Durante toda su vida ha obedecido órdenes y las ha dado. El espera de todos los que lo rodean que hagan lo mismo -y lo hacen: El Presidente es rudo y cabeza dura y ciertamente no es brillante. Tiene dificultades para enfrentar puntos de vista contrastantes. (...) El es duro, directo, y hasta donde puedo juzgar, popular entre los coroneles y los generales más jóvenes del ejército. El es personalmente honesto y vive austeramente (...). En reuniones sociales exhibe una cordialidad de "hermanos de armas" y tiene sentido del humor. Con civiles es más tieso (...). Firme en sus creencias y autoritario por educación, él no es un individuo de fácil trato. Las normas tradicionales de la diplomacia se pueden perder con el Presidente. El necesita un tratamiento directo, con argumentos claros y específicos. Si negociamos como suele hacerse, Pinochet nunca entenderá lo que nos preocupa ni reaccionará a nuestras recomendaciones. De hecho, él y la mayoría de sus colegas militares no entienden en lo más absoluto la veta libertaria y humanitaria de la vida americana".

Los chilenos, entonces, se tuvieron que acostumbrar, por la fuerza, a las formas impuestas por el nuevo gobernante. Mientras la clase alta, que apoyaba sin reparos al régimen, sólo hacía muecas por la falta de cultura de este Presidente, que decía "microflin" en vez de microfilm o "mobildeno", en lugar de molibdeno, los trabajadores empezaron a percibir que sus conquistas eran arrasadas desde el poder.

El Estado de bienestar, que favorecía a las clases media y baja, fue simplemente desmantelado. "No soy de izquierda, de centro ni de derecha", dijo Pinochet en una oportunidad, aunque sí manifestó su admiración por Francisco Franco. "A mí me señaló que su modelo era el de Franco y que quería seguir la huella del generalísimo: o sea, morir de viejo y siendo presidente de Chile", confió en una oportunidad su ex compañero de armas, el general Roberto Viaux.

Pinochet, asimismo, se caracterizó por sus cortas audiencias, diez minutos para hijos y nietos; su práctica de artes

marciales y el levantamiento de pesas; su lectura diaria, quince minutos en la noche, de política o filosofía, y la forma en que llamó, durante su gobierno, a los políticos: "vendepatrias", "traidores", "cáfila de degenerados", "demagogos", "señores políticos" o "politiqueros". Dijo en 1974: "me preocupa que haya chilenos que aún creen en la política".

Al principio de su administración sus colaboradores más cercanos fueron algunos demócratacristianos que, recién en diciembre de 1975, abandonaron el gobierno. Ese mismo año, optó por un modelo neoliberal en lo económico. "Pinochet tiene una mezcla de audacia e instinto de supervivencia que lo hacen impredecible. Fue un producto de su acción (el golpe) y de su tiempo. Abrazó el neoconservantismo más por ser una internacional oportuna y útil que por convicción", señaló hace algunos años un analista chileno. "Yo soy yo y mis circunstancias", respondió Pinochet en 1995 cuando le pidieron que se definiera.

De inmediato, con la ayuda de los Chicago Boys, el ex dictador transformó a la economía en otro frente de batalla del escenario de guerra que generó a partir de 1973. Con esa lógica, implacable, en un clima impermeable a la crítica y a la influencia interna, fueron aplicándose los planes de los economistas neoliberales. Nada pudo detener su marcha.

Pinochet, entonces, significó en lo económico -según el sociólogo chileno Eugenio Tironi- "una reducción del rol del Estado, la flexibilización, especialización e internacionalización de las estructuras productivas, la renuncia al objetivo del pleno empleo, la privatización de las empresas y servicios públicos, la multiplicación del empleo atípico y la reducción de la masa asalariada, una asistencia estatal de tipo minimalista y discrecional y la liberalización y flexibilización del mercado del trabajo". Nada de esto, de acuerdo a los especialistas, es exclusivo de Chile, sino que era una tendencia mundial.

Lo que sí pertenece a Chile es el cambio de una sociedad, que tenía un rumbo modernizador antes del golpe de 1973 y que era considerada mesocrática, porque los ingresos mayores estaban en los grupos medios, por un país elitario que dividió su clase media en dos y en el que coexisten, según Tironi, el desarrollo de grupos sociales cada vez más ricos, autónomos y cosmopolitas, con una marginalización creciente de una masa mayoritaria de la población.

Todo ello, para que fuera efectivo y rápido, se basó en dos frentes: uno quedó en manos de los civiles que se acercaron al gobierno y el otro a cargo de Pinochet y sus colaboradores militares inmediatos. Así como a Sergio de Castro, el economista más destacado de la dictadura, se lo considera el padre del modelo chileno, el general Manuel Contreras, a quien le tocó el trabajo sucio, representa la cara oscura del régimen militar.

Ambos rostros se necesitaban, pocas veces se miraron a los ojos y, sin duda, alegrarán que la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda. "La adhesión a un gobierno, señaló el ex senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán Errázuriz, debe asumir responsablemente el conjunto de lo que la acción de ese gobierno representa para el país, ponderando los aspectos positivos y negativos en los diversos actos de su gestión". Pinochet, entonces, es quien representa esas dos caras. Contreras y De Castro, sus manos diestra y siniestra. Guzmán, el cerebro.

Durante 1974 la ofensiva contra el gobierno de Pinochet en los diversos foros fue de grueso calibre. Tanto en la Asamblea General de la ONU, como en la Organización Internacional del Trabajo y en la OEA, se formularon cargos contra la dictadura chilena, se constituyeron comisiones investigadoras y se intentó obtener resoluciones condenatorias para el régimen que personificaba Augusto Pinochet. No se había equivocado el general, al comenzar ese año, cuando dijo que sería uno de los más difíciles que le tocaría vivir. Tampoco cuando aseguró, el 21 de febrero, que lo tachaban de "asesino, fascista y delincuente".

A la preocupación de la Iglesia Católica por los derechos humanos, que a través del fallecido cardenal Raúl Silva Henríquez decía que no se la estaba escuchando, el régimen militar respondió creando oficialmente la Dirección de Inteligencia Nacional, un organismo militar de carácter técnico profesional que, entre otras cosas, debía adoptar todas las medidas para resguardar la seguridad nacional y el desarrollo del país. "El Partido Comunista aún está intacto y también lo está el MIR. Sólo los socialistas fueron desbandados", vociferó ese año Pinochet en una entrevista concedida a la revista brasileña *Veja*.

Continuarían los tiempos difíciles.

VII

El aislamiento

"El pronunciamiento militar en Chile no le costó a los Estados Unidos ni un dólar, ni un disparo, ninguna arma, ningún hombre... nadie puede decir en Estados Unidos: ayudamos a Chile. Ese no es el caso, lo hicimos solos, aquí en Chile".

Declaraciones de Augusto Pinochet al *Washington Post*.

A principios de febrero de 1974, cinco meses después del golpe militar y de que Santucho le mandara al MIR varios millones de dólares a través de Domingo Menna y comprometiera al ERP a ayudar a los miristas a salir de Chile, se oficializó en Buenos Aires el nacimiento de la JCR.

Representantes de los diarios *Buenos Aires Herald* de Argentina, *New York Times* de Estados Unidos, *Le Monde* de Francia y *El Mundo* de Buenos Aires y de las agencias *Reuters* y *Prensa Latina*, fueron testigos de la conferencia de prensa que dieron Enrique Gorriarán Merlo, José Manuel Carrizo y Domingo Menna en la que presentaron el documento fundacional con el cual el ERP, el MIR, el ELN boliviano y los Tupamaros, anunciaron que comenzarían una colaboración más estrecha en el Cono Sur. Era, curiosamente, el día de los enamorados.

El MIR, junto con esta iniciativa y por decisión de su comisión política, estimó que sería posible pasar a una fase de resistencia activa contra la dictadura de Pinochet.

Si bien, el M-19 no firmaba el acta, es un hecho que el entonces jefe de la organización colombiana, Jaime Bateman Cayón, estaba interesado en la misma: por eso, en el transcurso de ese año, envió a uno de sus hombres de confianza, el comandante Alvaro Fayad, a dialogar con la gente del MIR en Santiago y con los del ERP en Buenos Aires.

Bateman, que tenía excelentes relaciones en Cuba y Panamá, promovió reuniones con todas las fuerzas del Cono Sur y posteriormente con las de Centroamérica. Mario Santucho, por su parte, estrechó vínculos, a través de Carlos Fonseca, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El verano del 74, en Argentina, fue particularmente violento por la acción de bandas derechistas, aliadas a policías y militares, que pretendían erradicar del gobierno a la tendencia revolucionaria del peronismo, frenar la movilización social y destruir la relación que se estaba creando entre las masas y los movimientos populares. En esta época comienzan las detenciones arbitrarias, seguidas de ejecuciones sumarias o, en muchos casos, la desaparición total y absoluta de la persona. Todas las bandas confluyeron, ante la inminencia de la muerte de Perón, en la Triple A que quedó bajo la conducción de José López Rega, cuando ya tenían a su haber, en operaciones preliminares, más de un centenar de asesinatos y decenas de atentados con explosivos en toda la Argentina.

En esos meses, asimismo, las fuerzas represivas chilenas centralizaron toda su acción en el MIR. "Era una ofensiva, dijo un documento partidario 12 años más tarde, de aniquilamiento y destrucción".

El MIR, liderado por Miguel Enríquez, era la prioridad de la DINA. La organización respondía únicamente con sucesivas reestructuraciones y con la idea de que se trataba de un repliegue táctico en espera de la retoma de la ofensiva de masas. El propio balance que hacen los miristas en el documento preparatorio para el IV Congreso, a realizarse en marzo de 1987, es estremecedor: "Entre marzo y julio de 1974 caen el 50 por ciento de los miembros del Comité Central (CC) y el 20 de la Comisión Política (CP), así como varias decenas de cuadros del partido. En septiembre se intensifican los golpes y en octubre recibimos el más duro de todos ellos: la muerte de Miguel Enríquez quien, como ya lo señalara un dirigente de la Revolución Cubana, se perfilaba como un jefe de revoluciones...".

A pesar de estos "triumfos" de los militares, para nadie era un misterio, en esos años y especialmente después que Pinochet fuera ungido por la Junta de Gobierno como Presidente de la República, que el régimen chileno comenzó a per-

der el apoyo político que tan decididamente había recibido de la DC tras el golpe militar.

La estructura demócratacristiana, que lideraban Eduardo Frei y Patricio Aylwin, jugó un rol destacado en el movimiento que derrocó a Salvador Allende en 1973. Sus bases mayoritariamente festejaron en las calles la caída del gobierno socialista y muchos de sus dirigentes corrieron a felicitar a los militares y se pusieron a disposición de estos para ocupar cargos públicos y embajadas.

En un primer momento, el partido de Frei Montalva pensó que como el golpe estuvo determinado por los generales más cercanos a su ideario político, el traspaso del gobierno a su partido era cosa de meses. La variable Pinochet aún no había sido considerada y el ex presidente, con sus declaraciones, recorría el mundo para alabar la acción de las Fuerzas Armadas chilenas.

El 10 de octubre de 1973 el diario ABC de Madrid publicó, in extenso, una entrevista al ex mandatario en la que éste, entre otras cosas, señaló que Chile vivía un momento "en que los políticos tienen que callar".

No había transcurrido un mes del golpe, en todo el planeta se hablaba de las atrocidades que cometía la junta chilena y el ex mandatario decía: "El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas y almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército: un armamento para más de 30 mil hombres. Los militares han salvado a Chile, y a todos nosotros. Y no puedo decir que estemos aún a salvo, porque las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer".

Eduardo Frei Montalva, fundador de la DC y de un gran prestigio internacional, decía que era tiempo de callar, pero no dejaba de alabar al régimen entrante y criticar duramente al derrocado, incluso al mandatario muerto: "¿Por qué se ha mentido en el mundo? ¿Por qué en Europa, donde no conocían a Salvador Allende ni estaban al tanto de nuestros dramas, se idealiza a un hombre tan frívolo, más frívolo políticamente que moralmente, como Allende? Ya sé que Allende era inteligente, orador fácil y superficial, sim-

pático de trato, chistoso, político del verbo politiquear. Pero Allende ni era un ideólogo ni era un estadista. Buscaba el modo de seguir en la cima del poder y también ocurrió que el poder lo deslumbró e hinchó su congénita arrogancia, y tuvo que pactar con sus enemigos políticos, es decir, los compañeros marxistas, y quizás rendirse a ellos, y quiso pactar, pero no tuvo suceso alguno, con nosotros, con la Iglesia y con las Fuerzas Armadas”.

Salvador Allende, efectivamente, trató de llegar a un acuerdo con la oposición que le permitiera al país salir de la crisis política en que se encontraba. Recurrió en reiteradas ocasiones a los uniformados, quienes formaron parte de varios gabinetes presidenciales y solicitó, además, la mediación de la Iglesia Católica chilena en el conflicto. Según sus colaboradores más cercanos, pensaba convocar a un plebiscito el mismo 11 de septiembre para que los chilenos eligieran su propio destino. El golpe encabezado por Pinochet e ideado por la marina y la aviación, cuyos jefes eran José Toribio Merino y Gustavo Leigh Guzmán, fue el punto final a esa intención.

Con la llegada de Allende al poder el mundo entero había puesto los ojos en un proceso inédito: la construcción del socialismo por la vía del voto. Estados Unidos no quedó a la expectativa, muy por el contrario, tomó una activa participación en la desestabilización del gobierno chileno.

De acuerdo a la versión del periodista del *New York Times*, Seymour Hersch, en su libro “The price of power: Kissinger, Nixon and Chile”, tres días después de la victoria de la Unidad Popular en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, la CIA comunicó a la Casa Blanca que “los Estados Unidos no tenían intereses vitales en Chile; que el equilibrio del poder militar mundial no se veía significativamente alterado por el régimen de Allende y que su triunfo no planteaba una amenaza a la paz de la región”.

El flamante Gobierno de la Unidad Popular, en definitiva, no significaba amenaza alguna a la seguridad de los Estados Unidos. Sin embargo, en el poder político norteamericano, encabezado por Richard Nixon y su asesor en seguridad nacional, Henry Kissinger, fue desestimada la opinión técnica del organismo de Inteligencia.

Según Hersch, un ayudante de Kissinger dijo que, precisamente porque el Gobierno de Allende era a la vez democráticamente elegido y de izquierda, el secretario de

Estado lo consideraba tanto o más peligroso. Pero no por las influencias que podía tener en el subcontinente, sino porque si los comunistas de Chile participaban pacíficamente en el gobierno y luego aceptaban abandonar el poder en una votación posterior, razonaba Kissinger, el ejemplo podía servir como un peligroso precedente en un país como Italia, donde el PC era cada vez más votado. Y el rival del PC, en ese país del viejo continente, era la DC.

Así, y como si fuera un cáncer que había que extirpar, Estados Unidos inició una desatada campaña contra la Unidad Popular para la cual, según Hersch, "se aprontaron armas que iban desde un embargo económico hasta el soborno de periodistas y un guiño amistoso a los terroristas que se oponían a Allende".

El indicio más firme en tal sentido que muestran los documentos liberados de su carácter secreto son los manuscritos de Richards Helms, jefe de la CIA, del 15 de setiembre de 1970, once días después de la victoria de Allende. Las notas, de trazo apurado, de difícil lectura y en estilo telegráfico, recogen las órdenes presidenciales relacionadas con Chile: "Una en 10, chance de éxito quizás. -Pero salve Chile! Vale la pena el gasto. Sin involucramiento de la embajada; 10.000 dólares (sic) disponibles, más si es necesario; trabajo de tiempo completo para los mejores hombres que tengamos; plan de juego; hacer temblar la economía".

La legendaria dirigente comunista negra, Angela Davis, dijo en su oportunidad que "Washington sabía que si no actuaba pronto el gobierno chileno se haría demasiado fuerte". Por eso lo hizo.

Un memorándum de la CIA, con fecha 16 de setiembre de 1970, registra el primer encuentro de Helms y otros altos funcionarios especializados en operaciones encubiertas. El primer esbozo de la intervención norteamericana en Chile se bautizó como "Proyecto Fubelt". En él se definió un grupo de tareas, bajo el control del segundo del director de Planes de la agencia, Thomas Karamessines, en el que se estableció que la CIA debía elaborar en 48 horas un plan de acción para Henry Kissinger: "El presidente Nixon ha decidido que un gobierno de Allende en Chile no es aceptable para EE.UU. El presidente pidió a la agencia (CIA) evitar que llegue al poder o destronarlo. El presidente autorizó 10 millones de dólares para este fin (...) El director (Helms)

dijo que Kissinger le había pedido reunirse con él, el 18 de setiembre, para que la agencia le diera datos de cómo esta misión puede ser cumplida”.

En un documento del 15 de octubre, se mencionó la posibilidad de promover un golpe. El mismo, además, resume una reunión entre Kissinger; su adjunto, el general Alexander Haig y Karamessines. Se discutió en la oportunidad, asimismo, la posibilidad de que el oficial chileno Roberto Viaux se encargara desde adentro de las fuerzas armadas de liderar el complot contra Allende. Pero esa idea sería descartada: “Viaux no tiene más que una posibilidad en veinte -quizás menos- de lanzar un golpe exitoso (...). Tras la decisión de desactivar el plan de Viaux, al menos temporariamente, Kissinger instruyó a Karamessines de preservar los recursos de la agencia (CIA) en Chile, trabajando clandestinamente y con firmeza para mantener su capacidad de operación contra Allende en el futuro (...). El encuentro siguió con la sugerencia de Kissinger de que la agencia debería continuar su presión sobre todos los flancos débiles de Allende”.

En otro documento, del 3 de noviembre de 1970, justo un día antes de la asunción de Allende, la CIA detalló sus esfuerzos para prevenir la ratificación parlamentaria del mandatario electo así como sus planes de golpe. Se describe cómo será el grupo de tareas “operativo” encargado de armar el golpe: “Consiste en cuatro funcionarios de la CIA con la apariencia, el lenguaje y la experiencia como para mantener la ficción de varias nacionalidades extranjeras. Fueron llamados de sus puestos en el exterior a Washington, informados e insertados individualmente en Chile”.

Luego, en un párrafo censurado, se informa que deberán reportarse a sus contactos en Chile. El largo memorándum enumera las tareas desplegadas para lograr que el ex presidente Eduardo Frei llegue a “apoyar un golpe que evitaría que Allende tome el poder el 3 de noviembre”. Agrega: “Presiones de aquéllos cuya aprobación valora - en combinación con adecuada propaganda- representan la única esperanza de convertir a Frei”.

También la diplomacia estadounidense estaba advertida de que la presencia del general René Schneider, como comandante en jefe del ejército, impediría un compromiso golpista de la institución. “Aunque algunos oficiales entre los mandos del ejército y de Carabineros esta-

ban predipuestos a tomar acción, sentían que el ejército era central para un golpe. Y que, mientras Schneider sea el jefe del arma, no podría contarse con el ejército”.

En un cable secreto del 16 de octubre, el adjunto de la CIA, Karamessines, transmitió las órdenes de Kissinger a la estación de la agencia en Santiago: “Es una política firme y continua que Allende debe ser derrocado con un golpe (...) Debemos usar máxima presión hacia esa meta y usar todos los recursos apropiados. Es imperativo que estas acciones sean clandestinas y asegurar que el gobierno y la mano americana estén bien ocultas”.

Un largo documento del Consejo de Seguridad Nacional preparado para Kissinger el 3 de noviembre resumió los objetivos de Washington hacia Santiago: “El experimentado ejercicio de nuestra influencia podría ser un importante factor en complicar la tarea de Allende, tanto exacerbando la fricción entre los moderados y los elementos radicales de su coalición como apoyando a las fuerzas opuestas al establecimiento de un régimen marxista leninista”. También recomienda evitar que el gobierno socialista sea tomado como “un modelo” en otros países de América Latina y que se mantenga una “postura fría” en las relaciones bilaterales, mientras se trabaja tras bastidores en minar al gobierno chileno con presiones económicas y con su aislamiento diplomático.

El primer gesto concreto de apoyo de la CIA a la lucha emprendida por la derecha chilena y la DC contra el régimen de Salvador Allende fue el ingreso al país de un grupo de miembros de ese organismo de Inteligencia conocido como los “Falsos Abanderados”. Todos ellos tenían pasaportes latinos adulterados y su misión la cumplían en países de habla hispana.

Antes de que asumiera la Unidad Popular, la CIA se comprometió a entregar a los que preparaban el atentado contra el comandante en Jefe del Ejército chileno, René Schneider, tres ametralladoras “limpias”, es decir despojadas de toda identificación, seis granadas de gases lacrimógenos y 500 balas. La idea, como se ha publicado mil veces, era impedir con el secuestro al general que el Congreso Nacional ratificara el veredicto de las urnas.

El plan falló no sólo en su objetivo político, sino hasta en los mínimos detalles y el intento de rapto se convirtió en un alevoso asesinato.

Una posterior investigación del Senado norteamericano sobre la intervención del gobierno de Nixon en Chile fue dado a conocer en 1975 y aseguró que la acción encubierta de la CIA se hizo a través de la propaganda, específicamente entregando grandes sumas de dineros al diario *El Mercurio*. La agencia de Inteligencia impulsó desde 1964 la campaña del terror, según el Informe, "como la acción más efectiva llevada a cabo por los Estados Unidos a favor del candidato DC". Esa intromisión se intensificó en los meses previos a las elecciones de 1970, en la cual los norteamericanos invirtieron más de 800 mil dólares para influir en la elección chilena.

Según el documento "Covert Action in Chile", preparado por el Senado norteamericano, la CIA asumió como estrategia, desde el mismo 4 de septiembre de 1970, dos líneas de acción: la llamada "Track I", que comprendía acciones de tipo político o de propaganda y la "Track II", claramente orientada a la preparación de un golpe militar.

En el marco de las fórmulas políticas, se concibió el siniestro "gambito Frei", consistente en sobornar a los parlamentarios chilenos para designar como Presidente a Jorge Alessandri en la sesión del Congreso Pleno citada para el 24 de octubre, a fin de dirimir entre las dos primeras mayorías. Alessandri renunciaría de inmediato, convocando a nuevas elecciones que abrirían las puertas de La Moneda a Eduardo Frei.

Según "Covert Action in Chile", "la CIA gastó 8 millones de dólares para financiar acciones encubiertas desarrolladas entre 1970 y el golpe militar en septiembre de 1973. ¿En qué se invirtió ese dinero? Financió desde modestos artículos de propaganda en la prensa hasta actividades en gran escala de los partidos políticos opositores a Allende. Desde encuestas destinadas a manipular la opinión pública, hasta acciones directas propiciando un golpe militar". El más favorecido por las "donaciones" de la CIA fue el diario *El Mercurio*, adalid de la libertad de prensa, quien recibió en septiembre de 1970 cerca de setecientos mil dólares y el 11 de abril de 1972 otros 965 mil.

A los Estados Unidos solo les interesaba detener a la Unidad Popular y ojalá reinstalar a un gobierno moderado, como el de Eduardo Frei, en La Moneda. La DC ya había logrado un holgado triunfo en las elecciones de 1964 y con la llegada de Frei al gobierno se anunciaron 30 años de he-

gemonía partidaria en la conducción de los destinos de Chile.

Por la victoria de Allende y la estruendosa derrota del candidato Radomiro Tomic, los hombres del partido de Frei tuvieron que abandonar los cargos públicos que habían detentado durante 6 años. Tras el golpe militar muchos de ellos retornaron. "La DC, dijo Frei al periódico *ABC* de Madrid, no deseaba esto, naturalmente. Usted no desea operarse de un cáncer, pero llega un momento que usted tiene que operarse el cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas, y el pueblo solicitó su intervención insistente, estruendosa y heroicamente".

Jaime Castillo Velasco para muchos, "el ideólogo" de la Democracia Cristiana, sostenía hace algunos años en su libro "Teoría y Práctica de la DC chilena" que "la sociedad fundada en el individualismo preconiza la libertad humana como clave de vida, pero la entiende como opuesta a la comunidad entre los hombres, degradándola y haciéndola cómplice del empleo de la violencia entre ellos y la Sociedad Totalitaria, a su vez, recurre al espíritu comunitario para definirse a sí misma, pero lo interpreta como la entrega total de la persona humana a los intereses del Estado, degradándolo y haciéndolo cómplice del despotismo y de nuevas formas de violencia entre los hombres".

Como síntesis de ambas corrientes, la capitalista y la marxista, entonces, surgió con el correr del siglo XX, la "doctrina comunitaria" y el "humanismo cristiano" que dan vida a la DC. Esta nueva sociedad, decía Castillo Velasco antes que se anunciara la muerte de las ideologías, "aparece como una trama de asociaciones libres y vinculadas entre sí. Su estructura es orgánica. Los ciudadanos ejercitan sus derechos democráticos y cumplen con sus responsabilidades en una pluralidad de comunidades autónomas, en cuanto a sus fines propios, pero asociados en vista a una tarea común que compete a cada uno y que reposa en la búsqueda de la felicidad para todos".

De esta forma y basándose en la filosofía de Santo Tomás, actualizada por el filósofo francés Jacques Maritain, los escritos de Lebre y en la Doctrina Social de la Iglesia, la Teoría Comunitaria que abraza la DC fue planteada como contraria al socialismo y fue la respuesta que un sector del pensamiento cristiano intentó dar a los problemas surgidos a raíz del desarrollo histórico del capitalismo. En el seno del

Partido Conservador fue donde comenzó a gestarse lo que sería la Falange y luego el PDC. Para muchos esta tercera posición frente al marxismo y el capitalismo nació para satisfacer la ambición de un cúmulo de personas que en la década del 30 vio cerrado su destino político dentro de los cauces de la derecha tradicional, que creían en la potencialidad política del catolicismo y que, por su origen social y cultural, no encontraron cabida en la izquierda de esa época. De ahí que, en el seno de la DC, siempre estuvieron en pugna dos grupos: uno cercano a la derecha y el otro a la izquierda.

El que dio origen a la poderosa DC chilena era una elite de jóvenes intelectuales cristianos, sensibles a los problemas sociales que, en la década del 30, se reunían todos los lunes bajo el alero de la Asociación de Estudiantes Católicos. Estaba formado por Eduardo Frei Montalva, Manuel Francisco Sánchez, Ignacio Palma, Jorge Rogers, Julio Santa María, Bernardo Leighton, Manuel Garretón y Rafael Agustín Gumucio. El padre de este último, Rafael Luis Gumucio, logró que los jóvenes ingresaran al Partido Conservador. Bernardo Leighton, el hermano Bernardo para sus camaradas, era el líder del naciente grupo. En la juventud conservadora se unieron a ellos Jorge Prat, Francisco Bulnes Sanfuentes, Juan de Dios Carmona.

En 1935 los dirigentes de la Falange eran Frei, Tomic, Leighton, Garretón, Eduardo Hamilton, Rafael Walker, Ignacio Echeverría, Pedro Stark, Alejandro Silva Bascuñán, Rafael Maroto, Otto Vogel, Edmundo Pérez Zujovic, Luis Egaña Baraona, Gumucio y Alfonso Naranjo Urrutia. Los falangistas tenían tres enemigos: los comunistas que ponían en peligro "la patria, la familia y la propiedad"; los nazis, a quienes combatían porque no deseaban "para Chile un régimen que es una copia servil de un gobierno extranjero; y los socialistas, un partido que según el órgano oficial de la Falange, la revista *Lirca*, no tenía otro interés, "y ningún otro programa que su bolsillo".

Los jóvenes estaban en la política por los ideales y durante un tiempo se aferraron fuertemente a ellos. El 24 de marzo de 1937 tuvieron su primer acceso al poder cuando Bernardo Leighton, de tan sólo 27 años, fue nombrado ministro del Trabajo por Arturo Alessandri. Eran los años en que el conocido símbolo de la DC significaba para ellos un todo representativo que indicaba la mezcla de misión social y nacionalismo que animaba a los jóvenes. La Flecha

representaba "el gran destino de nuestra patria"; el color rojo la Sangre "de aquellos que lucharon y murieron por Chile, la de los héroes que conocemos y la de los héroes desconocidos"; las barras, "los obstáculos a vencer: los internos deben ser vencidos con el sacrificio; los externos los superaremos por medio de la lucha".

En 1938 la Falange se separó del Partido Conservador. Entre 1941 y 1945 comenzó a vivir cambios fundamentales en su forma de entender la política y se orientó hacia la centro-izquierda, aliándose con los radicales por entender que los problemas sociales sólo podían ser resueltos desde una posición de poder. Recién en 1944 lograron tener su primera empresa: la editorial del Pacífico.

Surgió un grupo, liderado por Bernardo Leighton y que integraban Rafael Agustín Gumucio, Alfredo Lorca, Rafael Arancibia, José Isla y Jorge Rogers, que en 1946 abogó por un alineamiento con las masas y con los partidos de izquierda. Curiosamente quien se opuso tenazmente a este sector fue Radomiro Tomic, el que derrotó a Leighton en el Congreso de la Falange y quedó como presidente del partido.

En la década del 50 comenzaron las aspiraciones presidenciales de la Falange y en 1951 Patricio Aylwin proclamó a Eduardo Frei como candidato a la presidencia de Chile, rechazó a Ibáñez por "los oscuros días de la dictadura", recordando las simpatías totalitarias de los que respaldaban al general y dio un toque de atención sobre las tendencias pro-peronistas del ex dictador, "especialmente por su frecuente uso de la palabra justicialismo".

Recién en 1964 Frei pudo llegar a la presidencia de Chile y la DC proclamó a los cuatro vientos que se iniciaba en Chile la "Revolución en Libertad" y dio inicio a una serie de transformaciones que se vieron empañadas por un marcado hegemonismo partidario y por la acentuada confrontación política que caracterizó a la década.

A fines de los 60, la DC vivió una crisis de identidad tan fuerte que muchos militantes abandonaron sus filas para formar el Mapu y la Izquierda Cristiana. Pocos meses antes que parte importante de la estructura partidaria que presidía Patricio Aylwin apoyara el golpe militar de 1973, el ex candidato presidencial Radomiro Tomic, en abril de ese año, sostuvo que no veía razón para que su colectividad no colaborara durante un largo

período en la materialización histórica del socialismo en Chile.

Los sectores más radicalizados de la DC, tras el triunfo de Allende, consideraban que existían sólo dos tipos de sociedades: la capitalista y la colectivista. Argumentaban que la campaña presidencial de Tomic tuvo un programa definidamente socialista, que sectores eclesiásticos habían adoptado una definición socialista y que el ascenso de la UP al poder producía crecientemente en los chilenos la convicción de que la liquidación del capitalismo y el advenimiento del socialismo era un hecho irreversible. Jaime Castillo Velasco, por su parte, contraatacaba estas posturas y señalaba que el PDC, por lo obrado en el balneario de Cartagena, había dicho justamente que "dentro del Gobierno hay peligrosas tendencias hacia una estatización, peldaño para la dictadura".

Patricio Aylwin, en agosto de 1973, fue aún más duro y dijo que el PC chileno buscaba producir en Chile un golpe como el de Praga, "es decir, la liquidación de los partidos democráticos".

El 11 de septiembre de 1973 no encontró a la DC desprevenida. Diez días antes de esa fatídica fecha, el partido que lideraba Aylwin rompió el diálogo político, según dijo, "mientras el Gobierno no restablezca la normalidad constitucional y legal que ha quebrantado". El comunicado de la DC se sumaba a los ataques al Poder Ejecutivo que emanaban desde la Corte Suprema y el opositor parlamento. La Unidad Popular ante esa declaración quedó en posición de Jaque. El bombardeo a La Moneda fue el Mate.

Pocos días después del golpe la DC emitió un comunicado en el que sostuvo que "los hechos son consecuencia del desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a que el gobierno depuesto condujo al país, que llevaron al pueblo chileno a la angustia y la desesperación".

En ese momento, según la directiva DC y contra la opinión de algunos conspicuos dirigentes, como fue el caso de Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Claudio Huepe, Bernardo Leighton, Ignacio Palma, Renán Fuentealba, Radomiro Tomic, Fernando Sanhueza, Sergio Saavedra, Mariano Ruiz Esquide, Baldemar Carrasco, Jorge Cash, Jorge Donoso, Ignacio Balbontín y Florencio Ceballos, los antecedentes demostraban que "las Fuerzas Armadas y Cara-

bineros no buscaron el poder. Sus tradiciones institucionales y la historia republicana de nuestra patria inspiran la confianza de que tan pronto sean cumplidas las tareas que ellas han asumido para evitar los graves peligros de destrucción y totalitarismo que amenazaban a la nación chilena, devolverán el poder al pueblo soberano para que libre y democráticamente decida sobre el destino patrio". Y agregaban: "los propósitos de restablecimiento de la normalidad institucional y de paz y unidad entre los chilenos, expresados por la Junta Militar de Gobierno, interpretan el sentimiento general y merecen el apoyo de todos los sectores". Esta declaración fue realizada el jueves 13 de septiembre. Ese mismo día mostraron su complacencia con el golpe militar el Partido Nacional que lideraba Sergio Onofre Jarpa Reyes y la Corte Suprema de Justicia.

Mientras la dictadura disolvía el Congreso Nacional, símbolo de la democracia política, la DC concluía su declaración señalando que: "su logro requiere de una acción justa y solidaria, respetuosa de los derechos de los trabajadores, sin odios ni persecuciones, que conjugue el esfuerzo colectivo en la tarea nacional de construir el porvenir de Chile, ajena a los afanes minoritarios que buscan modelos regresivos o reñidos con la vocación democrática de nuestro pueblo".

A 96 horas del golpe militar la DC oficialmente ignoraba que La Moneda había sido bombardeada, que Arsenio Poupin, Claudio Gimeno, Jorge Klein, Eduardo Paredes, Enrique Huerta, Enrique París y todos los guardias personales de Allende, trasladados de La Moneda al Regimiento Tacna, desaparecían para siempre, que Allende había sido enterrado sin honores en el cementerio de Viña del Mar, que Víctor Jara había sido asesinado y que las embajadas se llenaban de chilenos que querían salvar sus vidas.

El golpe, en esas horas, no podía ser una "acción justa" y mucho menos "solidaria". Si por algún momento la DC pensó que el gobierno le sería entregado prontamente, también en esas horas debió darse cuenta que dentro del régimen militar había una pugna de tal magnitud que hacía imposible que un militante de sus filas encabezara la transición hasta las elecciones libres que suponían podían llevar a Eduardo Frei nuevamente a la presidencia. El mensaje a Gabriel Valdés cuando venía de regreso a Santiago, de que mejor no entrara a Chile porque su vida corría peligro, fue

una señal clara de que los uniformados de la confianza del PDC ya no manejaban la situación.

En Argentina, el 14 de septiembre, renunció a su cargo Ramón Huidobro, hasta ese día embajador de la Unidad Popular en Buenos Aires. Lo sucedió de inmediato Javier Illanes, ministro consejero, quien publicitó un comunicado en la capital trasandina en el que dijo que "la Junta Militar detenta el más absoluto control de la situación" y desmintió "las tendenciosas opiniones propaladas en el día de ayer por elementos opositores al Gobierno, con el claro propósito de distorsionar la realidad y crear confusión en la opinión pública internacional".

Illanes, quien al asumir Aylwin fue nombrado raudamente en la Dirección de Fronteras y Límites, se convirtió en el primer representante de la dictadura en el exterior que dijo que la imagen de la Junta Militar no representaba la realidad de lo que ocurría en el país.

En Chile mientras tanto los acontecimientos se sucedían con rapidez. Los diarios *El Mercurio* y *La Tercera*, adjudicando la información a "una alta fuente" dieron cuenta, el lunes 17 de septiembre, de un plan para asesinar a todas los máximos jefes de las Fuerzas Armadas, líderes políticos y periodistas de oposición. El plan, según los informados y serios matutinos, se ejecutaría durante el ensayo del desfile militar pero las Fuerzas Armadas, quienes obtuvieron la información, dieron el golpe "como única alternativa ante el peligroso plan preparado por el marxismo".

Ese mismo día el presidente de la DC, Patricio Aylwin, señaló que "lo cierto es que el Gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la llamada vía chilena hacia el socialismo, y se aprestaba a consumir un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista". Según Aylwin "la mayor prueba" era "la enorme dotación de armas que tenían las ilegales milicias marxistas que formaban un verdadero ejército paralelo". Con esas declaraciones, lo que luego se llamaría "Plan Zeta", tenía asegurado el apoyo político de uno de los partidos más importantes y con mayor presencia internacional.

A las seis de la mañana del 22 de octubre de 1973, en Concepción, fueron ajusticiados Danilo González Mardones, ex alcalde de Lota, Isidoro Carrillo Tornería, ex gerente de Enacar, Wladimir Araneda y Bernabé Cabrera. Todos ellos, según los uniformados, estaban impli-

cados en el Plan Zeta. Sus cuerpos estuvieron 17 años desaparecidos.

El siniestro plan de desinformación, conocido con el nombre de Zeta, fue una elaboración de Inteligencia de la Armada que vio la luz pública, por primera vez, cuando apareció el Libro Blanco de la Junta Militar con el que se intentó legitimar el golpe de Estado en octubre de 1973.

Según esa publicación, uno de cuyos autores fue el historiador Gonzalo Vial Correa, la Unidad Popular pretendía dar un autogolpe el 19 de septiembre, durante la Parada Militar, para asesinar a los máximos jefes de las Fuerzas Armadas. En su descargo, 25 años después de los hechos, el historiador Vial aseguró que los marinos le hicieron llegar a él y a otras personas varios papeles obtenidos en los allanamientos posteriores al 11 de septiembre. "Entre ellos venía el Plan Zeta, junto a otros documentos que eran auténticos como las armas que contenían los bultos cubanos o la última carta de Fidel Castro a Salvador Allende", sostuvo en *La Segunda* en abril de 1999. No pidió perdón.

El 18 de septiembre, una semana después del golpe, se realizó el tradicional Te Deum. Fueron todos los miembros de la Junta Militar, los ex presidentes Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Ofició la misa el cardenal Raúl Silva Henríquez. Frei, en la oportunidad, no felicitó a los nuevos gobernantes como sí lo hicieron, efusivamente, los otros dos ex mandatarios. ¿Por qué?

Mientras muchos chilenos abandonaban apresuradamente el país, se asilaban en embajadas como era el caso del DC Renán Fuentealba en la nunciatura, eran detenidos en el Estadio Nacional, sufrían torturas, eran fusilados o simplemente desaparecían, como si la tierra se los hubiera tragado, una comisión oficial de la DC viajó por el mundo para explicar que si las Fuerzas Armadas chilenas habían intervenido "no lo han hecho por afán de poder para establecer en Chile una tiranía militar de corte fascista o algo semejante, sino creyendo cumplir un deber en defensa de la seguridad nacional, de la integridad del país, de la unidad y del porvenir de nuestra patria". Enrique Krauss y Juan de Dios Carmona llevaron la "buena nueva" a Venezuela y Patricio Aylwin junto con Andrés Zaldívar lo hicieron a Perú, los Estados Unidos y Europa.

El 29 de septiembre la dictadura intervino la Uni-

versidad de Chile. Radomiro Tomic, ese mismo día, dijo al periódico *Il Messaggero* de Italia que "sería muy injusto atribuir responsabilidad directa a la DC en el golpe".

Según el ex candidato presidencial, los principales dirigentes de su partido fueron siempre contrarios a la ruptura institucional pero, aseguró, "desgraciadamente otros, a distintos niveles de la jerarquía del partido, estimaban que Allende estaba desintegrando al país y debía ser desplazado del poder cuanto antes. Pero unos más y otros menos, entre todos, estábamos empujando a la DC al madero. Como en las tragedias del teatro griego, todos saben lo que va a ocurrir, todos desean que no ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar. Ni aun ahora debe callarse que la mayor responsabilidad en el desastre que se avecinaba visiblemente, estuvo en la falta de visión política y el sectarismo del gobierno de la UP. Pero no son ellos los únicos responsables. Hay otros, dentro y fuera de los partidos políticos chilenos... y dentro y fuera de Chile".

Tomic era el primer DC conspicuo en asumir la cuota de responsabilidad de su partido en la crisis del sistema político chileno. Otros tardarían años en hacerlo.

¿Tiene confianza en Patricio Aylwin como futuro presidente de Chile?, le preguntó la periodista Mónica González a Renán Fuentealba para la revista *Análisis* en mayo de 1989.

"El movimiento se prueba andando y Patricio tiene una gran experiencia política, ha sido dirigente máximo de este partido, ha sido profesor universitario, senador. Fue también el hombre que dirigió el PDC en el momento del golpe de Estado. Creo que allí se equivocó y cometió muchos errores. El ganó la presidencia del partido a base de criticar por blandos y débiles a la directiva que yo presidía. Hicimos una oposición muy dura pero con una connotación muy clara. Decíamos: "somos una oposición revolucionaria a un gobierno revolucionario"; por lo tanto, no nos opusimos a los cambios como la derecha. Queríamos obtener la rectificación democrática del gobierno de Allende. Contra eso se levantó otra política, que se sintetizó en dos frases famosas: "no hay que dejarles pasar una" y "hay que pasar de las palabras a los hechos". Todo esto configuró un cambio fundamental de la política del PDC. Creo que fue un error que Aylwin cometió, por la falta de fe en la demo-

cracia. Si vamos a restablecer la democracia y de nuevo puede llegar un momento en que la democracia, que tiene mucha debilidad, se encuentre con dirigentes que no tienen fe en ella, que no creen que la democracia tiene sus propios medios para superar la crisis, vamos a volver a caer en una dictadura”.

“¿Qué siente usted cuando ve que hombres de su partido, que apoyaron el golpe militar, que callaron durante muchos años, hoy día asumen cargos de dirigencia en el PDC?”

“Espero que Dios los ayude, que sean absolutamente sinceros con sus nuevas posturas y que lo que hicieron les sirva de lección para que nunca más lo vuelvan a repetir”, sentenció Fuentealba.

Luis Alejandro Retamal Parra, Angel Gabriel Moya Rojas, Ricardo del Carmen Sepúlveda Bravo, Luis Guillermo Matamala Venegas, Ricardo Octavio López Elgueta, Simón Eladio Sánchez Pérez, Patricio Enrique Martínez Norambuena, Manuel González Allende, Roberto Hernán Cáceres Santibáñez, Juan Patricio Palma Rodríguez, Patricio Humberto Parra Quintanilla, Miguel Angel Ríos Traslaviña, Marcos Orlando Ríos Bustos, Florentino Aurelio Rodríguez Aqueveque, Eduardo Elías Cerda Angel, Carlos Patricio Fariña Oyarce, Jaime Max Bastías Martínez, Sergio Manuel Castro Saavedra, Pedro Hugo Pérez Godoy, José Miguel Valle Pérez, Santiago Rubén Rojas Arancibia, Jorge Antonio Aránguiz González, Mario Salinas Vera, Juan Domingo Arias Quezada, Sergio Hernán Ramírez Peña, Denrio Max Alvarez Olivares, José Herrera Villegas, Iván Ordóñez Lama, Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, Miguel Angel Valdivia Vázquez, Claudia Andrea Valenzuela Velázquez, Claudio Jesús Escanilla Escobar, Gabriel Marcelo Cortez Luna, José Domingo Gómez Concha, Víctor Adolfo Ulloa Pino, Jorge Patricio Narváez Salamanca, Juan Carlos Jara Herrera, Julio Augusto Niripil Paillao, Luis Cotal Alvarez, José Luis Aguayo Olavarría, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, Juan Bautista Fierro Pérez, Pedro Róbinson Fierro Pérez y Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez. Estos nombres para la inmensa mayoría de los chilenos no dicen nada. No hay plazas ni calles que se llamen así. No pudieron acercarse a la sociedad del consumo ni vieron la TV a color. No conocieron internet ni jugaron con los Nintendo. Tal vez escucharon a Allende aquel 11 de septiembre de 1973 cuando dijo “serán otros hombres”

y más de alguno habrá pensado que a él se refería el Presidente. Estos 45 nombres pertenecen a 45 niños y adolescentes, de entre 6 y 17 años, que fueron asesinados entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Sólo aparecen mencionados en el tomo uno del Informe Rettig, entre las páginas 107 a 440 y en las lápidas que cubren sus tumbas en los cementerios chilenos.

Ni uno solo de los que colaboraron en los primeros años del régimen militar se preguntó por qué y quiénes los habían asesinado. No había tiempo. La dictadura, como todo gobierno entrante, también requería hombres para la transición. Ellos debían poseer experiencia gubernativa. Los hombres de la UP, por razones obvias, quedaron descartados. La derecha y la DC pusieron a sus mejores cuadros a trabajar con las autoridades militares. Las mismas que, desde el primer momento, violaron todos los derechos, incluidos los de los niños. ¿O tal vez, para olvidar, sería bueno decir que los que trabajaban en el gobierno no sabían lo que ocurría en las calles de Chile?

“Los profesionales y los técnicos de nuestro partido están cooperando en las labores de la administración con el fin de poner en marcha la tarea de la reconstrucción nacional. La situación de estos días, creo que está por terminarse, que es el período que pudiéramos llamar de guerra, el período en que la Junta Militar ha tenido que tomar el poder, deshacer a los grupos armados y sofocar la resistencia de ciertos sectores. Es muy fácil convertirse en juez de otros, que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas”, señaló Aylwin a la agencia *NC News Service* el 24 de septiembre de 1973.

En esos años, dos grupos de civiles, según los documentos desclasificados por el gobierno de Bill Clinton, eran quienes aconsejaban a la Junta Militar. El primero descrito como “representantes de la más dura oposición a Allende” lo integraban Alvaro Puga, Jaime Guzmán, Jorge Fontaine y Federico Willoughby, quienes hacían tareas ya fuera de “relaciones públicas” o “asesorías periféricas”. “Estos hombres, asegura el documento, se ganaron la confianza de la Junta en parte porque querían trabajar con el nuevo gobierno y también porque los demócratacristianos y otros hubiesen rechazado colaborar, al menos, en asesoría política”.

El segundo grupo de civiles era el llamado "equipo económico", encabezado por el ministro de Economía Fernando Léniz e integrado por Jorge Cauas, Carlos Massad, Juan Villarzú y Ricardo Claro, entre otros. "Debido a sus habilidades técnicas y administrativas, inexistentes en Chile, sus consejos en materias económicas eran casi siempre aceptados por la Junta. También eran valiosos por su buena reputación en círculos financieros internacionales. Cada uno de ellos contaba con un estatus no relacionado con el presente gobierno y por contar con una independencia mucho mayor al equipo liderado por Puga".

De estos 9 nombres, tres de ellos ocuparon importantes cargos durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Más de una década después el propio Aylwin, convertido en ferviente opositor al gobierno de Pinochet, concedió una entrevista a la desaparecida revista *Análisis* en la que aseguró que, en su calidad de presidente de la DC en 1973, autorizó a los militantes demócratacristianos para que colaboraran en actividades de Gobierno hasta 1976 porque, hasta esa fecha, no tenía información sobre los casos de torturados, detenidos desaparecidos u operativos militares a poblaciones modestas.

Su hermano Andrés, el 5 de agosto de 1975, envió una carta al presidente de la Corte Suprema en la que, solicitando información sobre una detenida desaparecida, señaló que lo que puede haberle sucedido a ella "se sabrá más tarde o más temprano. En la misma forma se sabrá la verdad sobre todos los otros casos semejantes. Ese día, cuando la verdad se sepa, las nuevas generaciones de Chile nos preguntarán, no lo dudemos: ¿qué hicieron ustedes? Sí. ¿Qué hicimos hoy y no ayer o nuevamente mañana?"

Después que la Comisión de Verdad y Reconciliación entregó las cifras de la represión ocurrida en Chile entre 1973 y 1990, Patricio Aylwin Azócar, en su calidad de Presidente, pidió perdón en nombre de los chilenos. La historia, sin duda, dirá que ese momento le sirvió para hacerlo en forma personal.

VIII

Mil nueve setenta y cinco

“Estos pseudo detenidos o secuestrados son trasladados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”.

Información sobre desaparecidos publicada el 16 de julio de 1975 en *El Mercurio*.

El año no comenzó bien.

El 7 de enero falleció Angela Lois, última ona que pobló Tierra del Fuego y que era la única representante de una cultura milenaria que jamás se mezcló con la población chilena. También sería el comienzo de un ajuste económico sin precedentes en el país e inusitadamente insensible. Lo que Joaquín Lavín llamó revolución silenciosa, sin duda, comenzó ese 1975 pero, para concretarla, debió aplicarse conjuntamente a un programa político que impidiera el disenso.

“La situación que vive el país no es adecuada para timoratos ni asustadizos; los débiles de carácter que se asustan a la primera quiebra o al primer desocupado no tienen nada que decir en una situación tan compleja como la que vive Chile hoy”, argumentó el entonces ministro de Hacienda Jorge Cauas cuando la desocupación alcanzaba el 18 por ciento, había disminuido el consumo privado por habitante, caído las reservas del Estado, la inflación superaba el 340 por ciento y el gasto social se redujo en un cincuenta por ciento. Para la revista *Qué Pasa* de abril de ese año, esa emergencia exigía “una virtual dictadura económica”.

El plan, entonces, se había puesto en marcha y a un costo social altísimo. En 1975, año de privatizaciones, la mayoría de las empresas que habían pasado al área social durante el gobierno de la Unidad Popular retornaron al sec-

tor privado. Ello provocó una tasa de cesantía nunca antes vista y que obligó al gobierno militar a lanzar un plan de empleo mínimo que paliara de alguna forma el descontento que surgía tímidamente en el país y que sin duda ponía en peligro los íntimos deseos de los gobernantes.

“Preocúpese de la imagen interna no más, presidente. Procure que las empresas internacionales encuentren aquí una buena tierra para sembrar, y nada más...”, había dicho a Pinochet el padre de la Escuela de Chicago, el economista Milton Friedman, tal vez sin reflexionar lo que para el general chileno significaban sus descontextualizadas recomendaciones técnicas.

Una de las “preocupaciones” de los gobernantes, sin duda, era el MIR. Para mediados de 1975, según un documento interno, el Comité Central de ese partido había perdido el 90 por ciento de sus miembros y de la antigua Comisión Política (CP) -de antes del golpe- sólo quedaban dos miembros en Chile. “En octubre de 1975, asegura el documento mirista, la situación se agrava con el golpe de Malloco donde cae en combate Dagoberto Pérez, culminando los hechos en el exilio del secretario general y un miembro de la CP. Por añadidura, esta situación generó una grave crisis al interior de la dirección: dos compañeros de la CP y varios miembros de la CC cuestionan a Andrés Pascal Allende como secretario general...”.

Según el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación es “posible afirmar” que durante el verano de 1975 “la DINA termina definitivamente con la estructura clandestina del MIR” porque, entre diciembre de 1974 y febrero del año siguiente, “fueron detenidos gran parte de los integrantes de la llamada Fuerza Central, asimismo algunos miembros del Comité Central, la mayor parte de la estructura de la zona de Valparaíso y la mayor parte de los Grupos Político Militares (GPM) junto a otras estructuras que seguían funcionando en Santiago”.

El exilio de Pascal Allende y de Nelson Gutiérrez y los problemas internos del MIR, fueron destacados ampliamente en el diario *El Mercurio*, asegurando que ambos dirigentes habían sido condenados a muerte por su organización. Esto permitió a los servicios de Inteligencia operar sobre los miristas argumentando que se trataba de pugnas internas. Tanto es así que, en el informe oficial que el gobierno de Chile presentó en la ONU, vía su embajador

Sergio Diez, actual senador de Renovación Nacional, se aseguró que el MIR asesinó a nueve personas por "delatoras" y "ha ajusticiado a soplones".

En el documento, además, se intenta explicar la situación de 768 personas que, a esa fecha, figuran como desaparecidos.

La desaparición de personas como táctica planificada de tormento y exterminio superaba todo lo conocido históricamente. Según Ricardo Colombres "su perversión ética y jurídica para las víctimas directas (prisioneros indefensos en cuatro paredes); el terror primero y el dolor permanente después para familiares allegados; la impunidad y los premios para victimarios sádicos o iluminados y finalmente, la total extinción material, social y jurídica del desaparecido, la convierten en el máximo procedimiento, en la mayor de las tácticas mortales. Muy superior a la cruz y la horca, la guillotina y la silla eléctrica e incluso a la cámara de gas del genocidio nazi. No hay explicaciones que dar, ni cadáveres para honrar o despedir, ni relaciones jurídicas que resolver, ni delincuentes para enjuiciar. Sólo silencio, ignorancia, incertidumbre".

Ya en la Alemania de Adolfo Hitler, según los archivos del tribunal militar de Nuremberg, la técnica de hacer desaparecer gente, bajo el nombre de Programa Noche y Niebla, era una realidad que pretendía "borrar" a ciertas personas, en el caso alemán a los judíos, sin que quedara huella alguna de lo que con ellas había ocurrido.

En Chile, la desaparición de personas se utilizó desde el mismo 11 de septiembre de 1973 porque algunos de los hombres que estuvieron con Salvador Allende, ese día en La Moneda, todavía no han sido hallados. Luego la desaparición fue una herramienta de uso común.

El trabajo de recibir las denuncias por desapariciones y diferenciar las que podían prolongarse en el tiempo con aquellas donde existían posibilidades de que la persona fuera encontrada, recayó en monseñor Cristián Precht, secretario ejecutivo del Comité Pro Paz, un organismo multirreligioso creado para defender los derechos humanos. Si bien la iniciativa de la sistematización de los nombres no prosperó, al menos sirvió para echar las bases de lo que posteriormente se conocería como Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la que se encargó de recolectar en todo el país los datos de personas que, habiendo sido deteni-

das por organismos represivos, no estaban en ninguna cárcel ni centro de detención del país.

A mediados de mayo de 1975 los familiares confeccionaron la primera lista de desaparecidos. En ella, por las condiciones en las que la agrupación trabajaba, se cometieron muchos errores al transcribir los nombres. Apellidos como Robotham se convirtieron en Robostan o Guendelman en Wendelman. Así y todo, con la firma de algunos funcionarios del Comité Pro Paz, entre ellos el obispo católico Fernando Ariztía, los familiares realizaron una petición a la Justicia para saber el paradero de sus seres queridos. El tema de los desaparecidos era, sin duda, una preocupación que cruzaba el continente y que, en esos años, tenía su máxima expresión en Chile.

En 1975 la cifra de desaparecidos casi llegaba al millar de personas y por ende las autoridades civiles o militares no podían simplemente mirar para otro lado sino tratar de encontrar un argumento adecuado para ocultar lo que estaba ocurriendo. El presidente de la Corte Suprema de Chile, Enrique Urrutia Manzano, señaló en marzo de ese año, al inaugurar un nuevo período judicial, que tanto la Corte Suprema como la de Apelaciones se habían visto "abrumadas" los dos últimos años por los numerosos recursos de amparo interpuestos por las detenciones realizadas por las autoridades militares. Para Urrutia, la mayoría de esas presentaciones "se deducían en favor de personas que, según los propios recurrentes, se encontraban desaparecidas -entiéndase no detenidas- y que en verdad, y por lo general, se trataba de individuos que viven en el país en clandestinidad o que, de la misma manera, han salido a los países vecinos". Meses después el diario *La Tercera* informó sobre algunas recomendaciones a los tribunales ordinarios, surgidas del seno de la Corte Suprema, en la que se aseguraba que la mayoría de los escritos de amparo eran "de falsa procedencia".

Si bien la Corte Suprema amortiguaba el efecto interno de las acciones judiciales, el gobierno de Pinochet requería de un argumento que, además, contribuyera a calmar las protestas en el exterior y especialmente en los organismos internacionales.

La DINA, entonces, debió planificar una operación. En noviembre de 1978 fue detenido en Buenos Aires, acusado de tareas de espionaje, el chileno Enrique Arancibia Cla-

vel y le fueron incautadas, en la oportunidad, cédulas de identidad chilenas que pertenecían a personas desaparecidas tras el golpe militar. Las cédulas estaban dentro de un sobre, color café claro, junto a una carta de saludo del general Contreras al subsecretario de Seguridad Interior de Argentina, Héctor Luis García Rey, quien, posteriormente, también fue reconocido por la Inteligencia chilena por su colaboración con la Operación Cóndor.

Interrogado por el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), el agente Arancibia Clavel confesó que en 1975, el entonces agregado militar chileno en la Argentina, Osvaldo Hernández Pedreros, le comunicó que llegaría a Buenos Aires, con una delicada misión, un agente de apellido Iturriaga. Arancibia, según su testimonio, debió contactar a Iturriaga con el militante de "Milicia", el argentino ultraderechista Martín Ciga Correa, quien trabajaba con la Inteligencia chilena. En el libro "Bomba en una calle de Palermo", los periodistas Mónica González y Edwin Harrington, aseguran que el agente chileno señaló al SIDE que Iturriaga tenía la misión de "hacer aparecer a un subversivo chileno cuyo nombre podría ser Zimelman o algo así, muerto en Chile, en nuestro país (Argentina), habiéndose bautizado este operativo como Operación Colombo".

Ésta, al parecer, venía gestándose desde abril de ese año y pretendía utilizar el clima de violencia política que existía durante el gobierno de Isabel Perón para confundir a la opinión pública mundial y hacerla creer que los desaparecidos en Chile eran miristas que se estaban matando entre ellos en el extranjero.

En un primer momento, por los comentarios del agente Arancibia Clavel, las cosas no resultaron como pretendían en Santiago. "Lamentablemente, escribió el 22 de ese mes, hasta este momento la publicidad para el caso Colombo ha sido casi nula. Recién mañana me entrevistaré con Martín para saber exactamente qué es lo que pasó". En los memos utiliza una serie de palabras claves, como facturas para referirse a muertos y restaurantes cuando se trata de publicaciones. Así por ejemplo, señala: "las facturas que acompañan a Colombo se pagarán en el transcurso de la semana junto con 15 facturas argentinas". Días después, en otro memo, dice que Martín le solicitó fotografías para aproximadamente siete personas y que un periodista lo llama todos los días y que no sabe cómo manejarse con él.

No estaría fuera de esta operación el homicidio en Argentina del joven de 22 años y militante del MIR, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, hecho ocurrido el 2 de julio de 1975 en Bahía Blanca. El estudiante, que se encontraba bajo la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fue secuestrado por un grupo de civiles armados y su cuerpo, acribillado a balazos, fue hallado al día siguiente con 35 impactos.

De esta forma, poco a poco, Colombo va encontrando la fórmula hasta que la noticia llega a la primera plana el 11 de julio de 1975 cuando, en la localidad bonaerense de Pilar, la policía argentina descubrió dos cadáveres, acribillados y calcinados, que supuestamente corresponderían a jóvenes chilenos y con una leyenda que decía "Dados de baja del MIR". Los mismos tenían sus respectivos carnés de identidad de Chile, a nombre de Luis Alberto Wendelman Wisnik y Jaime Eugenio Robostan Bravo. Este último, cuyo apellido era Robothan y no Robostan como erróneamente se había escrito en la presentación ante la Justicia, había sido aprehendido en Santiago junto a su amigo, Claudio Thauby, el 31 de diciembre de 1974.

Cinco días después de la información sobre los cuerpos en Pilar, el diario *La Tercera*, se hizo parte del montaje más triste y censurable que haya vivido en su historia la prensa chilena cuando informó que el hallazgo de ambos cadáveres, "ponía al descubierto las burdas maniobras con las que los elementos de izquierda se preparaban para esperar a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". El gobierno militar había autorizado, hacía algunos meses, el ingreso de un Grupo de Trabajo ad hoc de las Naciones Unidas para investigar en terreno la situación de los derechos humanos en Chile. Esta comisión, curiosamente, tenía previsto arribar al país en julio del 75 y una de las cosas que más le interesaba, sin duda, era la situación de las personas detenidas desaparecidas.

El gobierno militar, a su vez, también estaba preocupado por el tema, pero no precisamente por razones humanitarias. Justamente a mediados de julio del 75, de acuerdo a un documento de trabajo de la CIA, Pinochet convocó a una reunión especial para discutir el problema de los derechos humanos. En la oportunidad, un informante de la agencia en Santiago, a quien llamaremos "el tachado" pues su nombre no fue revelado al desclasificarse

los documentos de la CIA, expresó su alarma por "el hecho de que la gran mayoría de los recursos de amparo recibidos por la Corte respecto a personas desaparecidas contenían pruebas claras de que ellas habían sido detenidas por las fuerzas de seguridad" .

A continuación la transcripción del documento fechado el 8 de agosto de 1975: "Tachado dijo a Pinochet que muchos de los abogados que procesan las peticiones eran partidarios de la Junta y que por lo tanto el Gobierno no debería considerar las peticiones sólo como actos políticos en contra de la Junta. Tachado dijo que podía simpatizar con la idea de eliminar a conocidos extremistas, pero que desde el punto de vista jurídico no podía seguir tolerando la amplia evidencia que aparecía en las peticiones de amparo. Pinochet dijo que coincidía plenamente con la posición de Tachado y que estaba ordenando personalmente a todos que se aseguraran de que no se emprendieran acciones que pudieran conducir a la conclusión de que los extremistas habían sido ejecutados ilegalmente por fuerzas del gobierno. Tachado replicó que el Presidente debería dirigir sus comentarios directamente al coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, puesto que era su servicio el directamente responsable de tales abusos, los que constituyen la más grave amenaza al prestigio del gobierno. Contreras replicó acaloradamente, momento en el cual Pinochet dio por terminado el encuentro, pidiendo a Tachado que se encontrara con él privadamente. Tachado reiteró sus puntos de vista, agregando que Contreras sólo gozaba de la confianza de Pinochet. Tachado ofreció su renuncia a Pinochet, pero este declinó aceptarla".

Es un misterio el nombre de Tachado. La historia pública señala que sólo Jaime Guzmán se enfrentó a Contreras, pero él era un asesor del general y no un ministro. Más allá de eso, lo importante es que en esa reunión se trató abiertamente el tema de los desaparecidos y persona alguna que estuvo en ella, seguramente varios colaboradores del régimen militar, puede desconocer la responsabilidad de la DINA en los hechos.

La gran prensa, ajena a todo lo que ocurría en el país en materia de derechos humanos, sólo tenía un oído en el palacio y este estaba cerca de la DINA y Contreras. El montaje siguió su curso.

Para *La Tercera*, entonces, el lienzo encontrado sobre los cuerpos en Argentina no decía "Datos de baja del

Mir", como lo aseguraban los cables internacionales, sino "Dados de baja por el Mir". Según el matutino, los cadáveres pertenecían a miristas que sus familiares habían reclamado ante diversos organismos internacionales tras su desaparición. Ambos, aseguraba *La Tercera*, figuraban en un recurso colectivo de amparo presentado ante la Corte Suprema y que, de acuerdo a las fuentes que manejaba el periódico, "salieron clandestinamente del país o tienen cédulas de identidad falsas". A raíz de ello, adelantaba el diario, las organizaciones de derechos humanos no debían hacer otra cosa que "borrar sus nombres" de la lista de personas desaparecidas en Chile. Es decir, el matutino no sólo informaba...

Algunos días después, utilizando como fuente una misteriosa revista argentina, de nombre *Lea*, la prensa chilena nuevamente se hizo eco de la desinformación. La publicación bonaerense, financiada supuestamente por el ministerio que dirigía José López Rega, llevaba en sus páginas centrales un artículo titulado "La Vendetta Chilena", en el que aseguraba que "alrededor de sesenta extremistas chilenos" habían sido eliminados por sus propios compañeros de lucha en "un vasto e implacable programa de venganza y depuración política".

La nota de prensa, además, decía que "las acciones que supuestamente se habían registrado con estudiada inconexión", en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia, eran "practicadas por pequeños grupos de fanáticos juramentados". Dos eran las motivaciones de la presunta "purga" para la desconocida revista argentina: los ejecutados serían informantes de organismos de seguridad o querían desertar, y otra, que la fundación de la JCR obligó a realizar la "depuración". A la información, los redactores de *Lea*, añadieron una larga lista con los nombres de 60 militantes que, según la publicación, eran "los que callaron para siempre".

Dos días después, en Brasil, según la prensa chilena, el diario *O'Dia* de Curitiba, difundió otra nómina, esta vez con 59 nombres de militantes del MIR "muertos durante choques con fuerzas antiguerrilleras en la provincia de Salta". Entre ellos figuraba el de Jaime Eugenio Robothan Bravo. Los familiares de este último, sus hermanos Adriana y Guillermo, viajaron a Buenos Aires y tras ver el cadáver semicalcinado del que presuntamente sería su pariente, ase-

descontó y envió - 67.
guerrilla en América. Este informe fue hecho por la red
brasileña. Raúl Di Carlo, secretario general de "Ypema"
regreso de Bruselas dando un libro relacionado con Brasil, Cuba
y Alvaro Puga. Se concretaron intergubernios. En la embajada
chilena se consideró un libro de parte de la Junta la opinión
de Fontecoba.

SECRETARIA DE DEFENSA - 15 DE OCTUBRE DE 1967

INFORMES RECIBIDOS. PETICIÓN: Dará respuesta a los
siguientes EEI. Hoy en nuestro poder un ejemplar del folleto
desde Chile editado por el MIR presuntamente de Argentina.
¿Tuvo conocimiento en una de esas reuniones? En qué forma
fue elaborado? Quiénes son los redactores? Se adjunta copia
de la portada e índice.

CAROL BARRIA ha sido designado como delegado de la
inteligencia nacional en Buenos Aires el coronel Juan Barria Barria
ocupando el puesto de consejero en nuestra embajada. Este
oficial se encargará de los contactos oficiales con la
embajada y servicios de inteligencia. Particularmente en el
intercambio de información en una reunión ya que así se
encuentra un miembro del RIDE en la embajada argentina en
contacto con nosotros. El coronel Barria es nuestro
representante oficial y tú eres un jefe de información
independiente. Tus relaciones con él deben ser totalmente
independientes. No te debes quedar nunca seguir trabajando en
la misma forma en que lo has hecho hasta ahora que Barria
cuando se pusiera lo que será oportunamente en marzo recibes
tendrás la oportunidad de conversar personalmente con

guraron que no se trataba de él porque, entre otras cosas, el cuerpo no presentaba las señas físicas que caracterizaban al joven y la fotografía del carné era de cuando sólo tenía 14 años de edad. Lo propio ocurrió cuando Sara Wisniak, la madre de Guendelman, vio el cuerpo del que supuestamente era su hijo. No coincidían la dentadura, ni las huellas ni las señas físicas. La Policía Argentina, extraoficialmente, aseguró que los documentos hallados junto a los cuerpos no mostraban "suficientes indicios de autenticidad".

Si bien, entre julio de 1974 y julio de 1975, algunos chilenos fueron asesinados en Argentina, ninguno de ellos fue incluido en la lista de los 119 que publicaron conjuntamente *O'Día* y *Lea*. Paradojalmente, todos estos últimos, habían sido detenidos en Chile, la mayoría ante testigos y se los vio, más de una vez, en algún centro clandestino de la DINA. Fue el caso de la joven Jacqueline Binfa Contreras, de tan solo 23 años y cuyo nombre apareció en la misteriosa revista argentina. Ella fue secuestrada el 27 de agosto de 1974 y trasladada a un recinto secreto de la DINA donde fue vista por otros detenidos. Algo similar ocurrió con el profesor de música del Liceo Darío Salas, Arturo Barría Aranceda, detenido el 28 de agosto de 1974. La pista del docente se perdió en el campamento de prisioneros de Tres Alamos luego que el jefe del Comando de Institutos Militares, coronel Rehren Pulido, ordenara a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (Sendet), que pusiera a Barría a disposición de la DINA. Su nombre, posteriormente, apareció en la publicación fantasma *O'Día*.

El 24 de julio el vespertino *La Segunda*, de la cadena *El Mercurio*, no dudó en titular, con letras rojas y a todo lo ancho de la portada, "Exterminan como ratas a miristas". El diario aseguraba que "una fuente responsable" del gobierno chileno había citado la información de *O'Día* de Curitiba.

Para *Las Últimas Noticias*, del mismo propietario, la fuente del periódico brasileño, a quien definía como el diario más antiguo del Paraná, era el gobierno chileno. *La Tercera*, por su parte, argumentó que "esos extremistas jamás fueron detenidos y que, en cambio, lograron salir del país para enfrentarse en la estremecedora lucha interna que libra el MIR por el dinero, producto de aquellos robos y desfalcos perpetrados en Chile en el anterior régimen".

La agencia *Reuter Latin*, que movilizó a un contingente de periodistas para que investigaran las publicacio-

nes de Curitiba y Buenos Aires, determinó que la primera nunca existió, siendo el recorte de la prensa chilena la única evidencia del desconocido periódico brasileño, y que la segunda era un órgano fantasma, de desconocidos editores y responsables y un pie de imprenta imposible de verificar.

El diario argentino *La Opinión*, por su parte, calificó el hecho como "un macabro mecanismo de relojería", montado desde Chile, que "asesina y hace desaparecer los cadáveres de sus víctimas con precisión cronométrica". Y añadió: "una gran conspiración, con vínculos en territorio argentino, imaginó métodos siniestros que superan todo lo conocido de la Alemania de Hitler, acudiendo a publicaciones fantasmas en el extranjero y a cónsules que se prestan a difundir cédulas de identidad falsificadas".

La reacción de la embajada de Santiago en Buenos Aires no se hizo esperar: "sin el ánimo de entrar en una polémica, que desde ya rechaza, la embajada desmiente pública y categóricamente tales denuncias y condena las irresponsables insinuaciones de ese periódico sobre la conducta de los funcionarios diplomáticos y consulares de Chile en la República Argentina".

El Comité Pro Paz, el 25 de julio de 1975, emitió una declaración en la que llamó "a la comunidad nacional a meditar sobre la extrema gravedad que encierra, para la totalidad de las personas que la conforman, que un sector de la prensa nacional retransmita en forma sensacionalista noticias emanadas de un semanario y diario extranjeros, escasamente conocidos, que se refieren a la presunta muerte de un alto número de chilenos, sin señalar las fuentes de organismos competentes". Medio alguno de Santiago publicó el comunicado del Comité y este, días más tarde, sólo pudo ser conocido por la población previo pago de la inserción correspondiente. "Preocupa, fundamentalmente a esta institución, reflexionaba el Comité, la ligereza con que ha sido recogida dicha información y la forma poco humana en que ha sido comentada".

Ese mismo día, 25 de julio, el prestigioso diario *El Mercurio*, en su comentada e influyente editorial, aseguraba que "los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR, y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus mis-

mos camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer víctimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos”.

La respuesta vino, otra vez, del Comité Pro Paz. Según este organismo, fundado en octubre de 1973 y que obedecía un mandato de Iglesias y comunidades religiosas, los familiares de las 119 personas que aparecían en las listas de Brasil y Argentina habían denunciado su detención en Chile y aseguraban que luego de ella se encontraban desaparecidas. En 77 de los 119 casos los familiares, bajo declaración jurada, afirmaron tener evidencias directas del arresto, en 26 evidencias indirectas y en los restantes la desaparición se produjo sin que la persona dejara rastro. Casi todos tenían pendientes recursos de amparo ante la Corte y 86 habían denunciado la situación en los tribunales del crimen. Más de cien, además, aparecían en la presentación judicial donde se solicitaba un ministro en Visita para que investigara los hechos. En cuatro casos las propias autoridades de gobierno reconocieron oficialmente el arresto. “No cabe duda que, quienquiera haya sido el autor de semejante publicación, disponía de la documentación completa de dichas personas, que por lo demás obra en poder de los tribunales y organismos nacionales e internacionales como también en poder de nuestras iglesias. Los nombres parecen en muchos casos completados correctamente con el segundo nombre, todo lo cual hace imposible pensar que se pudo averiguar en las circunstancias en que se dice habrían muerto en distintos países, cuando no heridos o evadidos”, argumentaba una presentación realizada por el Comité ante la Corte Suprema.

Días más tarde, el 3 de agosto de 1975, el matutino *El Mercurio* debió retractarse y hacer su mea culpa. “Nuestro diario acogió las primeras informaciones -como tantas otras- sin aguardar confirmación oficial y limitándose a citar la fuente de donde provenían... han transcurrido, sin embargo, los días y ni las autoridades chilenas ni las argentinas se refieren al caso. Por otra parte, la información no se recoge por los grandes medios noticiosos sino que se ha mantenido relegada en periódicos de ninguna significación. Se está diciendo además que algunos de los miristas supuestamente muertos en el extranjero tienen los mismos nombres de algunas de las personas que han sido objeto de recurso de amparo a causa de su desaparecimiento en nues-

tro país. El tema no es por cierto de los que pueden pasar inadvertidos, tratándose de la suerte de más de un centenar de chilenos, cuyos familiares sufren...”.

Algo hizo cambiar de opinión a *El Mercurio* que se preguntó si era “verosímil en su conjunto” la información que había estado suministrando. Y su propia respuesta fue categórica: “en apariencia, no...”. El diario, entonces, solicitó al gobierno que aclarara la situación y este dijo que investigaría los hechos.

Las cosas no cambiaron mayormente porque, al parecer, la necesidad de encubrir las desapariciones requería de todos los frentes posibles. Recién en noviembre de ese año, entre los días 7 y 10, el régimen dio una excusa pública de lo que estaba aconteciendo en Chile y el encargado de comunicarla fue el ex diputado del Partido Nacional y actual dirigente de Renovación Nacional, Sergio Diez Urzúa, a la sazón representante del gobierno militar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su alocución, el ahora senador manifestó que, si bien comprendía el dolor de los que no saben de sus parientes, aseguró que era un cargo “cruel” inculpar a su gobierno. Y para ello, simplemente, explicaba. “En Chile una persona puede salir de una parte del territorio nacional y dirigirse a otra a miles de kilómetros de distancia, en avión, en tren o en barco, sin comunicarlo a nadie; se puede cambiar de trabajo; puede pasar a la Argentina con su carné de identidad y sin solicitar autorización alguna. De acuerdo al sistema chileno tradicional de libertad, que se mantiene, es casi imposible averiguar dónde están las personas. Es como si preguntásemos en los Estados Unidos, o hacerlo en algún país de Europa occidental, sin dar una dirección, por una persona que no figura en ninguna guía de teléfono, hoy puede estar en Suiza, mañana en Suecia, pasado en Francia y nadie tiene por qué saber dónde está. Además los desaparecimientos se producen por muchas causas; pueden haber causas políticas, pero también hay causas familiares de desaparecimientos, causas de pérdidas de razón; otros que arrancan de la Justicia y otros de los acreedores; de manera, señor Presidente, que hay muchas personas que desaparecen voluntariamente. La estadística chilena demuestra que más de dos mil 500 personas en una población entre 10 ó 12 millones de habitantes, desaparece cada año en nuestro país. Esto desde hace mucho tiempo, la estadística que yo estoy dando es de los años 69, 70, 71. Cuando el gobierno chileno

dice "no tengo antecedentes", inmediatamente se produce la duda, no tiene antecedentes, ¡ah! Está preso o muerto. Pero, señores, simplemente, no tiene antecedentes. Qué contestaría el gobierno sueco; me diría no tiene antecedentes; si no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes. Lo mismo me podría contestar cualquiera de los países democráticos que aquí están representados: no hay antecedentes. Además, se producen cosas muy curiosas, se pregunta por una persona con un nombre y se contesta, como en el caso del señor Lagos, que lo vimos en los foros, aquí en la sala de Naciones Unidas y cuando informamos sobre él, se nos dice que es otro señor Lagos; en Chile debe haber cientos de personas que se llaman Ricardo Lagos, de manera que existe imposibilidad de hacer una investigación, a menos que se proporcionen mayores antecedentes sobre la persona. Además de las circunstancias corrientes, hay otras anormales. En la actualidad el MIR y el PC han acordado pasar a la clandestinidad, por ello es que mucha gente ha desaparecido, no porque se haya muerto o esté detenida, ha desaparecido simplemente, porque ha pasado a formar parte de un movimiento clandestino...".

La presentación de Diez fue rápidamente reproducida en Chile y *El Mercurio* informó que en ella "se puntualiza que se repiten personas en una misma lista con diversos nombres; 153 no tienen existencia legal y se trata de nombres supuestos o inventados, según el gabinete de identificación; 64 se encuentran legalmente muertas en su casi totalidad en los días que siguieron al 11 de septiembre de 1973 como consecuencia de los enfrentamientos; 7 personas estuvieron asiladas en diversas embajadas en Santiago; 12 de los desaparecidos tenían decretos de abandono o expulsión del país; 8 se encontraban detenidas; 6 fueron puestas en libertad y 7 fueron ubicadas en sus lugares normales de trabajo, sin jamás haber sido detenidas".

Dos casos, el de Joel Huaiquiñir Benavides, militante del PS, y el de Sergio Daniel Tormen Méndez, seleccionado chileno de ciclismo, muestran con meridiana claridad lo que ocurría en esos años. El primero, miembro del comité central de su partido, fue detenido el 27 de julio de 1974 por agentes de la DINA y existen testigos, entre ellos la ex militante socialista y posterior agente de seguridad, Luz Arce, que lo vieron con vida en Villa Grimaldi, un centro de detención y torturas del organismo represivo.

El ministerio del Interior de la época, cuando fue

consultado por la Corte de Apelaciones por un recurso de amparo presentado por familiares del desaparecido, informó que Hualquiñir habría sido detenido pero posteriormente puesto en libertad. Sergio Tormen, por su parte, fue apresado el 20 de julio de 1974 y quince días después el Jefe de Zona en Estado de Sitio, también al ser consultado por la Justicia, confirmó su detención. El matutino *El Mercurio* publicó el 21 de noviembre de ese año que Tormen había quedado en libertad. Ni Hualquiñir ni Tormen han sido hallados. Sobre ambas personas el gobierno chileno dijo en la ONU, a través del embajador Sergio Diez, que carecían de existencia legal.

Por ello, quizá, más otras tantas mentiras, es que la ONU no se dejó engañar y condenó al gobierno de Pinochet por 95 votos contra 11 en la asamblea anual.

La ofensiva oficialista no se detuvo en su intención de desfigurar la realidad y echar un manto de dudas sobre la real situación de los detenidos desaparecidos. El 13 de noviembre de 1975, tres días después que Sergio Diez presentara la versión gubernamental de los hechos en la ONU, el vespertino *La Segunda* volvió a la carga con un título sugerente: "Al descubierto otra conjura internacional: los 119 desaparecidos".

Según el periódico, la nómina de "presuntos" desaparecidos, elaborada por el Comité Pro Paz y "enviada a organismos internacionales controlados por el marxismo", había servido de "base para tejer en torno a la situación de los derechos humanos una de las más sórdidas y tenebrosas historias de la conjura exterior". *La Segunda*, esta vez, aseguró que tanto los recursos de amparo como las listas fueron parte de una campaña porque, entre los 119, figuraban cinco personas que habían sido ubicadas trabajando "tranquilamente" en sus lugares de trabajo.

Días después, el 26 de noviembre, el Comité Pro Paz demostró fehacientemente que nombre alguno de los desaparecidos en el vespertino de la cadena *El Mercurio*, el inefable diario *La Segunda*, figuraba en las presentaciones judiciales o en las publicaciones fantasmas de Buenos Aires y Curitiba. El montaje de prensa, entonces, no prosperó.

Muchos años después, en marzo de 1991, la Comisión Verdad y Reconciliación aseguró que las 119 personas que aparecieron en Buenos Aires y Curitiba fueron detenidos, vistos en algún centro clandestino de la DINA, sufrie-

ron torturas y, seguramente, terminaron siendo ejecutados por los agentes de ese organismo. La mayoría de ellos aún figura en la lista de los chilenos detenidos desaparecidos durante la dictadura. Un centenar eran hombres y sólo 19 mujeres. El 80 por ciento tenían menos de 30 años y, en su conjunto, dejaron 91 hijos que todavía exigen que alguien les explique lo ocurrido.

IX

La Fase Dos

"...representantes de todos los países miembros de la Organización Cóndor se reunieron en Buenos Aires entre el 13 y el 16 de diciembre de 1976 para hacer un balance de las actividades pasadas y discutir planes para el futuro. El ítem principal de la agenda fue la discusión y planificación de operaciones de guerra psicológica dirigidas contra grupos izquierdistas y extremistas en los países miembros..."

Extracto de un documento desclasificado de la CIA.

En julio de 1976, el entonces coronel Contreras le entregó una medalla a su par de Inteligencia paraguayo, Benito Guanes Serrano, en la que se podía leer: "en recuerdo de la adhesión del Paraguay a la Operación Cóndor". ¿Qué acción habrá realizado el paraguayo para merecer tan alta distinción?

Según Robert Scherrer, agregado legal de la embajada norteamericana en Buenos Aires en la década del 70, un informante de la inteligencia argentina le confió que la fase dos de la Operación Cóndor implicaría "misiones de ejecución de militantes de la izquierda latinoamericana en países del continente, con el objeto de reducir las posibilidades de que miembros de un movimiento se radicaran, en su huida o exilio, en países del área".

Scherrer, en realidad, se desempeñaba en esos años como agente especial del FBI en la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El 16 mayo de 1975, viajaba en bus de Buenos Aires a Asunción, el sociólogo del MIR, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, alias el Trosko, acompañado de el abogado argentino, Amílcar Santucho, hermano del fundador del ERP.

Ambos portaban documentación falsa. Santucho a nombre de Juan Montenegro y Fuentes bajo la chapa de Ariel Donarse Ledezma. Fueron detenidos por la policía paraguaya y trasladados de urgencia a la capital del país.

A la seguridad guaraní, desde el primer momento, no le cupo duda alguna que tenía entre sus manos a dos dirigentes de primer nivel. Tanto, que el tema fue motivo de comentario, por parte del jefe del departamento de Investigaciones Pastor Coronel, ante representantes de los ejércitos de Brasil y la Argentina.

En su alocución, el jefe de policía dijo que ambos detenidos eran "jerarcas de la izquierda internacional radicalizada" y que fueron sorprendidos "cuando trataban de ingresar al Paraguay con documentación falsa". Coronel aseguró que, tanto Santucho como Fuentes, tenían la intención de trasladarse a otros países americanos, hasta llegar a París, ciudad en la que tenían fijada una dirección para un contacto. Ese lugar, contó Coronel a sus colegas, resultó ser, cuando se la dieron a las autoridades francesas, el domicilio en Francia de "el famoso terrorista Carlos".

El jefe de la Policía paraguaya ante sus colegas, sin ningún pudor, se adjudicaba un hecho que había ocurrido en París, el 27 de junio de 1975, cuando un trío de inspectores de la DST francesa, llegó de casualidad, por una pista que surgió en El Líbano, hasta el departamento donde se alojaba el famoso terrorista Ilich Ramírez Sánchez. En la oportunidad "Carlos", efectivamente, escapó luego de matar a dos agentes, herir a otro y asesinar a la persona que supuestamente lo había traicionado. "Saqué mi pistola. Disparé primero contra Donatini, porque estaba sacando la suya. Tenía la reputación de ser rápido. Yo lo fui más. Lo alcancé en la sien izquierda. Luego disparé a Doubs entre los ojos. Me volví para tirar contra Herranz. Una de las mujeres, Albaida, se cruzó en mi línea de fuego. La aparté a un lado y le di a Herranz en la garganta. Michel era el único que quedaba en pie. Estaba encogido a un lado, cubriéndose la cara con las manos. Su miedo me dio rabia. No había ni siquiera intentado ayudarme. Me había traicionado. Me acerqué a él, me quedé delante de él y le disparé entre los ojos. Agarré la maleta y, antes de salir de la habitación, disparé de nuevo a Michel, tendido en el suelo... esta vez en la sien izquierda...", relató con lujo de detalles, el propio "Carlos" al escritor David Yallop, el episodio del cual la policía paraguaya quería apropiarse.

El tema planteado por Coronel, sin duda y a pesar del invento sobre "Carlos", interesó a los agentes de otros países porque, de acuerdo a cartas encontradas posteriormente, es un hecho que un militar argentino, de nombre Osvaldo, interrogó a uno de los detenidos. Ello, porque la caligrafía de las anotaciones que se hicieron de las declaraciones de Fuentes en Paraguay coincide con una carta que recibió Guanes Serrano de un militar argentino que firmó, únicamente, como Osvaldo. Si bien Santucho, por su parentesco con el líder del ERP, era importante, aún lo era más el chileno, a quien la DINA lo sindicaba como un correo de la JCR que se relacionaba directamente con Edgardo Enríquez.

Su detención, entonces, puso en marcha un siniestro sistema internacional de comunicaciones en el que participaron argentinos y chilenos, también los paraguayos y, según la Comisión de Verdad y Reconciliación, personeros de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, quienes mantenían informada a la Policía de Investigaciones de Chile del resultado de los interrogatorios.

"Me he enterado, decía una carta de la oficina de asuntos legales de la representación de los Estados Unidos en Argentina, que el sujeto citado es ciudadano chileno y miembro de la (sic) MIR. El fue detenido el día 17 de mayo de 1975 en Asunción, Paraguay, luego de entrar al país ilegalmente de Argentina, portando un pasaporte costarricense número 142302/74 bajo la identidad de Auriel Nodarse Ledesma... según información suministrada por el sujeto durante varios interrogatorios por parte de la policía de la capital en Asunción, él admitió que es miembro de la Junta Coordinadora y estuvo actuando como correo para dicha agrupación...".

La carta, que forma parte de los miles de documentos que el gobierno de los Estados Unidos desclasificó el 30 de junio de 1999, estaba fechada el 6 de junio de 1975, apenas dos semanas después de la detención de Fuentes, y era dirigida al entonces director de la Policía de Investigaciones de Chile, el general Ernesto Baeza Michaelsen, a través del inspector Jaime Vásquez Alcaíno quien, en ese año, era jefe de Interpol en Santiago.

De acuerdo a la información del ex agente Enrique Arancibia Clavel, en un memo secreto de agosto de 1976, el coronel José Osvaldo Riveiro Rawson, viajó desde Asun-

ción, ciudad en la que se encontraba, directamente a Santiago. Es probable, entonces, que haya sido Riveiro quien interrogó a Fuentes y luego se dirigió a Chile para contarle sus logros al jefe de la DINA.

Arancibia Clavel dice, textualmente, que por "la inquietud que tiene por saber de las últimas novedades de la Junta Coordinadora Revolucionaria, caset de microfilms y los últimos operativos contra el MIR, (Riveiro) posiblemente viaje el próximo martes a Santiago directamente desde Asunción. El pasaje de ida lo anotaré en mi cuenta corriente de Lan".

Era un hecho que Riveiro, por la urgencia en viajar a Chile y porque los pasajes le fueron cancelados por el agente de la DINA en Buenos Aires, tenía una misión extremadamente importante para la Inteligencia chilena.

Fuentes, por su relación con Enríquez, era de vital importancia para los agentes chilenos. Fue llevado desde Asunción hasta la Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención y torturas, donde funcionaba además la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA.

A este cuartel, según testigos, el chileno del MIR llegó con sarna en todo su cuerpo y malherido por las torturas a las que fue sometido en la capital paraguaya. Los apremios sistemáticos continuaron en Santiago. También las pesquisas para dar con el paradero de otros miembros del MIR en Buenos Aires. Ello quedó de manifiesto en dos comunicaciones de 1975, realizadas por Enrique Arancibia Clavel desde Buenos Aires y que le fueron encontradas al chileno en su casa y en su oficina del Banco del Estado. La primera fue entregada por Vicente, la chapa del coronel Víctor Barría, a Luis Gutiérrez, el seudónimo del jefe del departamento Exterior de la DINA: "Luis Felipe Alemparte (Arancibia Clavel) comunica antecedentes obtenidos por comandante José Osvaldo. Pollo Enríquez (Edgardo) ubicado en Baires. Se esperan novedades. Claudet sería Sotomayor. Sujeto es RIP. Enviar foto. Ultimo procedimiento en 97 microfilms. Ultimas instrucciones de la JCR aparecen involucrados Fuentealba y Leighton. Verificar quién tenía acceso del traslado del Trosko (Fuentes Alarcón) ya que en París se sabía, aparece alguien de la agencia informando. En cancillería verificar a Enrique Berstein por problemas del mar y caso sionista. Estaría involucrado en planes JCR. Si no hay novedades caso Pollo Enríquez comandante José Osvaldo viajaría martes o miér-

coles próximo llevando material. Agremil (Osvaldo Hernández) fue informado por José Osvaldo. Si comandante viaja confirmaré. Ampliaré info por memo”.

El llamado “Claudet” era el chileno-francés Jean Ives Claudet Fernández, secuestrado del Hotel Liberty de Buenos Aires el 1° de noviembre de 1975 y quien, como otras tantas personas, continúa desaparecido. Este, militante del MIR procesado tras el golpe militar y que posteriormente se radicó en Buenos Aires luego de un corto exilio en Francia, se encontraba investigando lo que le había ocurrido a Jorge Fuentes.

Claudet, en París, había desarrollado tareas de Inteligencia para su partido y contribuido a su reorganización. Desde marzo del 74 trabajaba estrechamente con Edgardo Enríquez en la JCR. La DINA, que estaba interesada en su captura, tras la detención de Fuentes, no escatimó esfuerzos para lograrla. Distribuyó fotografías y puso en marcha un operativo para secuestrarlo, en plena coordinación con agentes argentinos, con la clara intención de eliminarlo.

La Comisión de Verdad y Reconciliación se convenció de que su desaparición fue obra de agentes del Estado y estimó que existían “graves presunciones” de que fue ejecutado en la Argentina con la participación de la DINA.

Algunos días después, Arancibia Clavel envió otro memo, con fecha 17 de noviembre de 1975 y con el número 73, que grafica la actividad y nivel de coordinación que existía: “Como lo informé en el télex enviado a través de Vicente mantuve una reunión con Rawson (Osvaldo Riveiro) en el que me informó de lo siguiente: últimos procedimientos cayó un correo de la JCR francés aparentemente de apellido Claudet. Dentro de sus pertenencias se encontraron 97 microfilms con las últimas instrucciones desde París. Por los detalles se presume que el tal Claudet podría ser Sotomayor. Después del interrogatorio del tal Claudet se logró determinar sólo que era correo de la JCR, se le tomaron solamente fotografías. Claudet ya no existe. Una de las misiones de Claudet era investigar la situación del Trosko con Paraguay. En París estaban informando de su traslado desde Paraguay a Santiago e incluso mencionaron a la agencia o a un miembro de la misma que habría informado. Esto no está muy claro en el documento. Considerando que es bastante importante esta situación al igual que la posible localización del pollo

Enriquez, le solicité a Rawson que viaje a Santiago lo cual lo concretará mañana o el miércoles. Avisaré. Debido al mal entendido con respecto a la invitación al Congreso el día 26 del presente, ésta será una oportunidad para aclararla. Incluyo sobre a don Elías. Necesito que me informen a la brevedad sobre los supresores de ruido. Para Campos: Ferreira está en la provincia de Córdoba, importante porque está la fábrica más grande de la Fiat argentina. Las solicitudes de información 027-119 y 027-121 fueron entregadas a Rawson. La solicitud de información sobre Carlos Gerardo Apízar Salas fue entregada al mismo. Sobre el funcionario de la policía federal Mario Aguila, es custodio del servicio, puedo informar que es un hombre en comisión de servicio bajo las órdenes de Rawson. Sirvió de correo y se entrevistó con don Elías. El coronel Hernández (Osvaldo, agregado militar chileno en Buenos Aires), quien lo contactó inicialmente, pidió información a nuestra agencia sobre el desempeño de la misión de este individuo. Cualquier anomalía por favor avisar. Que quede claro que Aguila está a las órdenes de Rawson. Las solicitudes de información entregadas por Claudio del BINT fueron solicitadas al Batallón 601 de Mendoza. Necesito información sobre Juan Carlos Delso Cornejo. Necesito a la brevedad últimas declaraciones del Trosko”.

Noviembre del 75 fue un mes movido en Buenos Aires. Otra prueba de la colaboración de los argentinos fue la detención de Roberto Pizarro, ex ministro del gobierno de Eduardo Frei, quien fue arrestado y torturado en esa fecha en la Argentina. Pizarro, economista del Partido Socialista y ministro de Planificación hasta marzo de 1999, contó al diario “La Tercera” que el 25 de noviembre de ese año, estando refugiado en Buenos Aires, “cuatro policías de Coordinación Federal derribaron a patadas la puerta de mi casa en el barrio de Caballito, cerca de la Plaza Irlanda. Mi esposa, Alicia Gariazzo, y yo fuimos tratados con suma violencia, nos golpearon, destruyeron la casa y robaron dinero y las escasas cosas de valor que teníamos. Amordazados nos llevaron a las oficinas centrales de la Policía argentina donde nos retuvieron durante diez días, a pan y agua, con golpes y amenazas persistentes”.

Al consultarle a sus custodios el motivo de la detención le respondieron: “Eres buscado a petición de la DINA y serás enviado de inmediato a Santiago. Podemos tener

muchas diferencias con el Estado chileno, pero ninguna en el entendimiento y colaboración para aplastar a terroristas, marxistas, izquierdistas y quienes los ayudan”.

Pizarro y su mujer fueron llevados a una cárcel, donde estuvieron todo un año, hasta que los expulsaron a Londres. Según el ex ministro de Frei, la razón por la que no se los ejecutó, como a otros chilenos detenidos en Argentina, cree que se debió a que “dos ciudadanos británicos fueron casualmente detenidos en la misma redada y los militares argentinos no querían tener un enfrentamiento con Londres”.

El ex ministro tuvo suerte. No así Fuentes Alarcón quien, pocos días después que detuvieron a Pizarro, fue entregado a agentes de la DINA. Guanes Serrano, para desligar responsabilidades en el destino que deparara al chileno, oficializó su expulsión del Paraguay en enero del 76.

La coordinación, ahora llamada Cóndor, había sido ampliada. La DINA chilena no sólo trabajaba con el batallón 601 de la Argentina, también lo hacía con los paraguayos y los uruguayos. Los bolivianos tampoco se quedaron atrás. Pocos lugares en el Cono Sur, entonces, eran seguros para los que se oponían a las dictaduras.

Los meses siguientes serían de cacería.

El 3 de abril de 1976, en Mendoza, también en un operativo conjunto de la Policía de ese país con agentes de la DINA, fueron secuestrados en plena vía pública los dirigentes chilenos Luis Muñoz Velázquez, Juan Humberto Hernández Zaspé y Manuel Jesús Tamayo Martínez, todos del Partido Socialista, quienes habían abandonado Chile durante el año 1974 por razones políticas. Los tres, que además eran amigos, se desempeñaban laboralmente en la empresa Modernflood y se encargaban, en los momentos en que se los detuvo, de reorganizar la Coordinadora Socialista. Velázquez, Hernández y Tamayo, según diversos testimonios, fueron conducidos por tierra hasta Santiago y reclusos en la Villa Grimaldi desde donde sus rastros se perdieron para siempre.

Lo mismo ocurrió días más tarde, pero en Buenos Aires, con los estudiantes del MIR Frida Elena Laschan Mellado, chilena y su marido argentino, Miguel Angel Athanasiu Jara. La pareja, tras el golpe militar y por temor a la represión en Chile, decidió buscar refugio en la Argentina. Ambos, más el hijo recién nacido, Pablo Athanasiu Laschan, desaparecieron sin dejar señales.

Algo similar a lo de Fuentes Alarcón y a los tres socialistas de Mendoza, le ocurrió en Bolivia a la ciudadana argentina Graciela Rutila Artés, detenida el 2 de abril de 1976 en Oruro junto a su hija Carla de sólo 9 meses. La joven fue interrogada por oficiales bolivianos y, según consta en un radiograma del ministerio Interior de ese país, "puesta en la frontera" y entregada a las autoridades argentinas el 29 de agosto de 1976. Ambas fueron vistas en Automotores Orletti y la niña quedó en poder del agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo. Durante su cautiverio en Bolivia, según denunciara su madre a la Conadep, Rutila Artes "fue horriblemente torturada por una comisión de la Policía Federal Argentina" que se hizo presente en el país altiplánico.

Carla, posteriormente, reconoció su foto en una marcha de las Abuelas de la Plaza de Mayo y pudo reencontrarse con su verdadera familia.

Lo mismo le pasó al contador chileno y militante del PS, Julio del Tránsito Valladares Caroca, detenido en Bolivia por la Dirección Nacional de Orden Político el 2 de julio de 1976. Recluido, sin proceso, en el centro de detención "Panóptico" de La Paz, según el memorándum n° 645 del Ministerio del Interior de Bolivia, el chileno fue entregado el 13 de noviembre de ese año, conjuntamente con otros compatriotas, a uniformados de su país en la frontera de Charaña sin que mediara proceso de extradición o participación alguna de los tribunales de Justicia.

Valladares, de 28 años, había trabajado durante el gobierno de Allende como funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y llegó a desempeñarse como técnico en regadío. Debido a ello, obtuvo una beca de especialización para estudiar ingeniería agrícola en Cuba, hacia donde partió en enero de 1972. El golpe del año siguiente lo sorprendió en este último país, por lo que se vio imposibilitado de regresar a Chile. Viajó a Bolivia y ahí se acogió al estatuto jurídico de refugiado, obteniendo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pese a esto, la policía boliviana, a instancias de la DINA chilena, lo detuvo.

Mientras estuvo en la cárcel boliviana, Valladares fue visitado por el reverendo Roberto Leibrecht, párroco de la Iglesia "Cristo Rey", dependiente del arzobispado de La Paz. El sacerdote escribió a Chile, en varias oportunidades, a la madre del detenido, Leontina Caroca Meza, para soli-

citarle que agilizara las gestiones por la libertad de su hijo. El joven fue trasladado a Chile. Una vez en su país, sin embargo, su madre no lo pudo ubicar.

Con fecha 7 de diciembre de 1976, Leontina Caroca interpuso un recurso de amparo en favor de su hijo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual ingresó con el rol 1068.

En su presentación, la madre del Valladares narró pormenorizadamente la situación que afectaba a su hijo y refirió que el padre Leibrecht, en carta fechada el 18 de noviembre de ese año, le comunicó que Valladares había sido conducido a Chile cinco días antes. Agregaba, asimismo, que sólo mediante un proceso legal de extradición pudo solicitarse el traslado de su hijo y que obviamente las facultades del Estado de Sitio no podían aplicarse a quien vive fuera del país y es ingresado a la fuerza a Chile.

La mujer, junto con hacer hincapié en que el régimen militar violaba sus propias leyes, pedía a los jueces que oficiaran a la cancillería para que solicitara información a los bolivianos sobre el memorándum 645, a la Policía Internacional para que dijera en qué calidad su hijo había ingresado al país, a la DINA para que señalara la participación de su personal en el arresto e incomunicación de su hijo y al ministerio del Interior para que informara si se encontraba detenido. La Corte sólo accedió a esta última solicitud.

El 24 de diciembre de 1976, el oficio confidencial N° 5887 del ministerio del Interior, certificó que Julio Valladares Caroca estuvo detenido por infracción a las disposiciones del Estado de Sitio, en virtud del decreto exento N° 2348 del 21 de noviembre de 1976, pero que había sido dejado en libertad mediante otro decreto, el N° 2349, al día siguiente.

Tres días después la Corte rechazó el recurso de amparo.

Un mes más tarde la revista *Qué Pasa*, en su número 300, señaló que "este personaje (por Valladares) no se encuentra ni se ha encontrado nunca detenido" y que, según el ministerio del Interior, aseguraba la revista, pudo tratarse de un alcance de nombres porque el que sí estuvo detenido fue el ciudadano Julio Valladares Valladares, quien fue puesto en libertad durante el mes de noviembre.

En lista alguna de los liberados en ese mes, sin em-

bargo, aparece dicho nombre. Ello motivó a la madre del desaparecido a solicitarle al director del semanario que publicara una carta de su autoría en la que desmentía los conceptos vertidos por la revista. La misma nunca apareció.

Julio Valladares Caroca, al igual que su hermano Oscar Enrique, quien fuera miembro del equipo de seguridad del presidente Allende y detenido el mismo 11 de septiembre de 1973, aún está desaparecido y se ignora los nombres de las personas que participaron en su arresto.

Una situación similar, pero en Montevideo, vivió la familia argentina compuesta por el matrimonio Claudio Ernesto Logares y Mónica Sofía Grispon más la menor Paula Eva Logares. Todos ellos fueron secuestrados en Uruguay el 18 de mayo de 1978. Si bien aún se ignora el paradero de los mayores, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron ubicar a la menor en poder de un ex comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien la había inscrito como hija propia, dejando de manifiesto que la operación fue hecha en el marco de la colaboración entre las fuerzas de seguridad.

No tuvo mejor fortuna el músico mirista Luis Enrique Elgueta Díaz. El joven dejó Chile el 2 de julio de 1976 y sólo le entregó la dirección, donde se alojaría en Buenos Aires con su conviviente argentina, a Sergio Fuenzalida, un amigo de toda su confianza. Días después, este último fue detenido por la DINA, junto a otras seis personas, en Santiago. El 27 de julio agentes chilenos, con la compañía de rigor, se hicieron presentes en el domicilio del refugiado y lo secuestraron a él, a su esposa y a la hermana de esta. Tanto Elgueta, como Fuenzalida y las demás personas detenidas, figuran en la lista de desaparecidos.

Igual suerte corrieron, en julio de 1976, otros chilenos que residían en la Argentina. Miguel Orellana Castro, un mirista que vivía exiliado en Cuba y que se dirigió a Buenos Aires a una reunión política e ingresó clandestinamente a ese país, desapareció para siempre. Lo mismo le ocurrió al matrimonio compuesto por el médico argentino Guillermo Tamburini y la socióloga chilena María Cecilia Magne Ferrero. Él del MIR y ella del Mapu, fueron secuestrados de su departamento en la madrugada del 16 de julio por efectivos del Ejército argentino. Si bien no se pudo determinar en estos últimos tres casos la participación de los agentes chilenos, es un hecho de la causa que la detención de estas personas interesaba especialmente a los servicios del régimen de Pinochet.

Como también la del matrimonio chileno formado por Matilde Pessa Moys y Jacobo Stoulman Boertnik. Ambos fueron detenidos en Ezeiza, el 29 de mayo de 1977, antes de pasar por el control de Policía Internacional cuando llegaban desde Santiago. Las razones del secuestro aún son un misterio, incluso el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo relacionar el caso con la actuación de los servicios chilenos, pero las motivaciones estarían íntimamente vinculadas a las actividades financieras de Stoulman y una eventual relación de este con el aparato económico clandestino del PC chileno.

La coordinación era, entonces, una realidad y los jefes de Inteligencia no deben haber desaprovechado ese importante canal informativo-operativo que proporcionaba un arma nueva para continuar las llamadas guerras sucias.

Si bien es difícil cuantificar la coordinación, especialmente la que hubo entre Uruguay y la Argentina, el juez Garzón estima en casi un centenar los casos de chilenos que fueron detenidos en el extranjero a pedido del régimen de Pinochet.

Para el magistrado español, el ex dictador chileno "aparece como uno de los máximos responsables de la organización y liderazgo, en coordinación con otros responsables militares o civiles de otros países, entre ellos, y, en forma principal Argentina, de la creación de una organización internacional que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinato y/o desaparición de numerosas personas, incluyendo ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y otros Estados, en diferentes países con la finalidad de alcanzar los objetivos políticos y económicos de la conspiración, exterminar a la oposición política y múltiples personas por razones ideológicas...".

Los grupos de tarea, gracias a la coordinación y entendimiento entre los servicios de seguridad, no tenían límites físicos y tampoco morales. Podían actuar en cualquier parte y de la manera que se les ocurriese. Incluso, dicha impunidad, les hizo pensar que podían viajar más allá del continente. Así entró en funcionamiento la tercera fase de la Operación Cóndor.

X

Los papeles

"Cada vez se escucha más acerca de la Operación Cóndor en el Cono Sur. Oficiales, militares que antes habían sido muy reservados al respecto, comienzan a hablar abiertamente del tema. Una observación favorita es que "uno de sus colegas está fuera del país porque está volando como un cóndor".

Un informe de Inteligencia norteamericano desclasificado en 1999.

En septiembre de 1996 el gobierno de los Estados Unidos desclasificó documentos relacionados con el Cóndor y se supo que la CIA, ya en 1976, sabía de la existencia de esta coordinación de los organismos represivos de su patio trasero. "Operación Cóndor, decía una comunicación interna de la CIA fechada el 28 de septiembre de ese año, es el nombre en código para el intercambio y almacenamiento de información de inteligencia concerniente a los así llamados izquierdistas, comunistas y marxistas, que estableció recientemente la cooperación entre servicios de Inteligencia en Sud América para eliminar actividades terroristas marxistas en el área". Para la agencia norteamericana, en ese momento, Chile era "el centro de la Operación Cóndor" y esta incluía a la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

En este documento reservado, enviado casi una semana después del asesinato en Washington del ex canciller y ministro de Defensa de Salvador Allende, Orlando Letelier, y seguramente íntimamente relacionado con ese hecho, la CIA menciona la tercera fase de la operación como "la más secreta" y asegura que esta incluye "la formación de equipos especiales de los países miembros para viajar a cualquier país no miembro a fin de realizar acciones, incluso asesinatos, contra

terroristas o quienes apoyan organizaciones terroristas de los países miembros de la Operación Cóndor”.

De acuerdo a la información que manejaban los agentes norteamericanos, si la Inteligencia de un país del Cóndor localizaba en Europa a una persona vinculada con el terrorismo, por ejemplo, un equipo especial era enviado para vigilarlo y cuando finalizaba su tarea, otro grupo “ejecutaba la sanción contra el objetivo”. Ambos equipos, para el desarrollo de sus tareas, contaban con la colaboración de los países miembros quienes otorgaban, en caso de necesitarse, la respectiva documentación falsa.

La desaparecida revista *Apsi* publicó en la edición número 145, un artículo titulado “Maten a Altamirano”, que relata antecedentes extremadamente interesantes sobre el accionar de la dictadura chilena en el exterior. “Carlos Altamirano se hallaba viviendo en Berlín Oriental en 1975. El gobierno de la RDA le había concedido autorización para fijar su residencia allí y había puesto a disposición del secretario general del PS chileno una infraestructura de seguridad altamente sofisticada, que el PS -a su vez- puso a cargo de un integrante del GAP de Salvador Allende... Aun así, en más de una ocasión el automóvil de Altamirano fue perseguido por otro vehículo en las calles de la capital de la RDA. Nunca se supo quién fue”, relató el semanario. Y agregó otra historia que ocurrió en un viaje que el dirigente chileno hizo desde Berlín a París a comienzos del año 75: “Al aterrizar en Orly, una voz nombró a Carlos Altamirano por los parlantes para que permaneciera en su asiento por algunos minutos más. El dirigente socialista no dominaba el francés, pero comprendió el mensaje. El avión se desocupó. Sólo entonces subieron a bordo dos individuos que se identificaron como funcionarios de la Sureté francesa, enviados por el prefecto de París. No hubo muchas explicaciones más. Altamirano se resignó. Bajó del aparato y, con sus dos acompañantes, subió a una limosina negra de la policía. El vehículo enfiló la carretera hacia París, pero se desvió y tomó un recorrido distinto. El trayecto culminó en la casa de su hijastro, Julio Donoso, donde estaba previsto que se alojara (...) Altamirano no supo hasta poco tiempo más tarde que, en la autopista de Orly a París, lo esperaba un grupo de la DINA para disparar un lanzagranadas contra el vehículo en que debió haber ido, de no mediar la protección de la

seguridad francesa. El propio prefecto de París se lo comunicó así”.

Poco tiempo después, otros agentes de Manuel Contreras, esta vez encabezados por el norteamericano Michael Townley, intentarían atentar contra Altamirano pero ahora en suelo mexicano. La idea era matarlo mientras asistía a la tercera sesión de la Comisión Internacional de Investigación sobre los crímenes de la Junta Militar en Chile.

De acuerdo a la versión de los periodistas norteamericanos John Dinges y Saul Landau, Townley reveló que había recibido órdenes del entonces coronel Contreras para realizar su primera misión para la Dina en ciudad de México. “Contreras me dijo que se realizarían algunas reuniones de los derechos humanos a las que asistirían miembros de los partidos Comunista y Socialista de Chile. El general Contreras, que quería eliminar a algunas de las personalidades que asistirían a la reunión, entre ellos Carlos Altamirano y Volodia Teitelboim, me ordenó ponerme en contacto con exiliados cubanos anticastristas y pedirles ayuda...”, relató Townley. Este, según la ex militante socialista y luego agente de la DINA, Luz Arce, frecuentemente visitaba el cuartel general del organismo y acudía a reuniones con Eduardo Iturriaga, Pedro Espinoza y Vianel Valdívieso. “O sea, aseguró Luz Arce, no sólo era agente de la DINA, sino que además tenía acceso directo al nivel más alto”.

Townley, cumpliendo con las órdenes de Contreras, viajó directamente a los Estados Unidos acompañado de su esposa, la chilena Mariana Callejas, con la intención de contactarse rápidamente con miembros de la comunidad de cubanos exiliados en Miami que dedicaban su vida al terrorismo y que lo ayudarían en la misión encomendada por el jefe de la Inteligencia chilena. Así el norteamericano ultraderechista pudo conocer a Felipe Rivero, Guillermo Novo, José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, todos militantes anticastristas, del Movimiento Nacionalista Cubano, quienes le consiguieron documentación falsa, explosivos y mechas e, incluso, uno de ellos, Virgilio Paz, lo acompañó a México. La misión no pudo concretarse porque, cuando el grupo terrorista llegó a la capital azteca con la clara intención de volar el lugar donde se realizaba el encuentro, la reunión había terminado y los principales dirigentes habían retornado a los países en los que residían.

Callejas, mientras tanto, volvió a Chile, pero su marido, acompañado de Virgilio Paz, con la clara intención de organizar un grupo operativo de carácter multinacional y siguiendo las instrucciones del jefe de la DINA, Manuel Contreras, se trasladó a España donde comenzó a frecuentar los círculos fascistas europeos. Allí estrechó contactos con el italiano ultraderechista, considerado uno de los 10 jefes de las Tramas Negras, Stefano Delle Chiaie, a quien Townley conocía desde Chile.

El líder neofascista habría estado en Santiago después del golpe militar con el seudónimo de Mario Fiori y, según los antecedentes entregados por el propio Townley, sostuvo una reunión en la capital chilena el 29 abril de 1974 con el general Pinochet y el entonces coronel Contreras. En ella los altos militares habrían "contratado" los servicios del italiano a cambio de la cobertura estatal que requería su organización.

Según los manuales de la propia Escuela de las Américas, creada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos, los terroristas buscan el sostén de un Estado porque este les garantiza "desde apoyo moral y diplomático hasta asistencia material por medio de armamento, entrenamiento, fondos y santuario". "El terrorismo apoyado por Estados, asegura el documento de instrucción, casi siempre es conducido clandestinamente y los Estados terroristas siempre niegan la responsabilidad por actos terroristas específicos. Los Estados terroristas utilizan sus agencias de inteligencia y seguridad u otros intermediarios, y los terroristas apoyados por Estados tienen acceso a material más avanzado y letal que grupos independientes". Son, entonces, matrimonios por conveniencia.

Stefano Delle Chiaie, quien fue rebautizado con el nombre de "Alfa" en la estructura de inteligencia chilena, apenas se empinaba sobre el metro y medio de estatura y era, según algunos cronistas, un "organizador excepcional", especializado en ataques a sedes comunistas, profanación de cementerios judíos o la quema de edificios de los sindicatos. Huyó a España después que fracasara en su país el intento de golpe de Estado que, a comienzos de los 70, planificaron el llamado príncipe negro, Valerio Borghese, y la logia Propaganda Dos (P-2). La idea era derrocar el gobierno constitucional e instalar en su lugar una dictadura en Italia que impidiera el avance del Partido Comunista. Madrid, enton-

ces, se convirtió en refugio y centro de las actividades de los terroristas italianos conocidos como los "bombarderos negros". Los grupos fascistas iniciaron su actividad en la península itálica el 12 de diciembre de 1969 con un atentado contra la agencia del Banco de Agricultura de Milán, que dejó un saldo de 16 muertos y más de un centenar de heridos. Luego vino una seguidilla de actos terroristas, todos con un resultado alto de víctimas, hasta que la democracia italiana se unió contra los planes desestabilizadores del fascismo. Se produjo, entonces, la estampida a España. Para el Servizio Informazione Difesa, la principal unidad de Inteligencia de la península, no quedaron dudas de que tras los atentados estaba la mano de Delle Chiaie.

Al país que gobernaba con mano de hierro Francisco Franco llegaron, entre otros, además de Alfa, Eliodoro Pomar, Franco Freda, Elio Masagrande y Salvatore Francia, de los grupos Nuevo Orden, Vanguardia Nacional u Orden Negro quienes, en España, declararon públicamente la guerra contra el comunismo. En Madrid, además, los italianos estrecharon relaciones con el argentino José López Rega, quien acompañaba a su protector, Juan Domingo Perón, en su exilio español. Stefano Delle Chiaie, especialmente, era un asiduo visitante de las oficinas del argentino que, años más tarde, sería uno de los fundadores de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

De hecho cuando, en 1973, Perón volvió a su país y con él López Rega, este último lo hizo acompañado de un puñado de terroristas del viejo mundo. Los mismos, sin embargo, no estarían mucho tiempo en la Argentina y volverían, a los meses, a continuar su lucha en Europa. Se cree que la misión que cumplieron los terroristas en Buenos Aires fue participar en la masacre de Ezeiza, en junio de 1973, un episodio que, para el periodista Horacio Verbitsky, constituyó uno de los pasos fundamentales "de una tentativa inteligente y osada para aislar a las organizaciones revolucionarias del conjunto del pueblo, pulverizar al peronismo por medio de la confusión ideológica y el terror, y destruir toda forma de organización política de la clase obrera".

La relación con América del Sur y el contacto con la ultraderecha local, obviamente, quedaron marcados para siempre.

Alfa y Townley, que operaba indistintamente con los apellidos Wilson o Enyart en las misiones de la DINA

en el exterior, acordaron en 1975 realizar un trabajo conjunto.

Según Aldo Tisei, ultraderechista italiano, arrepentido posteriormente, la planificación del atentado contra el dirigente DC Bernardo Leighton, ex ministro del Interior de Eduardo Frei y exiliado en Roma tras el golpe militar, se hizo en Madrid.

El agente de la DINA, de acuerdo a una versión publicada en la revista *APSI*, le comentó "que en Roma vivía un exiliado chileno que representaba amenaza permanente de alianza de centro-izquierda, poniendo en peligro no sólo la victoria contra el marxismo en Chile, sino también la causa en Italia. La eliminación de Leighton, entonces, representaría un beneficio para la causa anticomunista". A cambio de su misión, la DINA entregaría a los neofascistas italianos las armas y el dinero que ellos requerían para sus operaciones".

A Stefano delle Chiaie la idea le gustó y Townley le aseguró que podía contar para su materialización con la ayuda de sus amigos anticastristas del llamado grupo Cero. Los neofascistas italianos serían los autores materiales pero Virgilio Paz se encargaría de que su grupo reivindicara el atentado para desviar la atención hacia ellos. Tanto la DINA, como las Tramas Negras, no estarían expuestas a represalias del gobierno italiano.

El 6 de octubre de 1975, un par de meses antes que se iniciara la reunión de Inteligencia en Santiago, el ex vicepresidente de Chile, Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, fueron gravemente heridos por la acción de pistoleros que, según los testigos, se movilizaron en un auto blanco. El dirigente DC fue alcanzado en la cabeza y la mujer en el pecho. Ambos sobrevivieron al ataque. Ello motivó, según Tisei, que los chilenos no cumplieran con la promesa de suministrar armas al grupo de Stefano delle Chiaie. Townley y Virgilio Paz huyeron de Italia. Recién el 8 de noviembre de 1975, el diario *La Segunda* informó que una organización anticomunista, denominada Cero e integrada por exiliados cubanos, reivindicó el atentado contra Bernardo Leighton y Anita Fresno por "las conexiones de la víctima con los servicios secretos cubanos y soviéticos". Según el comunicado, el grupo postergó la entrega de la información sobre su participación en los hechos para permitir que "los patriotas cubanos que cometieron el atentado" abandonaran Italia. La misma noticia de *La Segunda*,

había sido dada una semana después del atentado por *El Diario de Las Américas* de Miami. El gobierno de Pinochet, a pesar de ello, no se retractó de su declaración en la que condenó "en forma enérgica el uso del terrorismo con fines políticos" y no excluyó la posibilidad de que el acto fuera parte de la "virulenta campaña que en forma desesperada realiza el marxismo internacional contra Chile". Eduardo Iturriaga Neuman y Manuel Contreras Sepúlveda fueron condenados en Italia, años más tarde, por su responsabilidad en este atentado.

En noviembre de 1975, con motivo de los funerales de Francisco Franco, Stefano Delle Chiaie se reunió nuevamente, pero ahora en Madrid, con Pinochet y Contreras y, según ha trascendido, en ese encuentro obtuvo otro "convenio especial" que le daba la protección del país sudamericano a cambio de realizar en la Argentina y el Perú actividades de espionaje para las Fuerzas Armadas chilenas. Este encuentro fue confirmado por el propio general Contreras en el recurso de revisión que presentó su abogado, Humberto Neuman, ante la Corte Suprema el 23 de diciembre de 1997 y que, posteriormente, engrosó las pruebas que tiene el juez Baltasar Garzón contra el general Pinochet. Contreras, textualmente, señaló: "en España (...) a fines de 1975 el italiano Stefano delle Chiaie es recibido por Augusto Pinochet".

Michael Townley, por su parte, en una carta que envió a Gustavo Etchepare, su contacto en Santiago, también asegura que "hubieron (sic) reuniones entre él (Contreras) y Su Excelencia (Pinochet) y los italianos, en España, después que murió Franco".

¿No sabía el general Pinochet acaso, en noviembre de 1975, que su interlocutor italiano, conocido en círculos fascistas como "el pimpinela negro", era un terrorista de grueso prontuario? Al parecer, ello no importaba. Tampoco que fuera la persona que hubiera, sólo un mes antes, atentado contra la vida del ex vicepresidente chileno, el DC Bernardo Leighton y su esposa.

Uno de los documentos del departamento de Estado desclasificados en junio del 99, se refiere a lo que Townley sabría sobre el atentado contra Leighton. La información salió de un interrogatorio que la autoridades norteamericanas le hicieron al agente tras ser extraditado a los Estados Unidos. "De acuerdo a Bertinnetto (consejero de la embajada de

Italia en Washington), dice el documento, Roma tiene un reporte de su embajada en Santiago, en el que Townley asegura que el intento de asesinato de Leighton en Roma fue una operación de la DINA, policía secreta chilena, llevada a cabo por personal de Carabineros, la policía uniformada chilena. El Gobierno de Chile niega cualquier responsabilidad”.

Pinochet, en su corta estada en España, debió arreglar su agenda para encontrarse con Delle Chiaie y esta, en un viaje de apenas dos días, debe haber estado muy apretada. El general chileno viajó a Madrid a las 01:15 del 21 de noviembre y regresó al mediodía del lunes 24. Entre esas horas, descontando las que utilizó en el viaje, se reunió con el rey Juan Carlos I y la colectividad chilena residente, asistió a los funerales de Franco y dio una conferencia de prensa en la que señaló que en Chile no habían presos políticos sino “exiliados políticos internos” porque “aquellos bajo arresto y asignados a vivir lejos de sus hogares no son más de 500”.

Según el fiscal Eugene Propper, que investigó el atentado contra Letelier, el nuevo contacto de Alfa pasó a ser el entonces mayor de Ejército, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, jefe de la sección exterior de la DINA y quien, en 1965, realizó un curso en la Escuela de las Américas. Su departamento, de acuerdo a la versión del periodista Manuel Salazar, en el libro “Contreras: historia de un intocable”, surgió en abril de 1974 con una gran capacidad extraterritorial y con agentes operativos en varios países. “Sus misiones básicas, escribió Salazar, eran neutralizar a las personas consideradas enemigas del régimen militar chileno, organizar los viajes de altos funcionarios de gobierno y ejercer control sobre la red oficial en el exterior, es decir los funcionarios asignados a las misiones diplomáticas”.

Otros jefes que tuvo el departamento Exterior de la DINA, además de Iturriaga, fueron Juan Viterbo Chiminelli Fullerton quien, años más tarde, sería sorprendido en tareas de espionaje en Perú, y el general Carlos Parera Silva, el que luego de su paso por la Inteligencia se convirtió en juez militar. Sólo Manuel Contreras, sin embargo, y según Michael Townley, tenía atribuciones para ordenar una misión fuera de Chile y autorizar entrega de fondos o el reclutamiento de colaboradores para el sistema.

Para la seguridad chilena la posibilidad de contar con la experiencia de hombres como Delle Chiaie, fríos, extremadamente anticomunistas y con una gran experien-

cia en operaciones terroristas, era fundamental. Pero no era el único.

Ya en Chile, un ex nazi con orden de captura internacional por sus atroces crímenes de guerra, Walter Rauff, había sido rápidamente reclutado como "consejero secreto" de la DINA y, según el periodista argentino, Jorge Camarasa, se especializó en la revisión de listas de detenidos, la escucha de grabaciones de interrogatorios a los presos políticos o la derivación de los mismos a distintos campos de exterminio.

Uno de los lugares donde Rauff mandaba a sus prisioneros, asegura Camarasa en el libro "Odessa al Sur", era un establecimiento agrícola en el sur de Chile, a 340 kilómetros de Santiago, conocido como Colonia Dignidad. Allí, donde reside un numeroso grupo de alemanes, fueron torturados opositores al gobierno militar, recibieron instrucción algunos agentes de la DINA y se produjo la desaparición, entre otros, del chileno Alvaro Vallejos Villagrán.

Walter Rauff, teniente coronel de Arquitectura Militar y SS, junto a Adolfo Eichmann, diseñó durante la segunda guerra mundial los campos de concentración o de exterminio y las cámaras de gas. En mayo de 1945, cuando Alemania se rendía, el alto oficial -que se encontraba en Italia- cambió su uniforme repleto de medallas por el de un soldado raso y logró así huir de las tropas aliadas. Recién apareció en Ecuador, un año más tarde, portando una gran cantidad de oro que había sacado de las dentaduras y joyas de sus víctimas.

Posteriormente se radicó en el sur de Chile, Punta Arenas, donde se casó y fundó, además de una familia, una conservera de mariscos. En 1961, durante el gobierno de Jorge Alessandri, diversos países europeos solicitaron su extradición pero la Corte Suprema de Justicia consideró que se trataba de un "industrial chileno conocido" y que sus delitos habían prescrito. En 1973 la vida volvió a sonreírle cuando el gobierno militar le solicitó su colaboración para "administrar" un campo de prisioneros, en la Isla Dawson, que funcionó entre septiembre de 1973 y mayo del año siguiente. En el mismo, también conocido como la Isla del Diablo, estuvieron detenidos varios connotados dirigentes de la UP, entre los que destacan, Orlando Letelier, José Tohá, Aníbal Palma, Clodomiro Almeyda, Sergio Bitar, Edgardo Enríquez y Osvaldo Puccio.

De acuerdo a los testimonios recogidos entre los que sufrieron sus torturas, el criminal de guerra nazi ideó el sistema de vida en la isla con el objetivo de enloquecer científicamente a sus víctimas. "A veces, las órdenes que impartía Rauff nos enseñaron a comprender que la tortura, que el arte político de matar a grandes grupos de inocentes, era como un vicio. El vicio tiene que crecer cada día; si no, deja de serlo. Se convertiría en una entretenición", señaló en la revista *Análisis*, Luis Vega, asesor jurídico del ministerio del Interior durante el gobierno de Allende que estuvo preso en Dawson.

En 1983 nuevamente fue solicitada la extradición de Walter Rauff. Esta vez, el canciller de Pinochet, Jaime del Valle, insistió en el argumento de que el caso estaba cerrado.

Stefano Delle Chiaie, por su parte, se convirtió en una pieza clave en el engranaje operativo del Estado chileno. Llegó a Santiago de Chile en diciembre de 1975 con dos de sus camaradas, Maurizio Giorgi y Roberto Granitti, acompañados de los agentes de la DINA Hugo Prado y José Cuevas Segura.

En la oportunidad Delle Chiaie le propuso a Contreras la formación de un ente neofascista que coordinara la acción represiva de las dictaduras militares de la región e insistió en que la sede debía ser Santiago de Chile. Manuel Salazar, en el libro ya citado, asegura que el italiano se hospedó en la casa del brigadier Pedro Espinoza, segundo jefe de la Inteligencia chilena, actualmente encarcelado por el atentado contra Orlando Letelier. "El coronel Manuel Contreras, narra Salazar, acompañado por los mayores Vianel Valdivieso y Hugo Prado, y el capitán Gerardo Urrich, sostuvieron varias reuniones con los italianos para medir sus talentos y luego les encomendaron la tarea de unificar y dar coherencia política a las innumerables facciones en las que se encontraba dividido el nacionalismo chileno. Contreras no sólo quería preocuparse de la seguridad del régimen, sino también proporcionarle una base política de sustentación, cosa en la que al mismo tiempo estaban empeñados los sectores gremialistas, encabezados por Jaime Guzmán, y los economistas neoliberales que trataban de aplicar un nuevo modelo de desarrollo para el país". La receta dada por los italianos no satisfizo a Contreras por lo que, postergando sus aspiraciones políticas, derivó el tra-

bajo de los hombres de Delle Chiaie hacia la inteligencia, concentrando los esfuerzos de estos en tareas de propaganda y espionaje en los países vecinos.

Delle Chiaie y sus hombres, según el testimonio de un italiano con las iniciales ACP, se dieron rápidamente a la tarea encomendada por la DINA. El organismo represivo les cedió, entonces, un departamento en el piso once de la Torre 8 de la Remodelación San Borja donde instalaron, como fachada y asociado con algunos italianos residentes, una sociedad importadora de artículos deportivos. La misma prácticamente no funcionó. Sí los contactos de Delle Chiaie. En ese lugar, de acuerdo al mismo testimonio, se reunió asiduamente con el químico de la DINA, Eugenio Berrios Sagredo, el agente Michael Townley y otros conspicuos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas.

No era raro, por otro lado, que la DINA tuviera un departamento en esa zona. Por esos mismos años, la ex agente Luz Arce y el teniente Fernando Laureani Maturana, ambos del organismo de Contreras, vivían en las torres 12 y 6 respectivamente.

Según ACP, Delle Chiaie se hacía acompañar en Santiago por un grupo de colaboradores entre los que destacaba Albert Spaggiari, el terrorista argelino-francés que prestó servicios para el régimen chileno y que se hizo tristemente célebre en Europa, con la chapa de Daniel, cuando asaltó la sucursal en Niza del Banque Societé Generale. Parte de ese millonario botín, al parecer, se lo habría prestado a Enrique Arancibia Clavel, el jefe clandestino de la DINA en Buenos Aires el que, al no devolverlo, según consta en los memos secretos de Michael Townley, temía las represalias del argelino-francés.

XI

Maten a Letelier

"...Vi un pie en la calle... pude observar que el vehículo se había arrastrado unos cien metros, dejando restos en el camino, incluyendo el pie. Me acerqué más al vehículo y miré dentro: inmediatamente vi a un hombre blanco, sentado en sus caderas, en el pavimento. Todo el piso del coche se había desprendido. Había perdido las piernas por encima de las rodillas".

Relato del detective estadounidense Walter Johnson en el caso Letelier.

Esta operación se puso en marcha en julio de 1976 cuando la policía secreta del Paraguay preparó dos pasaportes, a nombre de Alejandro Romeral Jara y Juan Williams Rose, para que fueran utilizados por el teniente chileno Armando Fernández Larios y el agente de la DINA, Michael Vernon Townley, en una misión secreta en los Estados Unidos.

Los paraguayos, al parecer, vieron que se tramaba algo grande en la Inteligencia chilena y decidieron poner en conocimiento del consulado norteamericano, cuando les fueron solicitadas las visas respectivas, que se trataba de documentos falsos.

Los estadounidenses visaron los pasaportes pero se quedaron con las fotografías de los dos agentes chilenos. La misión debió abortarse... momentáneamente.

Al gobierno de Washington le estalló la operación Cóndor, en su propia casa, en el barrio de las embajadas, por lo que no pudo mirar hacia otro lado.

Faltando escasos minutos para las diez de la mañana del martes 21 de septiembre de 1976 explotó una bomba bajo el auto de Orlando Letelier. La otra víctima del atenta-

do, además del dirigente chileno, quien se desempeñó durante el gobierno de Allende como canciller, ministro de Defensa y embajador de Chile en los Estados Unidos, fue su secretaria norteamericana, Roni Moffit.

El hombre, que según Johnson gritaba desesperado, era el esposo de esta última, Michael Moffit, quien resultó levemente herido.

Pocos días antes del atentado contra Letelier, el gobierno de Pinochet lo privó de su nacionalidad porque, según se señalaba en el decreto, el ex ministro había "cumplido una tarea de desprestigio de los intereses nacionales" al detener préstamos de compañías holandesas, y se lo acusaba, por lo tanto, de haberse "sumado al boicot al Gobierno Militar". En la oportunidad, además, los militares chilenos acusaron al ex canciller de tener una "actitud desleal e in noble" la que lo hizo "merecedor de ser privado de la nacionalidad".

Más allá de ese "boicot" a que hacía referencia el decreto, en realidad, lo que temía la dictadura de Pinochet era que Orlando Letelier formara un gobierno chileno en el exilio. Al igual que el general Carlos Prats González y que el líder DC y ex vicepresidente de Chile, Bernardo Leighton, Letelier era uno de esos opositores que superaba con creces los límites de su partido, en este caso el socialista, y sobre él, si bien no se centraban los deseos de formar un gobierno en el exilio, sí las expectativas de unificar la oposición a Pinochet. El ex colaborador de Allende, además, gozaba de un gran prestigio internacional y era uno de los pocos líderes de la Unidad Popular que tenía excelentes contactos en los Estados Unidos.

Doce días antes que estallara la bomba que terminó con la vida de Letelier y de su asistente, se encontraron en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, el oficial de Ejército, teniente Armando Fernández Larios, chileno, y el agente norteamericano, al servicio de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), Michael Townley. Este, que había ingresado a Estados Unidos bajo el nombre de Hans Petersen Silva y con pasaporte oficial del gobierno de Pinochet, recibió de Fernández Larios toda la información preoperativa para el atentado a Letelier. "El teniente coronel Pedro Espinoza, confesó el ex teniente Fernández, me dijo que viajaría en forma directa a Estados Unidos y que lo haría con una mujer llamada Liliana Walker, a la que haría

pasar por mi esposa. Viajamos con nombres falsos y pasaportes oficiales chilenos. Nos alojamos en el Hotel Washington. Al día siguiente me puse a trabajar. Me contacté con el Instituto de Estudios Políticos, donde trabajaba el ex canciller. Al enterarme de que él no estaba, solicité su dirección diciendo que tenía urgencia en entregarle unos documentos. Me dirigí a la dirección que me dieron y comprobé que se trataba realmente de su casa, porque afuera había un automóvil con el escudo chileno. Ahí supe que Letelier estaría ausente de Washington por unos 20 días. Llamé a Santiago y el teniente coronel Espinoza me dijo que mi labor había terminado...”.

Townley, por su parte, confesó que recibió del militar “una hoja de papel con los croquis de la casa y la oficina de Letelier y también un informe escrito que contenía una cuidadosa descripción del automóvil de Letelier y del de su esposa”.

Días después Townley tomó contacto con los cubanos anticastristas Dionisio Suárez, Guillermo Novo y Virgilio Paz, todos del Movimiento Nacionalista Cubano, para que lo ayudaran en la parte ejecutiva del crimen. Entre el 18 y el 20 de septiembre Townley armó la bomba, la instaló bajo el auto del dirigente chileno y viajó a Madrid. A Suárez y Paz les correspondió la tarea de accionar el dispositivo a control remoto que destruyó el auto de Letelier.

En Estados Unidos y en Chile la noticia del asesinato causó impacto. El fiscal ayudante del distrito de Columbia, Eugene Propper, quedó a cargo de la investigación del primer atentado terrorista cometido en la capital norteamericana y que durante años mantuvo tensas las relaciones entre la dictadura chilena y los Estados Unidos. El mismo, sin embargo, no debió haber tomado por sorpresa a la seguridad estadounidense.

El 18 de agosto de 1976 un funcionario del departamento de Estado, de apellido Zimmerman, preparó un documento secreto que fue enviado a las representaciones de su país en Buenos Aires, La Paz, Santiago, Brasilia y Asunción. En el mismo, instó a los embajadores a hablar con altos funcionarios de esos gobiernos, “ojalá con el jefe de Estado”, para manifestarles la preocupación de Estados Unidos por el curso que estaba tomando la Operación Cóndor. El “paper” identifica a Chile, Argentina y Bolivia como “los tres países claves” de este plan conjun-

to de los regímenes militares para enfrentar la subversión de izquierda. Decía el documento: "usted está al tanto de la serie de reportes acerca de la "Operación Cóndor". La coordinación de seguridad y de información de inteligencia es probablemente entendible. Sin embargo, los gobiernos planificaron y dirigieron asesinatos dentro y fuera del territorio de los miembros de Cóndor, lo que tiene las más serias implicancias que tenemos que encarar derecha y claramente. Recomendaciones: por supuesto deben tener certeza de que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos está involucrada en el intercambio de información y datos sobre los subversivos. Es esencial que no mencionemos nombres de individuos que puedan ser candidatos de intentos de asesinato".

Respecto a Uruguay, Chile y Argentina, además, Zimmerman recomendaba que si bien no podían confirmar los rumores de asesinato que el Departamento de Estado había recibido, era necesario decirles a los gobiernos de esos tres países que los norteamericanos se sentían "obligados" a llamar su atención acerca de la "profunda preocupación" que esas versiones le provocaban porque, de ser verdadera esa posibilidad, ella podía constituir "un problema político y moral de la mayor gravedad".

Al parecer el mensaje de Washington no llegó a Santiago o simplemente no fue escuchado.

Pinochet, en su primera y única visita a los Estados Unidos, un tiempo después del asesinato de Letelier, dijo: "Puedo jurar que nadie en el gobierno chileno planeó semejante cosa. Si hubiera querido matarlo ¿no cree que habría tenido muchas oportunidades de hacerlo en Chile, donde estuvo preso dos años? ¿Cree que habría sido alguien tan loco como para mandar matar a un hombre, justo cuando va a empezar el período de sesiones de las Naciones Unidas, en que indudablemente se va a atacar a Chile?". Su seguridad no convenció a nadie.

El 28 de septiembre de 1976, el agregado legal de los Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Scherrer, envió un informe completo de todo lo que sabía, hasta ese momento, de la Operación Cóndor. Curiosamente la información no surgió de Santiago de Chile, lugar en el que la CIA tenía al jefe de Estación, Sam Burton, un muy buen amigo de Manuel Contreras. Ellos, según el oficial político de la embajada norteamericana en la época, John Tripton, trabajaban en

"estrecha colaboración", tanto que ambos solían pasar juntos los fines de semana, con sus respectivas familias, en actividades al aire libre. "Esta relación, aseguraba Tripton, impregna a toda la gente de la estación local de la CIA".

Pero Burton, sin duda, protegía a Contreras. Por eso fue Scherrer, más ligado al FBI, el que relató los detalles que sus contactos en Buenos Aires le habían revelado. Y esa información, tres días después, se convirtió en el documento de Inteligencia que llevó el número B/6. 804 0334 76 y que fue distribuido al Pentágono y a los agregados militares en las embajadas de los Estados Unidos en Santiago, Bogotá, Montevideo, Asunción y Brasilia. "... este informe de Inteligencia suministra información sobre operaciones conjuntas de contrainsurgencia emprendidas por varios países de América Latina. La información fue proporcionada por el Agregado Legal de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que tiene excelentes contactos en la Secretaría de Estado para la Información y en la Policía Federal".

En dicho informe, además de las revelaciones que ya son conocidas en capítulos anteriores, Scherrer narró que durante la semana del 20 de septiembre de 1976, el director del servicio de Inteligencia del Ejército argentino viajó a Santiago para reunirse con su contraparte chilena en la Operación Cóndor y que, por esos mismos días, la SIDE llevó a cabo, con el servicio de Inteligencia uruguayo, una serie de operaciones contra una organización de ese país. Asimismo, informó que en Argentina se organizó un equipo especial para actuar en la Operación Cóndor y que está integrado por miembros de la SIDE y del Ejército.

Propper avanzó en las investigaciones y logró que el Gobierno de Pinochet expulsara en 1978 a Michael Townley, quien se convirtió en testigo federal y quedó bajo la protección de la Justicia norteamericana. El compromiso fue que el agente chileno, según contó Robert Scherrer, agregado jurídico de la embajada de los Estados Unidos, no debía "indicar otros países para los cuales utilizó el pasaporte de Kenneth Enyart para ingresar".

A fojas 440 del proceso abierto por el asesinato de Prats y que sustancia Servini de Cubría se encuentra agregada la tarjeta internacional de embarque -original- a nombre de Kenneth Enyart, pasaporte número D228772, que da cuenta que el norteamericano abandonó la Argentina el 30

de septiembre de 1974 desde el aeropuerto de Ezeiza y con destino a la ciudad de Montevideo. Recién comenzado ese día, es decir cuando Michael Townley obligadamente estaba en Buenos Aires, un artefacto explosivo de alto poder voló el automóvil que conducía el general Prats y lo mató a él y a su esposa. Este atentado, según el general Alejandro Lanusse, ex presidente argentino de facto, fue "un arreglo entre los paramilitares de ambos países".

Por su parte, Armando Fernández renunció al Ejército chileno en febrero de 1987 y se entregó voluntariamente a los norteamericanos. A ellos les contó el siguiente diálogo entre los generales Manuel Contreras y Héctor Orozco Sepúlveda a, quien, en 1978, le tocó investigar en su calidad de fiscal militar el caso Letelier:

Orozco: "He ganado. (Armando) Fernández ha declarado y (Pedro) Espinoza también. Irás diez años a la cárcel".

Contreras: "Está bien, yo también declaro".

Orozco: "¿Ordenaste el asesinato de Letelier?"

Contreras: "Sí".

Orozco: "¿Por qué?"

Contreras: "Porque recibí una orden".

Orozco: "¿De quién?"

Contreras: "Pregúntale al Jefe".

Orozco: "No puedes declarar eso".

Tanto Fernández Larrios como Michael Townley, a quien también se lo sindicó como el responsable de los asesinatos en Buenos Aires del general Carlos Prats y su esposa en 1974, confesaron ante la justicia norteamericana su participación en los hechos y ambos señalaron que la orden de matar al ex canciller emanó del Jefe de Operaciones de la DINA, coronel Pedro Octavio Espinoza Bravo.

Este último, es definido en el informe presentencial redactado por Gendarmería de Chile y que engrosa el proceso judicial en su contra, como un sujeto que "impresiona de nivel intelectual promedio con un pensamiento predominantemente de tipo práctico. En su desempeño social se visualiza como una persona introvertida, apegada a lo formal, con una adhesión intelectual a normas a las cuales es capaz de adaptarse. Destaca la búsqueda de aceptación y protección de los otros, para lo cual tiende a acomodar su conducta social con el fin de satisfacer las expectativas que supone los demás esperarían de él. Esta característica estaría determinada por una carencia afectiva en su infancia. Por otra parte, se apre-

cian rasgos de dominancia, agresividad, los que son expresados de manera encubierta. En este mismo plano se percibe una actitud de sobreexigencia y desconfianza frente a los otros, lo que incidiría en su tendencia al individualismo. Aparecen indicadores de sentimientos vivenciados como impuestos en relación al saber y la autoridad, sentimientos que sobrecompensaría haciéndolos conscientes como una búsqueda de satisfacción personal. En el plano emocional se observa una regulación racional de sus sentimientos y emociones advirtiéndose una cierta frialdad afectiva y represión de sus impulsos. Si bien en lo formal manifiesta preocupación e interés por los otros, internamente habría una tendencia al egocentrismo. Asimismo, aun cuando externamente aparece controlado, hay indicadores que permiten suponer, en su fuero interno, dificultades en la tolerancia a la frustración, frente a la cual reacciona en forma angustiosa. Ante este núcleo conflictual sus mecanismos de defensa serían la racionalización y la negación, lo que daría cuenta de una capacidad de autocrítica disminuida. Los sentimientos de culpa se encuentran reprimidos, de esta forma no manifiesta conciencia de delito".

Townley fue condenado en 1979 a diez años de prisión, ya se encuentra en libertad y con un nuevo rostro e identidad vive en los Estados Unidos. Los cubanos Dionisio Suárez y Virgilio Paz fueron sentenciados a cadena perpetua. Pedro Espinoza está en Punta Peuco.

A pesar de la prohibición del Senado estadounidense de vender armas a Chile y las continuas presiones diplomáticas, la dictadura chilena no otorgó la extradición, solicitada por la justicia del país del Norte, de los oficiales Manuel Contreras Sepúlveda, director y fundador de la DINA, y Pedro Espinoza, acusados por el Gran Jurado por el asesinato de Orlando Letelier. La misma fue rechazada por la Corte Suprema de Chile el 1 de octubre de 1979.

Con el retorno a la democracia en 1990 y por ser un delito que compromete las relaciones internacionales de Chile, además excluido ex profeso del decreto ley de amnistía que Pinochet dictó en 1978 y que impide investigar los crímenes cometidos entre 1973 y ese año, la causa fue reabierta y el gobierno de Patricio Aylwin solicitó a la Corte Suprema que nombrara un "ministro en visita", juez con facultades especiales, para que investigara los hechos ocurridos en Washington.

Durante 3 años, el juez Adolfo Bañados Cuadra se abocó a desentrañar cada uno de los puntos oscuros del caso Letelier. En sus diligencias comprobó fehacientemente la participación de la DINA en dicho atentado, la responsabilidad de Manuel Contreras y Pedro Espinoza, la cobertura estatal que tuvo Townley, su relación con la DINA, descartándose una participación directa de la CIA en los hechos, confirmó la utilización de pasaportes falsos y visas tramitadas por la propia cancillería chilena para los asesinos.

El agente Townley, bajo el seudónimo de Juan Andrés Wilson Silva, tenía el salvoconducto número 32368, firmado por Manuel Contreras, que decía "Secretaría General de Gobierno: puede transitar con el objeto de cumplir misiones oficiales". Incluso, la casa en la que Townley vivía en Santiago, junto a su mujer, fue comprada por el organismo represivo y sirvió, durante una época, como lugar clandestino de detención. En ella fue asesinado el diplomático español Carmelo Soria, en cuyo caso la Justicia chilena aplicó el decreto-ley de amnistía por haberse cometido el asesinato en 1976. En esa mansión, ubicada en el barrio alto de Santiago, el químico de la DINA, Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay, realizó sus primeros experimentos con el ahora tristemente célebre gas Sarín.

Con todos estos elementos la Justicia echó por tierra la defensa de Contreras. Este argumentó, durante 18 años, que la DINA no había participado en el asesinato de Letelier y que la CIA era la responsable del atentado. ¿Por qué la DINA iba a comprar una casa, en un lujoso barrio, para que la ocupara un agente de la CIA?

Finalmente, el 12 de noviembre de 1993 el juez Bañados encontró culpables de homicidio al brigadier Espinoza, en actividad, y al general Contreras, retirado, dictando penas de seis años de prisión para el primero y siete para el segundo. El juez Bañados desechó en su sentencia el atenuante de la irreprochable conducta anterior de Contreras, argumento que sostuvo la defensa del uniformado, por entender que "la trayectoria de la DINA, relacionada con misiones delictivas, intervención en la muerte, por lo menos de Carmelo Soria, torturas y detenciones ilegales y las apreciaciones contenidas en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación", que responsabilizó al organismo que dirigía Contreras de la mayor parte de las graves violaciones a

los derechos humanos ocurridas antes que se decretara la amnistía en 1978, despojaban al militar de ese beneficio.

Hasta el homicidio de Letelier, la CIA nada hizo para detener las acciones de la DINA y los otros organismos de Inteligencia del Cono Sur.

Un mes antes del atentado contra Letelier en Washington, había fallecido, en un extraño accidente automovilístico, el ex presidente del Brasil, Juscelino de Oliveira Kubitschek, quien gobernó su país entre 1956 y 1961. Al reabrirse el caso, en julio de 1996, los familiares del ex mandatario y del chofer de Kubitschek mencionaron la vinculación que podría existir entre el asesinato de Letelier y el de su pariente. Ambos dirigentes políticos fueron señalados por Manuel Contreras y Joao Batista Figueiredo, entonces jefe de Inteligencia en Brasil, como un problema que los obligaba a adoptar "gestiones conjuntas".

Sin duda que la fase tres de la Operación Cóndor, en 1976, estaba completamente en marcha. A fines de año, la dirección de DINA ordenó nuevamente matar a Carlos Altamirano, esta vez cuando se encontrara en suelo español, participando en un congreso del Partido Socialista Obrero.

Según los informes que dispone el juez Baltazar Garzón, el atentado "no llegó a cometerse dado que la evolución política del momento en España lo desaconsejó". Los agentes chilenos no pudieron contar con el apoyo que esperaban y, por lo tanto, evaluaron que la operación sería muy riesgosa.

XII

El infierno

"De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra ¡Triste privilegio argentino! que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo".

Prólogo del Informe Sábado.

Junto con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 en la Argentina el Cóndor alcanzó su vuelo más alto.

Los miles de refugiados de Chile, Paraguay, Uruguay o Bolivia, que habían encontrado en la Argentina la protección de un gobierno democrático, comenzaron a sufrir, junto con millones de argentinos, la violenta represión del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

Si bien la caída de Isabel Perón motivó, asimismo, la huida de José López Rega, los grupos operativos de la Triple A se vieron reforzados por las Fuerzas Armadas quienes, más que nunca, necesitaban de rabiosos anticomunistas para continuar la guerra sucia que habían iniciado.

El 29 de marzo de 1976, apenas 4 días después del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón, una patrulla militar cayó sobre la casa en la que se realizaba un cónclave del PRT y en la que se discutía un documento que se titulaba "¡Argentinos a las Armas!". "El grueso del comité central, incluido el buró político, dormía en el piso superior del chalet. Unos doce hombres vestidos de civil -probablemente a las órdenes del capitán Leonetti-, que habían llegado en un par de camionetas, se lanzaron directamente al asalto de la casa a través del amplio y descubierto jardín del frente, disparando sus armas e intimando a la rendición. Los grupos de retirada, previamente numerados por orden de sali-

da, bajaron rápidamente y se apostaron en la planta baja, en medio del tiroteo, esperando la orden del jefe de la defensa, José Manuel Carrizo. En el primer grupo iban Santucho, el buró político y Edgardo Enríquez, precedidos por un sargento del ERP con un fusil FAI, y dispuestos a romper el cerco por la parte trasera de la casa", narró Luis Mattini, quien luego sucedería a Santucho en la dirección de una parte del ERP. Y la periodista María Seoane agregó: "ya en la calle, Santucho y Carrizo robaron un coche para huir. Urteaga tomó un colectivo a pocas cuadras y Eduardo Merbilhaá y Edgardo Enríquez debieron ocultarse durante dos días en una zanja en medio de un maizal...".

Ese mismo año, junto a la derrota profunda del movimiento popular argentino, fue desarticulado el trabajo de retaguardia del MIR y la JCR. "Caen asesinados varios compañeros del partido. Para ese entonces el saldo de la ofensiva represiva era casi un millar de militantes asesinados y otro millar de encarcelados quienes, entre 1975 y 1977, salen en su gran mayoría fuera del país, juntándose con casi un millar de exiliados en los primeros años", puntualiza un balance mirista.

Cuando Santucho hizo un llamado para apoyar el foco rural en Tucumán sus socios no fallaron. Como tampoco faltaron, en julio de 1975, a un cónclave que organizó el PRT en la localidad bonaerense de San Miguel, a 45 kilómetros de la capital argentina, al que acudieron más de 100 invitados, entre ellos Edgardo Enríquez.

Tras ese encuentro, el chileno escribió un documento en el que señaló que la línea de confrontación elegida por los argentinos llevaría, inevitablemente, al aniquilamiento de la guerrilla. Esa carta, que obviamente también dirigió a Santucho, molestó al dirigente argentino y comenzó a percibirse un clima hostil en las relaciones entre ambos. Nada de esto, sin embargo, tiene relación con lo que ocurriría más tarde, la detención del chileno y que significaría, sin duda, uno de los golpes más fuertes a la JCR.

Para el MIR, en esa época, no existió razón alguna para desconfiar de sus socios de la Argentina. Tampoco de los Montoneros que, si bien se relacionaban con la JCR a través de Eduardo Vaca Narvaja, tenían una profunda desconfianza de los miristas y temían que esta organización chilena, profundamente leninista y guevarista, hegemonizara la coordinación guerrillera en el Cono Sur.

Enríquez, para nadie es un misterio, era una preocupación permanente de los agentes chilenos. Sabían que se trataba de una pieza clave dentro de la JCR y aseguraban que, junto a otra veintena de miristas, se preparaba militarmente en un a escuela de entrenamiento del ERP.

Un memo de la DINA, de Luis Gutiérrez a Delle Chiaie en diciembre de 1975, señalaba que un correo del MIR detenido en Buenos Aires tenía contactos con Enríquez "que es necesario tener y utilizar para permitir su captura". "En esa documentación, decía Gutiérrez, se desprende que Ruy Mauro Marini, Luis, segundo hombre del MIR y con amplias vinculaciones con la JCR, viajaría en estos días a Argentina para entrevistarse con Edgardo Enríquez. Ve la posibilidad de capturarlo".

Meses después, en una oficina de Inteligencia Interior de la DINA, que dirigía Rolf Wenderoth Pozo, la entonces agente Luz Arce vio de casualidad un télex de un servicio de inteligencia argentino, según la mujer "afiliado a la agrupación Cóndor", en el que se le comunicaba al organismo chileno que Enríquez había sido capturado y que estaba a su "disposición". Ello ocurrió al atardecer del 10 de abril de 1976 cuando el tercer hombre del MIR, que gozaba de la protección del ACNUR, salía de una reunión de la JCR en Buenos Aires.

Ese día, junto a Enríquez, fueron detenidos la brasileña Regina Marcondes y otros militantes del MIR. Todos ellos están desaparecidos. Edgardo, antes de ser trasladado a la Villa Grimaldi en Chile, fue visto en El Olimpo, Campo de Mayo y en la Escuela de Mecánica de la Armada, todos centros de reclusión clandestinos, ubicados en las cercanías de Buenos Aires.

Hasta 1975, el Ejército Revolucionario del Pueblo no tuvo problemas de armas ni tampoco financieros. Contaba además con 300 miembros armados en la zona del Gran Buenos Aires. Después del fallido intento de copamiento a la unidad militar de Monte Chingolo, al sur de Buenos Aires, comenzó la debacle al interior del ERP. En el momento del golpe de Videla, la cifra de combatientes no superaba el centenar. A pesar de ello, transcurridos casi 7 años de su aparición, ni uno solo de los dirigentes más importantes había sido asesinado o capturado. Ello duraría poco.

El 19 de julio de 1976 el ERP recibió su golpe más duro cuando fue ultimado en Villa Martelli su máximo lí-

der, Mario Roberto Santucho. *La Repubblica* de Italia, en su columna del día siguiente señaló sobre ese episodio que "de los tres jefes históricos de la izquierda revolucionaria que se habían unido en una especie de junta supranacional, para seguir una indicación típica del Che Guevara, dos murieron en combate, y sólo uno, Raúl Sendic, que yace medio loco en el foso de una prisión en Uruguay, está vivo. Miguel Enríquez, jefe del MIR, fue muerto en Chile en 1974. Ayer le tocó el turno a Santucho. De los tres, el argentino era el más inclinado a la acción, el organizador más capaz. De profesión contador, había transferido a la lucha política la puntualidad y la precisión de quien conoce el valor del cálculo, la importancia de medir la correlación de fuerzas".

Santucho, según el periodista norteamericano Martin Andersen, autor del libro "Dossier Secreto", muere justo el día que tenía una reunión de coordinación con los jefes Montoneros, solicitada por Mario Eduardo Firmenich, y en los momentos que, de a poco, inclinaba su postura a favor de la disolución de los grupos armados y del retorno al trabajo estrictamente político. ¿Pura coincidencia?

Tras la muerte de Santucho se materializó la debacle de la organización revolucionaria. En agosto de 1976 fue elegido Luis Mattini como secretario general y Merbilhaá con Gorriarán Merlo, entre otros, formaron la nueva dirección política. Un mes después, en septiembre de 1976, Merbilhaá fue secuestrado por tropas del Ejército argentino y, a fines de ese año, medio centenar de los dirigentes, entre ellos Mattini y Gorriarán Merlo, estaba en el exilio.

La dictadura de Videla, el que era acompañado en la Junta Militar por el brigadier Orlando Ramón Agosti y el almirante Emilio Massera, no se resignó a violar los derechos humanos sólo dentro de los límites de su país. Un testimonio demoledor de lo que fue el Operativo Cóndor en la Argentina aparece en la página 265 del libro "Nunca Más": "debe ser destacado que las actividades de persecución se verificaron sin limitación de fronteras geográficas, contando para ello con la colaboración de los organismos de seguridad de Estados limítrofes, los que con características de reciprocidad, procedían a la detención de personas sin respetar orden legal alguna, en franca violación de tratados y convenciones internacionales suscriptos por nuestro país sobre el derecho de asilo y refugio político. Incluso, operaron dentro de nuestro territorio agentes

represores extranjeros, que procedieron a la detención de ciudadanos uruguayos, paraguayos, bolivianos y de otras nacionalidades. Estos habitantes extranjeros fueron secuestrados dentro de la mayor clandestinidad e impunidad y entregados a las autoridades de los países de origen”.

El “Nunca Más” para referirse al operativo Cóndor habla de “un aparato represivo típicamente multinacional” que permitió que las fuerzas de represión extranjeras pasaran a integrar los grupos de tareas “dedicándose a secuestrar, interrogar bajo tortura, asesinar o a proceder al traslado de sus compatriotas a los centros clandestinos de detención ubicados en sus propios países”.

En esta verdadera colaboración interfuerzas, donde intercambiaban desde pasaportes hasta prisioneros, los casos más destacados ocurridos en relación con la Argentina, sin duda, son los asesinatos en Buenos Aires del general y ex presidente de Bolivia Juan José Torres, del ex presidente de la Cámara de representantes del Uruguay Héctor Gutiérrez Ruiz y del ministro de Educación, también de ese país, Zelmar Michelini. Los tres se habían asilado en la Argentina y sufrieron las mismas consecuencias que el general Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Michelini y Gutiérrez fueron secuestrados, junto a otros dos uruguayos, los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, por un numeroso grupo armado el 18 de mayo de 1976 y los cuatro cuerpos, sin vida, fueron hallados tres días más tarde maniatados en el interior de un automóvil. La idea era ligar la lucha política contra la dictadura, de Michelini y Gutiérrez, que entonces eran un factor de unificación, con la revolucionaria de Barredo y Whitelaw, para impedir los acercamientos que se estaban dando entre los partidos tradicionales y algunos representantes de un sector de Fuerzas Armadas uruguayas.

El dirigente uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, que se salvó tiempo después de ser secuestrado en un operativo similar, le envió una carta a Jorge Rafael Videla en la que le dijo que ese 20 de mayo, mientras las autoridades argentinas negaban todo, “...en una recepción, el ministro de Defensa, brigadier mayor (r) José María Klíx formuló por separado a dos corresponsales extranjeros esta sorprendente manifestación: “se trata de una operación uruguay, todavía no sé si es oficial o no...”.

Ferreira se convertiría, desde el exilio, en el enemigo

más punzante de la dictadura de su país y su mensaje llegó a influir de manera decisiva en las políticas del Departamento de Estado respecto al Uruguay. Eso sí, tuvo que salir de la Argentina. Y alcanzó a hacerlo.

El que no tuvo la misma suerte fue un ex presidente de Bolivia. "Desapareció el general Torres," publicó *La Turde*, un diario de Buenos Aires, el 2 de junio de 1976. Según el vespertino, la denuncia la había presentado la esposa del general boliviano y aseguraba que el que fuera presidente de Bolivia entre 1970 y 1971 se esfumó luego de ir a una peluquería en la esquina de Pueyrredón y Paraguay, a pocas cuadras del congestionado barrio Once de la capital argentina. La primera reacción del gobierno de Videla, por intermedio del ministro del Interior Albano Harguindeguy, sugirió que se trataba de "un autosequestro con fines publicitarios".

Este último señaló, años más tarde y en relación a las violaciones a los derechos humanos en general, que "fue un error hacer lo que se hizo". "Si hubiéramos actuado con la ley, argumentó el militar argentino, las cosas hubieran sido diferentes para nosotros. Le confieso que yo no estuve de acuerdo... pero bueno, tuve que subordinarme...".

Juan José Torres, que en el momento de los hechos tenía 56 años, había llegado a la presidencia de su país en octubre de 1970 y se definía como un "nacionalista de izquierda" que buscaba "la liberación de su pueblo mediante el control de los recursos naturales". Una vez en el poder, no tardó en adoptar las medidas que se le reclamaban desde los centros mineros, uno de los cuatro pilares de su gobierno. Los otros tres, según Torres, eran los campesinos, los intelectuales y las Fuerzas Armadas.

A los pocos días de asumir la titularidad del Palacio Quemado, la casa de gobierno boliviana, Torres dejó sin efecto una concesión a la empresa norteamericana Metal Processing Corporation y traspasó sus instalaciones a manos de la Corporación Minera Boliviana. Luego anuló los derechos otorgados a la Mineral and Chemical Phillips Corporation para la explotación de las minas del Grupo Matilde, uno de los más importantes de Bolivia y del mundo. Las medidas enfriaron las relaciones de su gobierno con el de Richard Nixon y Torres se vio obligado a buscar créditos en otras naciones y firmó varios convenios con los países de la órbita comunista.

"Nosotros somos demasiado nacionalistas para aceptar recetas extranjeras -decía cuando se le consultaba si la incursión del Che en Bolivia había ayudado a la izquierda- pero creo que nuestro pueblo ha sabido valorar el gesto generoso de Guevara".

El 19 de agosto de 1971 un golpe militar encabezado por el general Hugo Bánzer obligó al presidente Torres a asilarse en la embajada del Perú en La Paz. De allí viajó a Lima, donde dijo que el proceso que él encabezaba sólo se había "interrumpido" y aseguró que se trataba de "un breve, muy breve paréntesis, que una vez cerrado permitirá ver a las Fuerzas Armadas levantando nuevamente las banderas de la revolución". "Desgraciadamente mi proceso revolucionario tuvo su punto débil en las Fuerzas Armadas, mi mesa comenzó a tambalearse para luego caer porque muchos oficiales y suboficiales no se habían concientizado sobre su papel protagónico dentro de la revolución".

Antes de partir hacia Chile, país donde viviría asilado y en el que gobernaba el socialista Salvador Allende, expresó que la lección que su derrocamiento dejaba era que debía armarse al pueblo. "Nos faltó tiempo", dijo e instó a sus compatriotas a no arriesgar hombres "hasta el momento preciso". Y agregó: "que los soldados del pueblo descansen, se reagrupen, se fortalezcan y esperen porque la revolución está viva y aplastará a sus enemigos".

En junio de 1973 trasladó su exilio a Buenos Aires ante la inminencia de un golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular.

Pocos meses antes de su desaparición, en febrero de 1976, el general boliviano fue acusado por el régimen de Bánzer de ser el líder de un complot subversivo izquierdista contra la dictadura boliviana. "Torres formuló un llamado a la subversión abierta, pidió a los universitarios y a otros sectores levantarse en armas contra el gobierno", dijo Juan Pereda, ministro de Interior de Bánzer.

El cadáver de Torres apareció a 16 kilómetros de Buenos Aires, en la localidad de San Andrés de Giles, tan sólo 12 horas después de su desaparición. Tenía los ojos vendados y tres tiros en la cabeza fueron los que terminaron con su vida. El entonces ministro Harguindeguy, aprovechó la ocasión para culpar del asesinato a la guerrilla que, según él, pretendía "desprestigiar no sólo a la Nación Argentina, sino al país todo, con el malsano fin de

entorpecer nuestro proceso de reorganización nacional". "Tanto en el orden interno como en el externo, esta acción psicológica en nuestra República forma parte de la permanente agresión conducida desde los centros de poder de la subversión internacional contra los pueblos que sostienen la primacía de los valores espirituales sobre los materiales", aseguraba el ministro de Videla.

Los medios de comunicación no se quedaron atrás y, en medio de un país consternado por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y ahora Torres, se sumaron a la versión oficial.

El diario *La Prensa*, en su editorial del 6 de junio, decía que "tal como han sido preparadas las cosas, todo debería concurrir a que las sospechas recayesen sobre "el dueño de casa", es decir, en el Estado que ha dado asilo a las víctimas del sangriento plan. Se trata de una conjura destinada a perfilar la imagen de la Argentina como "país inseguro", donde "no hay garantías de vida ni siquiera para los extranjeros" que allí residen y "que habían huido del suyo -sigue la retorcida interpretación- para escapar, precisamente, a persecuciones o, peor aún, a destinos cruentos como el que acaban de sufrir". Llamaba la atención del matutino que los atentados se produjeran "coincidentalmente -no antes, decía- con la presencia de la Argentina en el foro internacional: en la IV reunión de la UNCTAD en Nairobi, en la 61ª Asamblea Anual de la OIT en Ginebra, en la VI Asamblea General de la OEA en Santiago de Chile y, próximamente, en la Conferencia de Países No Alineados. Para *La Prensa*, entonces, se trataba de un "plan poco menos que diabólico" que, manejado desde el exterior, pero con apoyo local, pretendía presentar a la Argentina "como tierra apta para el crimen político y la violación de los derechos humanos".

El editorial del matutino *Clarín*, por su parte, no desentonaba con el de su colega *La Prensa* el día en que se hizo pública la muerte de Torres: "...es inevitable concluir en que todo ha sido calculado para dificultar la acción del gobierno y comprometer su política de sereno y público castigo para los responsables de la corrupción y de la subversión que corroen las bases del ser nacional...".

Con el correr de los años las investigaciones del crimen de Torres no condujeron hacia los criminales y se trató, en 1983, de acoger al caso a la ley de amnistía. La esposa del uniformado en una entrevista que concedió en julio de

1985 contó que "Sam me dijo que el asesinato de Torres era parte de la Operación Cóndor". Informes publicados el 4 de junio de 1976 en el *New York Times*, mientras tanto, sugirieron que el asesinato del general fue cometido por los Rangers bolivianos, que contaron con el apoyo de la Policía Federal y con la aprobación del ministro Harguindeguy.

El periodista Isidoro Gilbert, en ese entonces jefe de la agencia soviética *Tass* en Buenos Aires, sostiene que "no es improbable que su asesinato en la Argentina, poco después que tomara el poder la Junta Militar, haya tenido que ver no sólo con una petición del general Hugo Bánzer, quien lo había derrocado y le temía por la influencia de Torres en el ejército, sino también con sus vínculos con Moscú, donde la CIA acaso haya jugado algún papel".

En la página 272 del libro "Nunca Más", sin embargo, se asegura que tanto en el asesinato de Prats, como en el de Torres, participó el norteamericano y agente de la DINA chilena, Michael Townley.

La represión en Argentina no hacía distinciones. Según información obtenida en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de ese país, la trascendencia nacional e internacional que tuvieron los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz obligó a la dictadura de Videla a variar la vía elegida para la represión de uruguayos y apeló entonces a la desaparición forzada de personas.

Entre junio y julio de 1976, 65 uruguayos, incluidos 4 niños, fueron secuestrados en Buenos Aires, llevados al campo de concentración "Automotores Orletti" y luego, algunos de ellos, trasladados a su país y acusados de "una supuesta invasión a suelo patrio".

En su testimonio ante la Conadep el uruguayo Enrique Rodríguez Larreta afirma que mientras estuvo detenido en Buenos Aires fue torturado por oficiales del Ejército de su país que operaban en la Argentina.

El uruguayo, en un relato dramático de lo ocurrido, señaló que en fecha 1 de julio de 1976 fue informado por su nuera, Raquel Nogueira Paullier, de la desaparición de su hijo, Enrique Rodríguez Larreta Martínez, de la misma nacionalidad, casado, de 26 años de edad, padre de un niño de 5 años, de profesión periodista y con residencia legal en la República Argentina desde el año 1973.

De inmediato se puso en contacto con un abogado y presentó un recurso de hábeas corpus para hallar a su hijo.

"Varios días después se me dijo que el recurso se archivaría ya que las autoridades habían informado que no registraba pedido de captura contra mi hijo y que tampoco se encontraba detenido".

Rodríguez Larreta, el padre, inició asimismo una serie de gestiones y, entre otros, visitó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y solicitó una audiencia con un miembro de la Corte Suprema de la Argentina, el doctor Abelardo Rossi, quien le informó que a esa fecha se habían presentado numerosos familiares denunciando secuestros y promovido más de 6 mil recursos de hábeas corpus.

El 12 de julio, con nuevos antecedentes, el desesperado padre presentó un nuevo recurso ante la Justicia. La respuesta, esta vez, la obtuvo en la noche del 13 al 14 de julio, pocos días antes de un nuevo aniversario de la Independencia uruguaya, cuando una banda de entre 8 y 12 personas armadas irrumpió en el departamento donde estaba junto a su nuera. "Fuimos sacados de la casa y nos metieron en una camioneta cerrada. El vehículo en que viajamos se dirigió a otra casa; luego de estacionar unos minutos se introdujo junto a nosotros a una pareja, tras lo cual se nos condujo a un local al que para entrar fue necesario levantar una ruidosa cortina metálica de enrollar".

Habían sido trasladados hasta un centro de detención clandestino, llamado "Automotores Orletti", un ex taller mecánico, que funcionaba en la Capital Federal y que dependía del Ejército argentino en conexión con su similar uruguayo y en el que los interrogatorios eran dirigidos por la Superintendencia de la Policía Federal.

El mismo, que los militares llamaban "El Jardín", "La escuelita de la Vía" o con el nombre técnico de Operaciones Tácticas 18, tenía dos plantas: en la de abajo, piso de hormigón, sucio de tierra y grasa, destacaba un salón de 6 a 8 metros por 30 y un tanque de agua sobre el que había una roldana y donde los detenidos eran colgados para ser sometidos al cruel "submarino" y, en la planta alta, funcionaba una terraza para colgar la ropa y dos salas, una de torturas y otra para los interrogatorios.

Efectivamente para ingresar a ese centro clandestino, donde se torturaba entre 8 y 12 de la noche, había que levantar una pesada cortina metálica y los de afuera lograban que se abriera diciéndole a los de adentro por radio:

“operación Sésamo”. “Pude advertir de inmediato que en ese lugar se hallaba un número elevado de personas en las mismas condiciones que yo. Entre ellos identifiqué a mi hijo por su voz y porque habían utilizado para encapucharme una bolsa de azúcar de trama no muy cerrada, lo que me permitía ver las siluetas. Posteriormente, un guardia se apercibe de que puedo distinguir algo, por lo que me da una golpiza y me venda los ojos fuertemente con un trapo. Pude reconocer también entre las personas que se hallaban allí a Margarita Michelini -hija de mi amigo el senador Zelmar Michelini, asesinado poco tiempo antes- y León Duarte, dirigente obrero uruguayo de relevante actuación en el movimiento sindical de mi país”.

El horror no tardaría en llegar. “Inmediatamente comenzaron a llevar hacia la planta alta, que se llega por una escalera interior, a algunas de las personas que se hallaban detenidas conmigo para interrogarlas. Por los gritos desgarradores puedo darme cuenta que los están torturando bárbaramente, lo que confirmé cuando los bajan nuevamente al lugar donde me hallo. Hasta allí llegan arrastrados por los guardias entre quejidos. Se los arroja en el piso de cemento con prohibición de que se les alcance agua “por haber estado en la máquina”. La noche siguiente se me conduce a la planta alta donde se me interroga bajo tortura. Allí se me desnuda completamente y colocándome los brazos hacia atrás se me cuelga por las muñecas hasta unos 20 ó 30 centímetros del suelo. Al mismo tiempo se me coloca una especie de taparrabos en el que hay varias terminaciones eléctricas. Cuando se lo conecta, la víctima recibe corriente por varios puntos a la vez. El suelo está completamente mojado y sembrado de cristales de sal gruesa con el objeto de multiplicar la tortura si la persona consigue apoyar los pies en el piso. Mientras se me tortura me formulan preguntas sobre las actividades políticas de mi hijo y sobre mi participación en el Partido por la Victoria del Pueblo al que, según ellos, pertenecía mi hijo. Es en este cuarto donde puedo ver, en un momento en que por la copiosa transpiración se corre algo la venda, que en la pared hay colgado un retrato de Adolfo Hitler de regular tamaño. Luego de sufrir ese tratamiento se me reintegró a la planta baja y permanecí allí hasta el día en que fui trasladado al Uruguay. Reconozco claramente la voz de Gerardo Gatti Antuña a quien conozco desde hace mucho tiempo como dirigente sindical de los obreros gráficos

del Uruguay. Por comentario de otro de los secuestrados -en momentos de descuido de los guardias podemos cambiar algunas palabras en voz baja- me entero que otra de las voces escuchadas en la planta baja es la de Hugo Méndez, otro sindicalista uruguayo que había sido secuestrado en Buenos Aires en el mes de junio”.

Ese mismo día, junto con Rodríguez Larreta, fue llevado a “El Jardín” su compatriota Nelson Eduardo Dean Bermúdez quien, al igual que los otros que se encontraban allí detenidos, fue brutalmente torturado. “Estas sesiones de tormento se extendieron por espacio de cinco días yendo en aumento en cuanto a su intensidad. En los últimos días repitieron todos los métodos y, además, me introdujeron cables dentro del ano, los testículos y el pene. Estas prácticas se desarrollaban dentro de un marco diabólico; los torturadores, unos bebiendo, otros riendo, golpeando e insultando, pretendían extraerme nombres de uruguayos radicados en la República Argentina y opositores al actual régimen imperante en mi país”, relató Dean.

Otro prisionero, que por esa fecha estaba en Automotores Orletti, era el sociólogo argentino, militante del MIR de Chile y vinculado a la JCR, Patricio Biedma Schadewaldt, quien había residido en Santiago desde 1967 hasta el golpe militar de 1973 y desde entonces era buscado por la DINA.

En este centro de detención, una dependencia del SIDE, los agentes chilenos, al igual que los uruguayos, hacían lo que querían con las personas secuestradas. Varios detenidos aseguraron posteriormente que Biedma fue interrogado por un militar chileno y que durante todo su cautiverio aseguró que lo llevarían a Chile. Aunque no fue visto en Villa Grimaldi, como otros miristas capturados en Argentina, es probable que haya sido trasladado a Santiago a mediados del 76.

El 15 de julio, otras tres personas secuestradas llegaron hasta Automotores Orletti. Se trataba de Manuela y Carlos Santucho, ambos hermanos del líder del ERP y también una cuñada de éste. Cuando anunciaron la muerte del dirigente guerrillero, cuatro días más tarde, los guardias insultaron a sus familiares. A esa altura, según Rodríguez Larreta, Carlos Santucho y su cuñada, no así su hermana, parecían haber perdido la razón por las brutales torturas de las que fueron víctimas. “Alrededor de las 18 horas de ese día comenzaron a llenar un gran tanque de agua que

colocaron entre las personas secuestradas. Se siente fluir el agua. Mientras tanto, oficiales y guardias insultan y castigan a los secuestrados, haciéndonos responsables de la muerte de un capitán ocurrida en el encuentro armado donde cayó Santucho. Nos dicen que en ese tanque nos van a limpiar la cabeza a todos. En la noche, con el pretexto de que Carlos Santucho deliraba constantemente, se abalanzan sobre él y lo atan con cadenas. Previamente colgaron sobre el tanque un aparato corredizo y nos explican minuciosamente su uso. Por ese aparato pasa una cuerda que atan a las cadenas con las que sujetan a Santucho". Mientras una y otra vez introducen al hermano del guerrillero en el tanque de agua, un oficial entró en la sala con la edición del diario *Clarín* del 20 de julio de 1976, que narra la forma en que fue abatido el líder del ERP. Obligó, entonces, a la hermana de éste, Manuela Santucho, a leerlo en voz alta a los prisioneros. Todo ocurrió, según Rodríguez Larreta, entre risas e insultos. Cuando el cuerpo del hermano de Santucho parecía no dar señales de vida lo bajaron y desataron, luego lo introdujeron en un vehículo y se lo llevaron. La represión no sólo acabó con Roberto, el líder del ERP, sino que también arremetió contra todos los parientes. El saldo para los Santucho fue trágico: siete muertos, cuatro desaparecidos, dos prisioneros y nueve exiliados.

Respecto a quiénes mandaban en Automotores Orletti, Rodríguez Larreta no tiene dudas y, tal vez, su testimonio da cuenta como ninguno de la coordinación entre las fuerzas represivas. No sólo operaciones comunes o intercambio de información. En la capital de Argentina funcionó un centro de detención al servicio de los uruguayos y lo regenteaban militares de ambos países. Toda una integración. "Con el paso de los días puedo darme cuenta - por el contenido de las conversaciones y los modismos que emplean- que la gran mayoría de los que participaron en el operativo de secuestro y todos quienes nos custodian son argentinos. Los guardias, por el tratamiento que nos dan, parecen pertenecer al Ejército argentino, mientras que quienes participan en los operativos no dan esa impresión".

En los interrogatorios y torturas participaron directamente oficiales del Ejército uruguayo y la responsabilidad de estos operativos recaía en el director del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) uruguayo, general Prantl, y

del director del SIDE, general Otto Paladino. El yerno de este último, César Enciso, también prestaba sus servicios en ese lugar. El traslado de los prisioneros debía contar con la aprobación de ambos oficiales. Según el ex inspector de la Policía Federal Argentina, Peregrino Fernández, entre los agentes que estaban en misión en el ministerio del Interior, se hablaba con frecuencia de la estrecha coordinación existente entre los gobiernos militares de Uruguay y de Argentina en el intercambio de información y de prisioneros detenidos ilegalmente. Algunos de los uruguayos pertenecían a un grupo llamado OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) integrado por policías y militares que se distinguían en el trato entre ellos, con el nombre de "Oscar" seguido de un número ordinal. Rodríguez Larreta identificó a tres de los 50 Oscar que formaban la división y aseguró que "Oscar 1" era el entonces mayor Arias, alias el Tordillo o Puñales, que se desempeñaba como jefe operativo de la OCOA; "Oscar 5" era el médico de la OCOA que atendía además a los secuestrados por el SID y "Oscar 7" era el capitán Jorge Silveira, alias "Sietesierras" o "Chimichurri", fundador del grupo especializado en torturas e interrogatorios y que, con posterioridad a los hechos, se desempeñó como capitán de Inteligencia en el S2 de Punta de Rieles en Montevideo. Muchos de ellos, al menos 10 Oscar que tenían rango de capitán u oficiales superiores, residieron en Buenos Aires durante la dictadura de Videla realizando tareas de represión.

Fernández aseguró, de acuerdo al testimonio de Rodríguez Larreta, que el general Albano Harguindeguy, ministro del Interior durante el reinado de Videla y que había sido agregado militar en Montevideo, era muy amigo del coronel Guillermo Ramírez, jefe de la "División 300" del Servicio de Inteligencia de Defensa, cuyos miembros se distinguían por ser numerados desde el 301 al 350. Ramírez llevaba, obviamente, el 301. Los 300, junto a los de OCOA, trabajaban en la misma tarea. El 302, era el entonces mayor José Nino Gavazzo, máximo jefe operativo del arma de artillería, quien viajó asiduamente a Buenos Aires entre junio y octubre de 1976. Era el encargado, junto con Oscar 1, de conducir las torturas. Otros uniformados uruguayos que participaron en la División 300 fueron los mayores Manuel Cordero (303), Enrique Martínez (304) y Ricardo Medina (305).

Mientras todo esto ocurría en las sombras, en la su-

perficie, las relaciones entre ambos países se estrechaban. La Memoria de 1976 de la cancillería argentina destaca que ese año, en el campo político y social, el Uruguay sostuvo "su tradicional actitud de cooperación y acercamiento" con el gobierno de la Argentina. Se destaca, asimismo, "la similitud y coincidencia de los respectivos intereses nacionales y su misma y armónica evolución en los planos político y social".

Ello sin duda quedó de manifiesto el 26 de julio de ese año cuando se les informó a los detenidos que serían trasladados desde la Argentina al Uruguay. Con los ojos vendados y la boca tapada con tela adhesiva, los subieron a la caja de un camión y los llevaron al Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. Gatti, Duarte y Méndez, *sin embargo, se quedaron en Automotores Orletti* y, hasta el día de hoy, permanecen desaparecidos.

"El camión en que se nos trasladaba, continúa Rodríguez Larreta, iba fuertemente custodiado a juzgar por el ruido de numerosas motos y automóviles a nuestro alrededor, que hacían sonar sirenas en los cruces para interrumpir el tránsito. Nos condujeron a la base militar contigua al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Pude darme cuenta de ello al descender, ya que con la transpiración producida por el encierro y la llovizna que estaba cayendo en esos momentos la tela adhesiva se había desprendido algo, dejando cierta visibilidad. Una vez descendidos del camión se nos hizo subir a un avión Fairchild de los que utiliza la Fuerza Aérea uruguaya y están afectados a los servicios TAMU (Transporte Aéreo Militar Uruguayo) y PLUNA (Línea Nacional de Aeronavegación). Algunas de las personas que viajaban conmigo pudieron apreciar el distintivo PLUNA en bolsas de polietileno puestas en el bolsillo de los asientos. Viajamos sentados y el vuelo, según mi estimación, duró alrededor de una hora. Al aterrizar y descender pude advertir que estábamos en la Base Aérea Militar N° 1, contigua al Aeropuerto Nacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo".

Estuvieron hasta la noche del 14 de agosto alojados en una casa, de cuatro habitaciones, dos plantas y con balcones, en la que continuaron los interrogatorios y las torturas al grupo que, al momento, componían 24 personas: *aplicaban el submarino en la bañera, la picana eléctrica y daban fuertes golpizas con fustas. Apresuradamente tuvieron*

que salir de ella e iniciar un nuevo viaje, esta vez por tierra y con una duración máxima de media hora.

"En ese lugar el mayor Gavazzo nos dirigió un discurso, enterándonos que estábamos en manos de lo que llamó las "fuerzas especiales de seguridad" de la República Oriental del Uruguay y que seríamos sometidos a una rigurosa disciplina en que cualquier falta se castigaría severamente. Siguieron las torturas hasta el 23 de agosto y luego los castigos eran sólo por faltas disciplinarias. A los pocos días de estar en esta casa son retirados de la habitación que servía de celda común José Félix Días Berdayes (15 de agosto) y Laura Anzalone (el 20 de agosto), compañera del anterior, de quien se hallaba embarazada. Se les traslada a otra habitación y transitan libremente sin vendas ni esposas. El 26 de agosto -lo recuerdo con precisión por tratarse del día siguiente a una importante fecha histórica del Uruguay y varios de los guardias hicieron comentarios de la parada militar que se realizó- volvió el mayor Gavazzo, nos hizo poner de pie y nos planteó lo siguiente: que ellos -las fuerzas especiales- nos habían salvado la vida al rescatarnos de los asesinos argentinos que "nos querían mandar para arriba a tocar el arpa con San Pedro" y que, por lo tanto, debíamos contribuir a que se justificara nuestra presencia en el Uruguay".

Aislado y condenado el Cono Sur por sus crueles dictaduras, los uniformados uruguayos pensaron que debían justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno y las continuas violaciones a los derechos humanos.

Eran los tiempos en los que los militares blandos trataban de impulsar acuerdos con la oposición para darle una salida pacífica y democrática al conflicto.

Gavazzo, entonces, le propuso al grupo de 24 secuestrados que simularan formar parte de un comando guerrillero que fue detenido por tropas uruguayas cuando pretendían ingresar clandestinamente al país. Si llegaban a un acuerdo debían aceptar abogados de oficio en el juicio y serían condenados a una pena que iría de los 15 a los 20 años de cárcel. Los amenazaron, si no aprobaban la propuesta, con devolverlos a la Argentina donde serían asesinados. La totalidad rechazó el planteamiento y se negó a firmar las actas de declaración que ya se habían confeccionado.

Al día siguiente Gavazzo volvió a la carga. Convo-

có por separado a Raúl Altuna y su esposa, Margarita Micheliní, a quienes les dijo que los ejecutaría con sus propias manos porque eran los responsables de la actitud del grupo. Algunas horas después, la pareja fue devuelta a la celda y tenía signos de haber sido brutalmente castigada. El 1 de septiembre, cuando la situación se hacía kafkiana, Gavazzo volvió a hablar con los secuestrados pero con una nueva propuesta. El arresto del supuesto comando guerrillero no se haría al intentar ingresar al país sino que, todo lo contrario, en una céntrica casa de Montevideo donde el grupo sería sorprendido. Nuevamente amenazó que si persistía la negativa serían devueltos a la Argentina. Todos se negaron a firmar las actas. A la noche siguiente Gavazzo volvió a la casa. Esta vez, según él, acompañado de dos oficiales armados que abrirían fuego contra el grupo si se seguía negando a colaborar. "Nos hizo notar que los soldados le obedecían ciegamente y que nadie estaba enterado de nuestro paradero. De modo que le bastaría con lavar la sangre de los pisos y cubrir los impactos en las paredes para que nadie supiera lo que allí había ocurrido y cuál había sido nuestro fin. A pesar de las amenazas continuamos negándonos a firmar lo que se nos exigía".

El grupo comenzó a percibir que algo en el exterior estaba presionando fuertemente al mayor Gavazzo porque a pesar de que se les aseguraba que su condición no era la más favorable para negarse a obedecer a los captores, se lo veía muy nervioso. Todas las jornadas, sin embargo, presentaba nuevas propuestas o planteamientos. Con el correr de los días otros oficiales comenzaron a decirle al grupo que estaban buscando una salida a la situación. "El 10 de septiembre por la noche, señala Rodríguez Larreta, se me conduce a una habitación donde se habían reunido varias personas. Gavazzo me explica que se está en vía de lo que él llama "un acuerdo" y que considera favorable para todos. Me dice que quiere saber cuál es mi posición. Pienso que a esta altura todos saben que no pertenezco a ninguna organización política porque no existe ni una sola prueba que pueda relacionarme con ellas. Sin embargo, desde hace dos meses que se me ha destrutado, torturado, mantenido esposado y vendado, comiendo mal y durmiendo en el suelo con una frazada mugrienta, sin noticias de mi familia que debe darme por muerto. Le explico a

Gavazzo esto, pero le digo que si lo que él llama "el acuerdo" es aprobado por las demás personas que se hallan en mi situación, acompañaré el criterio general. Ante estas manifestaciones me conducen nuevamente a la celda".

Durante septiembre de 1976 las negociaciones con el grupo continúan y todos conversan con Gavazzo. A fines de mes, parece salir humo blanco cuando Rodríguez Larreta, nuevamente pero esta vez sin vendas, es llevado ante el oficial del ejército uruguayo. "Según me explica Gavazzo, de los 22 secuestrados que aún permanecen en la celda común, sólo dos -Jorge González Carrizo y Elizabeth Pérez Lutz- están clasificados como ex integrantes del llamado MLN Tupamaros y con ellos se llegará a una solución por separado. De los 20 restantes, seis son los casos más notorios por factores políticos o personales: Enrique Rodríguez Larreta, padre e hijo, Raquel Nogueira Paullier, Raúl Altuna, Margarita Michelini y Nelson Eduardo Dean. A nosotros se nos pide que publiquemos solicitadas en los diarios de Montevideo, por separado, en las que debemos señalar que regresamos al país por nuestra propia voluntad y que no deseábamos ser molestados ya que habíamos decidido apartarnos de la actividad política. A cambio de ello, permaneceríamos detenidos por un lapso no mayor a dos años en la misma casa en que estábamos, en condiciones muy amplias e incluso permitirían la visita de familiares. De los restantes 14, aquellos cinco considerados como los políticamente más activos - Sergio López Burgos, Asilú Maseiro, Ana Inés Cuadros, Elba Rama Molla y Sara Rita Méndez, madre del pequeño Simón Antonio Riquelo que nació 20 días antes del secuestro de Sara y del cual ella nunca supo nada-, serán enjuiciados por el delito de asociación subversiva. Para justificar su detención deberán aparentar una reunión, a la que acudirán armados y en medio de la cual serán sorprendidos por el Ejército. Los restantes nueve deberán aparecer como arrestados en hoteles del centro de Montevideo en los que estarían registrados con documentos falsos mientras se aprestaban a colaborar en una campaña para desprestigiar internacionalmente a los gobiernos de Argentina y Uruguay. Serían enjuiciados por los delitos de asistencia a la asociación subversiva. La condición básica del acuerdo es que todos designáramos defensores militares de oficio".

Rodríguez Larreta, sin embargo, le señala a Gavazzo que la propuesta carecía de sentido porque él hacía tiempo

que estaba alejado de la actividad política y eso era notorio. Los otros secuestrados, mientras tanto, se negaban a ser descubiertos portando armas. Esto era fundamental para los uniformados porque el armamento le otorgaba mucha resonancia a la captura. Finalmente llegaron a un acuerdo en que las armas serían encontradas pero que los detenidos no tendrían información sobre ellas y que eso sería reconocido en el informe que el Ejército le entregara a los medios.

El montaje, como el de una película, se pone en marcha en octubre. Un capitán se dirige a Shangrilá, un balneario cercano a Montevideo y, con nombre falso, alquila un chalet en el que se desarrollará la reunión. El 23 de octubre, los cinco detenidos que debían ser "encontrados" por el Ejército salen fuertemente custodiados hacia el lugar donde se realizaría el "cónclave". A las 15 horas el Ejército rodeó el chalet y se llevó a los guerrilleros y, para impresionar más a la gente que miraba, también a los soldados de civil que custodiaban a los secuestrados y al capitán que alquiló la casa. Pocas horas después un comunicado del Ejército dio cuenta que otras nueve personas habían sido detenidas en hoteles céntricos. Ellos, afortunadamente, no tuvieron que participar del montaje porque siempre estuvieron en su celda y la actuación recayó en personal femenino y soldados de la División 300. Recién el 26 de octubre, en el chalet de Shangrilá, fueron mostrados a la prensa los 14 detenidos en la trabajosa jornada de tres días antes. Cuando regresaron al lugar en el que habían estado meses y donde se desarrollaron las negociaciones, el trato cambió y los guardias permitieron que los prisioneros se sacaran las vendas y conversaran entre ellos. Incluso, en los días que siguieron, pudieron salir a tomar aire al patio de la casa. "Allí, observando algunos edificios altos de las inmediaciones, confirmamos lo que ya sospechábamos: estábamos detenidos en la casa donde tiene su sede el Servicio de Inteligencia de Defensa. Se trata de una gran casa, situada en medio de un jardín, en pleno centro de Montevideo".

Después los hechos se suceden rápidamente. Entre el 28 y 30 de octubre se difunde por todos los medios un comunicado en el que el Ejército anuncia la detención de 62 personas pero en el que sólo se da el nombre de los 14 que salieron de la casa de Shangrilá. Luego, desde el punto de vista judicial, comienza a formalizarse el acuerdo y el grupo que ya ha sido "blanqueado" es conducido a un juzga-

do militar donde se los procesa por los delitos convenidos. Todos nombran defensores militares de oficio, incluso aquellos que sus padres son abogados, como es el caso de Inés Cuadros. El resto aguarda, expectante, pero con la certeza de que la publicidad del caso y la gran cantidad de testigos que los han visto fortalecen su posición. Así, por ejemplo, la idea de publicar una solicitada desaparece.

En poco tiempo las cosas comienzan a aclararse: Gavazzo informa que Rodríguez Larreta hijo, Margarita Michelini y Raúl Altuna serán procesados por acción subversiva y Rodríguez Larreta, padre, su nuera y Eduardo Dean por asistencia a la asociación subversiva. "Ante ese planteamiento hago notar que no he cometido delito alguno y que no estoy dispuesto a aceptar que se me enjuicie arbitrariamente. Manifiesto que ante cualquier proceso que se me inicie designaré un abogado defensor".

A los pocos días Gavazzo informó a Rodríguez Larreta padre que sería liberado sin proceso. Los cinco restantes, sin embargo, deberían firmar actas reconociendo que fueron detenidos el 26 de octubre de 1976 en el aeropuerto de Carrasco cuando llegaban con documentos falsos desde Buenos Aires con la intención de dirigir o colaborar en tareas de propaganda contra el gobierno uruguayo.

Jorge González, por su parte, acordó ser procesado por asistencia a la asociación subversiva y fue llevado el 16 de diciembre hasta el penal de Libertad. Elizabeth Pérez Lutz quedó libre el 12 de diciembre, aunque para justificar el proceso se le hizo firmar un acta, también fraguada, en la que declaró que llegó al Uruguay a entregar una carta, cuyo contenido desconocía y que arrojó al mar antes de entrar al país, dirigida a una persona que se encontraba presa en el penal de Punta Carretas.

El 22 de diciembre, Margarita Michelini y Raquel Nogueira fueron trasladadas al penal de Punta de Rieles y Rodríguez Larreta hijo, Raúl Altuna y Eduardo Dean al de Libertad. Ese mismo día a Rodríguez Larreta padre lo condujeron hasta su domicilio en un vehículo militar.

Cuando se iniciaron los procesos, todos con pruebas y documentos fraguados, los acusados fueron quedando uno a uno en libertad y optaron por el exilio. De lejos, sin duda, pensaron que Kafka había navegado por el Río de la Plata.

En la Argentina, mientras tanto, la repercusión internacional del hecho significó el cierre del tristemente cé-

lebre Automotores Orletti. Ese centro clandestino de detención, durante todo 1976, fue el paso obligado de los extranjeros que eran secuestrados en Buenos Aires mientras se decidía qué hacer con ellos: si enviarlos a su país de origen, liberarlos o simplemente matarlos en la Argentina.

Un caso sintomático de lo que ocurría en Orletti, que muestra la colaboración entre los agentes chilenos, argentinos y uruguayos es el que vivieron los hermanos Anatole (4 años) y Eva Victoria Julien Grisonas (18 meses).

Ellos llegaron al centro clandestino de Buenos Aires, junto con sus padres uruguayos, actualmente desaparecidos, Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas, cuando fueron secuestrados el 26 de septiembre de 1976. Los niños fueron vistos en Orletti hasta el 2 de octubre. De allí se los trasladó a un local del Servicio de Información de Defensa del Uruguay, en Montevideo, donde estuvieron hasta el 23 de diciembre de ese año.

Posteriormente, los dos menores fueron abandonados en una Plaza de Valparaíso donde, tres años más tarde, fueron ubicados por CLAMOR, un organismo brasileño de defensa de los Derechos Humanos.

El cierre de Orletti no significó el término de la cooperación. Muy por el contrario, al ser descubierta su finalidad, las misiones "multinacionales" comenzaron a desempeñarse en otros centros clandestinos de detención, como fue el caso del denominado "Pozo de Quilmes" o "Chupadero Malvinas", que funcionaba en la provincia de Buenos Aires.

Hasta allá fueron conducidos varios uruguayos, como Washington Rodríguez, quienes en medio de la tortura reconocieron los acentos de sus compatriotas del otro lado del Río de la Plata. "Los interrogadores, diría años más tarde quien fuera secuestrado junto a su hijo el 1º de abril de 1978, eran uruguayos, oficiales pertenecientes a la OCOA; el interrogatorio giraba sobre actividades en el Uruguay. Los propios guardias nos manifestaron que los uruguayos estaban a cargo de personal militar de esa nacionalidad".

En ese mismo tenor, el también uruguayo Alberto Illarzen, detenido el 21 de abril del 78 junto con su esposa en Lanús, provincia de Buenos Aires, aseguró que cuando fue ingresado al Pozo de Quilmes se percató que había otros 32 uruguayos secuestrados y que todos ellos, incluido un joven

de 16 años y una mujer embarazada, habían sido brutalmente torturados. Esta última, la enfermera uruguaya Aída Celia Sanz, quien había sido detenida el 23 de diciembre de 1977, junto con su madre, en la provincia de Buenos Aires, dio a luz una niña en cautiverio. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de las tres mujeres.

Illarzen, que testificó que en el lugar había tantos oficiales argentinos como uruguayos, contó también que el detenido, Guillermo Rodrigo, le explicó que uno de los que en el Pozo de Quilmes aparecía como el funcionario uruguayo de mayor rango, de nombre Ariel Pretel, había cumplido funciones similares en un penal de Montevideo.

Todo ello llevó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que presidió el escritor Ernesto Sábato, a presentar una denuncia ante la Justicia fundada en la seguridad, tras los testimonios recogidos durante meses de investigación, de la presencia de funcionarios uruguayos ejerciendo la represión ilegal en territorio argentino. De hecho, los oficiales José Gavazzo, Jorge Silveira y Manuel Cordero, así como el policía Hugo Campos Hermida, fueron procesados por sus actividades en la capital argentina.

XIII

El enemigo ausente

“La mayoría de las organizaciones de este tipo no tomaban en consideración las condiciones sociales y económicas de este u otro país, aspiraban a acelerar los procesos, querían saltar las etapas separadas de la revolución, querían tomar el poder político inmediatamente...”

Sostuvo el entonces soviético, Zbignev Ivanovski, del Instituto de América Latina.

En 1978 el ERP no existía en la Argentina y un año después, en una reunión en un convento del Piamonte italiano, se produjo su división. Una tendencia, dirigida por Mattini, renegó de la estrategia militarista, disolvió la organización y buscó la forma de implementar la reinserción del PRT en la Argentina y la otra, comandada por Gorriarán Merlo y Hugo Irurzún, continuó abrazando una visión militarista de la política. Estos dos últimos, planteaban la idea descabellada de formar una fuerza en el Brasil, ingresar por la provincia de Formosa a la Argentina y mantener un foco que alentara la resistencia contra la dictadura de Videla. Ello mucho después que, el 18 de febrero de 1977, intentaran la Operación Gaviota: volar, con más de cien kilos de trotyl, ubicados en una de las pistas del aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, el avión que trasladaba a Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Entre el ERP y los Montoneros, que en algún momento llegaron a 1300 efectivos armados, no superaban la centena y casi todos los militantes se encontraban fuera del país.

Según la información de la Escuela de las Américas, los montoneros “sufrieron una serie de derrotas a manos de las fuerzas de seguridad durante las postrimerías de los

años 70 y, en 1977, abandonaron el país. En el 80 el grupo se había reducido a sólo 300 miembros”.

Un resumen de la Inteligencia paraguaya, de junio de 1978, aseguraba que “las agrupaciones subversivas del Río de la Plata están sufriendo fuertes reveses con las bajas producidas en sus altos mandos por efectos de las acciones eficaces de los elementos de la Ley y el Orden de los gobiernos del área mencionada”.

Los chilenos del MIR, que tras la desaparición en Argentina de Edgardo Enríquez, en abril de 1976, acentuaron su debilitamiento, se acercaron a la revolución cubana y los sobrevivientes del ERP, especialmente Gorriarán e Irurzún, lo hicieron a los cuadros sandinistas y combatieron en el Frente Sur contra la dictadura de Anastasio Somoza bajo las órdenes de Edén Pastora, el afamado comandante Cero, que después se desencantaría del sandinismo y formaría parte de la contra nicaragüense.

Gorriarán, una vez el sandinismo en el gobierno, desempeñó tareas de Inteligencia, siendo en teoría el segundo hombre de la Dirección General de Seguridad pero, en la práctica fue el estratega de las políticas que encabezaba Lenin Cerna y mantuvo una estrecha relación con Tomás Borge, al igual que sus compañeros del MIR quienes, a diferencia del argentino, no se llevaban bien con el aparato que manejaban los hermanos Ortega.

Según un dirigente del MIR, quien dice que desde mediados del 76, la JCR era “más una tesis política que una organización”, asegura que ello no significó un distanciamiento entre los sobrevivientes de Enríquez y Santucho. Por el contrario, los miristas, cuando el ERP estuvo más bajo, tras la muerte de su líder, retribuyeron en acciones solidarias concretas los aportes económicos, cerca de los 4 millones de dólares, que los argentinos hicieron a los chilenos después del golpe de Pinochet, cuando no tenían apoyo financiero alguno de los cubanos.

De alguna forma, los dirigentes del ERP se reintegraron a la lucha política a través del MIR y, a partir de allí, constituyeron un proyecto para crear un grupo que, en un determinado momento, ingresara a Chile o a la Argentina.

La primera etapa, a instancias de los chilenos, se desarrolló en Libia en 1978 donde recibieron entrenamiento, que no era muy necesario porque se trataba de militantes

con demasiada preparación, pero cuyo objeto era justificar el financiamiento que solicitaban a Muammar Gadafi.

El grupo volvió a Centroamérica, a raíz de que el propio Gorriarán lo solicitó, para integrarse en la lucha contra Somoza, con la idea de que reconstruiría el ERP con lo que pudiera reagrupar en Nicaragua. En ese momento, según un dirigente del MIR, ya no había JCR y nadie quería reivindicarla. "Fue corta la vida pero no fue efímera", aseguró.

Tanto el MIR, como los argentinos, se insertaron en Nicaragua. El ERP ayudó a los sandinistas en el aparato de Inteligencia y los montoneros, según versiones de prensa, formaron al menos tres columnas durante la guerra contra el dictador. Otro tanto hicieron los *miristas*.

Todo esto lo sabían los respectivos servicios de Inteligencia de Chile y de Argentina, aunque los agentes de este último país se notaban demasiado en los alrededores de Somoza. De hecho, casi una decena de oficiales argentinos, bajo el mando de Carlos Durich, un torturador de la Escuela de Mecánica de la Armada, trabajó con la policía secreta del ex dictador y, junto con transmitir su avanzada experiencia en la guerra sucia, se dedicó a perseguir a sus compatriotas que ayudaban al sandinismo.

Existió, asimismo, una estrecha colaboración entre estos agentes y el mayor de la guardia de Somoza, Emilio Echavarry, quien además de estar casado con una argentina, había asistido a la Escuela Militar de ese país entre 1958 y 1961. Cuando el dictador huyó de Nicaragua, Echavarry no dudó en asilarse en la embajada del país que tanto le había dado.

Al igual que el ERP y los Montoneros, el MIR estaba diezmado en 1978. Los que se salvaron, en esos años, ya vivían en Europa. Sólo una ínfima cantidad de dirigentes permaneció en Chile aunque ello significó que siempre el partido tuvo una presencia en el país. De Tupamaros quedaban sólo sus cenizas y una gran cantidad de dirigentes presos. Un documento de la Escuela de las Américas confirma esta información. Para los estrategas norteamericanos, por ejemplo, el MIR no se pudo recuperar nunca de las pérdidas que sufrió entre 1973 y 1975, los Tupamaros cayeron mucho antes cuando, según dicen, comenzaron a matar "indiscriminadamente" a individuos que pertenecían a escuadrones de la muerte, el ERP prácticamente sucumbió en 1976, tras la muerte de Santucho, y los montoneros se exiliaron en 1977.

En enero de 1978, el ejército argentino envió un grupo comando a México, liderado por un montonero arrepentido, con la tarea de infiltrarse entre la plana mayor del movimiento y liquidar a sus principales dirigentes. La operación, sin embargo, fue desbaratada por la policía azteca y los argentinos, dos oficiales de ejército y un miembro de la Policía Federal, fueron detenidos y expulsados de México. Al año siguiente, en lo que se denominó "la contraofensiva" de los montoneros, el líder de la organización, Mario Firmenich, envió a la Argentina a una centena de militantes exiliados con el objeto de atacar al gobierno de Videla. El resultado fue fatal: casi todos fueron asesinados.

A los dirigentes de estas organizaciones, de algún modo, los había traicionado su aventurerismo y la impaciencia revolucionaria. Movidos por un afán de justicia social e imbuidos de una mística guevarista no vacilaban, a pesar de los obstáculos, en la necesidad de su lucha. La mayoría eran jóvenes idealistas que se habían desarrollado en un continente lleno de mezquindades.

Pensaban, entonces, que podían cambiar el mundo y lo querían hacer con rapidez. Cada derrota, en vez de ser analizada en profundidad, era soslayada y no faltaba el dirigente que acuñaba la consigna maquista de "errar, persistir, volver a errar y persistir hasta la victoria".

No sólo el enfrentamiento era con fuerzas infinitamente superiores sino que, además, la infiltración de agentes de seguridad en sus filas era algo común y notorio. Muchas acciones guerrilleras fueron inducidas por los aparatos estatales de Inteligencia para obtener de ellas la coartada necesaria para continuar su acción indiscriminada.

Los rusos, por su parte, no fueron menos críticos con los grupos armados del Cono Sur. "En la mayoría de los casos la lucha armada se creía como únicamente posible (y esta lucha se transformaba con frecuencia en actos terroristas) con la negación de todas otras formas y métodos, aun en calidad de temporales y de segunda importancia. Definiendo las fuerzas motrices, como regla, se despreciaba el papel de la clase obrera y se exageraba el papel de los estudiantes, intelectuales y campesinos. Dichas organizaciones no han visto la necesidad de elevar la conciencia de las masas. Los ultraizquierdistas se negaban a luchar por el mejoramiento de la situación de los trabajadores en las condiciones del régimen existente y estaban convencidos que

la revolución socialista podría inmediatamente resolver todos los problemas. Muchas de estas organizaciones tenían posiciones sectarias y antiunitarias, no han utilizado las contradicciones en el campo del enemigo para conquistar aliados temporales. Desde nuestro punto de vista, las organizaciones ultraizquierdistas, desde su nacimiento, fueron muy heterogéneas, debido a su composición preponderantemente pequeño-burguesa y al eclecticismo de sus concepciones teóricas, que trataban de unir el marxismo-leninismo con elementos de cristianismo, nacionalismo, populismo...”, sostuvo el entonces soviético, Zbignev Ivanovski, del Instituto de América Latina.

Recién en 1976, tras cinco años de lucha y cuando el ERP había perdido una gran cantidad de sus militantes en manos de los grupos de tareas, Santucho reconoció que se habían equivocado en “la política” y en “subestimar la capacidad de las Fuerzas Armadas”. “Nuestro principal error fue no haber previsto el reflujo del movimiento de masas y no habernos replegado. Por lo tanto debemos desmilitarizar la política y replegar al partido...”, señaló unos días antes de que lo asesinaran. Ya era tarde.

Muchos cuadros de estas organizaciones, tras la embestida de las dictaduras, se incorporaron a otros movimientos en distintas partes del continente. Llegaron hasta el Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), combatieron en Nicaragua contra Somoza, engrosaron las filas del Movimiento 19 de abril (M-19) de Colombia, se integraron a Sendero Luminoso y al Tupac Amaru en Perú o, simplemente, utilizaron sus experiencias en asuntos privados.

“Frustrados por el estancamiento de sus propias revoluciones, escribió el *New York Times* el 23 de julio de 1979, los jóvenes izquierdistas de casi todos los países de América Latina gobernados por militares se alistaron como voluntarios para luchar junto a los guerrilleros sandinistas en los últimos meses”.

XIV

El nuevo frente

"...la guerra está que estalla en cualquier momento en los tres frentes. Como puedes ver esto no es muy agradable y toda esta campaña la está orquestando el equipo de la CIA para la caída de los que tú sabes..."

Texto de un memo secreto enviado desde Santiago a Enrique Arancibia Clavel en 1977.

Por esos años la gran oposición a los gobiernos militares, eran las agrupaciones defensoras de los derechos humanos que levantaban sus pancartas exigiendo justicia y, en la mayoría de los casos, preguntando sobre el paradero de sus seres queridos.

Las cifras de la represión, guerra sucia la llamaban algunos, superaba todo lo conocido. Sólo en Argentina los desaparecidos eran más de diez mil y en el continente las víctimas alcanzaban las 80 mil personas. Los uniformados, con técnicas atroces e inmorales, habían triunfado en un guerra contra su propio pueblo. Pero, el enemigo interno, al que habían combatido, ya no les ofrecía resistencia y la razón de ser de las fuerzas armadas volvió a ser, especialmente entre Chile y la Argentina, la preocupación por los mojones limítrofes. Los comandantes miraron el mapa y comenzaron a idear planes de guerra.

Fue la revista *Convicción* de Buenos Aires, vinculada al almirante Emilio Massera, la que en 1977 dijo que había "que saltar el mapa" porque con "el terrorismo en vías de desaparición" el régimen argentino necesitaba "un enemigo". Y se refería a la guerra con Chile.

"Alguno dirá: "no hemos ordenado la casa y pretendemos salir a pesar en el mundo..." ¿Y qué? ¿Acaso teníamos la casa ordenada en 1817 cuando nos fuimos a liberar a Chile y Perú? Y sin embargo esta gesta nos afirmó interna-

mente. ¿Por qué, en aquel entonces, sobrepasamos las fronteras? Porque teníamos el instinto de grandeza activado por una sensibilidad épica", decía la revista.

Massera, el que estaba detrás de estas y otras declaraciones, pretendía darle una continuidad a la línea dura de la dictadura, socavando el poder de los militares dialoguistas e impidiendo, de esa forma, que el "aniquilamiento" del enemigo interno significara la entrega del poder a los políticos.

Los grupos de tareas, en casi todos los países, quedaron huérfanos de trabajo y se vieron obligados a buscar nuevos horizontes. El operativo Cóndor, entonces, pareció perder vigencia, al menos, en el Cono Sur. Pero aún tenía un rol que cumplir. El conflicto limítrofe entre Chile y la Argentina, sin duda, colaboró para que fuera este último país el que asumiera un rol más protagónico y el Estado chileno, jaqueado internacionalmente por los atentados en Washington y Roma, se viera obligado a replegarse.

A ello se sumaban los conflictos de los chilenos con Perú, acrecentados por la llegada del primer centenario de la guerra del Pacífico, y con Bolivia, país con el que fracasaron las negociaciones, en un momento bastante avanzadas, donde Chile le concedería una salida al mar.

Ya a fines de 1977, a raíz de los resultados que arrojó la investigación del caso Letelier en los Estados Unidos, el gobierno de Pinochet, por decisión del cuerpo de generales, tuvo que disolver la DINA y pasar a retiro al general Manuel Contreras. Este, pese a lo ocurrido tras el atentado en Washington, no había escarmentado.

El 16 de mayo de ese año la DINA realizó una de sus últimas operaciones fuera del territorio chileno. Ese día fue arrestado en Buenos Aires el estudiante de geografía de la Universidad de Ginebra, el chileno-suizo Alexei Vladimir Jaccard Siegler, quien había llegado 24 horas antes a la Argentina, procedente de Europa, supuestamente con una partida de dinero que debía ingresar a Chile. En ese mismo operativo fueron detenidos otros dos chilenos, Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, encargado de organización y finanzas del PC de Chile y Héctor Heraldo Velázquez Mardones, otro militante comunista. A ellos se le agregaron cinco dirigentes del Comité de Solidaridad con Chile en Buenos Aires. Los ocho se encuentran desaparecidos.

A Jaccard, diversos testigos dicen haberlo visto en un

recinto de la Policía Federal Argentina y luego en la Escuela de Mecánica de la Armada. La presión de las autoridades suizas, ante la desaparición de un connacional en tránsito, obligó a los gobiernos y a los servicios de seguridad de Chile y la Argentina, según el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, a desplegar "un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente".

El hecho, por la trascendencia que tuvo, se sumó a la presión de los Estados Unidos por el caso Letelier e hizo fuerza para terminar con el oscuro período de la DINA la que, según el decreto que la disolvió, no era necesaria porque había sido creada durante una "situación de conflicto interno ya superado". El saldo de los años en que la DINA reinó, según el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, fue de casi mil 800 víctimas entre muertos y desaparecidos.

El lugar de la represión política, al disolverse la DINA, fue tomado por la Central Nacional de Informaciones (CNI). A cargo de la nueva versión represiva, bastante aggiornada y tras un pequeño tiempo en que estuvo en manos de Manuel Contreras, quedó el general Odlanier Mena Salinas quien, en 1970, realizó el curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela de las Américas. El general, en retiro, había disputado el poder de la Inteligencia con Contreras y su llegada, de algún modo, apresuró la salida del aparato represivo de los leales al militar cuestionado. También significó un cambio en los métodos.

Según el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la CNI, al igual que la DINA, fue un "organismo de Inteligencia del gobierno" pero, y a diferencia de esta última, debió enfrentar acciones armadas de grupos de extrema izquierda y sus operaciones estuvieron sometidas a un mayor control. En su primera etapa, tras la salida de Contreras y hasta mediados del año 80, la CNI se orientó más hacia la inteligencia política que a la represión directa y, de hecho, según el informe, bajó drásticamente el número de casos de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte.

Posteriormente, coincidente con la reactivación del MIR a través de la llamada "Operación Retorno" y el ingreso a escena del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Mapu Lautaro, recrudesció la acción represiva de la CNI. Ello significó, según Andrés Domínguez, "la legalización

de los procedimientos clandestinos, el funcionamiento normal de la cárcel secreta y la incomunicación por decisión administrativa, el inicio de la práctica de las relegaciones en forma reglamentada, la ampliación de la competencia de los tribunales militares, todo lo cual será acompañado de un perfeccionamiento de los procedimientos de tortura y la formulación explícita de una política de exilio indefinido para quienes habían logrado salvar su vida en el asilo o el refugio".

La CNI, asimismo y además de las labores de represión o de contrainsurgencia, realizaba inteligencia, contrainteligencia, análisis del comportamiento, seguimientos e, incluso, penetración de partidos y organizaciones políticas, sociales o religiosas. Las operaciones en el exterior quedaron rápidamente en el olvido aunque se realizaron algunas de escasa envergadura. La CNI en ese campo cedió el trabajo a las respectivas direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y concentró su quehacer en la represión política interna.

Muchos cuadros de la disuelta DINA y que retornaron a sus ramas armadas realizaron operaciones en el exterior pero, esta vez, en el ámbito del espionaje militar a países limítrofes. En esas andanzas fueron detenidos en Perú, por ejemplo, el que fuera jefe del departamento exterior de la DINA y uno de los integrantes de la comitiva del general Sergio Arellano Stark, Juan Vitermo Chiminelli Fullerton, junto al terrorista italiano Stefano Delle Chiaie.

El 4 de noviembre de 1978, asimismo, fue arrestado en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, por la SIDE de la Argentina. Hasta ese momento los argentinos permitieron el trabajo clandestino del agente chileno, pero la agudización del conflicto por el Beagle los obligó a detenerlo y recluirlo durante un tiempo prudente. Arancibia, en esos últimos meses y siguiendo instrucciones desde Santiago, se había dedicado a buscar información útil para el problema limítrofe. Ella estaba relacionada con las actividades de la CIA en Buenos Aires, la cantidad de agentes que tenía el organismo norteamericano y sus relaciones con Massera.

Otros cinco chilenos, Mario Igualt, Eduardo Segundo Quilodrán, Nicolás Díaz Pacheco, Jaime Patricio Arrau y Germán Vogel, fueron detenidos el mismo día que Arancibia. Igualt y Díaz participaron en la conspiración que desembocó en el asesinato del general René Schneider en

1970. Arrau, por su parte, era el gerente de ventas de Lan Chile en Buenos Aires. La red creada por Contreras, como un castillo de naipes, se venía abajo junto a su jefe.

La DINA venía trabajando, presumiblemente desde 1975, en un proyecto llamado Andrea, que no era otra cosa que la fabricación de un gas nervioso, cuya finalidad era ser usado en caso de conflicto bélico con los países vecinos.

Según el fiscal Eugene Propper y Taylor Branch, quienes publicaron el libro "Laberinto" en 1982, el jefe de la DINA creía que la guerra contra los generales izquierdistas del Perú era inminente y deseaba vivamente estar en posesión de armas secretas propias.

El encargado de la misión: Michael Townley.

El químico: Eugenio Berríos Sagredo, llamado "Hermes" en la DINA.

La ubicación del laboratorio: era la casa del primero, en la Vía Naranja de Lo Curro, un sector exclusivo de Santiago, donde el norteamericano vivía con su mujer, la chilena Mariana Callejas.

La misión: fabricar un gas nervioso.

El agente Townley hacía muchos años que estaba en esa tarea. Al día siguiente del atentado contra Bernardo Leighton en Italia, en octubre del 75, viajó a Londres con el objeto de desarrollar la acción encomendada por su jefe de la DINA. Primero se informó sobre los avances en la materia y tomó contacto con diversas empresas de ingeniería química, entre ellas Gallenkamp and Co. Ltd., una firma especializada en productos para laboratorios. Encargó allí los elementos necesarios para el trabajo. Unos debían llegar a Chile en barco y otros lo harían en aviones de la empresa Lan Chile. Recién en diciembre del 75, cuando recibió de Miami unos cilindros de almacenamiento y un gran horno de microondas, Andrea se puso en marcha.

Según Eugene Propper, el primer producto estable se obtuvo, en minúsculas cantidades, durante el año 76, cuando Townley creó en su casa, con su amigo Hermes, Isopropilmetilfosfonoflu, un líquido claro de organofosfato, conocido comúnmente como gas Sarín. "La idea original, se lee en "Laberinto", era desplegar esta arma a lo largo de la exigua frontera entre Chile y Perú, pero ahora, sin embargo, hay una mayor preocupación por Argentina. Una disputa territorial parece empujar a Chile hacia una guerra con Argentina, en la cual su ejército sería sobrepasado. En

tal caso, Andrea sería usado para proteger los pocos pasos de la cadena montañosa de Los Andes a través de los cuales los soldados argentinos pueden volcarse a Chile".

La necesidad de fortalecer el aparato bélico era aún más importante, desde abril del 76, porque el congreso de los Estados Unidos había aprobado por 48 votos contra 39 la llamada enmienda Kennedy con la que se prohibió el acceso a material de guerra a países donde se violaran los derechos humanos. Chile era uno de los primeros en la lista.

La DINA pensaba darle diversas utilidades al gas. Incluso, cuando a Townley se le da la orden de matar a Letelier, pensó atentar contra el ex canciller usando su nuevo producto y para ello, antes de partir a realizar su misión, llenó un frasco de perfume Chanel N° 5 con el gas nervioso. Posteriormente se desistió.

Al caer el norteamericano en manos de sus compatriotas, a raíz del caso Letelier precisamente, las pruebas sobre la existencia del laboratorio, sus vinculaciones con las empresas químicas inglesas, como Gallenkam, y las relaciones de la DINA con el producto mortal, se fueron acumulando.

Una de ellas, la carta enviada por Mariana Callejas al entonces miembro de la Junta Militar, Gustavo Leigh Guzmán, fue publicada en el libro "Bomba en una calle de Palermo", de los periodistas Mónica González y Edwin Harrington: "mi última carta, si mi marido recibe una condena larga y veo que mi hogar queda destruido, es la fórmula y una muestra de Andrea, producto químico desarrollado aquí, de increíble precisión y altura científica, un producto letal que, en caso de guerra, sería un arma absolutamente eficaz, pero que aquí ha sido usada para eliminar a personajes molestos porque los resultados son aparentemente un ataque al corazón...".

Fuera de circulación Michael Vernon Townley. ¿Qué pasó con el misterioso químico, Eugenio Berríos Sagredo, para muchos el verdadero cerebro de la terrorífica casa de la Vía Naranja? Pasarían muchos años antes que su nombre apareciera nuevamente en los titulares de prensa.

XV

Las carpetas del horror

"El archivo del terror es ahora prisionero de la opinión pública, de la memoria histórica, de la conciencia crítica de las jóvenes generaciones. Pero los autores del terror y de la corrupción viven en libertad o en dorados exilios".

Prólogo del libro paraguayo "Es mi informe".

En vísperas de la Navidad de 1992, tres años después que Alfredo Stroessner arrancara del Paraguay por la acción de su consuegro, el general Andrés Rodríguez, un ex detenido político le dijo al juez José Agustín Fernández, que un desconocido le había informado sobre la existencia de unos archivos en una alejada comisaría de la localidad de Lambaré en las afueras de Asunción.

Hasta allá llegó el magistrado y luego de franquear la entrada del cuartel, cruzar un patio y subir las escaleras que conducían a una pequeña habitación que estaba cerrada con un candado, se encontró con la sorpresa de que los archivos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital se hallaban en ese lugar.

De inmediato, familiares de víctimas de la represión paraguaya y periodistas de los diversos medios de prensa de Asunción, se dieron a la tarea de ver qué contenía el archivo. El horror fue apareciendo ante sus ojos y pudieron comprobar, con documentos de la propia policía, qué había ocurrido con parientes y amigos. La cuantificación del hallazgo no se hizo esperar:

* 700 mil folios en documentos referentes al stronismo.

* 740 libros encuadernados y clasificados con un sistema de números y letras.

* 115 libros de novedades de guardia (de la Dirección de Políticas y Afines, de la Dirección de Vigilancia y delitos y del domicilio del jefe de Investigaciones).

* 181 archivadores y 204 contenedores de cartón donde se agrupan informes y documentos de origen muy diverso.

* 574 carpetas con informaciones sobre partidos políticos, sindicatos, mapas, controles, etc.

* 8.369 fichas de detenidos (del Departamento de Investigaciones, sección Técnica y departamento Judicial).

* 1.888 cédulas de identidad y pasaportes.

* No menos de 10 mil fotografías de detenidos, actos políticos y sociales, de acontecimientos familiares, etc.

* 1.500 libros y revistas producto de allanamientos e incautaciones a detenidos políticos.

* 543 cassettes con grabaciones de paneles, conferencias, homilías, discursos, programas radiales, etc.

Martín Almada, el ex preso político de Alfredo Stroessner que permitió este hallazgo, le hizo entrega de cinco toneladas de estos documentos al juez español Baltasar Garzón en noviembre de 1998.

Si hasta el 92 la existencia de la Operación Cóndor estaba escrita en algunos papeles desclasificados del FBI y en declaraciones de testigos o agentes arrepentidos, el archivo paraguayo le dio la legitimidad que le faltaba. En este quedó de manifiesto, más allá de las insuficiencias que pueda tener porque no están todos los casos, que la colaboración fue un hecho y que la coordinación existió.

La presencia en la misma de la Inteligencia chilena es indesmentible, especialmente porque en Lambaré fue encontrada la carta-invitación del general Contreras y otros memos reservados de la DINA y el DINE.

Ella, sin embargo, fue decreciendo en intensidad. En 1978 era prácticamente inexistente porque el gobierno de Chile estaba viviendo un absoluto aislamiento, incluso entre aquellos con los que compartía ideales y objetivos. Basta recordar, únicamente, el viaje de Pinochet a Filipinas en marzo del 80 en el que Ferdinand Marcos, tan duro como él, optó por no recibirlo y el general chileno debió dar la vuelta lleno de vergüenza.

Las demás dictaduras, como las de la Argentina, Paraguay y el Uruguay continuaron adelante con sus intercambios. Según un escrito de Inteligencia paraguayo, de junio de 1978, las agrupaciones de izquierda de ese país recibían asesoramiento de "elementos subversivos extranjeros particularmente argentinos tales como: los montoneros

y el ERP". Para los expertos de Stroessner, existían "documentos de la firma de un pacto de asesoramiento y apoyo económico". Todos ellos, según los paraguayos, "alentados por la Comisión de Derechos Humanos y otras conocidas organizaciones internacionales".

La necesidad de justificar la represión hacía que los uniformados vieran enemigos en todos los rincones de la tierra. Para los militares eran las agrupaciones de familiares, especialmente las madres de los detenidos desaparecidos, quienes les producían los mayores dolores de cabeza. "Comenzaron con manifestaciones simbólicas, no violentas, en la plaza de Mayo, de ahí el nombre que se les dio, primero locas de la Plaza de Mayo, luego Madres de la Plaza de Mayo, pero yo preferí llamarlas Madres Coraje, ya que, frente a la fuerte represión que sufrieron, que llegó incluso hasta el secuestro y la desaparición de algunas de ellas, se mantuvieron firmes, llorando, pero firmes", señaló Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980.

Esto, entonces, obligó a los uniformados a continuar las operaciones represivas y, especialmente, centralizar las miradas en los llamados grupos humanitarios. Máxime aún, cuando los mismos militares guaraníes se habían vanagloriado, un año antes, que "la subversión" en ese país fracasó "porque el Paraguay ha logrado estructurar sus diversos servicios de seguridad con ponderable eficacia organizativa y con métodos modernos".

Desde sus comienzos, Paraguay adscribió a la operación Cóndor y los contactos con las demás organizaciones del área fueron centralizadas y coordinadas por el II Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (ESMAGENFA). Tuvo una especial relevancia, sin embargo y a diferencia de otros países, el denominado Departamento de Investigaciones, una suerte de policía, que dirigía Pastor M. Coronel.

En 1981, el propio Coronel dejó pruebas escritas de la existencia de la coordinación represiva cuando, en una nota que dirigió al jefe de la Policía paraguaya, señaló que algunos dirigentes del Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), "ante la posibilidad de que sean detectados y tomados por las Fuerzas Militares Argentinas, dentro de la Operación Cóndor, están analizando y buscando un lugar seguro donde realizar sus reuniones...".

La relación entre la Argentina y el Paraguay fue

extremadamente fluida. En 1977, en la "VII Conferencia Bilateral de Inteligencia" entre ambas naciones, Coronel destacó "la necesidad de una eficiente coordinación entre los Ejércitos de Paraguay y Argentina" para "coartar el logro de los planes elaborados por los grupos subversivos". El intercambio de prisioneros, en esa fecha, era toda una realidad.

Un caso patético, sin duda, fue el de la doctora paraguaya Gladys Meilinger, detenida en la localidad de Candelaria, provincia de Misiones, en la República Argentina, el 24 de marzo de 1976 y entregada, encapuchada y esposada, a efectivos del Paraguay meses más tarde. Fue brutalmente torturada. El 18 de marzo de 1977, de acuerdo al registro existente en el libro de novedades de la guardia de la Dirección de Política y Afines de Asunción, obtuvo su libertad. No era cierto. La mujer, tres días más tarde, fue enviada de vuelta a la Argentina, a la Escuela de Mecánica de la Armada, desde donde finalmente partió a su exilio en Alemania.

Otro caso, también del 76, es el de un estudiante de medicina de 21 años, el argentino Oscar Luis Rojas, detenido en Asunción bajo la acusación de pertenecer a Montoneros. El joven, luego de sufrir las torturas de rigor de la policía paraguaya, fue trasladado al penal de Emboscada, donde estuvo hasta marzo de 1977. El 22 de ese mes, Luis Rojas fue entregado a un grupo de tarea argentino, según consta en su ficha, quien lo recibió en Puerto Falcón. En julio, cuando se disponía a viajar a Europa, fue secuestrado nuevamente en Buenos Aires y desde entonces se encuentra desaparecido.

Igual situación es la que vivió el médico traumatólogo paraguayo, Agustín Goiburú, dirigente del Partido Colorado, quien había sido secuestrado por agentes de Stroessner en 1969 y que tras un año encarcelado, protagonizó el 13 de diciembre de 1970 una espectacular fuga desde la Comisaría Séptima de Asunción. El médico, una vez en libertad, se asiló en la embajada de Chile y viajó a Santiago. Posteriormente, con el objeto de estar más cerca del Paraguay, se radicó en la Argentina donde era cuidadosamente vigilado por la policía secreta de su país. Tanto en 1974 como en 1975, los agentes paraguayos que respondían a las órdenes de Pastor Coronel o Benito Guanes Serrano, pretendieron secuestrar nuevamente en suelo argentino, como ya lo habían hecho en 1969, al

médico que se oponía a Stroessner. Las dos veces fracasaron. En una de ellas los hijos de Goiburú lograron detener a uno de los secuestradores, el ex comisario paraguayo Bernardo Cocco, a quien entregaron a gendarmería de Posadas, la que rápidamente lo liberó.

En 1977, según Pastor Coronel, Goiburú dirigía, desde Argentina, una "organización terrorista", con el nombre de Ejército Paraguayo Revolucionario, que recibía entrenamiento del ERP argentino y era el encargado de proporcionar las armas, explosivos y el dinero a los militantes que el grupo tenía dentro del territorio guaraní. Los ojos del Cóndor, entonces, debían fijarse en el dirigente que tanto buscaba Stroessner. Para su captura la policía paraguaya tenía que contar con la colaboración del país vecino, en este caso la Argentina, donde residía el médico.

Un documento, encontrado años más tarde en los archivos de la policía en Asunción, reveló la forma en que operaban los hombres de Inteligencia: "Goiburú, después del intento de secuestro sufrido hace poco tiempo, toma medidas de seguridad personal y familiar extraordinarias. Trabaja exclusivamente en su clínica con un médico paraguayo y un argentino. Tiene una recepcionista que le anuncia sus visitas o nombres de clientes. Su consultorio en la clínica es el primero entrando a la derecha. Tiene autorización para portar armas y lo hace siempre portando un 38 Special. En su consultorio tiene armas largas y lo mismo en su domicilio. En el domicilio la operación es prácticamente imposible (...) Está parecido a la foto, más delgado y el rostro más chupado (...) tiene agallas y fue él mismo quien puso en fuga a quienes iban a atentarle, deteniendo y reduciendo al civil que fue entregado a la policía de la ciudad (...) se han marcado sus itinerarios, horarios de entrada, salida y atención de la clientela. El atentado se realizará en el trayecto de la clínica a su domicilio. Se han marcado los lugares posibles y está todo arreglado para su regreso de vacaciones que se llevará a cabo a mediados de febrero. Se lo tratará de ubicar en La Plata o en Mar del Plata mientras tanto. Intervendrá un solo grupo de cuatro hombres, con dos vehículos y armas adecuadas, cuyo manejo y prácticas se están ensayando...".

A Goiburú, de acuerdo a la gran información que de él se disponía, lo estaban siguiendo desde hacía tiempo, en la ciudad argentina de Paraná, los grupos de tarea de ese país. Una voluminosa carpeta, con fotografías de su domi-

cilio y el consultorio, además de información detallada de sus familiares, amigos, cuentas bancarias, horarios, características de los vehículos en los que se movilizaba y las rutas por donde transitaba, daba cuenta del trabajo profesional de los agentes.

El 8 de febrero de 1977 el capitán del Ejército argentino, Vicente Caxtes Laprida, dirigió una nota a Pastor Coronel, en la que dijo que "el señor Juan H. Amarilla, agente de su más entera confianza y abocado a localizar, hacer su seguimiento y apresar al Dr. de origen paraguayo que posiblemente esté ejerciendo en la provincia de Entre Ríos (...) ha sido munido por este destacamento de los elementos necesarios para su movilización y traslado...". Menos de 24 horas después, Agustín Goiburú fue secuestrado y nunca más se supo de su paradero. "Según información obtenida, señala un documento de Inteligencia del Ejército argentino, una persona del sexo masculino, morocho, alto, que conducía un automóvil Ford Falcon, color verde aceituna, envistió (sic) al vehículo de la víctima: un Fiat 128 I., que se encontraba estacionado en calle Nogoyá N° 572, encontrándose su dueño en una habitación ubicada a los fondos de la finca sita en esa dirección. Al acudir el nombrado al lugar donde estaba su automóvil, fue reducido mediante armas de fuego cortas por el conductor del Ford Falcon, ayudado por otra persona del sexo masculino, rubio, alto, y apoyado por una Pick Up color verde oscuro que circuló en contramano. El profesional citado fue introducido al automóvil Ford Falcon desapareciendo con rumbo desconocido...".

Goiburú, de acuerdo a informaciones de la prensa guaraní, estuvo detenido un tiempo en la Argentina, a cargo de la Fuerza Aérea de ese país, y posteriormente fue entregado en Puerto Falcón a las autoridades paraguayas. Los periodistas del diario *Última Hora* de Asunción, en marzo de 1993, durante una entrevista a Domingo Rolón Centurión, ex preso político de Stroessner, le mostraron una foto del facultativo desaparecido en la Argentina y, según los profesionales, este "exclamó exaltado: ¡es él!" Agregó, asimismo, que "efectivamente vio al médico en Investigaciones dos veces en una misma noche. A las 22 de un día que no recuerdo, lo vi en un pasillo, tirado boca arriba totalmente golpeado. Tres horas después me obligaron a entrar a la sala de tortura donde me preguntaron si lo conocía, a lo que respondí que no. Él estaba inconsciente y completamente mojado. Lo acababan de piletar".

La Operación Cóndor, además, quedó de manifiesto en la colaboración que los servicios argentinos prestaron a sus colegas paraguayos en la detención de otros opositores de esa nacionalidad que se encontraban en su territorio.

El ciudadano argentino Osiris Lineo Ayala, por ejemplo, fue secuestrado en agosto de 1976 en su domicilio de Formosa y trasladado al Regimiento de Infantería de Monte número 29, donde estuvo desaparecido por más de 20 días antes de ser legalizado. Durante su cautiverio, en el cual fue torturado, compartió la celda con un grupo de paraguayos y estuvo a punto de irse a ese país, con los otros presos, si no es por la oportuna advertencia de un oficial guaraní. "Hay uno que no es paraguayo, dígame al capitán Espada que nosotros no queremos llevar gente que no sea paraguaya", le advirtió el uniformado.

Posteriormente, los militares paraguayos serían invitados a sendos cursos de inteligencia nacional, dictados por la SIDE en la Escuela de Mecánica de la Armada, y que entre sus materias destacaban "inteligencia y contraespionaje" o "subversión y terrorismo".

El 28 de marzo de 1977 fueron detenidos en Asunción los argentinos José Nell, Marta Dora Landi Gil y su esposo Alejandro José Logolusso Di Martino, conjuntamente con los uruguayos Nelson Rodolfo Santana Scotto y Gustavo Edison Inzaurrealde Melliar. Todos ellos estaban hospedados en una pensión a la que llegó la policía paraguaya alertada de que en ella un grupo de argentinos se encontraba esperando le fuera entregada la documentación falsa necesaria para poder viajar a Europa. El allanamiento fue dispuesto y adelantado porque en esos días arribaría de visita a Asunción el general Jorge Rafael Videla.

Según la información que disponía Pastor Coronel, el jefe del Departamento de Investigaciones, eran un centenar las personas, "todos peronistas fugados de la Argentina", los que requerían los pasaportes falsos y los cinco detenidos, siempre de acuerdo a la fuente policial, serían "la cabeza visible de una organización extremista" que se hallaba en Paraguay única y exclusivamente con el objetivo de montar una estructura que permitiera conseguir documentos falsos para salir del país.

De todos ellos, Inzaurrealde, el uruguayo, había sido expulsado de su país en 1971 y luego radicado en Chile hasta la caída de Allende. Su vida fue tranquila en Argentina,

país en el que se refugió, pero sobrevino el golpe de Videla y debió salir apuradamente. En Paraguay pretendía, simplemente, obtener la documentación para abandonar la trampa que era, en esos años, el cono sur de América. No pudo.

En pocas horas, agentes de Inteligencia de los tres países, Uruguay, Argentina y Paraguay, se reunieron para analizar todos los elementos del caso. Entre otros, además de los oficiales paraguayos Benito Guanes Serrano, Galo Escobar y Angel Spada, destacaron en ese encuentro los argentinos José Montenegro y Alejandro Stada, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el mayor uruguayo, miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército, Juan Carlos Calcagno. Este último, que se destacó en la represión a los tupamaros, desde 1976 se encontraba en Argentina con la misión de terminar con los restos del Partido de la Victoria del Pueblo (PVP). Inzaurrealde, hombre de esa agrupación, era el encargado de coordinar la retirada de sus camaradas del cono sur y Calcagno estaba tras sus pasos desde hacía mucho tiempo. Según el periodista uruguayo Samuel Blixen, el encuentro entre el mayor de Inteligencia e Inzaurrealde se dio de la siguiente forma:

“Entonces aparece en el calabozo un tipo vestido de civil, que lo mira un buen rato, y le pregunta:

-¿Cómo te llamás?

Gustavo siente un escalofrío. “Es uruguayo”, piensa, y dice:

-Abrahan Vega.

-Dejate de joder. Vos sos Gustavo Inzaurrealde”.

Los primeros interrogatorios, como lo señalaba la información que disponían los agentes, determinaron que José Logolusso, de sólo 20 años y Marta Landi, de 22, no tenían relación con Nell, Santana e Inzaurrealde. Los tres últimos estaban, efectivamente, creando la estructura que asegurara los pasaportes y Logolusso con su pareja, simplemente, escapando de la represión argentina luego de un par de allanamientos a sus moradas en Buenos Aires por su militancia peronista. “Se aprecia que Landi, señaló uno de los documentos de trabajo del grupo de inteligencia multinacional que, durante tres días, interrogó a los detenidos, no posee ningún tipo de militancia en la BDS (banda de subversivos en la jerga militar) Montoneiros o colaterales, estimándose también que estaría des-

vinculada a las anteriores actividades de su concubino". Esto no les sirvió.

De acuerdo a los informes encontrados en lo que se conoció como "los Archivos del Horror", los dos uruguayos y los tres argentinos viajaron el 16 de mayo en un avión bi-reactor de la Armada Argentina, piloteado por el capitán de corbeta José Abdala, con destino a la ciudad de Buenos Aires.

En los escritos paraguayos se agrega, además, que los mismos, "fueron entregados, en la oportunidad, a los tenientes José Montenegro y Juan Manuel Berret, ambos del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino (SIE) ante la presencia de Benito Guanes Serrano y el capitán de fragata Lázaro Sosa". Desde entonces, Insaurrealde, Landi, Logolusso, Nell y Santana, integran la lista de personas desaparecidas.

Cuando el Departamento de Investigaciones de Pastor Coronel fue consultado sobre la suerte que habría corrido Marta Landi, este respondió que la misma "fue puesta en libertad el día 16 de mayo de 1977, ignorándose a la fecha su paradero". A diferencia de otros casos, los paraguayos se guardaron una carta bajo la manga, para deslindar responsabilidades, e hicieron firmar al capitán Abdala un papel que decía: "recibí de la Dirección de Política y Afines los detenidos que a continuación se mencionan, que pasan a disposición de las autoridades argentinas". Benito Guanes quiso ocultar, por su parte, esta extradición ilegal y, un día después de la entrega, emitió un comunicado en el que públicamente informó que los cinco detenidos fueron expulsados del Paraguay, "vía aeropuerto", por "carecer de documentación de radicación".

La verdad era otra. Tanto es así que, por este hecho, se encuentran procesados el propio Guanes Serrano, los paraguayos Francisco Britez y Galo Escobar, el uruguayo Juan Carlos Calcagno y los argentinos José Montenegro y Juan Manuel Berret.

Era un hecho que la coordinación funcionaba perfectamente. El 28 de junio de 1978, de acuerdo a un documento publicado por el diario Noticias de Asunción, se oficializó la cooperación entre ambos, la Argentina y el Paraguay, cuando Benito Guanes Serrano y el coronel Juan Félix Porcel de Peralta, del segundo Cuerpo del Ejército argentino, firmaron un acuerdo de Inteligencia en el que

se estableció que, "según la importancia del blanco, se podrán efectuar consultas bilaterales y se autorizará el trabajo conjunto en los interrogatorios. El intercambio de detenidos encubiertos se realizará mediante un enlace. El lugar donde se llevará a cabo el traspaso de detenidos, a convenir".

Al año siguiente, entre febrero y marzo, el Grupo de Tareas (GT) de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que dirigía en plena capital argentina, el capitán Jorge "Tigre" Acosta, organizó un "curso de lucha antisubversiva" al que fueron invitados agentes de diversos países del área. De acuerdo al testimonio de Amalia Larralde, detenida en ese lugar, al encuentro concurren representantes de Brasil, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. "Cada uno de los países hizo una exposición que fue grabada. Ella consistía en una presentación de su país y una explicación de las características y métodos de su accionar represivo. El grupo de tareas de la ESMA preparó varios informes. Uno de ellos sobre la historia de la guerrilla en la Argentina. Otro sobre la organización y creación de los GT. Otro informe sobre los métodos más efectivos de la tortura, con sus diferentes etapas, torturas físicas (diagramando los puntos más vulnerables), tortura psicológica, aislamiento, etc. Prepararon también un dossier con fotos, descripción e historia de las personas buscadas que fue repartido entre los participantes".

Argentina a esta altura encabezaba el grupo y su proyección hacia el exterior, con el objeto de influir en la región y especialmente en Centroamérica, se basaba en la experiencia alcanzada en la llamada "guerra sucia" y la idea generalizada en sus altos mandos de que los ejércitos no estaban para cuidar fronteras sino para pelear contra el comunismo.

En ese punto, y a pesar de la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, los uniformados argentinos confluían ideológicamente con el entrante gobierno de Ronald Reagan, quien manifestaba grandes preocupaciones por la situación en América Central, tras la caída del régimen de Anastasio Somoza.

Mientras algunos de los sobrevivientes del ERP no dudaron en trabajar codo a codo con los sandinistas en Nicaragua, antes y después del triunfo, muchos militares argentinos fueron enviados en misión especial para socavar

militarmente la revolución nicaragüense. Antes de que ello ocurriera muchos de ellos jugaron un rol fundamental en el golpe que terminó anticipadamente con la presidencia de Lidia Gueiler, que debía entregar el poder al izquierdista Hernán Siles Suazo, y puso en su lugar al general Luis García Meza.

XVI

La traición chilena

“¡Tírale ahora!

Él le tira desde dentro de la casa. La explosión fue impresionante. Pudimos ver el auto totalmente destrozado y la custodia escondida detrás de un murito de la casa de al lado. Ya no tiraban más”.

Relato de Enrique Gorriarán sobre el atentado a Somoza.

Enrique Gorriarán Merlo y Hugo Irurzún, ambos argentinos, ingresaron clandestinamente a Paraguay en 1980 para realizar la “Operación Reptil”. Irurzún lo hizo con pasaporte mexicano, a nombre de Rogelio Hernández, luego de viajar de Panamá hasta Río de Janeiro, llegando a Asunción el 17 de julio. La forma en que lo hizo Gorriarán es un misterio.

Otro personaje de esta historia, el fotógrafo chileno Alejandro Mella Latorre, entró a tierra guaraní en agosto de ese año. Los dos ex dirigentes del ERP habían combatido en el Frente Sur contra Somoza y luego, una vez que el sandinismo se apoderó del gobierno nicaragüense, accedieron a altos cargos en la Inteligencia del flamante equipo de Daniel Ortega y Tomás Borge.

En Asunción vivía, desde su caída, Anastasio Somoza Debayle, dictador nicaragüense, quien había llegado al Paraguay en agosto de 1979 acompañado de un séquito de guardaespaldas, familiares y, especialmente, una gran fortuna, obtenida ilegalmente durante la larga y corrupta administración familiar de más de 40 años. Dejó a su huida un país destruido y en bancarota, con miles de muertos y lleno de ciudades destruidas por sus aviones con el objeto de impedir el triunfo sandinista en Nicaragua.

El ex gobernante estaba seguro que, en la tierra de

Stroessner, no corría riesgo alguno pues el presidente paraguayo se había especializado en darle asilo a todo tipo de dirigentes del fascismo mundial.

Pasados 10 minutos de las 10 de la mañana del 17 de septiembre, en la esquina de las avenidas Generalísimo Francisco Franco y América, todo un símbolo, el Mercedes Benz color blanco que transportaba a Somoza fue alcanzado por la granada de un lanzacohetes de fabricación china. El paraíso de los dictadores, en ese 1980, ya no lo era tanto. Un cerrado fuego de armas automáticas escribió el certificado de defunción del dictador: "causa de muerte: estallido de cráneo".

"Salí al jardín de donde se veía el auto a unos sesenta metros, contó Gorriarán a Claribel Alegría y D. J. Flakoll para el libro "Somoza: expediente cerrado", mientras Armando estaba al volante de la camioneta, listo para salir a cortar el tránsito. Con la práctica habíamos logrado movilizarnos en 13 segundos después de escuchar la señal. Yo tenía un punto de referencia que era cuando coincidiera la parte delantera del vehículo con un árbol, le hacía una seña a Santiago (Hugo Iruzún) para que no saliera antes del momento preciso y alguien pudiera verlo con la bazuca. Armando estaba esperando la señal mía que consistía en bajar el brazo para cruzar el vehículo u obstruir el tránsito".

"Veo a Ramón (Gorriarán), prosigue Armando, que está esperando para darle la seña a Santiago para que se ponga en posición de tiro y la verdad, que no lo vi más. El me tenía que dar la seña de cuándo tenía que partir, pero yo me puse a ver el auto y como tengo mucha práctica en manejo y eso, ya sabía cuándo tenía que arrancar, cuántos autos tenía que cortar. Cuando veo que arranca con cinco o seis autos adelante, dejo pasar dos o tres, me largo con la camioneta y se la tiro a otra, a una Volkswagen Combi, que venía adelante, que era la que yo quería cortar. La tiré y el tipo clavó los frenos y se puso en el medio de la calle. Ya venía el Mercedes blanco atrás y cuando me estoy bajando de la camioneta siento, ¡pam!, ¡pam!, ¡pam!, los tiros".

"Yo comienzo a tirar, prosigue Gorriarán, le pego al chofer que ya había frenado. El vehículo siguió avanzando y fue a parar justo frente a la puerta. En seguida le tiro a los otros dos. El hombre ni cuenta se dio porque miraba hacia adelante. Fue hasta entonces que entró en acción la custo-

día de Somoza. Yo no la había visto. Cuando quiero tirarles me doy cuenta que no tengo más balas en el M16. Santiago se había retirado a la entrada de la casa y ya estaba listo. Corro hasta donde está él y le digo: ¡Tírale ahora!

Somoza pagó cara su confianza en el paraíso de Stroessner. "En reiteradas oportunidades se le advirtió de la necesidad de cambiar de itinerario, así como la de variar los restaurantes que frecuentaba o usar el automóvil blindado. Pero nunca hizo caso. Agradecía y sonreía y nada más...", señalaría en su informe, el comisario Francisco Rubén González, jefe de la escolta policial del nicaragüense.

En Nicaragua la noticia llegó y fue recibida con algarabía, tanta que se declaró un día de júbilo nacional. Y el ejemplar del diario *Barricada*, del día siguiente y en una edición extraordinaria, dio cuenta de ella: "Al heroico pueblo de Nicaragua y al mundo: la dirección nacional de FSLN, al confirmar el ajusticiamiento del genocida Anastasio Somoza Debayle, se suma al regocijo nacional del pueblo de Sandino que ve cumplidos en esta heroica acción, su deber y sus anhelos de justicia y vindicta popular para quien masacró a más de cien mil nicaragüenses y sumió a nuestro país en la miseria y la ignominia. Para el asesino de Pablo Leal, Báez Bone, Edwin Castro, Ajax Delgado, Casimiro Sotelo, Pedro Joaquín Chamorro, y tantos patriotas más. Para quien ordenó el genocidio en Waslala, Sofana, Estelí, León, Monimbó, Chinandega, Matagalpa, Managua, Carazo y de tantas ciudades mártires de Nicaragua. El espíritu combativo de abnegación y valentía del heroico comando que ajustició al tirano, encarna la implacable voluntad del pueblo de Rigoberto..."

Los agresores desaparecieron en cuestión de segundos. Sin que se diera cuenta la Inteligencia paraguaya, que se jactaba de su eficiencia, los hombres de Gorriarán planificaron en sus narices el tiranicidio, realizaron acabados seguimientos, arrendaron casas, compraron autos e ingresaron al Paraguay una bazuca, una carabina semiautomática M16, un fusil FAL, dos pistolas ametralladoras Ingram y modernos equipos de comunicación.

No eran faltos de experiencia. Por el contrario, previo al atentado contra Somoza en Asunción, Gorriarán Merlo y su gente habían asesinado en Honduras al mayor Pablo Emilio Salazar, a quien llamaban Bravo, uno de los

más prestigiosos miembros de la Guardia Nacional del ex dictador y que mantuvo sus posiciones en el Frente Sur ante el avance del comandante Pastora. En la oportunidad, al conocerse la noticia en Managua de la muerte de Bravo, el entonces ministro del Interior, Tomás Borge, aseguró que los enemigos de su pueblo caerían, uno por uno, y adelantó que "más tarde o más temprano llegará el turno del asesino Anastasio Somoza".

Ello era lo que había ocurrido ahora en una calle de Asunción.

Los paraguayos, desconcertados y bajo las órdenes del general Francisco Brítez Borges, jefe de la Policía y de Pastor Coronel, capo de Investigaciones, ambos en sus cargos desde los sesenta, comenzaron operativos rastrillo en toda la capital, cerraron fronteras y aeropuertos, detuvieron a toda persona que parecía sospechosa y, especialmente, enfocaron la mira hacia los extranjeros. La seguridad se jugaba la vida en la reacción. Stroessner ofreció una recompensa de cuatro millones de guaraníes para el que diera información acerca del lugar donde se encontraba el grupo de argentinos que había atentado contra Somoza y la policía obligó a todos los extranjeros a presentarse ante la autoridad y tramitar un permiso especial para circular por las calles paraguayas. Así, en este cuadro, fue ubicado Hugo Alfredo Iruzún (Santiago), amigo y correligionario de Gorriarán, quien según la versión oficial se enfrentó a tiros con efectivos paraguayos y falleció camino al Policlínico Policial. "Después de dejar a Osvaldo, él lo que tenía que hacer era irse directamente para la casa, afeitarse porque estaba con barba y de allí irse a otro sitio, cerca del lugar de encuentro para la retirada. No sabemos por qué, al día siguiente, lo agarran en la casa. Además estaba con barba. Él tuvo alguna dificultad que le impidió entrar a la casa. Se quedó a la espera y cuando va a entrar, o cuando él está adentro, allí llegan. También pudo ser que lo estuvieran esperando", relató Gorriarán en "Somoza: expediente cerrado".

Un documento de los archivos policiales, encontrados en 1992, señala que el ex militante del ERP fue llevado con vida a la Jefatura del Departamento de Investigaciones donde confesó su participación en el atentado y aseguró que eran tres los que formaban el comando, dos de los cuales ya habían salido hacia la Argentina.

La caza de brujas continuó y los cuarteles se llenaron de sospechosos. Los paraguayos acudieron de inmediato a sus socios del Cóndor para recabar información sobre el atentado y cada vez que detenían a un extranjero, a través del general Benito Guanes Serrano del D-2, consultaban qué antecedentes tenían de esa persona las agencias amigas. No era mucho, sin embargo, lo que avanzaban en el tema. La Inteligencia argentina, como ninguna otra, se movió rápidamente para tratar de identificar a sus compatriotas que mataron a Somoza y trabajaron codo a codo con la policía de Stroessner. No sabían que casi todo el comando, a excepción del abatido comandante Santiago, ya estaba en Madrid.

Casi tres semanas después del hecho, el sábado 8 de noviembre, fueron detenidos Alejandro Mella Latorre y su esposa Ana Castro Ayala. Estos últimos habían arribado cuatro días antes del tiranicidio a la capital guaraní. De inmediato, Guanes le envió los antecedentes del matrimonio a la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE) para que buscara algo en sus archivos. Días después, el agregado militar de Pinochet en Asunción, le señaló a sus colegas que ni Mella Latorre ni Castro Ayala registraban antecedentes. Quince días más tarde, el mismo uniformado chileno le informó a Guanes Serrano que un oficial de enlace del DINE arribaría a Asunción, el sábado 29 de noviembre, para entregarle una detallada información sobre Mella Latorre cuyo legajo era secreto.

Así se enteró la Inteligencia paraguaya, entonces, que los agentes chilenos sabían, desde hacía mucho tiempo, que los sandinistas pretendían operar sobre Somoza, matarlo o secuestrarlo, en tierras guaraníes. No lo habían comunicado, como debieron hacerlo en respeto al Cóndor, para proteger a sus propios agentes encubiertos. Y Mella Latorre, al parecer, era uno de ellos. Sabían del atentado, asimismo, los agentes peruanos y panameños. Estos últimos, que eran gobernados por el general Omar Torrijos, habrían prestado su colaboración para el mismo desde la embajada en Asunción.

El fotógrafo chileno, que se había ido de su país hacia los Estados Unidos cuando apenas tenía 15 años, fue reclutado por la DINA a fines de 1974. En ese momento vivía en México. En 1977 se fue a trabajar al diario *La Prensa* de Managua y allí comenzó a ser correo del Frente Sandinista. Se puso en contacto con el agregado militar chi-

leno en Nicaragua y éste comenzó a contar con sus servicios. Si bien el informe chileno aseguraba que no era agente de sus servicios, reconocía que había suministrado datos de sus compatriotas que estaban dentro del sandinismo. "Por los antecedentes suministrados por DINE, decía Guanes Serrano en el Informe D-2 069/80, se trataría de un elemento vinculado al castrismo y al sandinismo, así como a la Inteligencia panameña. No se descarta que pueda estar vinculado a algún servicio norteamericano, dada su habilidad para actuar como doble agente". Es decir, entre 1977 y 1979, Mella Latorre se desempeñó como agente para la Guardia Nacional de Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el DINE de Chile, a través de los agregados militares en Nicaragua, coronel Humberto Lorca Cerda; Costa Rica, coronel Alejandro Cabezas, y Panamá, coronel Enrique Giesen Larrañaga.

A los chilenos lo que realmente les interesaba, más que la suerte del dictador Somoza, era saber el grado de participación que tenían sus compatriotas en la guerrilla sandinista y quiénes eran los que recibían preparación militar en el exterior.

Los servicios de seguridad, a principios de 1978, ya habían detectado movimientos del MIR fuera de Chile, la participación de estos en escuelas de instrucción y la voluntad de sus militantes de participar activamente en la lucha contra Somoza en Nicaragua. Estaban conscientes, asimismo, que el MIR, en diciembre de 1978, realizó una reunión plenaria en el exterior en la que se planteó la necesidad de retomar una ofensiva político-militar contra el régimen de Pinochet.

Para los miristas era fundamental estar preparados en el corto plazo, dentro de Chile, para acompañar militarmente la "reanimación del movimiento popular, que llevaría a una agudización progresiva de la contradicción régimen-pueblo, así como en la rápida conversión de la lucha político-social en lucha armada de masas". El movimiento pensaba que, en ese clima, el partido crecería y "sería capaz de dar infraestructura a los centenares de combatientes que debían ingresar clandestinamente y vivir ilegalmente en el país".

El "Plan 78", como fue denominado, no era otra cosa que incentivar el retorno de los militantes que estaban en el exilio, ahora con cierta preparación militar y experiencia,

iniciar acciones de envergadura dentro de Chile y fomentar la aparición de organizaciones abiertas con la misión de expresar "una línea democrático-revolucionaria e impulsar las primeras movilizaciones".

Todas estas acciones ayudaron al crecimiento del MIR, otorgándole una presencia extremadamente importante en la política nacional. Pero era, sin duda, ficticia. A partir de 1980 las fuerzas represivas cayeron violentamente sobre esta organización. ¿Estaba al tanto la CNI de las compartimentadas decisiones del Comité Central del MIR? Es posible. Ellas, en su mayoría, se tomaron fuera de Chile, especialmente en Cuba, Nicaragua y Francia. Los agregados militares en Centroamérica tenían mucho trabajo y un hombre como Mella Latorre era de gran utilidad.

La Inteligencia chilena mantenía cierto control sobre los grupos que, en cualquier momento, podían volver a combatir en Chile. Manejaba, asimismo, alguna información sobre la Operación Retorno que, desde Francia, había preparado el MIR y que consistía en el reingreso al país, en forma clandestina, de militantes de esa organización con el objetivo de establecer un foco guerrillero permanente en Neltume, un lugar cordillerano de la Décima Región, donde pretendía instalarse la dirigencia de la colectividad.

En junio de 1981, en parte por la infiltración y también por las denuncias de los campesinos de la zona, la CNI ubicó el campamento mirista en construcción e inició una despiadada persecución que terminó con más de 20 militantes muertos. "A partir de ese año, revela un documento partidario, el MIR recibe sucesivos golpes represivos que van encuadrando y luego desarticulando el intento guerrillero de Neltume y las Fuerzas Centrales de Santiago. A finales de 1983, el saldo eran decenas de militantes que habían sido asesinados, presos o que se habían visto obligados a exiliarse... en consecuencia lo que sufrimos en 1983 es una derrota de nuestras fuerzas militares para las cuales el Plan 78 había concebido un rol estratégico".

Es un misterio si Mella Latorre fue el hombre que entregó alguna información sobre los chilenos que había conocido en Centroamérica. A fines de 1979, después de varios años fuera de Chile, el fotógrafo volvió a su patria a cumplir distintas misiones, incluso trabajó en la revista deportiva *Estadio*, hasta que en agosto del 80 ingresó al Paraguay.

En Asunción posiblemente fue contactado por los sandinistas y se le encomendó la tarea de registrar, con una cámara Pentax, todas las alternativas del atentado a Somoza que preparaba el argentino Enrique Gorriarán. El 17 de septiembre sacó las fotos del tiranicidio y tras ello se las entregó a su contacto. Posteriormente fue detenido y estuvo más de 8 años preso en las cárceles de Asunción. Actualmente vive en Chile.

Lo más curioso es que del chileno que supuestamente tomó las fotos del atentado y se contactó con el grupo que encabezaba Gorriarán Merlo, no hacen mención alguna los hombres que participaron en el hecho y que contaron con pelos y señales la forma en que se desarrolló la llamada "Operación Reptil".

XVII

El pimpinela negro

"Cuando hay intereses políticos en juego muy importantes, la lucha contra la droga siempre pierde. Yo siempre digo que, en aquella época, mientras la DEA arrestaba criminales, la CIA los protegía o los sacaba de la prisión".

Michel Levine, agente encubierto de la DEA en Buenos Aires, lamentándose en su libro-memorias "Deep Cover".

En agosto de 1980 una poderosa bomba, oculta dentro de una maleta, detonó en la estación de ferrocarril de Bolonia en medio del gentío que comenzaba sus vacaciones. Era sábado. El saldo trágico, en la noticia que conmocionó al mundo entero, fue de 85 personas muertas.

Más de doscientas, además, sufrieron heridas de gravedad.

El juez de Bolonia, Aldo Gentile, que investigó los hechos acaecidos en Italia, entregó dos años más tarde a los periodistas una lista con cinco nombres y aseguró que entre ellos se encontraba el del hombre que llevaba la maleta-bomba. La nómina la encabezaba Stefano Delle Chiaie, "Alfa" en Chile y el "Pimpinela Negro" del fascismo en el mundo.

Conocido camorrista y experto organizador de "brigadas de la porra", Delle Chiaie fundó en 1959, junto a otros jóvenes italianos, "Avanguardia Nazionale", porque el grupo fascista al que pertenecía, el "Ordine Nuovo", una especie de Centro de Estudios, era extremadamente moderado para sus expectativas y se resistía a pasar a la acción política y al compromiso callejero.

Al poco tiempo, durante el año 62 y a raíz de una condena por apología del fascismo, el grupo debió disolverse y recién volvió a aparecer a fines de esa década, organizado militarmente y con un rígido esquema discipli-

nario. Sus miembros, que a la fecha superaban los dos mil y se concentraban en Roma, Milán y Turín, se convirtieron en una verdadera plaga de violencia que atemorizaba a Italia. Los militantes de Avanguardia, además, se distinguían por sus uniformes, camisa café y corbata negra, o determinadas prendas militares, así como correas y cinturones con una placa y en ella el símbolo del partido: un rombo con dos terminaciones en aspa.

A principios de los 70, tras un brutal atentado a la Banca de Agricultura de Milán, Stefano Delle Chiaie, en ese momento de 38 años, con aspecto duro de película y un aire un tanto melancólico, debió salir de Italia y refugiarse en Barcelona.

Allí su camino se cruzaría con las dictaduras de América Latina.

El terrorista italiano, conocido también por su relación con la logia masónica P-2, colaboró primero con los servicios de Inteligencia chilenos, aunque se le atribuye una participación decisiva en la matanza de Ezeiza cuando Perón volvió a la Argentina en 1974.

En los primeros meses del 78, cuando ya la DINA había sido disuelta y Contreras era pedido desde los Estados Unidos por su responsabilidad en el atentado contra Orlando Letelier, Delle Chiaie y sus amigos abandonaron secretamente Chile y buscaron refugio al otro lado de Los Andes donde, si bien no estaba José López Rega, los italianos tenían muchos amigos. De acuerdo a su propia versión, en Argentina, donde estuvo hasta 1980, su tarea principal fue la de esconderse y huir porque era buscado por la policía italiana, el Mossad y otros grupos. Otra versión asegura que Delle Chiaie estuvo en El Salvador, donde fue consejero de Roberto D'Aubisson, el fundador de los escuadrones de la muerte de ese país.

Para el periodista Manuel Salazar, "Alfa" Delle Chiaie salió en abril de ese año por el paso fronterizo de Puyehue, en la décima región, en compañía de Mauricio Giorgi (Gino), Pier Luigi Pagliai (Gigi), Roberto Graniti y el francés, ex miembro del OAS, Napoleón Leclerc (Jean). A todos ellos, sin embargo, los habría traicionado en tierras argentinas, según la versión de Arancibia Clavel del 13 de junio de 1978, en la que asegura que "Alfredo rajó para Italia" porque "rompió relaciones con tres de sus camaradas" a los que estafó en más de siete mil dólares.

VINCIGUERRA, quién se encuentra detenido en una cárcel de Milán, habiendo sido trasladado para la audiencia a la cárcel Rebibbia de Roma, quién entre otras cosas respondió a los interrogatorios de fojas 2985 y 3015/3017, manifestando: "que a modo de ayuda se referiría a la operación Condor. Manifestó que era un pacto que reunía a varios servicios secretos de América Latina en función anticomunista, para vencer al único peligro que amenazaba el mundo occidental. En el ámbito de esta Operación Condor lleva con certeza a lo que fue la muerte del Gral. Prats. Al referirse a Townley dice que se trata de un arrepentido, por lo tanto todo lo que ha hecho, lo ha declarado a los americanos. Que la responsabilidad de Townley cuando asesina a Prats la conocía mucho antes de que se arrepintiera, puesto que a Townley lo conoció en España al año siguiente del atentado a Prats. Que menciona a Delle Chiaie como relacionado directamente con Pinochet durante 1974, quién lo contactó con su Oficial de Seguridad, es decir, Manuel Contreras. Menciona también que "su conocimiento con Townley es a partir de 1975, pero lo conocía bajo el nombre de Andrés, en España, volviendo a verlo luego en Italia y posteriormente en Chile. Aclara que en Italia tiene que ver con el hecho Leighton; un tema específico, recordando la operación conjunta con Townley, siendo responsabilidad de este último. Luego del atentado éste, se enojó con el autor del crimen por

CONFIDENCIAL

Ello, sin duda, no fue lo que más le preocupó al agente chileno sino que, recién ahí, se enterara que "este caballero trabajaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia del Ejército (argentino), incluso tenía pase libre para el batallón 601 de Inteligencia y los servicios argentinos le habían dado "mucha bola". "Alfredo, continuó Arancibia, usaba una minigrabadora en el brazo. Te ruego me pongas en antecedentes de esta situación a Joselo, Cristián, Poli y Gastón Acuña. Algunos nacionalistas argentinos, específicamente Sarratini, consideran que Alfredo trabajaba para los servicios italianos porque después de su paso los movimientos son destruidos. Eso ocurrió en Chile, también en Argentina y Francia. En Chile y Argentina me consta personalmente".

Delle Chiaie ya tenía otra misión.

- "Nos vamos a Bolivia Gigi", le habría dicho a su amigo y compañero de rutas, Pier Luigi Pagliai, tras una larga conversación con Osvaldo Riveiro en 1979.

- "¿Drogas por armas?", preguntó Gigi.

- "Drogas por armas y protección... Bolivia será nuestra misión".

- "¿Quién?"

- "El gobierno de la Gueiler", puntualizó Delle Chiaie.

Tras un breve paso por diversos países de América Latina, el italiano volvió a Buenos Aires, donde montó su nuevo centro de operaciones, y desde allí se dirigió a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia para coordinar las acciones que tenían como norte Nicaragua. Su salida, como las anteriores, debió ser apurada porque, una vez más, la Justicia italiana lo había detectado y solicitado la extradición al gobierno argentino.

Antes de partir hacia el país altiplánico, el italiano estrechó sus vínculos con el general Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo del Ejército argentino y con el coronel Osvaldo Riveiro, el contacto de la DINA en Buenos Aires y hombre fuerte de la Inteligencia militar argentina, a quien el mismo Suárez Mason le había encomendado la misión de crear una sección exterior del batallón 601, la estructura de Inteligencia del Ejército, con el objeto de trasladar su experiencia fuera del país.

Después de trabajar mancomunadamente con la DINA y Delle Chiaie, hasta el golpe de 1976, Riveiro se desempeñó como Jefe del departamento de Inteligencia 144 de

Mendoza y luego ocupó igual cargo en el Destacamento 181 de Bahía Blanca. Su nuevo destino era el exterior.

A este grupo, que tenía como objetivo el gobierno de Bolivia y que luego trabajaría en Centroamérica, se integraron, entre otros, el general Alfredo Valín, que había entrenado a la Guardia Nacional de Somoza; los coroneles Mario Davico, José Hoyas, Héctor Francés, Estanislao Valdez, Jorge O'Higgins (agregado militar en Tegucigalpa), Jorge de la Vega, Emilio Jason, Carmelo Gigante y Juan Carlos Galasso, así como los paramilitares Martín Ciga Correa, César Carro, Raúl Guglielminetti, Jorge Franco y Leandro Sánchez Reisse.

Riveiro, el mayor (r) Hugo Raúl Miori Pereyra y Stefano Delle Chiaie fueron los encargados de reclutar en Buenos Aires mercenarios para combatir contra los sandinistas. El financiamiento vendría de la droga boliviana.

Un sector del Ejército argentino, coordinado por el general Suárez Mason y bajo las órdenes del general Leopoldo Fortunato Galtieri, durante los primeros tres meses de 1980, se metió de lleno en la conspiración para impedir el acceso al poder de la izquierda en el altiplano. El general Suárez viajó en reiteradas ocasiones privadamente desde Buenos Aires a La Paz o Santa Cruz y consiguió que el gobierno de su país apoyara abiertamente las acciones en Bolivia. Sus anfitriones y además representantes eran el coronel Osvaldo Riveiro y otros personajes, como el mayor (r) Hugo Miori. Estos últimos trabajaron conjuntamente con Stefano Delle Chiaie y su grupo y se unieron al criminal de guerra Klaus Barbie, quien hacía años vivía en Bolivia, dando forma a la organización terrorista "Los Novios de la Muerte". Este era el nombre, según el periodista Jorge Camarasa, que tenía un ejército privado de nazis, fascistas y mercenarios reclutados por Barbie en los últimos años de la década del 70. "El apodo, tomado de la letra del himno de los legionarios españoles, era un sello que albergaba además de a Delle Chiaie y Pagliai, a los alemanes Joachim Fiebelkorn, Hebert Kopplin (ex SS), Hans Stellfeld (ex Gestapo), Hans Jüergen y Manfred Kuhlmann; el genovés Emilio Carbone y al francés, ex integrante de la OAS, Napoleón Leclerc. Con el grupo, que se reunía en la cervecería Bavaria de Santa Cruz de la Sierra, de la que eran dueños, trabajarían también los coroneles argentinos

Carlos Estrada y Julio César Durand, el teniente coronel Jorge Lynch y los asesores Alfredo y Mario Mingolla”.

Klaus Barbie, en ese entonces de 67 años y conocido en el mundo entero como “el carnicero de Lyon”, se encontraba desde 1951 en Bolivia, país al que llegó acompañado de su esposa e hijo, bajo el nombre de Klaus Altmann, luego de un breve paso por Buenos Aires. Fue asesor del gobierno de Hugo Bánzer y, en esa calidad, ingresó varias veces a los Estados Unidos para cambiar armas por drogas. A pesar de tener orden de captura internacional no fue detenido porque la CIA, que lo ayudó a burlar los tribunales europeos, lo requería en sus acciones anti-comunistas.

Un informe del Central Intelligence Corps (CIC), un servicio especial del ejército norteamericano, publicado en el libro “Odessa al Sur”, da cuenta de esa relación: “...Klaus Barbie ha sido informante de esta organización desde 1947, operando en el área de la Región XII. Anteriormente, Barbie era un alto funcionario de la Gestapo en Lyon, Francia, y durante su período de servicio supuestamente torturó y mató a muchos patriotas franceses. Debido a estos supuestos actos, Barbie es buscado por los franceses para someterlo a juicio como criminal de guerra. La Región XII continúa albergando al sujeto y a su familia en una Casa de Enlace, y no sólo está manteniendo al sujeto sino utilizándolo como informante...”.

Tres años después, en noviembre de 1954, el tribunal de Lyon condenó en rebeldía a Barbie por su responsabilidad en 4.352 asesinatos, la deportación de 7.591 judíos a los campos de concentración de Drancy y Auschwitz y el arresto de casi quince mil miembros de la resistencia francesa. A muchos de ellos los torturó personalmente.

Barbie, sin embargo, no fue ubicado hasta 1972 cuando se encontraba extremadamente ocupado conspirando en tierras sudamericanas. Ya tenía varias empresas en Bolivia, administradas por su hijo Klaus Jorg Barbie, se dedicaba de lleno al negocio de las armas y se relacionaba con el narcotráfico a través del primo de Arce Gómez, Roberto Suárez, para quien también compraba armas en el mercado informal. Incluso el hijo del criminal de guerra, años más tarde, sería detenido en los Estados Unidos acusado de portar cerca de 30 kilos de cocaína.

En marzo del 80 se encontraban todos en sus pue-

tos, incluidos *Delle Chiaie* y *Pagliai*, para el golpe final. A pesar de ello, los uniformados argentinos no descuidaron sus relaciones represivas internas y el suelo boliviano sirvió también para el accionar criminal. En junio recibieron a tres activistas argentinos exiliados en Perú, uno de ellos de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, secuestrados en Lima a petición de Leopoldo Galtieri por el Servicio de Inteligencia del Ejército de ese país. En La Paz los argentinos fueron brutalmente torturados por sus compatriotas del batallón 601, dos de ellos fueron asesinados en esa capital y la tercera, Ester Gianotti de Molfino, trasladada ilegalmente hasta España, fue abandonada en un departamento, con orden al portero del edificio de que no fuera molestada porque estaba muy cansada. Un mes más tarde, la policía de Madrid encontró su cuerpo totalmente descompuesto.

El golpe en Bolivia, uno de los más sangrientos que recuerde la historia de ese país, se produjo el 17 de julio del 80. García Meza se convirtió en presidente y Arce Gómez en su todopoderoso ministro del Interior. Casi medio millar de asesores argentinos llegaron a Bolivia a impartir sus enseñanzas... también cerca de mil millones de dólares en préstamos. Había comenzado lo que luego se conoció en el mundo entero, como la "Narcodura" boliviana.

El enlace argentino del grupo Los Novios de la Muerte, según Samuel Blixen, fue el mayor (r) Miori. Todos ellos complotaron contra Lidia Gueiler para que García Meza accediera al gobierno altiplánico, no así el electo Siles Suazo, con el objeto de controlar absolutamente el lucrativo negocio de la cocaína. "Arce, cuenta el periodista Martin Andersen, organizó un grupo llamado Servicio Especial de Seguridad (SES) dirigido por *Delle Chiaie* y el criminal de guerra nazi *Klauss Barbie*. Vinculado estrechamente con un escuadrón terrorista controlado por el Rey de las drogas, Roberto Suárez, denominado Finanzas de la Muerte, el grupo instruía a los soldados bolivianos sobre las técnicas de tortura y brindaba protección al floreciente comercio de la cocaína, cuyas ganancias se estimaban en más de 1.500 millones de dólares anuales.

Según un lugarteniente de *Delle Chiaie*, el italiano sirvió como contacto "entre los uniformados barones de la cocaína bolivianos y los traficantes de heroína de la mafia siciliana".

La mano de la CIA estaba detrás de todo. La agencia norteamericana, después de la segunda guerra mundial, tenía un solo enemigo: el comunismo, y estuvo dispuesta a ayudar a cuanto grupo compartiera esos intereses sin importarles las actividades que realizaran. Así, en varias ocasiones, sus propios aviones cargados de armas, luego volvían a su origen llenos de drogas. Eran las armas por drogas a las que se refirió Pagliai, el que, según un documento de la embajada de los Estados Unidos, era "un monstruoso torturador de terroristas".

A pesar de que la DEA había anunciado con bastante anticipación que la llegada de García Meza y sus hombres al Palacio Quemado era la entronización definitiva del narcotráfico en Bolivia, la CIA hizo caso omiso de esta advertencia porque para ellos era más importante impedir el gobierno izquierdista de Siles Suazo y contar con dinero fresco para sus operaciones encubiertas.

No se descarta que el traslado hasta tierras bolivianas del grupo ultraderechista que lideraba Delle Chiaie fue el primer paso de la CIA en su lucha por impedir que asumiera Siles Suazo, controlar el negocio de la cocaína y, de esa forma, financiar las operaciones que necesariamente debía realizar en Centroamérica contra el gobierno de Nicaragua.

La agencia norteamericana sabía bien que las partidas legales que el congreso norteamericano estaba dispuesto a concederle para neutralizar a los sandinistas no le iban a alcanzar para derrocarlos. Estaba consciente, asimismo, que sus políticas nada tenían que ver con la postura oficial del gobierno de James Carter, que propiciaba la democratización de la región.

¿Qué ocurría, mientras tanto, en Chile?

1979, de alguna forma, había marcado el retorno a Chile del MIR y eso, sin duda, mantenía a los servicios de Inteligencia de Pinochet ocupados en el frente interno. Surgieron al año siguiente, asimismo, los primeros síntomas del descontento social y a este se le sumó un accionar violento y selectivo del MIR.

Un experto de Inteligencia, que para muchos fue el propio general Contreras, informó al diario *La Tercera* en julio de ese año y en forma anónima, que desde la llegada de Odlanier Mena a la CNI se habían producido "198 acciones extremistas" y persona alguna había sido detenida en relación con esos hechos. Dos días antes de la publica-

ción de esa información fue asesinado a balazos, por un comando del MIR, el teniente coronel Roger Vergara Campos, director de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Mena, el 23 de julio abandonó la CNI y su cargo fue ocupado por el general Humberto Gordon. El organismo represivo, entonces, volvió a utilizar los métodos de la DINA y los abusos por parte del Estado se extendieron a todo el país. Coincidente con la salida de Mena se inició una ola de secuestros de opositores, con inusitada violencia e impunidad, que fueron reivindicados por un grupo, denominado Comando Vengadores de Mártires (COVEMA), el que cobró su primera víctima el 2 de agosto de ese año cuando son liberados, tras diez días de cautiverio, los estudiantes de periodismo Eduardo Jara y Cecilia Alzamora. El joven, brutalmente torturado durante varios días, falleció a las pocas horas de su liberación por un traumatismo encefalocraneano producto de los golpes de sus secuestradores.

Por esos días, Pinochet había convocado a un plebiscito, sin padrón electoral, para ratificar la nueva Constitución política redactada por el Consejo de Estado y afinada por la Junta Militar. La misma que, entre otras cosas, prohibía a los partidos de orientación marxista y otorgaba un período mínimo de ocho años para Pinochet, fue aprobada por el 67,04 por ciento de los votantes en un proceso que, para el ex presidente Eduardo Frei Montalva, ofendía a los chilenos.

La respuesta más dura a esta nueva situación llegó desde Cuba al finalizar el II Congreso del Partido Comunista de Chile cuando Luis Corvalán, secretario general de la colectividad, señaló que "para derribar la dictadura fascista no hay otro camino que el enfrentamiento en toda la línea, haciendo uso de las más diversas formas de combate. No estamos a la espera de que maduren ciento por ciento las condiciones que hagan posible echarla abajo". El PC, por primera vez, abría la puerta a la lucha armada y se dedicaría de lleno a la preparación de los cuadros que formarían, años más tarde, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Chile, entonces, no podía inmiscuirse en otras latitudes porque despreocupaba el frente interno y sus agentes salían del país sólo para hacer inteligencia en países limítrofes o para vigilar y controlar las actividades en el extranjero de los opositores al gobierno militar.

El Ejército argentino, mientras tanto, llegaba a acuer-

dos secretos con los norteamericanos para realizar operaciones encubiertas en distintas partes del continente.

A mediados del 80, un mes después del golpe en Bolivia, se desarrolló en Buenos Aires el cuarto congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), ente afiliado a la Liga Anticomunista Mundial (WACL), en el que participaron, además de Suárez Mason y Stefano Delle Chiaie, el coreano Woo Jae Sung, presidente de la WACL y miembro relevante de la secta Moon; representantes de la logia P2 (Suárez Mason era uno de ellos); el mayor (r) Miori Pereyra, delegados del ex dictador Somoza y del grupo anticastista Alpha 66; el mayor salvadoreño y fundador de los escuadrones de la muerte en su país, Roberto D'Aubisson; el general uruguayo Luis Vicente Queirolo y el neofacista guatemalteco Mario Sandoval Alarcón. Fueron observadores Margo Carlsile y John Carbaugh, asistentes de los senadores norteamericanos James McClure y Jesse Helms quien, en marzo de 1999, envió una carta al gobierno inglés en la que solicitó la libertad del general Augusto Pinochet.

En este encuentro, Suárez Mason se comprometió a "desplazar" a Centroamérica un grueso contingente de "asesores", que transmitirían la experiencia argentina, y la WACL aseguró que haría un aporte de 8 millones de dólares para los gastos iniciales de las operaciones. Para costear el resto del trabajo, que todos sabían demandaría mucho dinero, como también para el enriquecimiento de los protagonistas, el grupo se fijó un objetivo: controlar el negocio de la cocaína en Bolivia.

El general argentino, años más tarde, admitió las resoluciones del Congreso y aseguró que las tomaron porque los demás, especialmente el gobierno de Carter, no comprendían el peligro marxista que vivía Centroamérica. "Eso significaba, señaló Suárez Mason, que estábamos solos y librados a nuestras propias fuerzas".

El primer contacto del grupo de anticomunistas fue el entonces coronel boliviano, Luis Arce Gómez, quien se comprometió a suministrar cocaína para financiar las futuras acciones militares en Centroamérica. Años más tarde, el coronel diría ante un juez argentino que su país no tenía "otra alternativa económica que la cocaína" pero que él le dio "un sentido al narcotráfico: la lucha contra el comunismo".

El grupo de la WACL, a cambio de esta colaboración, debía ayudar a Arce Gómez, pero especialmente al general

Luis García Meza, a mantener el poder total en Bolivia. El primero, militar extremadamente corrupto, a través de su primo, Roberto Suárez, en ese entonces uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, ya participaba en el negocio de la cocaína pero quería que su país tuviera un papel más activo en el mismo y no subordinado al de los carteles colombianos.

Arce Gómez estaba relacionado, además, con un grupo de pilotos del Beni, una región selvática de Bolivia, y se vinculaba con Jairo Restrepo, un amigo de la infancia del colombiano Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, quien se ocupaba de asegurar la pasta base boliviana para los laboratorios colombianos.

Delle Chiaie y el salvadoreño D'Aubisson acordaron los puntos sustanciales con Arce Gómez y su primo narcotraficante Roberto Suárez. Los primeros se encargarían de facilitar el ingreso de la droga en los Estados Unidos, a través de El Salvador, mientras los bolivianos se comprometieron a financiar sus acciones militares. Suárez Mason pondría a su gente.

Los agentes argentinos, que desde 1977 se encontraban en Centroamérica "vigilando" el accionar de sus compatriotas de izquierda en la zona, llegaron en grandes cantidades a Honduras, Guatemala, El Salvador o Costa Rica. Muchos de ellos lo hicieron detentando cargos diplomáticos y gozando de la inmunidad respectiva. Allí, rápidamente, se convirtieron en consejeros secretos en contrainsurgencia para los grupos de ultraderecha y los regímenes totalitarios.

En Guatemala trabajaron estrechamente ligados a Mario Sandoval, el que, bajo su manto, había congregado a represores de El Salvador y Nicaragua. Lo propio hicieron en San Salvador con el mayor D'Aubisson y en Honduras con el general Alvarez.

La reciprocidad hacia los argentinos no se hizo esperar. Desde hacía años que en San José de Costa Rica funcionaba la Radio Noticias del Continente, una estación de onda corta estrechamente vinculada a Montoneros y que *transmitía las atrocidades que se cometían diariamente en la Argentina.*

Varios intentos por acallarla, a través de bombas molotov lanzadas desde un avión por parte de un comando salvadoreño y otros ataques terrestres, no arrojaron los resultados que la junta argentina esperaba. Un grupo que ope-

raba en Guatemala con el nombre de Legión 15 de Septiembre, sin embargo, recibió la orden de desactivarla a como diera lugar en diciembre de 1980. El mismo atacó la antena de transmisión pero la defensa fue superior y los agresores tuvieron que retirarse. Posteriormente fueron capturados por la policía costarricense y así quedó al descubierto la conexión entre la ultraderecha centroamericana y los generales argentinos. No sería el único caso.

“El mayor Miori, asegura Samuel Blixen, se desplazó también a América Central, oficiando de correo. Se le atribuye un papel fundamental en la organización del tráfico de drogas que fluyó hacia El Salvador. La cocaína era transbordada en las bases de la Fuerza Aérea salvadoreña y derivada hacia los Estados Unidos. Parte de la droga financió los escuadrones de la muerte montados por el mayor D'Aubisson y los grupos militares guatemaltecos por el teniente coronel José Santiago Hoya, alias Santiago Villegas, otro miembro clave del grupo de asesores argentinos en la región...”.

El coronel Riveiro, por su parte, fijó su cuartel general en Tegucigalpa para contactarse con los ex miembros de la Guardia Nacional Somocista (GNS) que se encontraban en ese país a la espera de las órdenes del militar argentino quien, a partir de entonces y por instrucciones y financiamiento de la CIA, comenzó a coordinar las acciones en Centroamérica.

Si bien en noviembre de 1981 los hondureños votaron por primera vez, después de 18 años de autoritarismo, siendo elegido presidente el liberal Roberto Suazo Córdova, la conflictiva situación en Centroamérica, tras la victoria de los sandinistas en Managua dos años antes, había convertido a Honduras en una suerte de gendarme para América Central.

Ello significaba, entre otras cosas, que fuera privilegiado militarmente por la potencia del norte y que lo utilizara para vigilar la frontera con El Salvador y para apoyar a la contra nicaragüense.

Tanta importancia estratégica tenía Honduras que, incluso, fue nombrado como embajador de los Estados Unidos en Tegucigalpa, Negroponte, un experto en Vietnam.

El hombre fuerte del país, sin duda, era el general Gustavo Álvarez Martínez.

Riveiro, en Honduras, no perdió el tiempo. Se puso

en contacto, asimismo, con el general Alvarez, del cual había sido compañero de curso en el Colegio Militar de la Argentina entre 1958 y 1961 y con Emilio Echavarry, oficial de la Guardia Nacional Somocista (GNS); sostuvo largas reuniones con los líderes de la incipiente "contra", el hombre de negocios Aristides Sánchez, el obeso político Frank Arana y el coronel Enrique Bermúdez; organizó secuestros extorsivos y preparó militarmente, con el concurso del teniente coronel Hoya, que se hacía llamar Villegas, a la contra nicaragüense en un campo de entrenamiento secreto en las afueras de Tegucigalpa.

El centro de operaciones de Riveiro fue el Hotel Honduras-Maya de la capital hondureña, donde el oficial argentino solía pasearse con sus compatriotas alrededor de la piscina, con pinta de play boy latinoamericano, jugar en el casino Monte Carlo, visitar la churrasquería, el bar o la discoteque que, noche a noche, recibía a las mujeres más lindas de Tegucigalpa. Durante el día le daba espacios al trabajo que le habían encomendado sus superiores y se paseaba por la ciudad en lujosos automóviles. El tipo de vida que llevaba él y los demás argentinos que lo acompañaban, disgustaba a los nicaragüenses que querían agilizar las cosas.

Nada podían hacer.

Estaba claro que, a partir de ese momento, se actuaría en conjunto: los Estados Unidos pondría algo de la plata, los argentinos sus conocimientos obtenidos en la guerra sucia contra el ERP y los Montoneros y los hondureños sus bases. Así nació, en las afueras de Tegucigalpa, el tristemente célebre Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte, que según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de ese país, Leo Valladares, es responsable de la desaparición de 105 hondureños, 39 nicaragüenses, 28 salvadoreños, cinco costarricenses, cuatro guatemaltecos, un norteamericano, un ecuatoriano y un venezolano.

El Batallón estaba estrechamente ligado al general Gustavo Alvarez quien, juntamente con haber cursado sus estudios militares en Argentina, tenía como sus pares que gobernaban en Buenos Aires un marcado sentimiento anticomunista. "Todo lo que se haga para destruir un régimen marxista, sostuvo Alvarez cuando era jefe de las Fuerzas de Seguridad de su país, es moral".

Echavarry, por su parte, quedó a cargo de la supervisión de las tropas en el batallón y en breve este demostró que el estilo argentino, la desaparición de personas, las torturas y la represión indiscriminada contra los opositores, era la forma que habían adoptado los hombres del 3-16. Al cabo de algunos meses, la Legión 15 de Septiembre que tenía su base en Guatemala fue trasladada a Tegucigalpa, para quedar bajo el mando de Alvarez, Echavarry y los asesores argentinos comandados por Riveiro. Estos, a su vez, comenzaron a entrenar a los indios miskitos para levantarlos en armas contra el gobierno sandinista. Decenas de contras, asimismo, fueron trasladados a la capital de Honduras, luego de recibir entrenamiento en Buenos Aires, aunque muchos de los que volvían de la Argentina desertaban antes de llegar y se bajaban del avión en Miami. "La idea, según Christopher Dickey, era acercarse al escenario de la lucha contra los sandinistas, pero tan pronto como arribaron a Tegucigalpa quedó en evidencia una falla mayor en la organización. Los líderes de la Legión y sus asesores, los maestros en la guerra urbana de la Argentina, eran anticomunistas manifiestos y habían jurado hacer cualquier cosa que fuese necesaria para recuperar el país, excepción hecha, según parecía ahora, de dejar la ciudad".

Ese no era, si embargo, el único problema.

Los fondos que requería la operación, crear un ejército de 10 mil hombres, más las ambiciones económicas de los hombres que la dirigían, llevaron rápidamente a la fase de financiamiento acordada con los bolivianos en el congreso anticomunista realizado en Buenos Aires.

A mediados del 81, la Fuerza Democrática Nicaragüense, que lideraba el coronel Bermúdez, su jefe de Estado Mayor, accedió a que dos de sus militantes montaran la estructura dentro de los Estados Unidos, con el beneplácito de la CIA, para que ingresara la droga que venía de Bolivia y que pasaba por El Salvador. Así comenzó, según Samuel Blixen, la "narcofinanciación" de las operaciones encubiertas y con ella "el flujo de dinero en grandes cantidades para la compra de armamento y el pago de los mercenarios".

El coronel Bermúdez, que en 1965 participó en la fuerza norteamericana de ocupación de la República Dominicana y posteriormente fue agregado militar en Washington y jefe de la misión nicaragüense ante la Junta Interamericana de Defensa, era un hombre de confianza de los norteamericanos.

Tanto, que su nombre figuraba en una lista redactada por los propios estadounidenses, previa a la caída de Somoza, como uno de los oficiales que ellos veían con buenos ojos que asumiera el control de la guardia nacional de su país cuando el dictador partiera al exilio. Bermúdez era, según el corresponsal jefe del *Washington Post*, Christopher Dickey, "quien poseía las conexiones entre los veteranos del Ejército y la CIA" y se perfilaba como "el hombre que podía hacerse cargo de todo".

¿Podía haber arreglado con sus hombres la operación de drogas sin, al menos, el conocimiento de la agencia norteamericana? Difícil en aquella época.

Años más tarde, el ex agente argentino Leandro Sánchez Reisse, contador del Batallón 601 y experto en lavado de dinero, confesó su participación en estos hechos y reconoció la vinculación de los asesores argentinos con el narcotráfico en Centroamérica.

Ante una subcomisión del Senado de los Estados Unidos, el agente argentino entregó los detalles de la forma en que se financiaban las operaciones, los montos de las mismas y aseguró que la CIA había otorgado el visto bueno para ellas.

Según Sánchez Reisse, cerca de treinta millones de dólares del negocio de la cocaína terminaron en manos de la contra nicaragüense. Dijo, asimismo, que los dineros se lavaban en las Bahamas y posteriormente eran enviados a la casa de empeños Silver Dollar, ubicada en Miami y dirigida por el agente del Batallón 601, Raúl Guglielminetti, quien a su vez era el contacto con la CIA.

El problema del financiamiento de las operaciones encubiertas, como suele ocurrir, hizo que los organismos de Inteligencia no miraran hacia sus ministros de economía sino que hacia el lado del narcotráfico u otros negocios lucrativos pero ilícitos.

Hacia el final de su mandato, el presidente James Carter aprobó públicamente una ayuda de 75 millones de dólares para el sector privado de Nicaragua, pero no autorizó que moneda alguna de esa partida fuera a parar a aquellos que planeaban acciones paramilitares contra el régimen sandinista.

Todo cambiaría drásticamente con la llegada de los republicanos a la Casa Blanca.

El 9 marzo de 1981, un mes y medio de después de

asumir la presidencia de los Estados Unidos, Reagan autorizó a la CIA a realizar acciones secretas contra los sandinistas y, meses más tarde, dio el visto bueno para la conformación de una fuerza de 500 hombres que tenían como objetivo derrocar al gobierno de Daniel Ortega.

“La acción militar de los Estados Unidos sería encubierta. Se suponía que la mano misma de los Estados Unidos no empuñaría el rifle. Trabajaría con los gobiernos extranjeros, según lo pertinente, para dirigir operaciones en contra de la presencia cubana y contra la infraestructura de apoyo a los sandinistas por parte de los cubanos en Nicaragua o en cualquier otra región en Centroamérica”, aseguró el periodista Christopher Dickey. El costo, para la fuerza de 500 hombres, era de 19 millones de dólares.

El plan de la CIA, dibujado por su director William Casey ante el Comité de Seguridad Nacional, era más que explícito:

1. Crear una atmósfera de respaldo popular en Centroamérica y en Nicaragua a favor de un frente de oposición que sería nacionalista, anticubano y antisomoza.

2. Respaldo al frente de oposición mediante la formación y entrenamiento de grupos de acción para recoger la información secreta y para intervenir en operaciones paramilitares y políticas en Nicaragua y otras regiones.

3. Trabajar originalmente a través de no norteamericanos para lograr lo precedente, pero en determinadas circunstancias la CIA podría asumir, posiblemente usando personal de los Estados Unidos, acción paramilitar unilateral en contra de cubanos especiales ya bien fichados como blancos.

Los asesores argentinos, que estaban en todas partes, eran el nexo de los rebeldes y el gobierno de los Estados Unidos los aceptaba gustoso. Tanto que, a fines de ese año, el director de la CIA se reunió en Washington con el general Galtieri y oficializó el acuerdo secreto: los rebeldes antisandinistas recibieron entrenamiento en la Argentina, dinero en grandes cantidades y contaron con asesores en terreno.

A fines de ese año, el contra nicaragüense, William Baltodano, capturado por la policía sandinista en Managua, dejó al descubierto la operación tripartita, Estados Unidos, Argentina, Honduras, cuando reconoció que fue entrenado en Buenos Aires para la realización de actos terroristas contra el gobierno de Nicaragua.

Desde enero de 1981, antes que asumiera Reagan, el plan de la CIA, que incluía a los represores argentinos, estaba en marcha bajo el nombre de "Guerra Secreta". Dos meses más tarde el primer contingente de nicaragüenses antisandinistas llegaba a Buenos Aires para recibir entrenamiento militar. Nada de lo que se les enseñó tuvo que ver con la guerra que estos hombres esperaban pelear y los instructores dedicaron largas horas para transmitir lo que realmente sabían y que un año después, durante el enfrentamiento con Gran Bretaña por las Malvinas, quedó de manifiesto: tácticas de guerra sucia.

Lo que el gobierno de los Estados Unidos no pensó es que la confianza dada al general Leopoldo Galtieri, quien con la ayuda que prestaba en Centroamérica creía que era el gran socio de los norteamericanos, motivaría al uniformado argentino a quedarse con el poder en su país y luego, el 2 de abril de 1982, invadir las Islas Malvinas, con la esperanza puesta en que su aliado del Norte mantendría una estricta neutralidad ante un eventual conflicto con Gran Bretaña. Nada más equivocado. El gobierno de Reagan, como era de suponerse, se puso del lado de Margaret Thatcher, quien atacó al Ejército argentino y reconquistó el archipiélago austral.

¿Cómo repercutió en Centroamérica?

En la crisis, los congresistas norteamericanos comenzaron a percibir la envergadura de las acciones que Reagan, a través de su "guerra secreta" en Centroamérica, había desencadenado y que, a esa altura, parecía no controlar.

Si bien los legisladores estadounidenses estuvieron de acuerdo en otorgar una ayuda para cortar el suministro de armas de los sandinistas a los guerrilleros de El Salvador, que por esos meses planeaban su ofensiva final, ello no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en la zona. La fuerza de los contras, que creció sin control alguno, había aumentado a cinco mil hombres y estos realizaban acciones terroristas por doquier.

La situación parecía fuera de control y el quiebre con Buenos Aires tras la guerra de las Malvinas la empeoraba aún más. Todo hacía prever que Estados Unidos intentaría una invasión a través de los contras y que, cuando el conflicto se agudizara, el gobierno de Reagan actuaría. La CIA tenía todo planeado. El único problema es que, tras el conflicto con Gran Bretaña, los aguerridos hombres del Batallón 601 estaban desmoralizados y, algunos de ellos, entre-

garon información secreta a la Inteligencia cubana y nicaragüense sobre los planes de invasión a Nicaragua y la eventual fecha en que se produciría. Si bien los cubanos y sandinistas ya manejaban esos rumores, los argentinos entregaron algo más.

La primera misión del nuevo encargado de la CIA en la "guerra secreta" fue sacar a los argentinos de quienes decía, según el periodista Christopher Dickey, que comenzaron siendo "una nadería" y se convirtieron en "un dolor en el culo". Pero ello no sería una tarea fácil.

Riveiro y sus hombres tenían sus contactos y sus propios negocios en la zona, estaban por todos lados y la situación política de su país, que se aprestaba a iniciar el camino a la democracia, no hacía aconsejable el retorno de aquellos uniformados que habían violado los derechos humanos de miles de connacionales.

No hubo acuerdo y los asesores sudamericanos siguieron operando en Centroamérica. Santiago Hoya, al que los contras llamaban Villegas, continuó acudiendo a las zonas de combate y Riveiro mantuvo su presencia en el elegante Hotel Honduras-Maya de Tegucigalpa.

En sus días malos, según el ex agente de la CIA, Douane Clarridge, Riveiro daba contraórdenes que no sólo repercutían en la región sino hasta en el Congreso de los Estados Unidos... En sus días buenos, asegura el norteamericano en su libro "Un espía para todas las temporadas. Mi vida en la CIA", "Balita" no hacía otra cosa que protestar.

Para el ex agente, los argentinos no tenían idea de cómo pelear contra los sandinistas, eran desorganizados y caóticos y sólo aplicaban técnicas para combatir a la guerrilla urbana en un territorio donde casi no existen ciudades.

Aún faltaba lo peor cuando otro de los asesores argentinos, el también coronel Héctor Francés, viviría una experiencia distinta y sufriría en carne propia la coordinación... pero no la del Cóndor...

XVIII

El secuestro

"No queremos a la guerra pero no la tememos. La guerra para nosotros es un deporte, porque nos hemos acostumbrado a ella a lo largo de 18 años, corriendo por las montañas, sucios y sudorosos y rodeados por el miedo en los escondites. ¿Qué demonios nos van a amenazar a nosotros con una guerra? ¿Cómo van a hacer ellos una guerra si ni siquiera tienen callos en las manos? ¿Cómo van a hacer una guerra si tienen que frotarlos con loción cuando van a la playa para que el sol no los quemé? ¿Cómo van a hacer una guerra contra nosotros si usan impermeables y paraguas cuando salen a la calle en invierno? Nosotros estamos acostumbrados a dormir sobre el suelo y a estar bajo la lluvia, a ser picados por los mosquitos y muertos de hambre. Eso no significa nada para nosotros. Casi sentimos una especie de nostalgia por ese hermoso pasado en el que peleábamos. Si eso es lo que va a suceder, déjenlos venir".

Tomás Borge, comandante sandinista.

En 1982 los sandinistas ya habían incursionado dos veces, al menos, fuera de Nicaragua para acabar con la vida de aquellos que, durante el régimen de Somoza, se habían caracterizado por su crueldad. Uno de ellos había sido el propio dictador, asesinado dos años antes en Asunción y el otro, el mayor Pablo Emilio Salazar, alias Bravo, uno de los jefes de la guardia somocista, quien murió cuando se encontraba organizando la contra en Tegucigalpa. La trampa a este último se la tendió su propia amante quien, convencida por la seguridad sandinista de la deslealtad del esbirro de Somoza, se juntó con él, hizo el amor y luego, al reti-

rarse, dejó la puerta entreabierta para que ingresaran al lugar los hombres encargados del ajusticiamiento.

En ambos atentados participó Gorriarán Merlo quien, sin embargo, exculpó al gobierno sandinista de sus acciones armadas. "Aquellos de nosotros que estamos involucrados tenemos alguna experiencia en nuestro país, en las diversas clases de tareas implícitas en una operación de este tipo: desde la búsqueda de información hasta la ejecución del plan", manifestó el dirigente del ERP en 1983 cuando sintió que la agresión contra Nicaragua estaba aumentando y que debía enfrentar a la prensa para asumir toda la responsabilidad por el atentado Somoza.

"¿Su experiencia fue sólo en Argentina?"

"No. Algunos de nosotros hemos llevado a cabo otras exitosas operaciones en Tegucigalpa, tales como el ajusticiamiento del comandante Bravo, uno de los jefes de la Guardia Nacional, responsable de innumerables crímenes".

El coronel (r) Lenin Cerna, por entonces jefe de la Dirección Nacional de Seguridad del Estado (DINSE), reconoció el 14 de abril de 1999 que fue su departamento el que dirigió y ordenó el atentado contra Somoza argumentando que "el brazo del pueblo llegó hasta Paraguay".

No fue al mítico guerrillero argentino, ahora detenido en su país, a quien le tocó desnudar definitivamente el trabajo sucio que realizaban en Centroamérica los estado-unidenses con sus socios argentinos.

Un grupo de alrededor de 15 personas, de distintas nacionalidades y de cuatro organizaciones guerrilleras diversas, quedó a cargo de una operación que, por razones obvias, no podía realizar la inteligencia sandinista y mucho menos la cubana. Estos últimos tenían una gran desconfianza en los militantes elegidos, a quienes consideraban con capacidad operativa, pero incapaces o faltos de experiencia para las acciones de Inteligencia. A pesar de ello, los elegidos para la acción, entre los que había varios chilenos, iniciaron una labor contra reloj para lograr el objetivo, verificar los planes de la CIA, acción que emprendieron con gran despliegue y capacidad.

En pocos días, el grupo instaló micrófonos en los lugares a los que los agentes solían acudir, fotografiaron a 45 de ellos y averiguaron sus biografías, así como confeccionaron, en algunos casos, perfectos perfiles psicológicos. Detectaron, asimismo, que uno de los agentes del Bata-

llón 601, que muy pocos sabían cuál era su residencia, el coronel argentino Héctor Francés, tenía su centro de operaciones en San José de Costa Rica y realizaba, además, continuos movimientos a Tegucigalpa, donde estaba la base de Osvaldo Riveiro, alias Balita y a quien sus colegas de armas llamaban "el viejo".

Podía ser el hombre. O quizá se debía buscar a otro...

Optaron por lo primero. La operación, entonces, se centralizó en él que, si bien no era muy importante, llevaba el maletín en muchos casos y manejaba, además de información, algunas de las platas y se contactaba a menudo con la CIA. El grupo multinacional sólo tenía de él una foto tomada con teleobjetivo, desde mucha distancia y muy borrosa, sabía el nombre del barrio y nada más. Ubicaron su casa, le tomaron una nueva foto y la enviaron a otro país para confirmar si se trataba de la persona que habían seleccionado. El objetivo fue confirmado.

El coronel argentino, como se encontraba en San José de Costa Rica, una suerte de santuario para todos los que operaban en Centroamérica, a pesar de ser un tipo extremadamente desconfiado descuidó sus medidas de seguridad y ni siquiera se dio cuenta que, al menos en seis ocasiones en cuatro días, estuvieron a punto de secuestrarlo.

Así se llegó hasta el 7 de octubre de 1982.

Ese día, junto a su esposa, salió de la casa donde habitaba rumbo a una pastelería cercana en la que solía comprar. Lloviznaba y no había mucha visibilidad. Hasta la pareja se acercó una camioneta y desde una ventana le dijeron:

"Che, subí que el viejo te llama".

Francés se acercó al auto, que había abierto una de las puertas traseras y alcanzó a subir un pie. Allí, en una fracción de segundo, se dio cuenta que la situación no era normal y dudó. Era demasiado tarde. Del interior del vehículo un hombre lo tomó fuertemente, lo tiró hacia adentro y el chofer aceleró.

La mujer del uniformado se quedó gritando en la vereda. A los cinco segundos se le acercó otro auto, del mismo grupo, para preguntarle qué le ocurría y si la podían ayudar en algo. Les dijo que habían secuestrado a su marido y los hombres, que para ella no tenían nada que ver con lo ocurrido, se ofrecieron a llevarla hasta la comisaría más cercana para que denunciara el hecho.

En menos de treinta segundos el episodio concluyó y persona alguna en el barrio se había enterado de lo ocurrido.

La esposa del coronel meditó la situación y creyó que no era bueno realizar una denuncia a la policía. No en vano ella también trabajaba en Inteligencia. Les pidió a las gentiles personas que la llevaban que la dejaran en su casa. Así lo hicieron. De inmediato se contactó con el teléfono que su marido le había dado en caso de emergencia.

Cundió el pánico.

En la camioneta, mientras tanto, Francés pudo escuchar el despliegue policial que se produjo tras su secuestro. Los hombres que lo capturaron tenían un scanner en la radio y con él podían rastrear las conversaciones en inglés y en mal español de agentes norteamericanos que, alertados del plagio, querían que la policía costarricense tendiera un cerco para evitar la huida de los secuestradores, cerrara los aeropuertos y revisara los barcos soviéticos que se encontraban pescando en las costa del país. Todo eso se hizo. No sabían a quién buscar.

Estaban desesperados.

Tanto como Francés que, a esas alturas, no le cabía duda alguna que estaba en poder de los Montoneros y que a partir de entonces padecería todo tipo de vejámenes por las obras realizadas por su batallón durante la guerra sucia en la Argentina.

Sus secuestradores no lo sacaban del error. Uno de ellos le preguntó si se acordaba de la Escuela de Mecánica y el coronel, pálido y tiritando, sólo atinó a responder que ella pertenecía a la Armada y él era del Ejército. El otro repuso:

“Perdiste, loco”.

“Pero vos sabés que hacemos las cosas porque estamos en guerra, querido. Somos argentinos todos”, balbuceó Francés.

“Pero vos sabés también, porque estuviste metido en todo, dónde están los desaparecidos”, lo apuró uno de los secuestradores.

“No, yo sé donde está el cementerio, pero no estuve metido en nada más”, se defendió el agente del 601.

Recién ahí, algunos integrantes del grupo, especialmente entre los chilenos, se percataron que no se trataba de un agente de la DINA sino de un argentino. Ellos habían tra-

bajado con mucho ahínco, precisamente, porque estaban seguros que la operación era contra un agente de los servicios chilenos y sólo el que los lideraba y otros dos más, de los 15 que participaron, tenían un acabado conocimiento de la operación.

La conversación quedó interrumpida hasta la llegada a la primera casa de seguridad, minutos después, cuando un cerco impresionante hacía muy difícil la salida del grupo con su presa de San José de Costa Rica.

Las posibilidades que habían previsto para alcanzar la frontera eran seis y sólo debían escoger la más conveniente de acuerdo a la situación. Mientras los jefes decidían cuál, otros con grabadora en mano se dedicaron a interrogar al coronel, quien todavía pensaba que la información que requerían de él era sobre violaciones a los derechos humanos en su país.

Así, durante dos horas, prácticamente no paró de hablar y contar todo lo que sabía sobre los detenidos desaparecidos, el lugar donde habían enterrado a algunos de ellos, la participación de uniformados en violaciones a los derechos humanos y otras atrocidades de la guerra sucia. Se utilizaron varios cassettes y se agotaron las pilas en existencia en la casa.

Héctor Francés, coronel del Batallón 601 de Inteligencia de la República Argentina, fue bautizado por sus captores como Caruso porque, al igual que el gran tenor italiano, no paró de cantar.

Si la operación, hasta ese momento, era todo un éxito, para culminarla debían trasladar al uniformado fuera de Costa Rica. ¿Cómo hacerlo? Una de las opciones era llevarlo en un camión de transporte, con dos tanques de bencina, hasta la frontera con Nicaragua. Uno de los tanques contendría la bencina necesaria para el viaje y en el otro, previamente acondicionado para la acción, con oxígeno y un pequeño colchón, iría el cuerpo del militar argentino.

Si bien había opciones más románticas, esta parecía ser la más eficiente, máxime cuando los dos tripulantes del camión no sabían a quién transportarían y se les había impartido la orden de no escuchar radio en todo el día para que no se pusieran nerviosos.

Al cumplirse dos horas y media del secuestro y cuando el cerco para evitar que fuera sacado del país parecía absolutamente hermético, el camión salió rumbo a la fron-

tera con Nicaragua. La mayor parte del grupo que participó en el secuestro dejó el país por avión y a un lugar impensado: Miami.

El camión y su valiosa carga no tuvo inconvenientes en los controles. Al llegar a tierras sandinistas, sin embargo, lo esperaba Lenin Cerna, quien todavía estaba muy celoso porque no había organizado ni dirigido una operación que, a todas luces, había sido realizada con una elegancia de ajedrecista, y que pretendía quedarse con el cargamento que venía de San José. Se produjo una fuerte disputa con las personas que manejaban el camión.

"No sabes, huevón, con quién te estas metiendo", le dijo uno de los tripulantes, sin saber él que la persona que tenía delante era el temido jefe de la Dirección General de la Seguridad.

Finalmente, con la intervención del alto mando del sandinismo, la situación fue zanjada, el coronel Francés quedó en buenas manos y se lo trasladó a un hotel, con todas las comodidades, para los interrogatorios. Si bien, a esa altura, se había dado cuenta de que no estaba en poder de los Montoneros y que había un Estado detrás de su secuestro, pensaba aún que lo que buscaban sus captores era información sobre los detenidos desaparecidos en su país.

"Sé dónde están algunos desaparecidos", fue lo primero que dijo el argentino a uno de sus interlocutores.

"Eso no es lo que nos interesa... bueno, para más adelante, porque esa información ayuda a la causa democrática... pero lo que queremos que responda son estas cinco preguntas", le dijo el interrogador alcanzándole un papel prolijamente mecanografiado.

Francés miró cuidadosamente el papel, leyó las preguntas, pidió un whisky y preguntó:

"Qué va a pasar conmigo".

"Nada, te vamos a dejar tranquilo, no somos como ustedes..."

Pasaron varios minutos en silencio, donde Francés, sin duda, debe haber evaluado todas las posibilidades y hecho millones de cálculos sobre la conveniencia o no de responder lo que le preguntaban.

"Está bien... tráiganme un mapa", dijo segundos después de remojarse la boca con el whisky que minutos antes le habían servido.

A partir de ese momento, nuevamente, no paró de hablar. Comenzó a las siete de la tarde del 7 de octubre de 1982 y terminó a la misma hora pero del día siguiente, luego de contar absolutamente todo lo que sabía sobre la invasión que tenían planificado realizar, en esos días, a Nicaragua.

Con los hechos verificados, sumados a la certeza de las zonas por donde ingresarían los contras, la cantidad de combatientes y quiénes eran los que dirigirían las operaciones, más el papel de la CIA en todo el proceso, les tocó a los rusos, en algún lugar del mundo, decirles a los norteamericanos que habían sido descubiertos y que si actuaban en Nicaragua pondrían en riesgo la paz mundial.

Sólo los protagonistas de esta historia pudieron entender cuán cerca estuvo la invasión cuando vieron, pocos días después del secuestro, que la Séptima Flota de los Estados Unidos, así como la División 111 con asiento en Miami, se retiraban de la zona de operaciones que había marcado el coronel argentino. Muchos de los agentes del 601 se sumaron a la estampida.

Francés, por su parte, solicitó dar una conferencia de prensa para blanquear su situación y decir, durante la misma, que él siempre trabajó para la inteligencia cubana o sandinista, con el objeto de lavar su honor, hecho que realizó algunos días después. En ella, el coronel dijo, además, que había desertado y contó con lujo de detalles el trabajo que realizaba en Costa Rica, donde según él cumplía la labor de tesorero de los oficiales de las Fuerzas Armadas de su país en la zona. Asimismo, relató la relación de los asesores argentinos con la CIA, el rol que cumplían los coroneles Riveiro y Hoya en Centroamérica en el entrenamiento de los contras, con la ayuda del general hondureño Gustavo Alvarez y dio los nombres de los agentes que trabajaban con él en San José.

Entre ellos mencionó a un tal Mariano Santa María, quien resultó ser Juan Martín Ciga Correa, el argentino que trabajó en Buenos Aires con el chileno Arancibia Clavel y que está directamente vinculado con el atentado que le costó la vida al general Carlos Prats y su esposa en 1974.

Toda la declaración del argentino fue grabada en un video y repartida a distintos diarios y agencias de noticias para que la difundieran al mundo.

De esa forma, casi como una historia repetida, el testimonio del coronel argentino permitió saber con exactitud

que muchos de los hombres que violaron los derechos humanos y no respetaron fronteras físicas ni morales en los 70, como eran los casos de Riveiro, Hoya, Francés, Ciga Correa, Delle Chiaie y tantos otros, se repartieron por el mundo, alentados por sus generales y con el apoyo de la CIA y del gobierno de Ronald Reagan, para enseñar a otros seres humanos todo lo que aprendieron en la guerra sucia que llevaron adelante contra sus propios pueblos.

A mediados de los 80, porque en parte se comprendió el horror que las dictaduras significaron en el continente, afortunadamente estos hombres comenzaron a desaparecer de los escenarios donde fueron tan útiles para los que pretendieron destruir generaciones.

Francés estuvo un año y medio entre Cuba y Nicaragua, para volver posteriormente a la Argentina, país en el que nunca pudo reinsertarse y donde dijo que había sido abandonado.

¿Y Stefano Delle Chiaie?

En 1987 el italiano era uno de los hombres más buscados por Interpol, estaba en Venezuela desde hacía tres años, en el barrio de Chacaíto de Caracas y vivía bajo el nombre de Alfredo di Mauro. Fue detenido el sábado 28 de marzo por la Policía y expulsado del país por uso de pasaporte falso y enviado a Italia en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó en el aeropuerto de Ciampino en Roma. No hubo proceso de extradición. "Así se evita hablar en público, en este país, del asunto de Bolonia y de otras cuestiones", dijo al escritor David Yallop un coronel de la Inteligencia venezolana.

En esos años, los Estados Unidos comenzaron a mirar hacia otro lado cuando sus antiguos aliados buscaban algún apoyo y las dictaduras, en algunos países, se habían convertido en un mal recuerdo. En marzo del 90, tres años más tarde de la detención de Delle Chiaie en Italia, Pinochet abandonó el cargo de presidente y se quedó en la comandancia en jefe, Alfredo Stroessner vivía aterrado y oculto en una de sus estancias en Brasil, Jorge Rafael Videla esperaba el decreto de Menem que lo pusiera en libertad pero no podría tomarse un café en un lugar público de Buenos Aires sin el temor a que el tipo que está enfrente lo mate o lo escupa... Hugo Bánzer se aprestaba a continuar su carrera política y los militares uruguayos trataban de impedir que el tema de los derechos humanos los afectara institucionalmente.

Pero ellos no eran todos. De Francés no se supo más. Riveiro volvió a la Argentina, continuó como capo de Inteligencia y se retiró silenciosamente en 1985 cuando su ascenso fue vetado en el congreso argentino. Su nombre volvió a aparecer cuando periodistas del diario *Página 12* descubrieron que el coronel (ahora r) estuvo trabajando como asesor externo del ministerio de Defensa argentino entre junio de 1997 y el 31 de marzo de 1999. Su puesto era de director de relaciones institucionales del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

El general Suárez Mason fue acusado y procesado por decenas de homicidios pero recibió un perdonazo presidencial. Massera, que primero fue condenado a cadena perpetua, posteriormente fue indultado por Menem. El general Gustavo Alvarez fue detenido y expulsado de Honduras por sus propios subalternos.

Otros, en Chile o en la Argentina, tuvieron que buscar protección para no caer detenidos y miraron hacia el Paraguay, el que había sido de Stroessner según Rogelio García Lupo, donde todavía se cocían las habas y era la ruta obligada de algunos que veían en la tierra en que encontró la muerte Somoza, el paraíso que andaban buscando... era paso obligado en la ruta de las ratas... como lo había sido tras el término de la segunda guerra mundial...

XIX

La cofradía

"Sí, pero no todos dentro de este servicio, sino los que fueron CNI y que después pasaron al DINE y que están formando un grupo aparte. Ese grupo es el encargado de dar la protección, materialmente si tú quieres, pero no van a figurar en ninguna parte porque son bien astutos. Ellos buscan abogados prestigiosos que son los que dan la cara. Ellos no..."

Carlos Eva Tapia, ex fiscal militar.

Cuando los hombres más importantes de la Alemania nazi se reunieron en agosto de 1944 en una vieja mansión de Estrasburgo tenían, según algunos historiadores, tres cosas en común: "un problema, un pasado y una expectativa". El problema, sin duda, era que iban perdiendo la guerra y, desde el desembarco en Normandía de las fuerzas aliadas, la derrota del Tercer Reich era inminente. El pasado, en general, los condenaba a todos por igual y la expectativa, según el periodista Jorge Camarasa, estaba centrada en la forma de "capear el futuro que se consideraba hostil".

Fueron 77 personas las que, durante 48 horas, idearon la fórmula de escapar del cerco que, día a día, le iban tendiendo rusos y americanos. Era lo más granado del poder nazi y destacaban, entre otros, los delegados personales de Martin Bormann, el hombre que secundaba a Hitler; del ministro de armamentos, Albert Speer; del comandante militar, Almirante Wilhelm Canaris y los dueños de las fábricas más poderosas que habían sido el pulmón de la maquinaria bélica: los Krupp Messerschmidt, Thyssen, Bussing Reihmetal, VW Werke, Rochling, I.G. Farben, AEG, Siemens y Kirdorf.

También, durante esos días en la "Mansión Rouge" estuvieron presentes los grandes banqueros, los empresa-

rios de seguros y los industriales de las cuencas del Rin y del Ruhr.

Lo que ocurrió en este encuentro, en el que los participantes llegaron en trenes blindados y en el máximo secreto, se conoció mucho tiempo después. "Los funcionarios políticos del partido, narra Jorge Camarasa en el libro "Odessa al Sur", habían asistido para sentar las bases materiales del resurgimiento del Tercer Reich, en momento y lugar a determinar. Los industriales y los empresarios, en cambio estaban animados por la posibilidad de hallar la manera de conservar sus bienes y ponerlos a salvo de la segura confiscación que sobrevendría a la derrota. Pero era mayor la desgracia común que los apetitos diferenciados, y los dos grupos pudieron coincidir y encontrar la fórmula que diera satisfacción a ambos intereses".

La idea que fue aprobada por todos los presentes, finalmente, surgió del representante de Bormann y consistió en que los acaudalados empresarios financiarían las fugas de los jefes nazis y estos, a su vez, custodiarían y manejarían todos los capitales girados al exterior. Si bien el acuerdo no era tan bueno para los hombres de negocio, como estos estaban absolutamente unidos al destino del nazismo, no les quedaba otra opción.

En el libro que escribiera el caza-nazis Simon Wiesenthal, denominado "Los asesinos entre nosotros", se reproduce un fragmento de las actas del partido nacional socialista alemán en el que se adelanta que como "se supone que algunos miembros serán condenados" han de tomarse medidas "para colocar jefes menos destacados" en varias empresas alemanas claves. El acta aseguraba, además, que el aparato del partido estaba "dispuesto a suministrar grandes sumas de dinero" a aquellos industriales que contribuyeran a la organización de posguerra fuera de Alemania. Pedía a cambio, "todas las reservas financieras que ya hayan sido transferidas al extranjero, o puedan ser transferidas posteriormente, para que tras la derrota se funde en el futuro un poderoso nuevo Reich".

Un dossier publicado en 1946 por el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos reveló que después de la reunión de la Mansión Rouge "los alemanes, utilizando fondos alemanes, crearon en el mundo 750 sociedades: 112 en España, 58 en Portugal, 35 en Turquía, 98

en la Argentina, 214 en Suiza y 233 repartidas entre Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador”.

No fue sólo el problema de los fondos económicos que necesitarían los jerarcas en el exilio lo que se trató en esa reunión. También se vieron las vías de escape que, según Jorge Camarasa, serían tres. “El primero salía de Munich, Alemania, y comunicaba con Salzburgo, en Austria, para acabar en Madrid, España. El segundo camino también partía de Munich y, vía Salzburgo o el Tirol, terminaba en la zona de Génova, al norte de Italia, desde donde los jerarcas podrían embarcarse rumbo a Egipto, Líbano o Siria. El tercero de esos itinerarios era igual al segundo en su parte europea, pero su destino final era la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina”.

Todos los caminos, además de ser fácilmente transitables, debían contar con casas seguras, medios de transporte, lugares donde aprovisionarse de documentación y, especialmente, ayuda de gente ideológicamente confiable.

Uno de los contactos más estrechos y que posibilitó además el éxito de las distintas operaciones que se montaron para sacar a los jerarcas nazis y otros alemanes, eventualmente buscados por los aliados, desde la tierra teutona, fue el Vaticano. La red de fugas en la que intervino la iglesia se llamó “ruta de las ratas” o “red romana”. Dice Camarasa que “estimaciones coincidentes indican que cinco mil jefes nazis alcanzaron a escapar gracias a los servicios de esta organización cuya sede central estaba en Roma, operaba desde oficinas propias bajo la cobertura de la Pontificia Comisión de Asistencia, y el cerebro era el obispo austríaco Alois Hudal”.

Ello, que ocurrió en la Alemania nazi, se repitió en América del Sur. Conscientes de que en algún momento tendrían que dejar el poder y jaqueados por los organismos internacionales, los hombres que manejaron la Inteligencia -o mejor dicho la represión- se preocuparon de los dos frentes. Por un lado el económico y, por el otro, el de la retirada.

Era fundamental contar con una estructura que permitiera, tanto a los ex agentes como a sus familiares, lograr rápidos cambios de nombre u obtener nuevos documentos de identidad. Si ello podía ser fácil a nivel nacional, sólo un acuerdo internacional podía garantizar la adquisición de pasaportes y visas de residencia en otros países, transferir recursos econó-

micos y financieros o construir vías rápidas de desplazamiento para evadir controles policiales y demandas judiciales.

Al igual que el operativo de coordinación de la década del 70, los antecedentes sobre el sistema de protección son escasos y las pruebas mínimas, pero existen elementos, que se han filtrado gota a gota, que dejan al descubierto los enclaves, modus operandi y coordinaciones que, en algunos casos, continúan hasta nuestros días.

La cofradía, así se llamó al símil chileno de Odessa, fue descubierta a fines de 1992 en Santiago por un grupo especial de la Policía de Investigaciones. Sus oficinas estaban a escasas cuadras de la casa de gobierno chilena y su "administrador" era el general (r) de la Fuerza Aérea y ex Jefe de Inteligencia de esa institución, Vicente Rodríguez Bustos, quien la gerentaba bajo la fachada de una "oficina de asesoría judicial". En la misma se llevaba un disciplinado control sobre todos los procesos en los que estaban involucrados agentes del ex comando conjunto.

Este grupo, responsable de múltiples desapariciones, nació en la década del 70 y fue conformado por uniformados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Sus principales jefes fueron, por la aviación, Roberto Fuentes Morrison; Daniel Guimpert Corvalán por la Armada; Manuel Agustín Muñoz Gamboa de Carabineros, y el capitán de Ejército Alvaro Corbalán Castilla quien, además, se desempeñó años más tarde como jefe de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Todos ellos respondían a la Comunidad de Inteligencia y, como tenían mucha información de los primeros años de la dictadura, debieron contar con una protección especial en los 80.

De hecho, cuando se iniciaron las acciones judiciales en su contra, fueron sacados del país u ocultados, para que no tuvieran que enfrentarse con los pocos magistrados que pretendían investigar las violaciones a los derechos humanos. Fuentes Morrison de la Fuerza Aérea, por ejemplo, fue trasladado a Sudáfrica y a otros connotados miembros del comando se los reagrupó en otras fuerzas.

Fue entre los responsables de ese grupo disuelto en los 80, donde se planificó el triple degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, los dos primeros vinculados a investigaciones sobre el accionar represivo del comando conjunto, con el objeto de evitar que siguieran

esclareciendo los hechos y llegaran hasta ellos. Este ale-
voso crimen, que significó la salida del general César
Mendoza Durán de la Junta Militar, ocurrió en marzo de
1985.

“Parada, Guerrero y Nattino, permanecieron
esposados y con vendas en sus ojos en el local del departa-
mento Tercero, hasta la noche del 29 de marzo de 1985 y
cerca de la medianoche de ese día o en la primera hora del
siguiente, en las mismas condiciones, son introducidos dos
a la maleta de un automóvil Opala y el otro en el asiento
trasero y llevados a un lugar cercano a la intersección que
se produce entre la Circunvalación Américo Vespucio y
el camino de entrada al aeropuerto Pudahuel, siendo sa-
cado primeramente Guerrero y bajado a una especie de
hondonada contigua a la berma del aludido camino, don-
de es arrodillado y encontrándose vendado y esposado,
por medio de un cuchillo de gran tamaño y peso, denomi-
nado “corvo atacameño” se le seccionó la garganta de un
solo corte, en posición oblicua ascendente, en una longi-
tud de 14 centímetros de bordes netos, afectando piel, mús-
culo esternocleidomastoideo y grandes vasos laterales del
cuello, provocándole la muerte. Hecho esto, se procedió
metros más al norte del primero, a bajar del vehículo a
Nattino, quien al igual que al anterior, se le puso de rodi-
llas, vendado y esposado, con la misma arma se le cortó el
cuello, presentando una lesión principal, que correspon-
de a una herida cortante profunda transversal de 14 centí-
metros de bordes netos y ángulos agudos y 5 centímetros
de profundidad, la que se extendió hasta el plano óseo,
con sección de los grandes vasos arteriales y venosos, con
sección de laringe y esófago... (el grupo) se encaminó más
al norte y se procedió a bajar entre varios de los hechores
al cautivo Parada, hacia la misma hondonada, en donde
se depositó de espalda en el suelo y en esa posición se le
enterró el corvo en la región abdominal, flanco derecho,
provocándole una herida cortante profunda, con salida de
vísceras, para enseguida y probablemente con otra arma
de menor consistencia, se le provocaron cuatro heridas en
el cuello... luego de ocurridos los decesos y habiéndose
asegurado de sacar tanto las vendas como las esposas de
los agraviados, los hechores se dirigieron de nuevo al cuar-
tel, en donde algunos se bañaron para limpiarse de vesti-
gios que les hubieran quedado por los hechos cometidos

y otros se dirigieron a sus domicilios, despachando el jefe de este operativo a los funcionarios que había dejado en el cuartel...", narra la versión de los hechos extractada del proceso que llevó adelante el ministro Milton Juica.

El crimen conmocionó a la opinión pública y el oficialismo de la época, a través de voceros oficiales y otros oficiosos, intentó derivar la atención hacia purgas internas dentro del PC.

El diario *La Tercera*, dirigido a la sazón por un periodista que se jactaba de no tener una sola querrela en su larga carrera profesional, decía, bajo el título de "Siniestro intento extremista para provocar el caos", que la información obtenida en "círculos oficiales" aseguraba que los asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino constituían "uno de los intentos más siniestros del extremismo chileno en su afán de derrocar al gobierno y provocar el caos en Chile".

De inmediato se nombró un ministro en Visita, José Cánovas Robles, el que si bien llevó adelante una investigación valiente y acuciosa debió cerrarla sin culpables en 1987. No eran épocas aptas para la investigación y los magistrados que se atrevían se encontraban de frente con la propia Corte Suprema y allí chocaban irremediamente sus voluntades.

Con el correr del tiempo y ante el eventual retorno de la democracia a Chile, las cosas fueron empeorando para los represores y los jueces comenzaron a citarlos en los distintos casos que tenían en su poder. Así se fortaleció la Cofradía, al parecer en 1988, cuando Pinochet fue derrotado en el plebiscito de octubre y su propio calendario institucional lo obligaba a abandonar el gobierno.

La oficina, que se nutría de abogados, especialmente ex fiscales militares, documentos y carpetas con toda la información de los procesos, contaba con el apoyo indirecto de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Para ello se la dotó de recursos y de la infraestructura necesaria para cumplir adecuadamente con lo que sus "clientes" requerían. Un testimonio de esta suerte de asesoría jurídica, aunque no le dio el nombre de Cofradía, lo entregó a este periodista el ex fiscal militar Carlos Eva Tapia para el libro "El Caso de Gloria Stockle", cuando señaló que "en el Ejército existe, desde hace mucho tiempo, una red de protección que está plenamente vigente. En este momento, toda la gente que estuvo en la CNI tiene una unidad especial dedi-

cada a protegerlos. Hay un equipo de muchísimos abogados, donde a mí me quisieron meter y yo no quise, dedicado nada más que a buscar cómo desviar la información. Y no los vas a encontrar jamás ¡nunca! Yo sí se dónde están. Y se han quebrado la cabeza para evitar que los descubran. De nuevo, te lo vuelvo a decir, esta es la hermandad 11 de Septiembre... Tú quieres meterte... no los vas encontrar..."

"¿Quién integra la red de protección?"

"Si analizas la composición de la Corte Suprema y te fijas quiénes fueron nombrados por Pinochet y quiénes por la Concertación, por ejemplo, todos los que fueron nombrados durante el gobierno militar le deben algún favor a Pinochet. ¿Cómo se pagan esos favores? Eso no se ha podido determinar. No se saca nada con investigar cómo llegaron arriba, por ejemplo, Fulano, Zutano o Perengano. Nada. Fueron nombrados por Pinochet y de alguna manera tenían algún compromiso que algún día debían cobrárselo. ¿Quién fue el encargado de hacerlo? No sé, porque yo no me movía en esa área. A lo mejor es el mismo auditor del Ejército cuando integra con ellos la Corte Marcial. Puede ser él, quien les diga que se acuerden que en tal fecha... ¿cómo lo puedes probar si la cuestión es entre dos? Ahí tienes un dato, si quieres uno, ¿por qué Torres se ha mantenido hasta el día de hoy? Porque él sabe todo. Cuando yo estaba en Curicó, el comandante del regimiento me mostró a Torres y me dijo que sería el auditor general del Ejército. Él, en ese momento, era mayor al igual que yo. ¡Y llegó! Incluso ascendió a general sin tener el tiempo cumplido..."

"¿Es el servicio de Justicia, entonces, el que arregla las cosas?"

"Sí, pero no todos dentro de este servicio, sino los que fueron CNI y que después pasaron al DINE y que están formando un grupo aparte. Ese grupo es el encargado de dar la protección, materialmente si tú quieres, pero no van a figurar en ninguna parte porque son bien astutos. Ellos buscan abogados prestigiosos que son los que dan la cara. Ellos no..."

"¿Abogados que les deben favores?"

"Estás preguntando demasiado. Hay cuestiones que deben mirarse más para atrás. Yo no estuve en esa área, pero sí supe cómo se hacían las cosas. Afortunadamente estuve en provincia y no en Santiago. Nunca quise venirme por lo

mismo. La gente que estuvo en Santiago sí se metió en muchas cosas...".

Algunos, sin duda, deben haber asistido política y jurídicamente a la Cofradía. ¿Y el financiamiento?

Es prácticamente un hecho que, paralelamente a su acción "jurídica", este organismo semiclandestino que apoyó a Estay encontró financiamiento en negocios poco claros y se nutrió del tráfico de armas. Basta recordar que el propio general Rodríguez, en 1991, fue procesado en la causa abierta por la venta ilegal de armas chilenas a Croacia...

Pero, fue la infatigable acción del ministro de la Corte de Apelaciones Milton Juica, cuando investigaba el triple degollamiento, la que permitió conocer más detalles sobre la forma en que se protegía a los uniformados que necesitaban de su propia "ruta de las ratas".

En medio del trabajo, Juica y los hombres de Investigaciones descubrieron que Miguel Estay Reyno, ex agente del comando conjunto y uno de los autores materiales del triple degollamiento, se encontraba viviendo en un pueblito del Paraguay y dispusieron todas las acciones para cercarlo y lograr su captura. El 2 de abril de 1992, precisamente el día en que Miguel Estay cumplió 40 años, el magistrado dictó 15 encargatorias de reo a funcionarios de Carabineros y ordenó la detención del ex agente que, por sus averiguaciones, se encontraba desde 1986 fuera del país.

¿Por qué el Paraguay?

Según Rogelio García Lupo, en su libro "El Paraguay de Stroessner", desde 1985 que el general Héctor Orozco, quien fuera fiscal militar del caso Letelier, dirigía desde la representación de Chile en Asunción, donde se desempeñaba como embajador, una red de espionaje sobre territorio argentino. Esta actividad ilícita, según el ministro del Interior del Paraguay en la época, Sabino Montanaro, fue detectada por la Argentina en agosto de 1985. En esa calidad, asimismo y siempre de acuerdo a la versión del periodista argentino, Orozco recibió al capitán de Ejército, Pascual Guerrieri, quien abandonó la Argentina para eludir acciones judiciales en su contra que lo sindicaban como responsable de actividades terroristas que pretendían destabilizar el gobierno del presidente Raúl Alfonsín.

Hasta 1992 se cree que el santuario de los agentes comprometidos en violaciones graves a los derechos hu-

manos era el Paraguay. Ese país, durante décadas, tuvo un gran prestigio entre los criminales anticomunistas del mundo entero. Ubicado estratégicamente, entre Argentina y Brasil, desde 1954 hasta 1989 fue gobernado con mano de hierro por el general Alfredo Stroessner. El propio Richard Nixon, al llegar a Asunción en 1968, destacó que en el campo de los asuntos internacionales no conocía otra nación que se haya levantado más fuerte que el Paraguay en contra de la amenaza del comunismo.

"Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos, anticomunistas argentinos, brasileños y españoles, sicarios bolivianos, genocidas chilenos y todo tipo de militares y civiles, involucrados en violaciones de los derechos humanos, tráfico de armas, espionaje u operaciones criminales, eligieron Paraguay como su lugar de refugio y fueron acogidos por las más altas autoridades del país como 'combatientes por la libertad' y 'héroes internacionales', cuenta Esteban Cuya, investigador del centro de Derechos Humanos de Nuremberg, en su trabajo "La Operación Cóndor: el terrorismo de Estado de alcance transnacional".

El Paraguay de Stroessner, según el periodista argentino Rogelio García Lupo, era "una nación pequeña y desolada, donde puede estudiarse mejor que en ningún otro lugar la misteriosa correlación entre política y crimen, sobre un escenario donde el pueblo no está presente y donde por momentos llega a dudarse de que realmente exista".

Hasta ese país llegó en los años 50 el criminal nazi Josef Mengele y luego lo siguieron otros, tal vez menos connotados, pero que eran buscados en sus países con el mismo ahínco: el jefe de la logia masónica P-2 Licio Gelli y el franquista español Juan León Cerdón. El fascista italiano Elio Massagrande, acusado junto con Stefano Delle Chiaie de volar la estación de Bolonia en 1980, atentado que le costó la vida a casi un centenar de personas, fue recibido por el propio general Stroessner en Asunción. Otro huésped del dictador paraguayo fue su similar de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, luego que fuera derrocado por el Frente Sandinista en 1979. El régimen dictatorial conducido por el general Stroessner, con la colaboración de militares y empresarios conservadores, según el investigador Esteban Cuya, ofrecía el contexto de "paz e impunidad" que buscaban distintos criminales.

Para Somoza la capital paraguaya no fue el "santua-

rio" que esperaba, porque cayó abatido en pleno centro tras un ataque comandado por el argentino Enrique Gorriarán Merlo. Ello ocurrió en 1980.

Nueve años después el general Stroessner se vio obligado a dejar el poder en manos de su consuegro, el general Andrés Rodríguez, quien inició tíbicamente un proceso de apertura política en Paraguay. Ello, de ninguna manera, resquebrajó el seguro sistema de protección de ex agentes de seguridad.

Miguel Estay Reyno, en Paraguay, no sólo tenía una protección especial de los amigos del antiguo régimen chileno sino que, además, mantenía un fluido contacto con la Cofradía: llamaba por teléfono dos veces al mes, con cobro revertido obviamente, para hablar con el general Rodríguez, algún abogado o el secretario del primero, el capitán Jorge Cobos, y recibía entre 500 y 800 dólares mensuales.

El envío de los dineros se hacía a nombre de Camilo Roberto Concha Burgos a través de la agencia de viajes Exprinter, la misma que trabajó con la DINA y que tenía vigente un convenio con la Fuerza Aérea de Chile. Esta agencia, además, le administraba una propiedad a Estay, en el Cajón del Maipo, entregándole a una tía del ex agente chileno el dinero correspondiente por el arriendo y ella, según el suboficial Uribe, se lo hacía llegar a Paraguay.

A partir de 1989, cuando la Cofradía engrosó su dotación y presupuesto, los contactos con Estay aumentaron e, incluso, desde las mismas oficinas del general Rodríguez se comunicaban con él, a través de su esposa, a los teléfonos de un cuartel militar de Asunción. Era Odessa la que funcionaba.

La policía civil se acercó hasta el ex agente y contactó a la asesora del hogar del matrimonio chileno, Hermelinda Mendoza, quien les confirmó que su patrón se llamaba Camilo Concha, era chileno como su esposa y llamaba frecuentemente a Santiago por teléfono desde la compañía Antelco, ubicada en el sector donde residía. Así los detectives se enteraron que desde 1988, Miguel Estay, hizo reiterados llamados desde ese lugar a Santiago y a la ciudad de Puebla, en México.

La información de que la policía tenía su paradero, curiosamente, se filtró y llegó hasta la Cofradía. A partir de ese momento, Rodríguez hizo lo humanamente posible para evitar la captura de Estay, conocido bajo el seudónimo de

“El Fanta” o de “Samuel” y que, en el pasado, antes de ser detenido por las fuerzas represivas, fue militante de las juventudes comunistas.

De hecho, apenas el general Rodríguez se enteró que Estay corría peligro en Paraguay, compró un pasaje a su nombre y se lo endosó al suboficial José Amadeo Uribe Vallejos, el que junto con la misión de alertar al prófugo, recibió trescientos dólares que debían ser entregados al Fanta para facilitar su huida hacia Brasil.

Uribe llegó a la capital guaraní y, en el aeropuerto, fue recibido por el uniformado paraguayo, ex embajador de Asunción en Santiago, capitán Raúl Fernández Coronel, quien fue condecorado en Chile con la Medalla Minerva del Estado Mayor de la Academia de Guerra Aérea, la Orden al Mérito de Chile, en el grado de Comendador, y la Estrella al Mérito Militar otorgada por el Ministerio de Defensa.

El capitán Fernández, de acuerdo a todos los informes, fue una pieza clave en el engranaje del Cóndor y, por ende, seguía operando en la misma dirección a principios de los 90. Era, además, un colaborador nato de los servicios chilenos y tenía una amplia y vasta red de amistades dentro del régimen del general Pinochet.

Llevó, entonces, a Uribe a su casa y allí, sin duda, conversaron de la oportunidad en que el paraguayo se desempeñó como edecán del general Pinochet, cuando este visitó Asunción, o los innumerables cursos que realizó en Chile: pilotaje aeronaval, piloto de guerra y piloto militar en la Escuela de Aviación Capitán Ávalos, pilotaje en DC3, preparación de instructor en el grupo 10 de los Cerrillos, piloto de helicópteros Hiller UH23, de Comando y Estado Mayor en la Academia de Guerra de la Fach y de tiro en la Base Aérea “Los Cóndores” de Iquique.

En la tarde de ese mismo día, el de la llegada de Uribe a Paraguay, Fernández se contactó con la esposa de Estay, María Verónica Koch, para acordar un encuentro entre Uribe y el prófugo. El mismo se produjo esa noche en el terminal de buses de Asunción, oportunidad en la que el suboficial lo puso al día de lo que estaba ocurriendo en Chile, le entregó las instrucciones de La Cofradía y le dio los 300 dólares que el general Vicente Rodríguez le había enviado para su huida.

En la madrugada de esa misma jornada, un día de abril de 1992, Miguel Estay Reyno abordó un bus con des-

tino a Brasil y su pista se perdió para los investigadores. Recién volvió a aparecer el 18 de diciembre de ese año cuando, tal vez cansado y sobre todo acorralado, el ex agente decidió presentarse voluntariamente ante la embajada de Chile en Asunción para entregarse a la Justicia.

En sus primeros interrogatorios, Estay mantuvo una conducta evasiva respecto a los delitos de los cuales era acusado y posteriormente confesó su participación en el triple degollamiento y dijo que la acción criminal fue ordenada por el entonces jefe de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Luis Fontaine, quien fuera asesinado en 1991 por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. También contó la forma en que fue protegido.

En menos de 72 horas, el ministro Juica ordenó el allanamiento de las oficinas en las que funcionaba La Cofradía, en una calle del centro de Santiago, en el que la policía encontró, además de documentación relacionada con Miguel Estay, papeles que vinculaban a los que allí laboraban con procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, que engrosaron las pruebas en contra de los ocupantes de la oficina, estaba el pasaporte N° 5.814.822/9, de color rojo y a nombre de Camilo Roberto Raúl Concha Burgos pero con la fotografía de Estay, el que tenía registradas varias entradas y salidas a la Argentina, Brasil y el Paraguay.

En la oportunidad, asimismo, fueron detenidos e incomunicados por Juica el general Rodríguez y su ayudante, el suboficial Luis Uribe, quien sólo algunos meses antes había dejado la institución a la que pertenecía. El general Rodríguez, en el proceso, dijo que conoció a Estay en Paraguay en 1988, bajo el nombre de Camilo Concha y que lo ayudaba porque tenía problemas con dos de sus hijos que eran autistas. Reconoció que sus ayudantes posteriormente le informaron que se trataba del Fanta.

Miguel Estay, por su parte, aseguró que el pasaporte con el nombre de Camilo Concha lo obtuvo por una gestión personal de su amigo, el comandante de la Fach Roberto Fuentes Morrison, también del comando conjunto y asesinado en 1990, que utilizó dicho documento para salir de Chile y que cuando se venció lo envió en un sobre cerrado al general Rodríguez. Este, de acuerdo a la

versión de Estay, ignoraba su contenido y piensa que por ello, presumiblemente, estaba en las oficinas de la llamada Cofradía.

Estay fue procesado y condenado a presidio perpetuo, más una pena de cinco años y un día y otras dos de 541 días, por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, usurpación de nombre y falsedad de pasaporte, secuestro y los homicidios de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Actualmente cumple su pena en la cárcel de Colina.

XX

La conexión uruguaya

"Me preocupa que el Cóndor siga volando. Me preocupa que el poder político haya sido acotado, me preocupa la actividad de las mafias que infunden miedo. No estoy dispuesto a vivir con miedo y aunque todos sentimos miedo, debemos superarlo cuando el miedo nos condiciona. Prefiero aparecer en una cuneta".

Diputado uruguayo José Bayardi.

En 1993 la situación en Chile no era tranquila para los agentes represores. Especialmente, la actividad desarrollada por el ministro en visita Adolfo Letelier, obligó a muchos a buscar refugio en otros países.

El Cóndor, tal vez rearticulado en forma defensiva, miró hacia el Uruguay, un país en el que los militares no habían perdido sus privilegios y donde no existían grupos, como el Lautaro o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que andaban detrás de los ex agentes para cobrarse venganza. Paraguay, por lo ocurrido a Estay, ya no era tan seguro.

De la ruta uruguaya da cuenta la misteriosa historia del chileno Eugenio Antonio Berríos Sagredo, bioquímico de profesión y, según se asegura, el hombre que fabricó para la DINA el mortal gas Sarín en el laboratorio que Michael Townley tenía en su casa de Lo Curro.

Según un informe policial, Berríos habría realizado dicho trabajo con su colega Francisco Oyarzún Sjöberg, con el objeto de perfeccionar a base de órganos tiosforados el letal gas que la DINA utilizó en sus interrogatorios en la casa de Townley. La esposa de este último, Mariana Callejas, aseguró que Berríos fue integrante de la DINA y específicamente de la Brigada Quetropillán, donde tenía el cargo de "Encargado del Laboratorio Químico".

Posteriormente el químico de la DINA pretendió independizarse, con poca suerte, en los negocios y habría incursionado en el tráfico de cocaína. Su sueño era quitarle el olor a la droga para poder cruzar las fronteras sin temer a los controles. En 1991, el 19 de febrero, fue detenido en Viña del Mar y declarado reo por el Sexto Juzgado del Crimen por giro doloso de cheques. Salió en libertad el 15 de marzo tras una corta estada en Capuchinos. Siete meses más tarde, el ministro Adolfo Bañados Cuadra despachó una orden de comparecencia y 30 días después dictó otra de aprehensión en su contra por homicidio (caso Letelier) y uso de pasaporte falso. El bioquímico, a partir de ese momento, no fue hallado. El cóndor, nuevamente, extendía sus alas.

Un informe secreto, que el diario *La República de Montevideo* reprodujo en su edición del jueves 1 de febrero de 1995, asegura que el Departamento de Operaciones Conjuntas del Servicio Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional del Uruguay organizó "la protección y traslado en operación encubierta del químico Eugenio Berríos" quien, según el documento, viajaría con el nombre supuesto de Hernán Tulio Orellana y estaba acompañado por el mayor de Ejército chileno Carlos Herrera Jiménez.

Un acápite del informe, también reservado, dice que la operación, dispuesta "por la protectora de ex agentes de seguridad", se hará en el marco del compromiso del "Pacto Cóndor Sur". La trama es macabra.

Al igual que en la década del 70 los encargados de los contactos, previos al envío de Berríos, fueron los uniformados que se desempeñaban en las agregadurías militares de Montevideo y Santiago.

¿Quién financia todas estas operaciones?

Como Odessa, en las dictaduras latinoamericanas hubo mucha gente que se enriqueció gracias a la acción de las fuerzas represivas y que, ante la inminente caída de los regímenes militares, ofreció sus dineros para salvaguardar a los agentes de cualquier eventualidad que se produjera en democracia.

Si bien la DINA en Chile tuvo sus empresas y lo propio hicieron otras agencias, incluso relacionándose con el narcotráfico, es un hecho que todavía falta determinar quiénes son aquellos empresarios que, desde las sombras, entregan sus donaciones para una causa tan poco altruista.

Cabe resaltar que, durante el gobierno militar, la

no en coma (,) la frase: "en la partida correspondiente".

2.- De la Comisión de Hacienda para agregar el siguiente inciso segundo nuevo, al artículo 6°:

"El gasto fiscal que demande durante 1991 la aplicación de esta ley, se financiará con cargo a los recursos consultados en el ítem 50 01-03-25-33.004 de la Partida Tesoro Público del presupuesto vigente".
Al artículo 7°:

De los Diputados señores Bombal, Masferrer, Procheile, Rodríguez, don Claudio y Valcarlos para sustituir la frase: "dentro de un plazo de 30 días" por la siguiente: "dentro de un plazo de 60 días".

7.- SITUACION ACTUAL DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, EL PROCESO DE PRIVATIZACIONES Y LA POLITICA DE MODERNIZACION DE DICHA CORPORACION.

El señor DUPRE (Vicepresidente).- Corresponde analizar "la situación actual de la Corporación de Fomento de la Producción, el proceso de privatizaciones y la política de modernización de dicha Corporación".

Hago presente a los señores Diputados que esta sesión se rige por las mismas normas de los incidentes.

El señor MUÑOZ BARRA.- Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente y Honorables colegas, hace unos días el Gobierno ha definido las grandes líneas de la acción futura de la Corporación de Fomento de la Producción. La autoridad no intenta devolverle

las funciones que sirvió en sus orígenes, hace ya medio siglo, pero tampoco pretende avalar una actitud de total prescindencia frente al desarrollo futuro de nuestro país.

Como lo señala el Ejecutivo, la Corfo pretende contribuir a un desarrollo armónico de los recursos humanos, materiales y naturales de Chile. Y lo hará fomentando el crédito, el estudio de oportunidades y la materialización de inversiones, la creación de sociedades mixtas entre el capital local y el extranjero, la expansión de la pequeña y mediana empresa y la modernización del aparato productivo mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

En cuanto a sus empresas filiales, el país debe saber que la Corfo busca elevar su productividad y mejorar su rentabilidad. La inversión que en muchos casos ellas requieren será cuantiosa. Pero también su modernización es urgente. Esto y no otro motivo es lo que impulsa al Gobierno a buscar una solución con capitales privados, en términos atractivos para los inversionistas, pero también convenientes para el país. Hacerlas más eficientes supone, asimismo darles una normativa legal que les permita competir en condiciones de igualdad con el sector privado.

Estas son tareas ya emprendidas durante el año 1990 y que serán aceleradas durante 1991. Pero hacerlo con un horizonte de transparencia y estabilidad requiere una previa y necesaria clarificación sobre los problemas que heredó esta Administración y sobre la imagen que, respecto de la Corfo, aún hoy persiste en amplios sectores de la ciudadanía.

La Corfo necesita una base sólida y creíble sobre la cual pueda asentar sus planes y tareas. Ello no será posible sin antes resolver definitivamente su imagen de arrastre. Como en otros planos de la realidad, también acá subsisten situaciones que impiden a esta institución abor-

Corporación de Fomento (CORFO) fue, según el entonces ministro de Economía, Carlos Ominami, administrada irregularmente y ello quedó de manifiesto en el otorgamiento de algunos créditos, en la donación de bienes o en la privatización de empresas.

Estas últimas, en algunos casos, se vendieron a precios inferiores a los del mercado, en beneficio de grupos o sectores reducidos y sin pasar por los procedimientos de licitación o subasta pública.

Entre 1984 y 1989, período en que el régimen militar se prepara para la eventualidad de emprender la retirada, se privatizaron total o parcialmente 32 empresas, lo que significó una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares para el Estado de Chile. Más de uno de los beneficiados tiene que haber aportado a la causa para ayudar a los agentes de la DINA o la CNI a dejar el país.

Entre ellos, sin duda, estaba el caso de Eugenio Berríos.

El químico, conocido como Hermes en la DINA, salió de Chile hacia la Argentina y luego rumbo a Uruguay, acompañado por Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, un oficial de Ejército y ex CNI, apodado Boccaccio, que actualmente está procesado por el homicidio de Tucapel Jiménez y fue condenado por su participación en el asesinato de Mario Martínez, transportista y militante de la Democracia Cristiana, hecho ocurrido durante el gobierno de Pinochet en el norte de Chile.

El uniformado, en su descargo, reconoce como efectivo que viajó a Montevideo en esa fecha, aunque asegura que lo hizo porque estaba interesado en introducir al mercado uruguayo un nuevo producto chileno: la carne del nuevo cerdo.

En Uruguay, Herrera arrendó un inmueble en la rambla República del Perú N° 815. "Vio el apartamento, le gustó y me dijo que lo arrendaría por tres meses, aceptando de mi parte, fijando el arriendo en U\$ 250 mensuales; sin embargo, le pedí un aval, me dijo que no había problemas, presentándome al ciudadano uruguayo Thomas Casella, cancelándome en su presencia por adelantado", relató a la policía Elena Delle Crosse, propietaria del inmueble.

De acuerdo a este testimonio la operación contó con el aval del también oficial de Ejército, pero de nacionalidad uru-

guaya, el teniente coronel Thomas Ventura Casella Santos, quien se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet cuando visitó ese país en febrero de 1993.

El uniformado uruguayo, oficial de infantería como Augusto Pinochet, había estado en 1975 en Chile, realizando una instrucción en paracaidismo básico y después de graduarse en la Escuela de las Américas se especializó en contrainteligencia en sendos cursos sobre el tema en 1987 y 1989. Tres años más tarde se convirtió en Jefe de Operaciones del Servicio de Información de Defensa.

Casella, desde el ingreso de Berríos al Uruguay, actuó disciplinadamente. Lo llevó de un lugar a otro, de un departamento a una pensión y luego a una casa. También lo tuvo en algunos hoteles. Siempre mantuvo sobre él una estricta vigilancia. Carlos Herrera y otros dos custodios, al parecer de nacionalidad chilena, se turnaban para "proteger" al bioquímico.

Cuando Berríos comenzó a ponerse nervioso y pretendió escapar, Casella decidió someterlo a un régimen más duro y puso a cuatro uniformados uruguayos en su custodia. Esa decisión la tomó tras un intento del bioquímico de comunicarse con la embajada chilena y especialmente con su amigo y agregado cultural y de prensa de Santiago en Montevideo, Emilio Rojas Gómez, con quien había trabajado en un proyecto empresarial.

Esto habría ocurrido la primera semana de noviembre y la embajada chilena informó, vía el télex n° 52, que "ciudadano chileno dijo llamarse Eugenio Berríos, expresó haber extraviado documentos y solicitó salvoconducto para regresar Chile vía terrestre. Además expresó que intentaría ir al consulado próxima semana "si puedo eludir vigilancia me encuentro sometido". Se agrega que existen publicaciones de prensa chilena que han informado que un ciudadano con ese mismo nombre está requerido judicialmente".

La decisión de Casella fue extrema: llevó al bioquímico hasta una nueva morada en Parque del Plata, una playa ubicada a 50 kilómetros de Montevideo. En noviembre de 1992, sin embargo, huyó de sus custodios y se presentó en la comisaría del lugar. En la oportunidad, frente a un desconcertado oficial de guardia, el chileno dijo que Pinochet lo había mandado a matar y que requería protección. En minutos el recinto policial era un hervidero: llegó el capitán de contrainteligencia del Ejército, Eduardo

Radaelli, quien custodiaba a Berríos y tras él, un capitán de fragata retirado y su esposa, que aseguraban que un vecino suyo, que decía ser ciudadano chileno, les pidió que lo ayudaran porque estaba secuestrado y temía por su vida.

En el libro de novedades de la comisaría, según el periodista uruguayo Samuel Blixen, quedó escrito un testimonio de Berríos que, en síntesis, relataba que lo tenían secuestrado desde varios días por orden del general Pinochet porque en la época de la dictadura, junto con otro biólogo, trabajó bajo su mando para fabricar armas químicas para el Ejército chileno. "Como teníamos que declarar en su contra, ordenó que nos mataran. Ahora tengo la esperanza de que voy a salir vivo de esta situación", le señaló un optimista Berríos al comisario Elbio Hernández. El policía, tras escuchar el testimonio, decidió darle protección al bioquímico y lo trasladó a un policlínico para que lo revisaran. En menos de una hora se presentó ante el comisario Hernández el jefe de Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas, quien le quitó a Berríos de sus manos.

Allí se perdió la pista del chileno.

No así de la información de lo sucedido porque antes de que se cumplieran siete meses de los hechos, en mayo de 1993, comenzó a circular por Montevideo un documento anónimo de dos carillas en el que, con pelos y señales, se narraba todo el episodio ocurrido en la comisaría de Parque del Plata.

Una verdadera tormenta política, por los hechos que reveló la prensa del Uruguay relacionados con Berríos, se desencadenó en el Ejército y el gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle. La primera semana de junio fue de decisiones: Casella debió asumir toda la responsabilidad y el general Mario Aguerrondo tuvo que dejar la jefatura de Inteligencia Militar. Ramón Rivas, el jefe de la Policía de Canelones, renunció. Pero ¿qué ocurrió con Eugenio Berríos?

La Inteligencia uruguaya, o tal vez la chilena, quizá ambas, montaron un triste espectáculo para hacer creer que el conflictivo bioquímico, tras el episodio del 15 de noviembre en Parque del Plata, se fue de Uruguay a Brasil y luego se dirigió a Italia. La prueba de este último destino era una carta con fotografías, en las que Berríos aparecía leyendo el diario *Il Messaggero* del 10 de junio de 1993, que un joven entregó en el consulado de Uruguay en la capital italiana. La misiva, por su parte, decía: "no me busquen que no me van a encontrar".

Esto último sí era efectivo.

El bioquímico, según las pericias que se le practicaron al cuerpo que fue encontrado enterrado en una playa uruguaya en abril de 1995 con cuatro balazos, habría sido asesinado entre enero y junio de 1993.

Curiosamente, el general Augusto Pinochet Ugarte visitó Uruguay en ese lapso, los últimos días de febrero, cuando el juez Bañados daba a conocer el fallo sobre el caso Letelier, oportunidad en la que solicitó que su edecán en las tierras de Artigas fuera precisamente el teniente coronel Thomas Cassella, el mismo oficial que se había encargado de mantener preso pero con vida a Eugenio Berríos, el chileno que pedía la Justicia de su país. ¿Coincidencias? Tal vez. Pura coincidencia.

Ella, sin embargo, devela una historia más profunda que muestra que la Odessa del Cóndor protege a su gente y que, cuando uno de sus miembros flaquea, no duda en eliminarlo.

A modo de epílogo

"La desinformación de la opinión pública (por los medios de comunicación) contribuyó sin duda a mantener las violaciones a los derechos humanos en el país".

Extracto del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

El cóndor, un ave orgullosa, ha visto como su nombre ha sido utilizado para bautizar un movimiento fantasma, que apenas tiene existencia, que pocos reconocen y que se utilizó para degradar a la especie humana.

Manuel Contreras pudo ser su gestor pero no lo reconocerá nunca. Como tampoco los crímenes por los que muchos familiares de detenidos desaparecidos lo acusan.

Me hubiera gustado terminar este libro con su testimonio. No para entender lo ocurrido sino para dar una explicación a aquellos que, en muchos años más, no podrán comprender cómo el Cono Sur de América enloqueció durante dos décadas.

Gendarmería de Chile me impidió ingresar a Punta Peuco.

Tampoco estoy claro que, de haber mediado permiso del director nacional de esa institución, Hugo Espinoza, el interno Contreras finalmente hubiera aceptado enfrentarse cara a cara con un periodista que no le tendría el respeto que otros colegas, durante muchos años, le dispensaron con holgura.

Reconozco que me quedé con las ganas de enfrentarlo. Especialmente después que leí su informe presentencial firmado por la psicóloga Angelina Soto Yáñez. Me dispuse a publicarlo, precisamente, para que se sepa en el futuro cómo eran íntimamente aquellos que manejaron durante años la temible DINA. No creo haber invadido su privacidad.

Este libro, que trata de resumir un operativo multinacional, muestra claramente que las instituciones de nuestros países fallaron. La prensa y los partidos, los dirigentes, nuestros conservadores políticos y especialmente aquellos que ostentaron el poder durante años, ya sean civiles, militares o los que se enriquecieron a costa de las medidas que tomó la dictadura.

No fue grato repasar esta historia. Las violaciones a los derechos humanos, al estudiarse y resumirse, dejan un sabor amargo. No pude dejar de sentir rabia cuando transcribí parte de la copia de la sentencia contra los criminales que degollaron a José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, las descripciones de los atentados a Letelier y Prats, el relato conmovedor del secuestro del uruguayo Enrique Rodríguez Larreta o los cientos de secuestros en distintos países con resultado de muerte y tortura.

Espero que este libro llegue a aquellos que poco saben lo que ocurrió y están ávidos de información... simplemente para que nunca más...

Fuentes Bibliograficas

Revistas:

Cosas
Apsi
Análisis
Qué Pasa
Ercilla
Cauce
Hoy
Time
Convicción de Buenos Aires

Libros:

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile).

Un Grito desde el Silencio, Nancy Guzmán, LOM.

El Oro de Moscú, Isidoro Gilbert, Planeta.

Informe de la Comisión Nacional de Detenidos Desaparecidos (Argentina).

Dossier Secreto: el mito de la guerra sucia, Martín Andersen, Planeta.

Informe Nunca Mas del Servicio de Paz y Justicia del Uruguay.

Todo o Nada, María Seoane, Planeta.

Política, Politiquería y Demagogia, Augusto Pinochet.

Documento Preparatorio para el IV Congreso del MIR (Chile).

The Price of Power: Kissinger, Nixon and Chile, Seymour Hersh.

Informe Covert Action in Chile del Senado de los Estados Unidos.

Teoría y Practica de la DC chilena, Jaime Castillo Velasco.

Libro Blanco de la Junta Militar, Gonzalo Vial y otros.

Bomba en una Calle de Palermo, M. González y E. Harrington.

A la Caza del Chacal, David Yallop, Planeta.

El Infierno, Luz Arce, Planeta.

Ezeiza, Horacio Verbitsky.

Contreras: historia de un intocable, Manuel Salazar.

Odessa al Sur, Jorge Camarasa, Planeta.

Laberinto, E. Propper y T. Branch.

El Vientre del Cóndor, Samuel Blixen.

Somoza: Expediente Cerrado, Claribel Alegría y D. J. Flakoll.

Deep Cover, Michel Levine

El caso de Gloria Stockle, Francisco Martorell, I.O.M.

Los Asesinos entre nosotros, Simon Wiesenthal.

El Paraguay de Stroessner, Rogelio García Lupo.

Diarios:

Argentina

Clarín

La Nación

La Prensa

La Opinión

La Tarde
La Razón

Chile
La Segunda
El Mercurio
Las Últimas Noticias
La Tercera
La Época

Italia
Il Messaggero

Francia
Le Monde
Le Nouvel Observateur

EE.UU.
Washintong Post
The New York Times

Paraguay
Noticias

Nicaragua
Barricada

Uruguay
La República

TRABAJAN EN LOM

Editorial Silvia Aguilera, Juan Aguilera, Mauricio Abumada, Luis Alberto Mansilla, Paulo Slachevsky, Cristina Varas **Relaciones Públicas** Milton Aguilar **Asesoría Editorial** Faride Zerán, Naín Nómez **Producción** Elizardo Aguilera, Carlos Bruit, Eugenio Cerda **Diseño y Diagramación Computacional** Ángela Aguilera, Ricardo Pérez, Lorena Vera, Jessica Ibaceta, Claudio Mateos, Carolina Araya, Francisco Leal, Christian Martínez, P. Paloma Castillo M. **Corrección de pruebas** Jorge Slachevsky R., Juan Álvarez **Impresión Digital** Alejandra Bustos, Carlos Aguilera, Fabiola Hurtado, Alejandro Droguett, Mauricio Montecinos, Ángel Astete **Fotomecánica** Josefina Aguilera, Ingrid Rivas **Impresión Offset** Héctor García, Francisco Villaseca, Rodrigo Véliz, Luis Palominos **Corte** Jorge Gutiérrez, Eugenio Espíndola **Encuadernación** Sergio Fuentes, Marcelo Toledo, Marcelo Merino, Gabriel Muñoz, Miguel Orellana **En la Difusión y Distribución** Nevenka Tapia, Diego Chonchol, Pedro Morales, Elba Blamey, Sergio Parra, Mirtha Ávila, Carlos Campos, Nora Carreño, Georgina Caniffrú, Jorge Benítez, Soledad Martínez, Lucas Lecaros, Victoria Valdevenito, Sandra Molina, Nelson Montoya **Área de Administración** Marco Sepúlveda, Marcos Álvarez, Juan Carlos Rojo **Coordinación General** Paulo Slachevsky Ch. *Se han quedado en nosotros Adriana Vargas y Anne Duattis.*

*Francisco
Martorell*

*Operación Cóndor
El vuelo de la muerte
La coordinación represiva
en el Cono Sur*

A principios de los años 70 un cóndor posó su vista en América del Sur. No se trataba de la majestuosa ave de rapina que acostumbra a surcar estos cielos, sino de una organización extremadamente siniestra, que sirvió de instrumento a los intereses de los regímenes autoritarios instalados en esa época en toda la región.

Este libro trata de los fundamentos y orígenes de esta verdadera multinacional del terror que operó sin limitaciones éticas ni fronteras, violando sistemáticamente todos los derechos humanos.

En estas páginas encontrará los nombres de sus fundadores, algunas de sus características psicológicas y un relato pormenorizado de la forma en que se planificaron y llevaron a cabo los crímenes.

De la mano de una pluma audaz, que pretende explicar los hechos y contextualizarlos, esta investigación periodística —basada en numerosos documentos y entrevistas— se convierte ahora en un libro imprescindible para entender los hechos que dejaron una infame huella en América Latina.